

**Marcos Novaro**

# Historia de la Argentina

1955-2010

biblioteca básica de historia

PRIMERA  
EDICIÓN



siglo veintiuno  
editores

**Marcos Novaro**  
Historia de  
la Argentina

1955-2010



---

**siglo veintiuno editores argentina, s.a.**  
Guatemala 4824 (C1425BUP), Buenos Aires, Argentina

---

**siglo veintiuno editores, s.a. de c.v.**  
Cerro del Agua 248, Delegación Coyoacán (04310), D.F., México

---

**siglo veintiuno de españa editores, s.a.**  
Sector Foresta n° 1, Tres Cantos (28760), Madrid, España

---

 Creative Commons

---

Marcos Novaro  
Historia de la Argentina. 1955-2010. - 1a ed. - Buenos Aires : Siglo  
Veintiuno Editores, 2010.  
320 p. ; 23x16 cm. - (Biblioteca Básica de Historia / dirigida por  
Luis Alberto Romero)

ISBN 978-987-629-144-6

1. Historia Argentina. I. Título

CDD 982

---

Edición al cuidado de Yamila Sevilla y Teresa Arijón

© 2010, Siglo Veintiuno Editores S.A.

Diseño de colección: tholón kunst

Diseño de cubierta: Peter Tjebbes

ISBN 978-987-629-144-6

Impreso en Grafimor // Lamadrid 1576, Villa Ballester,  
en el mes de noviembre de 2010

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723  
Impreso en Argentina // Made in Argentina

# Índice

<b>Introducción</b>	<b>9</b>
<b>1. La Revolución Libertadora: el fracaso de la restauración conservadora</b>	<b>13</b>
¿Integrar o erradicar al peronismo? ¿Restablecer el orden social o la libertad política? Dos rasgos persistentes: igualdad social y crisis de legitimidad política. Lo que sí cambió con la Libertadora: crisis del estado y polarización de clases. La acción de la Resistencia y la reorganización del sindicalismo. Las tácticas de Perón y el fracaso de la Constituyente. La causa decisiva del fracaso: la división del radicalismo	
<b>2. Frondizi, entre la proscripción y la Integración</b>	<b>39</b>
El entusiasmo desarrollista y los "factores de poder". Logros económicos y asedio político. Los complejos efectos sociales de la modernización: "los ejecutivos" y "las villas". La caída de Frondizi y el gobierno de José María Guido	
<b>3. Arturo Illia: un gobierno moderado en la escena de la revolución</b>	<b>65</b>
Una tregua demasiado frágil. Illia en funciones: una nueva versión de políticas conocidas. La lucha de ideas y el nuevo rol de la juventud. La derrota de Vandor y el golpe	
<b>4. La Revolución Argentina: de la suma del poder a la impotencia</b>	<b>89</b>
Onganía y el tiempo económico. Levingston y el tiempo social: inflación y violencia. Lanusse y el tiempo político: un intento tardío de contener la revuelta	

<b>5. De la “primavera de los pueblos” al imperio del terror</b>	119
“Cámpora al gobierno, Perón al poder”. La muerte de Perón y el fin de la revolución peronista. El descenso al infierno	
<b>6. 1976-1979: la <i>hybris</i> procesista, el fin de una época</b>	143
La “guerra antisubversiva” y las críticas internacionales. La “paz procesista” y sus efectos sobre una sociedad en rápida mutación. Unas pocas expresiones de resistencia	
<b>7. 1979-1983: <i>Némesis</i> y transición</b>	167
El ocaso de Martínez de Hoz, el naufragio de Viola y la crisis social. Galtieri y la guerra de Malvinas. El fin del poder militar y el camino hacia la democracia	
<b>8. La conquista de la democracia y el agravamiento de la crisis</b>	195
La primavera alfonsinista. Un breve verano. El ocaso: rebeliones militares e hiperinflación	
<b>9. Menemismo y reformas de mercado</b>	225
Las consecuencias de la hiperinflación: una desigualdad aguda y persistente. Dos años al filo del abismo. La Convertibilidad. La consolidación del modelo. La crisis del Tequila y la reelección	
<b>10. Declive y derrumbe de la Convertibilidad</b>	253
La crisis de la Convertibilidad: la búsqueda de alternativas y el fin de la Convertibilidad. El gobierno de la Alianza y el derrumbe de la Convertibilidad	
<b>11. Argentina en el nuevo siglo: un inesperado renacimiento</b>	279
Un tardío cambio de tendencias. La crisis política. Duhalde-Lavagna: una gestión inesperadamente exitosa. Los años del kirchnerismo	
<b>Epílogo</b>	301
<b>Bibliografía y fuentes</b>	307

## Introducción

Desde la caída del régimen peronista en 1955 hasta la primera década del siglo XXI la historia argentina lleva la marca de la inestabilidad y el desacuerdo; de allí que contenga procesos políticos, económicos, sociales y culturales muy variados y complejos, que incluyen experimentos institucionales de todo tipo. La etapa en cuestión se inició con una sucesión de ensayos semidemocráticos o directamente autoritarios, y estos últimos terminaron por imponerse, volviéndose cada vez más prolongados, ambiciosos y violentos, hasta que su fracaso rotundo dio paso, a comienzos de los años ochenta, a la normalización democrática. El advenimiento de la democracia significó un hito fundamental en este largo ciclo de conflictos, y aportó un cambio de enorme importancia para el país, pero lo cierto es que, antes que poner fin a la persistente inestabilidad, apenas pudo ofrecerle un marco de contención —en cuyo contexto los aspectos económicos y sociales del problema incluso se agravaron—. Fue así como la recurrencia de la crisis terminó por imponer una “cultura de la incertidumbre”, que ha modificado la estructura misma de la sociedad forjada medio siglo antes.

Un país “sin rumbo fijo” en sus políticas públicas, en su inserción en el mundo y en las imágenes que produce de sí y para sí es un desafío para la comprensión que no pretendemos agotar aquí. Para echar luz sobre estos procesos nos replanteamos el dilema, surgido ya en el ocaso de la etapa anterior y que el peronismo había dejado en suspenso: ¿cómo lograr simultáneamente un régimen político legítimo y estable y políticas públicas que aseguren el progreso económico y social? En el transcurso de los años posteriores al golpe de estado de 1955 se intentaron las más disímiles respuestas a este interrogante. Y, si bien algunas fructificaron durante un tiempo, a la larga resultaron insostenibles. El relato que presentamos a continuación, enfocado primordial aunque no exclusivamente en el proceso político, muestra una sociedad y un estado casi permanentemente convulsionados por la imposibilidad de conformar a la mayoría en uno de los dos términos de esa ecuación. O

en los dos a la vez. No obstante, esa sociedad y ese estado fueron democratizando sus instituciones políticas y consiguieron, en mayor o menor medida, modernizar la economía.

Vistos desde una perspectiva actual, esos cincuenta y cinco años de la historia argentina, aunque inestables y complejos, no dejan de encerrar un cierto orden, una dirección. Esta orientación podría sintetizarse como el pasaje de un cuadro en el que la relativa igualdad e integración sociales convivían con una aguda crisis de legitimidad política, a otro en el que finalmente se resolvió la disputa sobre la legitimidad, pero la sociedad se volvió marcadamente desigual y excluyente. Los desafíos que conlleva este “resultado” obligan a una reflexión sobre el pasado que prudentemente prescindiera de simplificaciones y maniqueísmos. De éstos y aquéllas la proximidad del Bicentenario, con el que se cierra el período aquí estudiado, ha dado aliento a algunos ejemplos particularmente intensos, que hemos buscado poner en cuestión y con los que abierta o implícitamente debaten las páginas que siguen.

Y es que la mirada obligada, desde un 2010 problemático y en muchos aspectos decepcionante, hacia el primer Centenario, cuando el país parecía haber completado con éxito las mejores previsiones de sus padres fundadores, da pie a dos interpretaciones polares: de un lado, la de quienes proclaman inspirarse en el modelo económico vigente en 1910 y celebran los indudables logros que el país podía mostrar en ese momento a sus habitantes y al mundo, y piensan en la centuria transcurrida desde entonces como “los cien años perdidos”; del otro lado, la de quienes, bajo el influjo del revisionismo histórico, tienden a responder que el Centenario no fue la maravilla que se cuenta, que dominaba entonces una pequeña oligarquía que había construido “un país para pocos”. Se recrea así una discusión que viene de largo: para los conservadores y liberales, Argentina habría perdido el rumbo cuando irrumpió el populismo de radicales y peronistas, que forzó el abandono de las políticas de apertura al mundo, economía de mercado y control de la movilización política de las masas, que tan buenos resultados habían dado; para los populistas de estos y otros signos, en cambio, el problema habría sido la “reacción conservadora y oligárquica” ante el incontenible avance de los sectores populares en su aspiración de compartir los frutos del desarrollo ampliando sus derechos políticos y sociales.

Entendiendo que estos relatos polares son más convenientes para hallar culpables que para brindar buenas explicaciones de lo sucedido, hemos buscado penetrar más profundamente en los problemas, inten-

tando rastrear el hilo de los acontecimientos, no tanto en un supuestamente imparcial “término medio” entre ellos, como en los intersticios, dobleces y complejidades que tanto abundan en la historia nacional.

En la realización de este trabajo han colaborado los asistentes de investigación Martín Reydó, Emilia Simison y Hugo Hernán Bubenik. A ellos, mi sincero agradecimiento. Más en general, este trabajo está en deuda con el Programa de Historia Política del Instituto Germani y con el Centro de Investigaciones Políticas, en cuyo seno se desarrollaron los estudios que le dan sustento. Por último, debo agradecer a Luis Alberto Romero, director de la Biblioteca Básica de Historia de Siglo XXI, y a los responsables de la editorial, por haberme distinguido con la invitación a escribir este volumen de la colección.

# **1. La Revolución Libertadora: el fracaso de la restauración conservadora**

Muchas cosas cambiaron en la Argentina tras el derrocamiento de Perón, pero al menos dos rasgos particulares del país continuarían vigentes por largo tiempo: la igualdad relativa en una sociedad muy movilizada, y la ya crónica disputa sobre las vías para formar gobiernos legítimos. Esas dos características, que se potenciaban entre sí, sumadas a la crisis de autoridad estatal y la creciente polarización social y política entre el peronismo y el antiperonismo, condicionarían marcadamente los intentos de crear un orden alternativo al derrocado por el golpe de 1955. Pese a ese juego cada vez más trabado, el consenso en torno a los valores democráticos de momento sobrevivió, y evitó que la intervención militar se prolongara en el tiempo.

**¿Integrar o erradicar al peronismo?**

**¿Restablecer el orden social o la libertad política?**

Los civiles y militares que participaron del derrocamiento de Juan Domingo Perón en septiembre de 1955 y pretendieron que ese acto fuese el inicio de una “revolución libertadora” estaban divididos en dos sectores. Por un lado, los nacionalistas y católicos que rodeaban al primer jefe revolucionario, el general Eduardo Lonardi, entendían que los conflictos que habían debilitado al régimen depuesto hasta volverlo insostenible se debían principalmente a los vicios y errores de su líder e inspirador, sobre todo aquellos que lo habían enfrentado a la iglesia católica hasta el extremo de provocar su excomunión. Incluso algunos peronistas compartían esta opinión, y por eso no habían hecho demasiado por evitar el golpe. Estos sectores estaban convencidos de que, una vez desplazado Perón, podría preservarse lo que había de rescatable en el orden que él había creado, que no era poco. Por otro lado estaban aquellos que, animados por

ideas liberales y republicanas, consideraban que el peronismo había dado origen a un estado autoritario, corporativo y corrupto, que, al igual que los aparatos sindicales y clientelares, debía ser eliminado. No se trataba simplemente de cortar la cabeza, sino de desarmar todo el sistema de poder para que el país volviera a la normalidad, identificada con la vigencia de la Constitución de 1853. Este segundo sector –que tenía más seguidores entre los demás partidos políticos y los empresarios– logró desplazar a Lonardi de la presidencia de la nación en noviembre, sólo dos meses después del golpe, y colocó en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu, prototipo de lo que Perón llamaba “la contra” o los “gorilas”.



### **“Prohibición de elementos de afirmación ideológica o de propaganda peronista”**

Considerando: Que en su existencia política el Partido Peronista [...] se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana [y de] la difusión de una doctrina y una posición política que ofende el sentimiento democrático del pueblo Argentino, [que] constituyen para éste una afrenta que es imprescindible borrar. [...] Queda prohibida en todo el territorio de la Nación [...] la utilización [...] de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas [representativos del peronismo]. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronistas, el nombre propio del presidente depuesto.

Decreto-ley 4161 firmado por Pedro Eugenio Aramburu el 5 de marzo de 1956. 

Los desacuerdos entre estos dos campos impidieron que la Revolución Libertadora sacara provecho del consenso inicial con que contó, como asimismo del desconcierto y la desorganización en que se sumieron quienes seguían siendo leales a Perón. Esto permitió que el líder peronista recuperara rápidamente la iniciativa desde su exilio en Paraguay. En ello tendrían también una influencia significativa dos factores primordiales: la compleja estructura política y estatal que el régimen peronista había dejado como legado, y los grandes cambios ocurridos en la sociedad bajo su sombra. Estos factores aportaron al peronismo profun-

das raíces sociales y los medios necesarios para sobrevivir a su expulsión del poder y resistir los intentos de reabsorberlo o de extirparlo.

### **Dos rasgos persistentes: igualdad social y crisis de legitimidad política**

Muchas cosas habrían de cambiar en la Argentina desde septiembre de 1955, pero al menos dos rasgos característicos continuarían vigentes en el país por largo tiempo: la igualdad relativa en una sociedad fuertemente movilizada, tanto en términos sectoriales como políticos, y la ya crónica disputa sobre las vías posibles para formar gobiernos legítimos. Esas dos particularidades, que se potenciaban entre sí, condicionarían fuertemente los intentos de crear un orden alternativo al peronista. El golpe de 1955 puso en evidencia que, si bien el peronismo había introducido cambios profundos en los actores sociales y en las relaciones entre ellos y con el estado, no había logrado asegurarles medios económicos y, sobre todo, reglas de juego para resolver sus conflictos (esto es, una Constitución aceptada por todas las partes que permitiera a las mayorías y las minorías alternarse en el poder). Consecuentemente, sus sucesores heredaron estos problemas irresueltos.

La falta de reglas compartidas había signado los últimos años de Perón en el poder. Aunque él mantuvo vigentes ciertas pautas de la democracia pluralista (en particular la convocatoria regular a elecciones), progresivamente fue suprimiendo las condiciones para su efectivo ejercicio (en primer lugar, la libertad de expresión), sin llegar a sustituirlas por un sistema alternativo, explícitamente corporativo o autoritario. De allí que su régimen pueda considerarse un “híbrido” precariamente institucionalizado que terminó dependiendo de un delicado equilibrio entre las heterogéneas fuerzas que lo componían: porque el origen y la legitimidad de ese orden estaban tan en deuda con el proyecto nacionalista y corporativo de junio del 43 y con su protagonista —el Ejército— como con el 17 de octubre del 45 y el movimiento obrero, y con el 24 de febrero del 46 y su imbatible aparato electoral. De esas fuerzas se alimentaba la autoridad del líder, quien se erigía así como único punto de encuentro y mediador necesario entre todas las partes. Tampoco existían, por lo tanto, reglas que resolvieran las tensiones entre el régimen y aquellos actores ajenos o no totalmente integrados al peronismo, como los empresarios, la iglesia católica y las clases medias. Estas tensiones desencadenaron la crisis política de 1955, cuando los conflictos acu-

mulados con todos ellos y con los partidos opositores se radicalizaron y llegaron a los cuarteles.

Así fue como un poder hasta hacía poco omnímodo se derrumbó casi sin ofrecer resistencia. Sus adversarios vieron en la velocidad de ese derrumbe una prueba de que el liderazgo de Perón no tardaría en extinguirse y la posibilidad de resolver fácilmente los desacuerdos. Pero lo cierto es que los vencedores estaban aún más divididos respecto al problema de la legitimidad. Y la dificultad que ello suponía para crear un nuevo orden se vio potenciada por los ya mencionados rasgos igualitarios de la sociedad, que la hacían difícil de gobernar y resistente al cambio.

Dado que la igualdad suele favorecer el funcionamiento de las democracias, cabe preguntarse qué forma específica adoptó en la Argentina de 1955 para provocar el efecto inverso. El grado de igualdad social alcanzado salta a la vista cuando analizamos la actividad económica, la vida social, cultural y cotidiana de la Argentina en los años cincuenta. Al comienzo de esa década, los asalariados habían llegado a sumar casi el 50% del ingreso nacional. Con la crisis económica desatada en 1951 perdieron algunos puntos, pero luego se recuperaron. La nueva caída, producto de la Revolución Libertadora, tampoco alteró en gran medida el panorama: pasaron del 46,5 al 43,4% del ingreso total, pero su poder de compra siguió creciendo. Todo esto significaba niveles de vida superiores incluso a los de algunos países europeos, y la diferencia era aún mayor con Brasil, México o Chile, sociedades por entonces mucho más desiguales, y menos integradas y movilizadas.

Esta igualdad obedecía a ciertos factores estructurales: la relativa ausencia de una masa de población campesina, la rápida expansión de las actividades agroexportadoras y la asimilación de la inmigración europea, la temprana urbanización y la gravitación del sector moderno sobre los sectores marginales y poco desarrollados. Estos rasgos se consolidaron gracias a las reformas peronistas y pasaron a formar parte de la identidad no sólo de las clases subalternas, sino de la sociedad en su conjunto: la maduración de la clase trabajadora y las clases medias asalariadas se potenció con la extensión y la legitimidad que adquirieron las organizaciones gremiales (hacia 1954, la tasa de sindicalización se calculaba en el 48%) y con una amplia red de regulaciones protectoras del trabajo. Un mercado laboral con pleno empleo, en el que los despidos y la discrecionalidad de la patronal estaban sumamente restringidos, centrado en actividades industriales cuyos mercados también estaban protegidos y configuraban una economía cerrada a la competencia externa, permitió que los intereses

de los asalariados se identificaran como núcleo y eje de los intereses generales de la sociedad. A la fortaleza de los gremios contribuyeron además los servicios de salud brindados por sus obras sociales, la fijación del monto de los salarios y las condiciones laborales a través de los convenios colectivos nacionales (paritarias) y las leyes que aseguraban la existencia de un solo sindicato nacional por cada rama de actividad, de una sola entidad nacional que los agrupara (la Confederación General del Trabajo, CGT) y de un sistema centralizado para financiarlos (que establecía que las cuotas sindicales se descontaban automáticamente del pago de los salarios).

Además, las migraciones internas y de países vecinos se aceleraron desde los años cuarenta, lo que permitió que una mayor proporción de la población se asentara en las ciudades y se incorporara al sector moderno de la economía. Ya en las ciudades, estos nuevos trabajadores pudieron participar no sólo de una vida social y política integradora, sino de una vida cultural de tendencia similar: la homogeneidad social era moneda corriente en el cine, la radiodifusión, la televisión y la literatura popular de esos años, como asimismo en la educación de masas, cuyo imaginario integrador, heredado de la Argentina liberal, había sido extendido por el peronismo a nuevos sectores, con nuevos fines. Ello explica la gravitación decisiva que llegó a tener la igualdad como valor en el imaginario colectivo: también en este aspecto el peronismo coronó un proceso de más largo aliento, la creación de una sociedad con fuertes valores democráticos, culturalmente homogénea, que celebraba el ascenso social de las clases subalternas y era reactiva a las jerarquías.



### **Rechazo de las jerarquías**

Guillermo O'Donnell comparó la relación entre clases sociales en la vida cotidiana en Río de Janeiro y Buenos Aires a comienzos de los años sesenta, y analizó las diferencias. Frente a la interpelación con que las clases altas cariocas suelen "poner en su lugar" a un subalterno —y que roza: "¿Usted sabe con quién está hablando?"—, señala la que podría ser una respuesta esperable en las calles porteñas: "¿Y a mí qué (carajo) me importa?". Según O'Donnell, esta respuesta no sólo revela el intenso igualitarismo de la sociedad local, en comparación con la brasileña, sino también un marcado "rechazo a las jerarquías" propio de la cultura de las clases bajas argentinas. La respuesta deja traslucir un cuestionamiento a la autoridad y las diferencias de clase aun en aquellas situaciones en que

no pueden ignorarse: “El interpelado no niega ni cancela la jerarquía: la ratifica, aunque de la forma más irritante posible para el ‘superior’ (lo manda a la mierda)”. De allí que, para O’Donnell, esta actitud revele un rasgo significativo de la sociedad argentina de esos años: que haya podido ser “relativamente igualitaria y al mismo tiempo autoritaria y violenta”. Esta violencia, en un principio verbal o simbólica, expresada en una tensión contenida, con el tiempo tenderá a recrudecer y a volverse más activa.

Las citas están tomadas de Guillermo O’Donnell, “¿Y a mí qué me importa?”, Buenos Aires, CEDES, 1984, mimeo. 

La igualdad y el desarrollo del sindicalismo son fundamentales para comprender la dinámica del conflicto que se instaló en la Argentina de entonces. Hay distintas explicaciones al respecto. Algunas destacan las reacciones opuestas que esos rasgos generaron en los distintos grupos sociales: dado que la sociedad local era la más igualitaria de toda América Latina, algunos estratos de las clases medias y altas empezaron a considerarla “demasiado igualitaria” y amenazante para su estatus y para el orden social, mientras que los sectores populares consideraban “intolerablemente injusto” cualquier cambio que afectara, aun moderadamente, sus intereses. El poder sindical fue uno de los blancos privilegiados de la “reacción conservadora”, de la que participaron amplios sectores que creían necesario limitar su influencia, incluso a través de medidas autoritarias. No obstante, también es cierto que fracciones nada desdeñables de las clases altas pensaban –tanto antes como después del golpe de 1955– que los sindicatos peronistas constituían una eficaz barrera contra los socialistas y los comunistas. De modo que la “reacción conservadora” no explica, por sí sola, la intensidad que adquirieron los conflictos sociales.

Una explicación alternativa sería que el aparato productivo argentino no podía sostener la presión distributiva a que lo sometían esos sindicatos, hecho que generaba disputas crónicas e irresolubles por el ingreso. Éste fue, claramente, un aspecto muy importante del problema, que asimismo explica la gravedad de los conflictos en torno a los salarios, los impuestos a las exportaciones agropecuarias, los subsidios a la industria y el precio de los alimentos, antes y después de 1955. Este costado económico de la cuestión nos permite considerar además una tercera explicación: si los sindicatos eran “demasiado poderosos” y estaban “demasiado implicados” en las luchas político-partidarias, ello se debía a una desproporción con los demás actores –en particular, por las dificult-

tades de los empresarios para organizarse y defender sus intereses—. La economía cerrada y regulada dificultaba la acción colectiva (vale decir, los medios para identificar intereses comunes y satisfacerlos) de la burguesía y facilitaba la de los trabajadores: al imponer reglas muy estrictas para la contratación y despido de mano de obra, proteger su precio (los salarios) respecto de la competencia externa mediante importantes restricciones aduaneras para una gran cantidad de bienes y, sobre todo, al establecer el mercado interno como destino principal, si no único, de la producción nacional, las ganancias empresarias dependían casi totalmente del nivel de consumo interno y por tanto de los salarios.

Esta explicación permite poner a las otras en una perspectiva más amplia. En lugar de organizarse colectivamente, los empresarios tendían a buscar soluciones a través de vínculos “especiales” con funcionarios públicos, lo que perjudicaba sus posibilidades de influir sobre las decisiones de gobierno como grupo de interés tal como hacían los sindicatos. Por otro lado, el problema no era que éstos se hubieran involucrado en la lucha política con una identidad partidaria definida (algo que de un modo u otro sucede en todas las democracias), sino que privilegiaran la presión por objetivos coyunturales y no la cooperación —hecho que los volvía renuentes a comprometerse en el diseño y la implementación de políticas públicas a través de acuerdos de largo aliento—. Incluso durante el período peronista se habían impuesto barreras firmes para obstaculizar el desarrollo de formas más eficaces y duraderas de cooperación: temiendo las consecuencias de sumar al poder sectorial de los sindicatos un rol más activo en la toma de decisiones, Perón los mantuvo alejados de ese rol. Paradójicamente, los temores de Perón encontrarían mayor justificación tras su caída y exilio: ello fortaleció a los gremios en vez de debilitarlos, porque, como han señalado Marcelo Cavarozzi y Juan Carlos Torre, les permitió concentrar la representación sectorial y política de los trabajadores, algo que los sucesores de Perón, y él mismo, intentarían combatir por todos los medios.

De lo dicho podemos concluir que los dilemas que enfrentará la Argentina a partir de la crisis del régimen peronista no pueden comprenderse como resultado de la oposición simple y tajante entre dos campos, uno democrático y el otro autoritario, uno defensor de la igualdad, el otro su enemigo. Entre ambos bandos se moverán actores ambivalentes, y en unos y otros predominará el ansia de instaurar alguna forma de democracia —si bien no lograrían acordar los instrumentos ni el cariz que ésta debería adoptar—. Al respecto es interesante observar que en el transcurso de los acontecimientos posteriores a la caída de Perón se

produjo, no una sino varias veces, una peculiar inversión de roles: los antiperonistas, que habían empleado consignas e idearios antifascistas para oponerse al régimen y que presentaron su derrumbe como equivalente a la liberación de París de los nazis, vieron con sorpresa que esas consignas e ideas eran tomadas por los peronistas para resistir la proscripción electoral de su partido y la represión “gorila” (al denominarse “Resistencia peronista”, evocaron abiertamente en su favor la experiencia de la Francia ocupada).

Todo ello dejaba en evidencia que los principios democráticos tenían profundas raíces en esa Argentina convulsionada, pese a la creciente conflictividad política: casi todos sus protagonistas actuaban con miras a un futuro no muy lejano en el que el veredicto de las urnas regiría en forma plena como fuente de autoridad legítima. De allí que las intervenciones castrenses no hayan dado lugar a un régimen militar prolongado –como sucedió en otros países de la región durante esos años y como ocurriría en la Argentina desde la segunda mitad de los años sesenta– y que las limitaciones “transitorias” al ejercicio de los derechos políticos se fundamentaran en la necesidad de excluir a aquellas “fuerzas antidemocráticas” que, alejadas del control del estado, pronto desaparecerían. Sin embargo, y contra esa expectativa, la sociedad argentina –fuertemente organizada y movilizadada, pero sometida a una sostenida crisis de legitimidad y a crecientes disputas políticas– daría origen a lo que el historiador Tulio Halperin Donghi denominó un “empate”, una “guerra civil larvada”, en la que la irrupción de la violencia (primero ocasional, y con el tiempo cada vez más “normal”) fue horadando la convivencia social y debilitando aún más la capacidad de las instituciones para resolver conflictos.

### **Lo que sí cambió con la Libertadora: crisis del estado y polarización de clases**

Uno de los efectos más visibles del cuadro de situación que signó la vida política y las relaciones entre las clases desde la segunda mitad de los años cincuenta fue el deterioro de la autoridad del estado y su correlato, la corrupción de los mecanismos institucionales. Se invirtió así la relación entre estado y partidos que había regido en la Argentina desde fines del siglo XIX, puesto que aquél había sido mucho más fuerte que éstos y su autoridad había suplido a la que en otros países de la región (por ejemplo, Uruguay) provenía de lealtades partidarias. El peronis-

mo había buscado fusionarse con el estado y había dado continuidad a esa tradición. Sin embargo, tras su derrocamiento, la obediencia a facciones políticas en pugna, con asiento en grupos de interés y en tradiciones ideológicas enfrentadas, se impuso frente a las reglas y las lealtades emanadas del vértice y el orden estatales.

Aunque el problema se hizo visible con la Libertadora, las tensiones ya anidaban bajo los gobiernos de Perón: éste había introducido de lleno los asuntos económicos y sociales en la agenda del estado, llevándola mucho más allá de los límites que había tenido en la anterior fase de democratización, protagonizada por el radicalismo y centrada en asuntos políticos. La relativa indiferencia de Perón (atento primordialmente a su vínculo con las masas) respecto de los problemas de financiamiento público, de pérdida de cohesión y de politización de la administración, la educación pública e incluso las Fuerzas Armadas es expresión de su excesiva confianza en un instrumento de poder que, cuanto más se involucraba en los asuntos sociales, más se debilitaba. Paradójicamente, muchos críticos y opositores de Perón pasaron por alto que eso suponía un cambio radical e irreversible del estado existente diez años atrás y creyeron que, una vez depuesto, la agenda estatal volvería a ser lo que había sido antes.

El hecho de que a la crisis de legitimidad del sistema político se sumara una crisis, cada vez más aguda, de la autoridad estatal completa el cuadro resultante del golpe de 1955. Y ayuda a entender la notable supervivencia del peronismo: porque fue en gran medida gracias a ese debilitamiento del estado que éste pudo –sin grandes traumas ni divisiones y de forma bastante rápida– pasar, de ser una fuerza estructurada desde el vértice estatal, a ser un movimiento de masas subversivo del orden existente y capaz de sostenerse excluido de todo asiento institucional. El debilitamiento del estado es, por tanto, un efecto pero también una causa de la persistencia del fenómeno peronista en la sociedad, que, como señala Daniel James, le permitirá reinventarse como “partido del pueblo”, como una fuerza “antisistema” que se niega a ser domesticada o erradicada.

La lucha por el control del estado se superpondrá así a una lucha dentro del estado mismo y también a una lucha social que, aunque no estaba en el origen de las otras, paulatinamente se transformará en su sede y razón de ser, en el gran ordenador de los civajes políticos: la pugna entre ricos y pobres, que signará cada vez más el desarrollo de los conflictos políticos, contra lo que Perón y buena parte de los antiperonistas habían pretendido inicialmente.



### Una sociedad dividida

En *El otro rostro del peronismo* (1956), Ernesto Sabato relata cómo recibió la noticia del golpe mientras visitaba a unos amigos en Salta: “Aquella noche de septiembre de 1955, mientras los doctores, hacendados y escritores festejábamos ruidosamente en la sala la caída del tirano, en un rincón de la antecocina vi cómo las dos indias que allí trabajaban tenían los ojos empapados de lágrimas. Y aunque en todos aquellos años yo había meditado en la trágica dualidad que escindía al pueblo argentino, en ese momento se me apareció en su forma más conmovedora”. Sabato intenta ofrecer una explicación de lo sucedido y de lo que es preciso hacer para “corregir” ese desencuentro, y anticipa el giro en la interpretación del fenómeno peronista que muchos intelectuales (sobre todo de izquierda, que hasta entonces lo habían rechazado) intentarían con los años: “En el movimiento peronista no sólo hubo bajas pasiones y apetitos puramente materiales: hubo un genuino fervor espiritual, una fe parareligiosa en un conductor que les hablaba como seres humanos y no como a parias [...] . Lo demás es detalle [...] y no incurramos ahora en los mismos defectos y vicios que hemos recriminado a la tiranía: no pretendamos unanimidad de juicio, no califiquemos a nuestros adversarios de enemigos de la nación [...]. Una cosa es, y bien posible, el desmontaje casi físico de las piezas que aseguran al totalitarismo [...] y otra cosa es negar esas fuerzas o creerlas únicamente obra de la propaganda. El fervor multitudinario que Perón aprovechó no será liquidado mediante medidas de fuerza... sólo se logrará reforzarlo hasta convertirlo en una tremenda, incontenible y trágica aplanadora”.

Las citas están tomadas de Ernesto Sabato, *El otro rostro del peronismo*, Buenos Aires, sin editorial, 1956. ■

El contexto externo también aportaría lo suyo al cambiante escenario donde se enfrentaron la Libertadora y el peronismo, alternando roles en una disputa sin cuartel por las banderas del orden y el cambio, la democracia, la libertad y la justicia. Y es que en la segunda mitad de los años cincuenta aún subsistía el clima de posguerra: social y culturalmente conservador, pero asentado en el recuerdo de la lucha contra el Eje y por lo tanto estructurado en torno a valores democráticos y orientado, política y militarmente, por los Estados Unidos. La Argentina peronista se había sustraído parcialmente de este clima, por lo

que ingresó en su ámbito de modo abrupto y tardío. Tardío porque lo hizo cuando cobraba forma un contexto distinto, más abierto al cambio social, cultural y sobre todo al económico, gracias al rápido auge del comercio internacional y el flujo de capitales. Aunque, debido a la Guerra Fría, la Revolución China y la guerra de Corea, ese escenario se veía condicionado también por el temor a la amenaza comunista y a la guerra nuclear, y en consecuencia propenso a justificar el rol que debía cumplir, al menos en la periferia, un “sano autoritarismo”.

Este cambio en el mundo occidental, que repercutió en la región según la dirección impuesta por la diplomacia norteamericana, determinó que los golpistas —que allí buscaban apoyo político y doctrinario contra Perón, a quien, como dijimos, identificaban con el fascismo europeo— hallaran escasas justificaciones y orientaciones para su acción: la apertura a un mundo signado por la lucha irreconciliable entre capitalismo y comunismo indujo en los adherentes de la Libertadora mayores motivos para disputarse entre sí el poder y el derecho a fijar el curso a seguir una vez eliminado el “fascismo criollo”. Ello se refleja en el eco que pronto hallarían —en sectores de las Fuerzas Armadas, la iglesia y el empresariado— las posiciones más ferozmente reaccionarias que por entonces circulaban en los países centrales sobre la seguridad y el papel de los sindicatos y la izquierda. Por otro lado, la modernización que posibilitó esta apertura al mundo, además de fuente de divergencias y temores, también generó en sectores muy diversos un convergente interés por el discurso desarrollista, que proponía un “salto hacia adelante” para sacar al país del aprieto en que se encontraba. La fórmula “aceleración del desarrollo” parecería así como una respuesta a las tensiones entre los fines democráticos y los medios autoritarios de la Libertadora y, más en general, a las demandas en pugna de los distintos grupos de interés que estaban alimentando el conflicto social y político.

### **La acción de la Resistencia y la reorganización del sindicalismo**

¿Quién podía triunfar allí donde Perón había fracasado? ¿Una coalición del antiperonismo o una alianza entre algunos grupos antiperonistas y los peronistas desencantados con su líder? La segunda alternativa tentó a Lonardi, quien intentó, como dijimos, rehabilitar los esquemas corporativos concebidos entre 1943 y 1945: durante los dos meses que detentó el poder, buscó conciliar la continuidad de una CGT peronista

con una gestión política en manos de los nacionalistas y una gestión económica en manos de los empresarios, y asignó a los militares el rol de asegurar el equilibrio entre todos ellos. Pero ni el contexto internacional brindaba sostén para su proyecto, ni éste era compatible con las expectativas de apertura democrática de los partidos y los militares liberales, ni con las de amplias capas medias y altas de la sociedad de liquidar todo resabio peronista. Mientras Lonardi prometía que no habría “vencedores ni vencidos” y que la Libertadora sería “mucho más favorable a los trabajadores que el régimen depuesto”, y negociaba con la CGT para que se abstuviera de promover medidas de fuerza y aceptara un recambio de su conducción que relegitimara a la dirigencia peronista, pero una sin lazos de lealtad con el líder depuesto, los militantes y sindicalistas del socialismo y el radicalismo asaltaron los locales gremiales para desplazar por la fuerza a los “continuistas”. La Armada, encabezada por el almirante Isaac Rojas, y los generales liberales reclamaron la intervención de la CGT y que se tratara a los peronistas como defensores de un régimen totalitario, indignos por tanto del ejercicio de todo derecho político. La tensión entre ambas posiciones fue en aumento y Lonardi se vio forzado a renunciar.



Concentración en Plaza de Mayo durante la jura de Eduardo Lonardi como presidente provisional, 23 de septiembre de 1955. Archivo General de la Nación.



Almirante Isaac Rojas y general Pedro Eugenio Aramburu, 1956. Archivo General de la Nación.

La designación de Aramburu en su lugar y la proscripción del peronismo y de quienes habían actuado a su sombra llevaron a la CGT a convocar una huelga general. La protesta fue reprimida con dureza: se suspendieron las leyes gremiales y de paritarias, la central y los gremios fueron intervenidos, y cientos de sus dirigentes detenidos. Acostumbrados a la conciliación, ellos no estaban preparados para la lucha que se iniciaba. Pero, paradójicamente, la misma represión facilitaría su reemplazo por un gremialismo más adecuado para encararla: gracias a las intervenciones y el encarcelamiento masivo de la dirigencia tradicional, se abrió el espacio necesario para que se autonomizara y fortaleciera una militancia de base alejada de las prácticas burocráticas, más combativa, que pronto tomaría el control de las organizaciones.

La reacción de las patronales no se hizo esperar: en parte por afán de revancha tras largos años de “prepotencia gremial”, en parte por las dificultades económicas que enfrentaban, se multiplicaron los despidos, se coartaron derechos y beneficios, y cayeron los salarios. Esto provocó la primera crisis del “pacto proscriptivo”: los comunistas, algunos socialistas y buena parte de los radicales condenaron los “abusos” empresariales y exigieron que la Revolución no se desvirtuara; si se había hecho para imponer valores democráticos, no podía servir para legitimar una reacción conservadora y oligárquica; antes bien, debía reconocer los

derechos obreros (que Perón había instaurado con meros fines demagógicos) como parte necesaria del nuevo orden de libertad y justicia. Y los obreros y militantes sindicales del peronismo no debían ser perseguidos, sino reeducados. Ese planteo no fue desatendido y determinó que, contra las recomendaciones “duras” de los economistas liberales –dirigidas a contener la puja distributiva, eliminar el déficit fiscal y comercial y la inflación–, Aramburu optara por una política “blanda” que contemplaba la reapertura de las paritarias, el control de los precios y un déficit moderado. La gestión de la economía sacaba a la luz así una nueva disidencia, en verdad presente desde un comienzo en la Libertadora: a las dos versiones hasta entonces en pugna, que atravesaban fundamentalmente las filas militares –la del conservadurismo liberal, que concebía el golpe como restauración; y la nacionalista católica, que apostaba a una regeneración moral–, se sumó la de los políticos democráticos progresistas que buscaban recuperar el respaldo de las masas, que el peronismo les había “usurpado” al apropiarse de sus banderas de cambio social. Esta visión, sin embargo, quedó acorralada por los múltiples indicios que dio el peronismo sobre su capacidad de resistir los intentos de desmembrarlo o disolverlo. Y cuando creció el temor a que volviera al poder, todos sus enemigos coincidieron en la necesidad de aplicar de momento una cierta cuota de represión.

También en el campo peronista operaban tendencias divergentes. Todos sus componentes se alimentaban de un dato básico: la persistencia del liderazgo de Perón y su voluntad de regresar al poder. No obstante, la relación con el líder era conflictiva en todos los casos, ya que su interés no coincidía con el de quienes seguían en alguna medida siéndole fieles. En los primeros meses, desde Asunción del Paraguay, Perón creyó posible una rápida contraofensiva. Buscando dar un golpe de mano, responsabilizó por su derrocamiento a la Armada, la iglesia y la oligarquía, y llamó a una insurrección mancomunada de “pueblo y Ejército”. En esa etapa proliferaron las conspiraciones –no tanto fruto de ese llamado como de la indisciplina y confusión reinantes en los cuarteles– casi siempre encabezadas por jefes lonardistas en desacuerdo con Aramburu y su sector. La única que se convirtió en rebelión –liderada por el general Juan José Valle en junio de 1956– cosechó un trágico saldo en vidas humanas y fortaleció la oposición entre peronismo y antiperonismo (pese a que Valle no se consideraba peronista). La decisión del gobierno de fusilar a sus cabecillas y la muerte en condiciones irregulares de varios civiles detenidos fueron un intento de sellar a sangre y fuego la expulsión de Perón del país, y de suprimir cualquier

influencia suya en la sociedad y en las filas militares, que reveló lo precario de la situación reinante. Al tomar esas decisiones, los jefes de la Libertadora traspasaron un umbral de violencia y habilitaron un encadenamiento de represalias que tendría graves consecuencias futuras.

Viendo el fracaso de la opción militar, que además provocó una nueva ola de detenciones y permitió a la Libertadora colmar una vez más la Plaza de Mayo con sus adherentes (quienes clamaron por “mano dura” contra los rebeldes), Perón puso más empeño en promover el activismo de los sindicatos y los grupos militantes que se venían organizando espontáneamente desde su derrocamiento. Por las razones ya expuestas, los gremios eran un terreno mucho más fértil que los cuarteles para la supervivencia del peronismo: los intentos que hicieron las fuerzas antiperonistas a lo largo de 1955 y 1956 para tomar el control de esas organizaciones prosperaron sólo en algunas de ellas (mayormente de servicios); y, en muchos casos, cuando se realizaron nuevas elecciones (en 1956 y 1957), volvieron a ganar listas peronistas, más respetadas por las bases que las anteriores, pues se estaban probando en elecciones libres y en la defensa de derechos que el gobierno y las patronales amenazaban. Así se consolidaron los liderazgos de Augusto Vandor en metalúrgicos, Andrés Framini en textiles, José Alonso en vestido y Amado Olmos en sanidad. La relegitimación del peronismo gremial culminó en el congreso normalizador de la CGT de septiembre de 1957, cuando una clara mayoría de ese signo, liderada por Framini, dio origen al polo sindical que se conocería como “Las 62 Organizaciones”.



### **La masacre de José León Suárez**

Un grupo de civiles detenidos, vinculado marginalmente a la sublevación del general Juan José Valle, fue conducido a un basural de José León Suárez, provincia de Buenos Aires, y fusilado por los agentes de seguridad. El crimen fue expuesto por una investigación del periodista y escritor Rodolfo Walsh: “Seis meses más tarde [...] un hombre me dice: –‘Hay un fusilado que vive’ [...] No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Livraga. Pero después sé. Miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me siento insultado [...] los detenidos de Florida fueron penados, y con la muerte, y sin juicio, y arrancándoselos a los jueces designados por la ley [...]. No habrá ya malabarismos capaces de borrar

la terrible evidencia de que el gobierno de la Revolución Libertadora aplicó retroactivamente, a hombres detenidos el 9 de junio, una ley marcial promulgada el 10 de junio. Y eso no es fusilamiento. Es un asesinato”.

Las citas están tomadas de Rodolfo Walsh (1957), *Operación Masacre*, edición crítica de Roberto Ferro, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 2009.

# “YO TAMBIEN FUI FUSILADO”

## La odisea de un obrero argentino víctima de criminal vesania, evidencia la corrupción, el desorden y la irresponsabilidad del aparato represivo del estado.

**Revolución Nacional**  
 ÓRGANO DEL INSTITUTO DE CULTURA OBRERA  
 Año 2 - Ed. Airova, Enero 15 de 1957 - No. 10 - \$ 1.00

Portada del semanario *Revolución Nacional*. Órgano del Instituto de Cultura Obrera, año 2, núm. 10, 15 de enero de 1957. Dirigido por Luis Benito Cerruti Costa, el semanario fue el primer medio que publicó el reportaje de Walsh a Livraga. ▀

Esto tuvo un notable impacto político: la conducción de la CGT sería, desde entonces y por largo tiempo, amén de vehículo de los intereses de clase, la voz más indiscutiblemente legítima del movimiento peronista en el país. Ya adelantamos la correspondencia entre conflictos económicos –en torno a salarios y condiciones de trabajo– y políticos –por el ejercicio de derechos electorales por parte de los obreros y los sectores populares en general–, que potenciaba a unos y otros. La consecuencia de ello fue que acotados conflictos por ingresos dieron origen a un antagonismo inconciliable. Y políticas económicas con moderados efectos perjudiciales para los salarios –o incluso neutros en términos distributivos– parecieron promover una insoportable desigualdad.

Las bases sindicales también nutrieron a los grupos de la Resistencia que, entre fines de 1956 y 1957 y en forma muy dispersa y desorganizada, realizaron infinidad de actos de sabotaje, colocaron bombas caseras (“caños”) en lugares públicos o empresas, y expresaron su rechazo a la

proscripción pintando leyendas en las paredes de los barrios populares y distribuyendo volantes y periódicos que llamaban a mantener viva la lealtad a Perón. Éste no dudó en incentivar esas acciones con miras a desatar una rebelión general que volteara al gobierno golpista. Para eso contó con la colaboración de John William Cooke, un ex diputado que en marzo de 1957 logró fugarse de la prisión de Río Gallegos junto a otros presos políticos y se transformó en el principal impulsor del “giro a la izquierda” del peronismo. Cooke incluso intentaría convencer a Perón de adherir al nacionalismo revolucionario y al socialismo y conformar un amplio “movimiento de liberación” antioligárquico.



### **Instrucciones generales para los dirigentes**

Perón tomó la costumbre de enviar cartas con instrucciones para sus seguidores en el país a través de los pocos canales con que contaba. En una de ellas, de julio de 1956, decía: “Ellos nos están matando, nosotros no nos vamos [...] a dedicar a rezar solamente a la Virgen [...] un gorila quedará tan muerto mediante un tiro en la cabeza, como aplastado por casualidad por un camión que se da a la fuga [...] los bienes y viviendas de los asesinos deben ser objeto de toda clase de destrucciones mediante el incendio, la bomba [...] lo mismo ha de ser objeto de ataque la familia de cada uno de esos canallas, hasta que vayan a vivir en los barcos o decidan irse del país por no poder convivir con el Pueblo que escarnecieron [...] la violencia más grande es la regla”.

Las citas están tomadas de Samuel Amaral, “El avión negro: retórica y práctica de la violencia”, en S. Amaral y M. Plotkin (comps.), *Perón, del exilio al poder*, Buenos Aires, Cántaro, 1993.

Si bien la Resistencia se extendió —y con ella el sabotaje y los “caños”, sobre todo durante 1957—, los resistentes siguieron actuando sin coordinación ni plan para la toma del poder, y se cuidaron de no dañar a personas (hubo un solo asesinato político entre ese año y 1960), incluso luego de los fusilamientos de junio de 1956. Sucedió que los sindicatos tenían sus propios intereses, que en general privilegiaron frente al deseo de Perón de que hicieran todo lo posible por su regreso al poder: más allá de la politización de sus reclamos y de la polarización política remanente, no descartaron salidas negociadas para los conflictos sectoriales y acordaron moderar sus planteos a cambio de que se respetara

la legalidad de sus organizaciones. El gobierno de Aramburu, además de las medidas represivas, adoptó otras para atender esas expectativas: permitió que el peronismo sindical se reorganizara, e incluso que los salarios se recuperaran entre 1956 y 1957, con lo que la ola de protestas disminuyó y los gremios descartaron una huelga revolucionaria como la que esperaban Perón y Cooke.

Cuando sus llamados a la insurrección fracasaron, Perón cambió una vez más de táctica. Por un lado, trató de reconciliarse con la jerarquía católica: dejó de acusarla por su derrocamiento, que pasó a atribuir “a la masonería” (ya no adjudicó la quema de iglesias al “pueblo enardecido”, sino a un “grupo de facinerosos”). Y lo mismo intentó con el Ejército y los empresarios, presentándose una vez más como la mejor barrera contra el peligro de la guerra social: en sus cartas públicas posteriores a 1957 y hasta 1960 afirmaría que los golpistas le estaban haciendo el juego al comunismo. Por otro lado, dio su aval a algunos partidos neoperonistas que buscaron sortear la proscripción y participar de las elecciones previstas para 1957 y 1958. Ex gobernadores y figuras con prestigio local que, al igual que los sindicalistas, tenían interés en gestar un “peronismo sin Perón” organizaron fuerzas que formalmente respetaban la prohibición de adherir a la doctrina y la persona del ex presidente. Así surgieron, entre otros, el Partido Populista del catamarqueño Vicente Saadi, y la Unión Popular, que se proponía rescatar aquellos logros del peronismo que lo vinculaban con el cristianismo.

### **Las tácticas de Perón y el fracaso de la Constituyente**

La elección de convencionales constituyentes en julio de 1957 –convocada para dictar una nueva ley fundamental en reemplazo de la de 1949, que había sido derogada– brindó la oportunidad para que el peronismo proscripto usara la fuerza del número. A último momento, sin embargo, Perón desautorizó las listas neoperonistas y llamó a votar en blanco, dado que un eventual éxito de estas fuerzas podría autonomizar a los electores de su liderazgo y dificultar su regreso al país. El llamado a votar en blanco tuvo considerable éxito y mostró que su carisma continuaba vigente: los neoperonistas sumaron el 8% de los votos, mientras que un 24% depositó su sobre vacío. No eran la mayoría, pero bastaban para dirimir la batalla entre las otras fuerzas. No obstante, la proliferación de grupos neoperonistas continuaría: pronto se sumarían el Partido Blanco, Tres Banderas, el Movimiento Popular Neuquino, el

Movimiento Popular Salteño, el Partido del Pueblo, el de los Trabajadores, y otros.

Cada una de las vías que intentó Perón, como vemos, tuvo sus dificultades, y todas fueron insuficientes para retomar el poder. Pero en alguna medida todas ellas, alternativa y relacionadamente, le sirvieron para preservar su liderazgo y la unidad del movimiento. Perón fue reinventando así el estilo de conducción que había usado desde el vértice del estado: mantener indefinido su principio de legitimidad y las reglas de su organización, usando simultáneamente distintas fuentes de autoridad que podían contrapesarse entre sí y le otorgaban un gran margen de maniobra por ser el único punto de encuentro de todas las partes. De este modo no sólo logró contener las pretensiones de cada facción del movimiento con la presencia de las demás, sino acorralar y dividir a sus adversarios con un movimiento de pinzas, hecho de amenazas y ofertas de colaboración. Su intención era convencer a las elites antiperonistas de que proscrito era un problema aún peor que en ejercicio del poder, de que desde el exilio podría promover una revolución que, estando en el país, evitaría. Claro que, inversamente, estas amenazas elevaban los costos previsibles para esos partidos políticos, grupos de interés y militares: ¿no podían también perderlo todo si aceptaban su regreso? En este complejo juego, unos y otros fueron acumulando un aprendizaje sobre los límites que les impedían alcanzar sus respectivos objetivos y la inevitabilidad de un acuerdo. Pero el aprendizaje insumió casi dos décadas de conflictos y el acuerdo llegaría demasiado tarde.

La Convención Constituyente se realizó, entre agosto de 1957 y enero de 1958, en un clima convulsionado por esta puja. Debido a ello, su objetivo de restablecer la legitimidad de las reglas de juego, sustrayéndola de la lucha entre facciones, se frustró. Ante todo, pesó la presencia de un cuarto del electorado que impugnaba la convocatoria: cualquier decisión que allí se adoptara sería cuestionada por una parte de la sociedad, y se repetiría, invertida, la situación de 1949, cuando el peronismo aprobó "su" Constitución indiferente a una oposición que se negó a reconocerla. Además, en este fracaso pesaron las disidencias entre las fuerzas que aceptaron participar de la convocatoria respecto a qué debía hacerse con la Norma Fundamental: si se debía dictar una nueva o restaurar la de 1853.

La mayoría de los partidos (el radicalismo, el socialismo, los conservadores, la democracia progresista, los democristianos, etc.) respaldó la derogación de la Constitución del 49. Pero buena parte de ellos no quería que esa derogación resultara en la supresión de derechos sociales y

sindicales, que perjudicaría a los sectores que aspiraban a representar. Los disensos se agravaron cuando comenzó a debatirse la convocatoria a las urnas: algunos políticos buscaban asegurarse de que los peronistas no participaran y plantearon obstáculos a las fuerzas neoperonistas; otros querían alentarlas para que se alejaran de Perón o incluso aliarse con ellas para recoger parte del voto peronista. Los radicales se dividieron entre estas dos últimas posiciones. La fracción que respondía al presidente del partido, Arturo Frondizi, no escatimó esfuerzos para congraciarse con los sectores peronistas: llegó incluso a rechazar la derogación de la Constitución del 49 y a defender la CGT única y otras reglas gremiales y laborales establecidas por Perón. El resto de los radicales hizo causa común con las demás fuerzas para no reconocerle al peronismo ni siquiera sus conquistas sociales: propuso que esos derechos fueran incorporados a una nueva Constitución, pero en los términos en que los planteaban los programas de la UCR. A raíz de ello, los radicales concurren divididos a la elección de convencionales. Y la fracción frondizista terminaría abandonando las sesiones cuando iba a votarse la reinstauración de la Carta de 1853, con la casi exclusiva novedad de un artículo (14 bis) sobre derechos sociales.

La fractura del único partido del campo antiperonista con peso electoral real terminó de debilitar el intento de la Libertadora por cerrar el ciclo peronista inaugurando un nuevo período en el que la legitimidad constitucional fuera inobjetable. De allí que el llamado a elegir presidente a comienzos de 1958 se realizara en un contexto de irresolución del conflicto sobre las reglas de juego, y, peor aún, en un clima que cuestionaba la justificación y el sostenimiento de la proscripción del peronismo. El movimiento proscripto –aunque no había logrado que prosperaran la sublevación cívico-militar ni la insurgencia sindical y aunque se había dividido a la hora de elegir una vía para incidir en la competencia electoral, con lo que su peso en las urnas se había debilitado– encontraría una oportunidad para que el poder electoral que aún retenía bastara para relegitimarlo como “el partido del pueblo”.

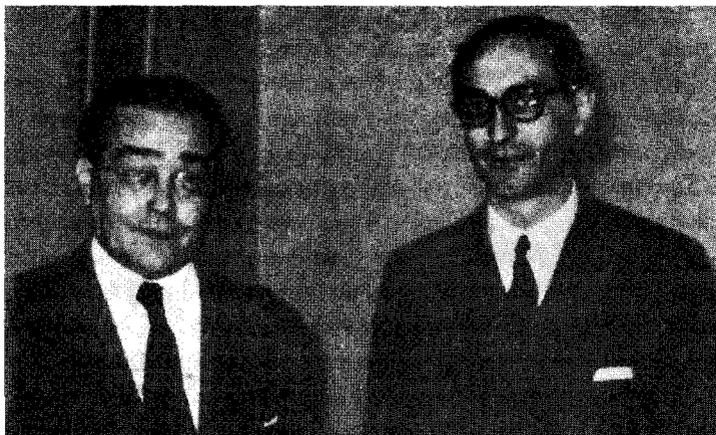
### **La causa decisiva del fracaso: la división del radicalismo**

La UCR había conservado la adhesión de una proporción importante del electorado durante el régimen peronista: sumó alrededor del 30% de los votos en cada elección realizada desde 1946. Los socialistas y los

conservadores, en cambio, sobrevivieron apenas como superestructuras partidarias y perdieron buena parte de sus militantes y dirigentes, y casi todos sus votos, a manos de Perón. Por lo tanto, cuando éste fue derrocado y proscrito, era claro que el principal beneficiario sería el radicalismo: de sus filas provendría inevitablemente el siguiente presidente civil. Sin embargo, esta ventaja le jugó en contra porque, al no haber nadie con quien competir, la unidad partidaria perdió valor y las diferencias internas se fueron agudizando: tal como había sucedido en 1928, cuando el enfrentamiento entre yrigoyenistas y alvearistas condujo a un primer y prolongado cisma partidario, los distintos líderes y facciones actuaron bajo el supuesto de que quien obtuviera la conducción y la candidatura a presidente sería dueño absoluto de la situación, e hicieron de la competencia interna una lucha a todo o nada. Este cuadro se potenció con la oportunidad que ofrecía la Libertadora, a los ojos de todos los radicales, de corregir las “desviaciones” y errores en que había incurrido el partido (el peor de todos: su alianza con los conservadores en la Unión Democrática). Los radicales estaban convencidos de que de esos errores había surgido el peronismo. Corrigiéndolos, podrían reabsorber las adhesiones populares de las que éste se había nutrido (y que había frustrado, pues, aún más que la UCR, contenía rasgos antipopulares que le impedían ser plenamente “nacional y revolucionario”). Por esta vía se concretaría el “movimiento nacional” que el radicalismo había buscado desde sus orígenes y se realizaría la “revolución inconclusa” demorada por el golpe de 1930 y por la aparición de Perón: liquidar el latifundio con una auténtica reforma agraria, completar el desarrollo industrial del país y detener la penetración imperialista; en suma, eliminar el orden oligárquico y conservador y fundar una auténtica república. De este modo, los radicales se convencieron de estar frente a una oportunidad única, no sólo para recuperar la mayoría, sino para que la política argentina se clarificara y cumpliera sus planes más ambiciosos.

La conducción de la UCR en 1955 compartía mayoritariamente este diagnóstico de los desafíos del momento, porque estaba dominada por el sector intransigente —que ya en 1945, en la Declaración de Avellaneda, había definido a Perón como un usurpador de las banderas de la revolución nacional que le pertenecían al radicalismo y que sólo ese partido podría concretar—. Esta interpretación divergía en varios aspectos de la que veía en el peronismo una versión criolla del fascismo, entre otras cosas porque permitía reconocer la existencia de “peronistas de buena fe”, compañeros de ruta del “movimiento nacional”; precisamente por ello los radicales intransigentes insistieron en que los votantes peronis-

tas no debían considerarse como actores antidemocráticos que debían ser reprimidos, ni tampoco como el resultado de un fraude similar al oligárquico de los años treinta; más bien había que entenderlos como el producto de una manipulación y un engaño que se disiparían mediante el ejercicio de la libre expresión y la reeducación democrática. Con todo, los radicales intransigentes, al igual que otros sectores de la Libertadora, se dividieron respecto de la mejor forma de llevar sus ideas a la práctica y sus disidencias fueron potenciadas por los recelos acumulados entre los dos referentes del sector: Frondizi y el principal dirigente bonaerense, Ricardo Balbín. Balbín sostenía que la proscripción debía mantenerse a rajatabla porque el peronismo no tardaría en disgregarse, una vez que se revelara su carácter espurio y sus conquistas fueran “superadas” por las innovaciones que el radicalismo, otra vez al frente del gobierno, introduciría en la política y la economía. Frondizi, en cambio, consideraba necesario ganarse cuanto antes a los sectores populares para que la revolución no fuera frustrada por las tendencias conservadoras del antiperonismo: la mejor vía para lograrlo era seducir y absorber por lo menos a una parte de los peronistas.



Arturo Frondizi y Ricardo Balbín en 1946. Archivo General de la Nación.

La ruptura se desató en noviembre de 1956, cuando hubo que decidir la fórmula presidencial. Contra la expectativa de que esta decisión “clarificaría” el enfrentamiento entre un radicalismo auténtico y popular, ahora “depurado”, y otro afín a la oligarquía y la reacción (por definición minoritario), las elecciones de convencionales, realizadas pocos meses después, mostraron cierto equilibrio entre las dos facciones: los

“del pueblo” (UCRP) se impusieron por escasa diferencia a los frondistas o “intransigentes” (UCRI). Como consecuencia de ello el voto en blanco apareció como el factor desequilibrante. Pero Frondizi, lejos de moderar su enfrentamiento con sus viejos correligionarios, decidió profundizarlo haciendo hincapié en “diferencias ideológicas” insuperables y llamando a resistir la “reacción oligárquica” que pretendía suprimir las conquistas sociales incluidas en la Constitución de 1949. Giro que completó con el retiro de sus convencionales de la Constituyente.



### **Frondizi y los mensajes hacia el peronismo**

Frondizi hizo un intenso uso de la radio para difundir sus ideas. El 30 de noviembre de 1955 declaró por Radio Belgrano: “La Unión Cívica Radical ha ratificado expresamente que las conquistas sociales obtenidas hasta ahora por obreros y empleados deben ser acrecentadas y superadas [comenzando por el] reconocimiento pleno del derecho de huelga y [la] derogación inmediata de toda legislación represiva [...] Nos oponemos eso sí al intento de usar la libertad sindical para dividir, anarquizar y atomizar el movimiento obrero a fin de que no pueda tener ninguna influencia efectiva en la vida toda del pueblo argentino [...] Debe existir un solo sindicato para cada rama de la producción y una sola central de trabajadores [...] nadie debe ser excluido de las actividades sindicales por su ideología política [...] Los sindicatos no deben ocuparse exclusivamente de salarios, condiciones de vida y demás problemas específicos: deben preocuparse de todo lo relacionado con el poder público [...] participando en este gran proceso ascendente realizado por el pueblo argentino y que no pudo ser detenido ni por la década del 30 ni por la dictadura con todas sus confusiones [...] Cumplidos los objetivos revolucionarios de destruir los aparatos de fuerza del régimen depuesto, sólo pedimos legalidad para que se realice un limpio proceso democrático sin interferencias ni presiones del poder público”. El 25 de junio, por Radio El Mundo, concluía: “la revolución fue hecha para que el pueblo pudiera expresarse con libertad, sin fraudes, sin coacciones dictatoriales [...] No se trata de desquitarse [...] debemos reconocer que millones de mujeres y hombres creyeron honradamente en las promesas de transformación social y de redención humana que se les formularon. Todavía esperan y reclaman esa doble conquista. Lo que deben comprender es que [...] no serán alcanzadas con un retorno al pasado sino mediante el ejercicio de la voluntad creadora del pueblo”. ■

Quedó así planteado un escenario donde las necesidades electorales de los sectores en que se había dividido el radicalismo profundizarían las tensiones que atravesaban desde el comienzo a la Libertadora, conduciéndola a su fracaso. En los meses siguientes, la UCRI insistió en suspender las medidas represivas y levantar las intervenciones en los sindicatos, reclamó aumentos de salarios contra la política “dura” que había vuelto a aplicar Aramburu en 1957 (dada la ineficacia de las concesiones salariales para desperonizar a los gremios) y denunció el reemplazo de dirigentes sindicales por “títeres del gobierno”. Secretamente, Frondizi encomendó a su más estrecho colaborador, Rogelio Frigerio, una misión clave para sumar los votos peronistas: sellar un pacto con Perón para que apoyara a los candidatos de la UCRI en las elecciones generales que se realizarían en febrero del año siguiente. Seguramente influyó en esta arriesgada decisión, que contradecía sus actitudes previas (Frondizi había sido el vocero, luego de los bombardeos de junio de 1955, del rechazo radical a cualquier salida negociada con Perón), su confianza en que el peronismo no tardaría en dispersarse y en que sería fácil dominarlo desde el poder, y la aún más ilusa expectativa de que el propio Perón se transformaría en una pieza más en su tablero. Para Perón, por su parte, acordar con Frondizi era preferible a dejar crecer el neoperonismo: le permitía orientar al electorado que le respondía, evitar que surgieran organizaciones y líderes que condicionaran esa relación privilegiada con las bases, y sobre todo obtener reconocimiento, si no como dueño de una mayoría propia, como sostén necesario de la mayoría posible. Porque lo cierto es que la mayoría electoral se había vuelto esquivada desde 1955: si, como indicaba la elección de convencionales, Perón sólo retenía la fidelidad de una cuarta parte del electorado y las dos facciones radicales sumadas casi lo duplicaban, no podía sobrestimar su capacidad de veto. Terciar en la división de los radicales le era conveniente para contrarrestar el riesgo de que ese debilitamiento electoral se profundizara.

Las elecciones generales de febrero de 1958 avalaron esta apuesta. En ellas, la UCRI de Frondizi duplicó con creces su caudal del año anterior: reunió el 44,8% de los votos. De los 2 millones de votos en que incrementó su caudal, una parte provenía de sectores independientes (Frondizi había incorporado en el ínterin a referentes de la izquierda y del nacionalismo), pero la mayoría procedía del peronismo (coincidente con un millón de votantes que esta vez optaron por no sufragar en blanco, opción por la que sí se inclinaron algunos neoperonistas, en tanto otras fuerzas de ese signo presentaron candidatos propios y

sumaron cerca del 8%). Mientras tanto, desmintiendo una vez más los cálculos sobre la “ruptura clarificadora”, la UCRP retuvo su caudal de votos de 1957.

El pacto con Perón aseguró el triunfo de Frondizi. Pero lo obligaría a cumplir, desde la presidencia, algunas de las promesas que había hecho a cambio. Y tendría que hacerlo sin dañar su prestigio entre los no peronistas, civiles y militares, cuyo concurso necesitaría para sostenerse en el poder. Sólo si era capaz de “acelerar el desarrollo”, “eliminar el latifundio y desarrollar la industria pesada”, y recuperar lo más rápido posible los altos salarios típicos de la gestión económica del peronismo, podría cumplir con el pacto y al mismo tiempo atender las expectativas de modernización, democratización e integración de esa fuerza política que la intransigencia despertara en los empresarios, las izquierdas y parte de los radicales. Si fracasaba, el acuerdo habría de fortalecer al peronismo y al propio Perón y las demás fuerzas le harían pagar cara su deslealtad. Porque lo cierto es que Frondizi había aceptado una regla, mientras secretamente la violaba, para sacar ventaja de la situación. Semejante audacia sólo le sería perdonada si lograba disolver el carácter “prestado” de su triunfo con éxitos de gestión inapelables y una amplia recomposición de los alineamientos políticos. Tal como había sucedido en 1955 y volvería a suceder en el futuro, la subestimación de la raigambre social del movimiento peronista y la sobrestimación de las posibilidades de emular sus “conquistas sociales” estaban impulsando a los actores de la proscripción a buscar soluciones difícilmente sostenibles.

## **2. Frondizi, entre la proscripción y la integración**

Del entusiasmo desarrollista inicial a la pérdida de casi todos sus apoyos, el gobierno de Frondizi cabalgó entre dos “factores de poder” predominantes: los sindicatos peronistas y los militares. El delicado equilibrio que Frondizi buscó frente a ellos, con políticas públicas innovadoras, no exentas de audacia y de giros imprevistos, ni tampoco del recurso a dosis considerables de represión, permitió que su presidencia fuera en muchos aspectos exitosa. De todos modos, la actitud fervientemente opositora de la UCR del Pueblo, la tensa relación con los sindicatos y el tutelaje que cada vez más férreamente ejercieron las Fuerzas Armadas opacaron los logros del proceso de modernización económica y la industrialización acelerada. Las presiones externas, fruto de la Guerra Fría y la revolución cubana, fueron otro componente decisivo del período. Mientras tanto, Augusto Vandor, máximo líder gremial, chocó en su intento de construir un “peronismo sin Perón” contra el líder en el exilio, a la vez que las facciones en que se dividió el Ejército, la de los conciliadores y los antiperonistas duros, terminarían dirimiendo por las armas sus diferencias.

### **El entusiasmo desarrollista y los “factores de poder”**

Arturo Frondizi asumió la presidencia de la república el 1º de mayo de 1958 en medio de un gran entusiasmo de la ciudadanía. Muchos pensaron que, con él, la democracia finalmente lograría afirmarse, y muchos más todavía, tanto en el campo del antiperonismo como en el peronista, se ilusionaron con su audaz programa de modernización y desarrollo, que prometía sacar al país del “estancamiento y el atraso” en que parecía sumido (para algunos desde la crisis de 1951, para otros desde la de 1930) y satisfacer velozmente las demandas de todos los

grupos de interés. Esta sobrevaloración de sus posibilidades se revelaría pronto como un arma de doble filo para el nuevo gobierno.

En el trienio anterior los peronistas habían demostrado su capacidad para bloquear las tentativas de excluirlos y gobernar sin ellos o contra ellos. ¿Sería posible gobernar “con ellos”? Frondizi empezó por intentarlo, por lo menos transitoriamente: hasta que el cambio de estructuras diera fruto y le permitiera liberarse de esos molestos aliados o bien absorberlos definitivamente. Pero su traición al pacto proscriptivo encontró obstáculos desde un principio: la dependencia indisimulable de los peronistas, cuya colaboración explícita requería, y el recelo del antiperonismo, cuyos sectores más duros, viendo la deslealtad en que había incurrido, consideraron ilegítimo su gobierno. Por esta razón, tanto la UCRP como muchos militares trabajaron, desde el momento mismo de las elecciones, para alejarlo del poder. Balbín incluso lo expuso abiertamente, justificándose en que “la revolución es un derecho normal de las sociedades” (*La Nación*, 9 de septiembre de 1958).

La apuesta de Frondizi era ambiciosa: consistía en superar la dicotomía peronismo-antiperonismo –según él, “mal planteada”– y reordenar el sistema político formando una alianza que atravesara los dos polos y aglutinara al grueso del empresariado, los sectores medios que nutrían a la UCR y los votos populares peronistas. Sin embargo, chocaba contra la rigidez de los alineamientos preexistentes: la fortaleza de la UCRP, que retuvo buena parte del voto radical y planteó una oposición inclemente, y la autonomía del peronismo y de Perón, que aceptaron el pacto que se les ofreció, pero para perseguir sus propios objetivos. “Corregir” y rescatar dos revoluciones –la peronista y la Libertadora– de manos de sus “usurpadores” era quizás una tarea imposible. Como ha explicado Marcelo Cavarozzi en *Sindicatos y política en Argentina*, Frondizi debió enfrentarse con una “fórmula política” ya cristalizada: el bloqueo mutuo entre peronistas y antiperonistas, que no podían imponerse definitivamente unos sobre otros pero sí detener cualquier iniciativa que pretendiera arrebatarles sus recursos de poder.

La victoria electoral fue lo suficientemente amplia para darle al gobierno el empuje inicial que necesitaba: obtuvo el 70% de las bancas de diputados y la totalidad de las senadurías y las gobernaciones. Aunque, como ha mostrado Catalina Smulovitz en *Oposición y gobierno. Los años de Frondizi*, este poder también conllevaba un problema: el resto de los partidos, casi totalmente excluidos del reparto de cargos, tendría un nuevo motivo para desentenderse de la continuidad del sistema e impulsar la caída del gobierno. En sus primeros meses en la presidencia, Frondi-

zi tuvo que batallar contra estas tendencias golpistas y demostrar que estaba en condiciones de mantener el orden y sostenerse en el poder. Conocedores de su situación, los militares no tardaron en presionarlo. Pero Aramburu los contuvo: retirado del servicio activo y al frente de su propio partido (UDELPA), el ex presidente disuadió a la oficialidad de ir más allá. De allí que los mayores dolores de cabeza para Frondizi provinieran, en los primeros tiempos, del otro “factor de poder” que lo forzaba a mantener un delicado equilibrio: el sindical.

En un principio, como adelantamos, el presidente quiso mostrar su disposición a cumplir con los compromisos asumidos con los gremios y el peronismo y tomó una serie de rápidas decisiones: concedió un generoso aumento de salarios (60%), sancionó una amplia amnistía y derogó las restricciones a la actividad política y sindical, aunque esos beneficios no se extendieron a Perón ni al partido peronista, que siguieron proscriptos, cosa que Frondizi necesitaba para seguir siendo el canal de expresión obligado de los votantes de ese sector (lo cual revela la complejidad de la situación). En agosto hizo aprobar además una nueva Ley de Asociaciones Profesionales (para regular la vida gremial), que confirmaba el modelo instaurado en 1945. Estas medidas bastaron para que la UCRP denunciara “la entrega del país al totalitarismo” y sólo lograron moderar momentáneamente los reclamos sindicales. El gobierno pronto descubriría los costos que acarrearía relegitimar el sindicalismo peronista: consciente de que la gestión frondizista pendía de un hilo, éste quiso aprovechar la ventaja obtenida para lograr otras más. Así, cuando el Ejecutivo implementó su reforma más importante —la apertura del sector petrolero y otras actividades a las inversiones extranjeras—, la paz sindical se evaporó.



### **El giro de Frondizi en la política petrolera**

Frondizi había criticado con dureza las concesiones petroleras otorgadas por Perón a empresas estadounidenses en 1954. E insistió durante la Libertadora en esa posición nacionalista, sosteniendo que era posible autoabastecerse y a la vez preservar la “dignidad nacional”. Por tanto, cuando anunció concesiones similares a las de Perón, la oposición lo consideró un traidor: la UCRP lo denunció por entregarse al imperialismo, y los nacionalistas, que hasta entonces lo habían apoyado, lo abandonaron. Frondizi argumentó que la importación de combustibles representaba la principal erogación de divisas del país y que, en consecuencia, lograr el

autoabastecimiento era un paso decisivo para alcanzar todos los otros objetivos económicos: importar maquinarias, acelerar la expansión industrial –en particular en bienes durables y de capital–, incrementar el empleo en las áreas modernas de la economía y contener las pujas distributivas. Planteó esta “batalla del petróleo” como la piedra de toque que permitiría acelerar el desarrollo del país y superar la dependencia. Todo lo contrario de lo que decían sus críticos, y de lo que él mismo había dicho. ■

Previendo que los legisladores de la oposición e incluso muchos oficialistas se opondrían a esa medida, el Ejecutivo negoció en secreto con las empresas petroleras, otorgó las concesiones por decreto y las anunció por sorpresa. Suponía que los resultados pronto acallarían las críticas nacionalistas y procedimentales. Su plan, al menos en parte, funcionó: las inversiones extranjeras permitieron elevar rápidamente la extracción y refinación de combustibles. Pero en el ínterin provocó un primer enfrentamiento con los gremios: en septiembre Las 62 hicieron un paro general por “incumplimiento del programa nacional y popular”. Y al mes siguiente, el sindicato de petroleros declaró una huelga por tiempo indeterminado. El gobierno dispuso el estado de sitio y recurrió a las Fuerzas Armadas para acallar la protesta y contrarrestar el intento de la UCRP de convencer a los uniformados, dada su simpatía con la visión nacionalista, de que había llegado el momento de poner fin a las “traiciones de Frondizi”. Finalmente, la huelga fracasó porque el resto del sindicalismo, temiendo perder su frágil estatuto de legalidad, dejó de apoyarla.

Ambas partes volvieron a medirse poco después, en un conflicto que terminó de liquidar el pacto con Perón: cuando el sindicato de la carne inició otra huelga por tiempo indeterminado y ocupó el Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre en enero de 1959, en contra de su privatización, el gobierno no dudó en enviar a los militares para reprimirla. Las conducciones moderadas volvieron a privilegiar la legalidad y levantaron el paro. Pero apareció una línea combativa, en ese gremio y en otros, que extendió las protestas y las volvió más audaces. Esta postura recibió el aval de Perón, que pasó a la ofensiva: formó un Consejo Coordinador y Supervisor para poner orden entre las fuerzas neoperonistas, los sindicalistas y los “verticalistas” (como se denominaba a quienes actuaban directamente bajo sus órdenes), preparando el terreno para revelar el pacto firmado con motivo de las elecciones y su violación por parte del gobierno.

También en el terreno universitario Frondizi encontró más problemas de los que esperaba y sufrió la fuga de apoyos vitales. La iglesia católica, otro de los “factores de poder” con que el gobierno necesitaba contar, reclamó una reforma que la izquierda y algunos sectores de la UCRI objetaron. La polémica tenía como eje la posibilidad de que las universidades privadas emitieran títulos habilitantes: hasta entonces, sólo las casas de estudio públicas podían hacerlo, y los defensores de la “educación laica” pretendían que siguiera siendo así. Frondizi ya había anunciado, en junio de 1957, que apoyaría “la educación libre” porque consideraba que el “monopolio estatal” restringía la libertad de estudiar y el aporte de los sectores privados al desarrollo. No obstante, sus aliados de izquierda nuevamente se sintieron traicionados y pasaron a engrosar las filas de la oposición cuando Frondizi confirmó esa decisión: las multitudinarias marchas a favor de “la laica” dejaron sentado este distanciamiento.



El frigorífico Lisandro de la Torre, ocupado por los trabajadores en huelga, enero de 1959. Colección privada.

Este tema, mucho más que la preocupación por el petróleo, generó tensiones en el partido oficial. Algunos de sus diputados ya se habían resistido a votar la Ley de Asociaciones Profesionales, de allí que el Ejecutivo optara por gobernar por decreto, aun teniendo una amplísima mayoría legislativa. Frondizi entendía, además, que para poder mediar entre los

sindicatos y los empresarios, entre el peronismo y los antiperonistas, y formar un amplio “frente nacional”, debía tener las manos libres y hacerse de un lugar “neutral” desde el cual tomar decisiones. Y concibió esa posición en los términos de una “vanguardia tecnocrática”: según esta idea, el desarrollismo no era el ideario de ningún partido ni interés específico sino una visión superadora y técnica de los problemas que, en los casos en que careciera de consenso inicial, lo obtendría a través de los resultados. Quien mejor expuso este argumento fue Rogelio Frigerio, director de la revista *Qué sucedió en 7 días*, gestor del pacto con Perón, ahora orientador, desde la Secretaría de Relaciones Económicas y Sociales, de las tratativas con empresarios y sindicalistas, y coordinador de gran número de funcionarios profesionales extrapartidarios ubicados en “áreas sensibles”. Formó así una suerte de “gobierno paralelo”, cuya presencia generó más recelos en la UCRI y entre los militares.



### La revista *Qué*



Portadas de la revista *Qué sucedió en 7 días*. A la izquierda: año 4, núm. 177, 15 de abril de 1958, y a la derecha: núm. 181, 13 de mayo de 1958.

El discurso técnico fue el recurso de legitimación que se desplegó en la revista *Qué*, publicación en la que intelectuales del peronismo y el nacionalismo (Raúl Scalabrini Ortiz y Arturo Jauretche entre ellos) convergieron con otros procedentes de la izquierda y el radicalismo. El punto de encuentro era la expectativa de que las políticas desarrollistas sortearan

los obstáculos del país para crecer y al mismo tiempo distribuir la riqueza, estabilizarse y disfrutar de la libertad política y sindical. La identificación de la técnica como fuente de soluciones presentaba un aspecto modernizador, innovador, pero también otro muy tradicional en la política argentina: la técnica serviría para disipar conflictos –supuestamente, frutos del error, de la incomprensión de los problemas o de los “intereses políticos” de los grupos dirigentes– y para hacer surgir un consenso social latente. Esta perspectiva daba por sentado que la sociedad argentina era en esencia armónica y que, si había perdido esa armonía, era porque la política había metido la cola. El problema era que por esta vía, mientras se daban por supuestos consensos inexistentes, se perdían oportunidades reales de negociar y acordar políticas. En consecuencia, lejos de disiparse, los conflictos recrudecían cada vez que eran atribuidos a una particular perversión o negación de la realidad por parte de los adversarios. El problema se agravó porque buena parte de la oposición también hacía esa clase de razonamientos. La creciente preocupación por imponer el orden –aunque fuera por la fuerza– que acompañó este discurso técnico dejó en claro que la confianza en el “consenso subyacente” estaba debilitándose. De allí el rol que con el tiempo se les fue reconociendo a los militares y la alarma frente al “peligro comunista”. Ello muestra cómo el desarrollismo fue abandonando su optimismo inicial y evolucionando hacia una visión cada vez más autoritaria: si pese a los resultados positivos de la política económica, el conflicto entre intereses y partidos no disminuía sino que se agravaba, se hacía necesario un ejercicio del poder que prescindiera de ambos y se impusiera desde arriba hasta que los resultados fueran irreversibles y lo suficientemente claros como para “sacar de su error” a los opositores. ■

### **Logros económicos y asedio político**

Con sólo un año en funciones, el gobierno de Frondizi ya había podido comprobar la fragilidad de sus apoyos. Y también reconocer lo difícil que le resultaría convivir tanto con la UCRP como con un peronismo que, pese a sus disensos internos, reclamaba al unísono un rol más amplio que el adquirido por intermedio de la UCRI, y mucho mayor que el que los otros partidos y los militares estaban dispuestos a tolerar. En lo inmediato, la UCRP había visto frustrados sus planes de voltear al gobierno con el concurso de los cuarteles. Pero no desistió y siguió echando mano a las prácticas parlamentarias que había usado bajo el régimen

peronista: denuncia global de las políticas oficiales, abandono sistemático de las sesiones y cuestionamiento de la legitimidad de las leyes que se votaban en su ausencia. Si bien sólo había obtenido la adhesión de una cuarta parte del electorado, esta estrategia le permitía proclamarse representante de “la causa de todo el pueblo” contra un poder fundado en el engaño, y argumentar que era tan legítimo rebelarse contra ese poder como en su momento contra Perón (Balbín afirmaría, tras una nueva derrota electoral de su partido en la Capital Federal, que “una construcción moral no puede ser derrotada nunca”).

Mientras tanto, las políticas desarrollistas fueron dando algunos buenos resultados en el terreno económico. Las inversiones externas, atraídas por las condiciones favorables que se les ofrecían, incrementaron la capacidad productiva en la industria de base y fomentaron la instalación de plantas modernas en las principales ciudades. La sustitución de importaciones se extendió así a sectores en los que el capital nacional no había hecho pie hasta entonces. La producción de automóviles, acero y combustibles creció aceleradamente. El sector público también aumentó su inversión, sobre todo en grandes represas y caminos. Esos logros, con todo, no bastaban para destrabar el proceso político: para mantener las inversiones era menester garantizar tasas de ganancia estables y elevadas, y, dadas la fragilidad de las bases de apoyo del gobierno y las impugnaciones a su legitimidad desde los dos bandos que más gravitaban en la lucha política, a Frondizi le resultaba muy difícil resistir las presiones sindicales que acotaban y volvían inciertas esas ganancias. La reactivación de la economía y el aumento de los salarios provocaron un salto en la inflación (del 22,5% de 1958 pasó al 129,5% al año siguiente, todo un récord), hecho que a su vez causó una mayor inquietud gremial. ¿El recurso a la represión podría ser, más allá de su utilidad circunstancial, una solución duradera? A esto se sumó el problema del déficit comercial: las industrias en expansión necesitaban cada vez más importaciones, pero ni ellas ni el agro aumentaban sus exportaciones a la misma velocidad. A raíz de ello, las reservas de dólares cayeron a 200 millones a fines de 1958. Acceder a créditos externos parecía la única solución inmediata a la escasez de divisas.

A mediados de 1959, el gobierno decidió endurecerse todavía más y profundizar los cambios: en junio lanzó un plan antiinflacionario a cargo del nuevo ministro de Economía, Álvaro Alsogaray, defensor de un ortodoxo ajuste entre gastos e ingresos y gran impulsor de las inversiones empresarias con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, organismo que otorgó un crédito para cubrir el déficit externo y aumentar las

reservas. En respuesta, Perón reveló el pacto firmado en 1958 y volvieron a proliferar los pedidos de renuncia del presidente y los llamados a los militares para que lo derrocaran. Pero Frondizi estaba preparado para ofrecer otra alternativa a los uniformados: a comienzos de 1960, y tras denunciar una conspiración entre peronistas y comunistas, implantó el Plan de Conmoción Interna del Estado (Conintes), que otorgó a las Fuerzas Armadas amplias funciones represivas e incluso les permitía juzgar a huelguistas o militantes revoltosos. Mientras el Conintes estuvo vigente –su aplicación concluiría en agosto de 1961–, las protestas disminuyeron (los dos millones de jornadas laborales perdidas por huelgas en 1959 se redujeron a una décima parte) y las cúpulas gremiales siguieron acorraladas entre la presión de las bases y los sectores combativos, y el riesgo de perder la legalidad que les permitía ejercer sus cargos.



Desde el balcón de la Casa Rosada, el presidente Arturo Frondizi observa una manifestación a favor de la enseñanza laica, agosto de 1958. Archivo General de la Nación.

El Conintes tuvo otros efectos más amplios: fue el primer paso en el tránsito de los desarrollistas y otros grupos de opinión desde la tesis que emparentaba democracia y desarrollo hacia la que vinculaba el desarrollo con la seguridad. Al permitirle a Frondizi utilizar a los mi-

litares como contrapeso “transitorio” frente a los sindicatos y la oposición golpista, abrió la puerta a la legitimación y ampliación del rol de garantes del orden que por sí mismos tendían a atribuirse muchos uniformados. El plan permitía un uso limitado de la fuerza. Pero en relación con las prácticas habituales de los gobiernos argentinos (incluida la Libertadora), que emplearon la violencia para imponerse sólo en forma episódica, fue un cambio abrupto: ya no se buscarían consensos; la coerción extendida y prolongada los reemplazaría. Por otro lado, implicaba que el gobierno reconocía que el vínculo con las Fuerzas Armadas –dominadas por los antiperonistas más duros– sería decisivo para mantenerlo en funciones. El propio presidente declararía poco después que las Fuerzas Armadas “son la columna vertebral del orden, la paz y la cohesión nacional” (1º de mayo de 1960).

Frondizi aceptó esta situación hasta que pudiera obtener otro sostén, electoral o corporativo, que seguiría buscando con ahínco. Con este fin, insistió en su idea de convertir la UCRI en un vehículo para reabsorber al peronismo dentro del sistema político. Sólo que ahora lo intentaría sin el aval de Perón, de cuya persistente y desafiante capacidad de liderazgo ya había tenido pruebas suficientes. Las elecciones de renovación parlamentaria, en marzo de 1960, fueron una prueba de fuerza entre ambos líderes. Frondizi usó –sin éxito– todo tipo de recursos para convencer a los neoperonistas de aliarse con la UCRI en las provincias. La UCRP, por su parte, le devolvió el favor que aquélla le hiciera dos años antes y cuestionó la proscripción: reclamó que la levantaran para atraer votos peronistas y complicarle aún más las cosas al gobierno. Éste respondió, presionado una vez más por los militares, disolviendo el Partido Peronista, lo que bastó para que el llamado de Perón a votar una vez más en blanco superara las resistencias de los neoperonistas. La opción se impondría con el 25,2% de los votos, un poco más que en 1957, y condenó a la UCRI al tercer lugar con sólo el 20,4%. Aunque pudo retener la mayoría en Diputados, los resultados mostraron que casi nada había cambiado desde la elección de convencionales. Frondizi, aun controlando férreamente el gobierno y con logros económicos que mostrar, no podía destrabar la situación. Y otra vez, debido a la disputa entre los dos radicalismos, la resistencia cerril de los militares antiperonistas y la habilidad de Perón, el esfuerzo por integrar a los neoperonistas mediante acuerdos con otras fuerzas o sus propias listas había fracasado.

Una vez más, también, los sindicatos vieron fortalecido su rol como únicos actores legalizados del arco peronista. De los sabotajes y la Resistencia se había pasado a un activismo más gremial, en el que gradual-

mente se impuso un método de lucha que permitía a las dirigencias usar su capacidad de perjudicar al gobierno tanto como su poder de presión sectorial sobre los empresarios para obtener ventajas políticas, en términos de legislación laboral y sindical, y concesiones salariales y de condiciones de trabajo. Este método, que se conocería como “golpear y negociar”, daba continuidad y profundizaba las pautas coyunturalistas que habían regido la acción obrera ya durante los gobiernos de Perón. Grandes gremios de sectores modernos de la industria, favorecidos por las políticas desarrollistas —en particular la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que adquirió un papel cada vez más destacado en la orientación de Las 62 y la CGT—, se destacaron en su ejercicio. Augusto Timoteo Vandor, el líder de la UOM, fue un fino cultor de este método.

A pesar de todo, como ya insinuamos, la posición privilegiada de los gremios se vio afectada por las tensiones entre dos opciones políticas: la de quienes “golpeaban y negociaban” con vistas a mejorar la situación del sector que representaban —lo que suponía llegar a acuerdos con el gobierno y con otros factores de poder (como los militares), y que cabe denominar por ello “participacionismo”, posición que tenía como referente a Vandor— y la de los “combativos”, que subordinaban la satisfacción de los intereses sectoriales a la reinstauración del orden peronista. Estos últimos, fuertes en las comisiones internas de las empresas, siguieron ligados a los grupos de la Resistencia que fomentaba Cooke —incluso se asociaron a corrientes de la izquierda revolucionaria— y se congregaron en torno a Andrés Framini, dirigente textil que presidió la CGT durante esos años. La ruptura de la unidad sindical que en ocasiones resultaría de las pujas entre estas dos posiciones era alentada por el gobierno y también por el propio Perón, interesado en que el sindicalismo no adquiriera excesivo poder y autonomía. Pero ni uno ni otro tendrían mucho éxito: las fronteras entre los dos sectores se mantuvieron fluidas y la “burocracia sindical” vandorista utilizaba con frecuencia a los combativos y la “presión de las bases” como eficaz amenaza en la mesa de negociaciones.

Esto generó aún más problemas al gobierno, que, en su búsqueda de apoyos en los factores de poder, cortejó a sindicalistas con concesiones que no alcanzaron para cooptarlos y en cambio sí lo distanciaron de los empresarios, en principio más dispuestos a colaborar con él. Algo similar sucedió en el terreno partidario: el oficialismo se fue quedando solo, “a medio camino” entre las fuerzas más sólidas y gravitantes. Los neoperonistas se convencieron, tras su frustración en las elecciones parlamentarias,

de que no podían esperar nada de Frondizi; los otros partidos, invitados a sellar un “pacto de unidad nacional” después de las mencionadas elecciones, vieron en ello una mera distracción y rechazaron la idea.

### **Los complejos efectos sociales de la modernización: “los ejecutivos” y “las villas”**

La modernización supuso también más problemas sociales de los que el gobierno había esperado: el consenso inicial se debilitó como consecuencia de una creciente polarización entre quienes reclamaban mayor velocidad en los cambios, un control más férreo de la inflación (que apenas bajó al nivel previo del 2 o 3% mensual con el plan de Alsogaray), mayores alicientes a las inversiones privadas y más obras públicas de infraestructura, y menor permeabilidad por lo tanto hacia las demandas sindicales; y quienes desde estos sectores exigían que se respetaran sus derechos adquiridos y se les diera participación en los beneficios del desarrollo.

En términos objetivos, las políticas desarrollistas se estaban llevando adelante en el marco de un considerable respeto por los derechos sindicales y las pautas de equidad social heredadas: como venía sucediendo desde hacía tiempo, la participación de los asalariados en el ingreso total cayó en estos años, aunque en forma acotada y sin impedir que el poder adquisitivo de los salarios, en promedio, subiera. Pero lo más importante fue el impacto en las percepciones, y en última instancia, en la política. La apertura al mundo, las inversiones externas y el consiguiente cambio en los modos de producción, intercambio y consumo produjeron profundas alteraciones en la vida de todos los sectores sociales y en su modo de percibirse a sí mismos y a los demás. El paso de una actividad industrial en la que predominaban los pequeños talleres a otra de grandes plantas con maquinarias y métodos modernos, que requerían servicios hasta entonces inexistentes, hizo que se crearan nuevos puestos de trabajo; pero otros desaparecieron debido a la desigual competencia entre las unidades modernas y las tradicionales. Este proceso produjo una creciente diferenciación en los ingresos, que se extendió a las condiciones de trabajo y las posibilidades de ascenso, calificación y estabilidad laboral, y que muchos consideraron injusta y excluyente.

Ésta fue la actitud predominante en los grupos que perdieron su seguridad y estabilidad tradicionales debido a los acelerados cambios en curso. La modernización de la agricultura destruyó empleos en las zonas rurales y la competencia de la industria moderna hizo lo propio

en pueblos y ciudades del interior. Esa mano de obra disponible se trasladó a las grandes urbes, donde se concentraban las nuevas inversiones y actividades. Pero al llegar a las metrópolis, estos trabajadores poco o nada calificados descubrieron que sus ingresos se alejaban cada vez más de los que obtenían los más calificados. A los recién llegados se les hizo cada vez más difícil alquilar una vivienda digna, e impensable adquirirla, o acceder a los bienes y servicios que la modernización ofrecía. La consecuencia fue la rápida expansión, en los anillos periféricos de las grandes ciudades, de las villas de emergencia, claro testimonio de lo injusta, insegura y conflictiva que podía ser una “sociedad en desarrollo”. Y, por lo tanto, eje de la denuncia del orden vigente.



### **“Correntada de cabecitas negras”**

Marcelo dormía... el cansancio lo había rendido (venía de Posadas, después de un largo viaje, con su familia). A la mañana siguiente ya estaba bien. Enseguida salió a explorar el lugar. Una vecina le indicó dónde estaba el baño que necesitaba, una casillita de arpillera deshilachada. Volvió a su vivienda y desde la puerta contempló el amontonamiento de casillas de madera, ranchos y casuchas de lata. Desilusionado, le dijo a la madre y a las hermanas, ya despiertas: —¿Y esto es Buenos Aires? [...] Una mañana cualquiera Buenos Aires descubrió un espectáculo sorprendente: al pie de los empinados edificios de su moderna arquitectura se arremolinaban infinidad de conglomerados de viviendas miserables, una edificación enana de desechos inverosímiles. Podía creerse en la resurrección de las tolderías indianas, a las que se asemejaban. Ni desde los más altos rascacielos se habían podido divisar hasta entonces esos rancheríos. ¿O se había preferido no verlos?... Creeríase que habían venido desde sus pagos provincianos para recordar su existencia. [...] Venían caminando [...] en un fluir de río. Pero el río ¿no se gasta? Su fuente ¿no se agota? Corre sin fin y su cauce existe y se ahonda y existe también el rumbo de esa corriente. Así es esta correntada de cabecitas negras.

Bernardo Verbitsky (1957), *Villa Miseria también es América*, Buenos Aires, Sudamericana, 2003. 

También para los profesionales se abrieron nuevas oportunidades de empleo, de progreso material y por lo tanto de diferenciación entre

tentando una política autónoma respecto de Washington y sobrevaleando el rédito electoral que podría extraer de la simpatía local con el castrismo (cegado tal vez por la amplia victoria del socialista Alfredo Palacios en las elecciones porteñas de 1960)– se reunió con Ernesto “Che” Guevara y ordenó abstenerse en la votación en la que la OEA decidiría la expulsión de la isla de su seno, la prensa y los políticos conservadores lo acusaron de complicidad con la subversión comunista. La reacción en los cuarteles fue tal, que obligó a Frondizi a romper relaciones con Castro una semana después. Una vez más, el resultado fue el aislamiento del gobierno: para los conservadores era peligrosamente tibio frente al comunismo; para la izquierda y los nacionalistas era dócil frente a las presiones imperiales, y para los peronistas podía ser tanto una cosa como la otra. En el plano externo, mientras Brasil y Chile sacaban provecho de la “Alianza para el Progreso” promovida por John F. Kennedy (por la que los Estados Unidos daban créditos para infraestructura y ventajas comerciales a cambio de alineamiento en el combate del comunismo), la Argentina resultó en gran medida excluida de sus beneficios.



### **El impacto local de la revolución cubana**

El giro a favor de la “vía armada” y el desprecio hacia la contienda electoral como camino para conquistar el poder, que el ejemplo cubano estimuló en toda la región, tuvieron un especial alcance en la Argentina debido a que el triunfo de Castro coincidió con las frustraciones de la izquierda local ante el curso adoptado por el gobierno de Frondizi, de los militantes y dirigentes peronistas por la proscripción de su líder partidario, y de ambos grupos ante la permanente intervención militar en la vida política. Al modelo ofrecido por el argentino Guevara a los jóvenes militantes de izquierda y del peronismo, se sumó la presencia de John W. Cooke. Radicado en Cuba desde 1960, bregó desde allí por la confluencia de todos los revolucionarios, la formación de guerrillas y –dada la renuencia de Perú a romper con la derecha del movimiento– la necesidad de “superar al querido jefe”, “desactualizado” ante la velocidad de los cambios que se producían en la región y en el mundo. Las ideas de Cooke fomentaron un primer intento guerrillero en Tucumán (Uturuncó) ese mismo año. Ese foco se desarticuló muy pronto, pero le seguirían iniciativas mucho más ambiciosas, que encontrarían un suelo más fértil a medida que avanzaba la década.



John William Cooke fue designado por Perón como su representante en Argentina a partir de 1955. Cuba, 1961. ▀

### **La caída de Frondizi y el gobierno de José María Guido**

En las elecciones de 1962, que renovarían la mitad de los diputados y los cargos de gobernadores e intendentes de todo el país, Frondizi se propuso lograr lo que no había podido dos años antes: la parcial reincorporación del peronismo al sistema político a través de fuerzas neoperonistas, con el objetivo de quitar gravitación al liderazgo del ex presidente exiliado y permitir que la UCRI actuara como intermediaria necesaria y moderadora del conflicto entre peronismo y antiperonismo. Para ello debía conseguir dos cosas: que los líderes locales del movimiento proscripto antepusieran sus intereses a los de Perón, y que los civiles y militares tozudamente antiperonistas no los impugnaran de nuevo. Pero además debía aprovechar el temor de los peronistas al triunfo del antiperonismo virulento, y viceversa. Es decir, debía lograr que las listas oficialistas fueran consideradas el “mal menor” por unos y otros. Todo dependía, como se ve, de una alquimia muy compleja.

Las victorias locales de la UCRI en Catamarca, San Luis, Santa Fe, Formosa y La Rioja entre marzo de 1961 y febrero de 1962 alentaron al presidente: parecía que esta vez sí podría capitalizar el voto peronista o parte de él sin necesidad de acordar con su líder natural, porque la opción por el voto en blanco o la abstención perdía convocatoria entre los sectores populares. Ello lo incitó a hacer una apuesta arriesgada en los distritos centrales. En el ínterin, sin embargo, los líderes provinciales del movimiento y los sindicalistas se las ingeniaron para que

Perón cambiara de actitud: con Vandor a la cabeza viajaron a Madrid y prácticamente le impusieron concurrir a los comicios como "Frente Justicialista", dejando en libertad a cada distrito para que lo hiciera junto a la izquierda, a través de fuerzas neoperonistas, o incluso volviendo a negociar con la UCRI. Esta vez no hubo proscripciones generalizadas. Fue más bien el propio Perón el que hizo un último intento por provocarlas: cuando se presentaron las listas en la provincia de Buenos Aires, promovió sorpresivamente la fórmula Framini-Perón para la gobernación; pero la Justicia sólo objetó su nombre, no el resto de las listas, y el propio Framini optó por reemplazarlo por otro vice más "potable".

En los comicios de marzo de 1962, Framini y otros ocho candidatos justicialistas se alzaron con la victoria. En la totalidad del país, la Unión Popular sumó el 17% de los votos y el resto de las listas neoperonistas el 15%. Varios de los dirigentes electos eran verticalistas (entre ellos Deolindo Bittel, quien ganó la gobernación del Chaco). Pero los principales triunfadores fueron Vandor y el sindicalismo, que se consagraron como factor autónomo en la competencia electoral al traducir en votos su potente organización y capacidad de movilización sectorial. A partir de entonces, independizarse de Perón se le presentaría no sólo como una opción atractiva para consolidar su liderazgo sino como un medio necesario para defender los intereses del gremialismo y del movimiento.

Sin embargo, las cosas no se acomodaron de momento tan fácilmente a los intereses de Vandor y su gente. Las victorias de sus listas resultaron intolerables para el arco peronista, en parte porque eran demasiado poco "neoperonistas": Framini, un combativo verticalista, era el caso más irritante. Pero también influyó la percepción del clima externo: las asociaciones entre el peronismo y el comunismo y el temor a la amenaza revolucionaria estaban a la orden del día. En parte por la presión de los militares y en parte porque él mismo consideró necesario hacerlo, Frondizi intervino cinco de las provincias donde habían triunfado los peronistas, para evitar que asumieran sus cargos. Para alivio de Perón, el vandorismo no podría por tanto traducir en recursos institucionales su triunfo electoral.

Pese a esa rápida decisión de Frondizi, ya nada alcanzó a impedir su caída. El debilitado presidente intentó que Aramburu volviera a ejercer un rol moderador, pero los demás partidos, en particular la UCRP, se negaron a transigir: Ricardo Balbín, secundado por los líderes de la Democracia Progresista, el socialismo y la Democracia Cristiana, afirmó que no habría acuerdo si el presidente no renunciaba. A raíz de ello la

Armada, y luego el Ejército, le exigieron que lo hiciera. Frondizi intentó aún retener algo de poder: acordó con José María Guido, presidente provisional del Senado y hombre neutral en la disputa, que asumiera el cargo en su lugar, y negoció con los militares una detención que no le impidiera seguir ejerciendo influencia sobre su partido y sus ministros. Pero también estos esfuerzos resultarían inútiles. Los comandantes en jefe le exigieron a Guido que anulara los comicios de marzo, proscribiera al peronismo en todas sus versiones e incluso disolviera la CGT.



### Un peronismo sin Perón



Augusto Timoteo Vandor, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica, 1962.

Vandor no era sólo el más hábil de los jefes gremiales que renovaron sus títulos tras la Libertadora, sino también el más ambicioso. Desde que lograra el control de la UOM secundado por figuras como José Rucci y Lorenzo Miguel –y a partir de ello, de Las 62 Organizaciones–, trabajó para someter a la dirigencia política peronista y neoperonista y crear un partido de base obrera capaz de ganar elecciones, por lo menos provinciales. Invertió abundantes fondos de los gremios para promover las candidaturas de los dirigentes sindicales o políticos que le respondían. Su posición anticomunista lo hacía aceptable para muchos militares y le

permitía eludir la impugnación que éstos imponían a dirigentes como Framini. Con la Unión Popular convertida en su plataforma electoral, en 1961 y 1962 Vandor logró buenos resultados en varias elecciones provinciales y legislativas. Tal vez demasiado buenos: despertó el recelo de Perón, quien, viendo en él la peor amenaza para su liderazgo, se abocaría a dar alas a otros sectores gremiales, en particular a los llamados “combativos”. ▀

Ante esta amenaza, el peronismo volvió a dividirse. El sector reunido en torno a su Consejo Superior, respaldado por Vandor, intentó el diálogo, mientras que el grueso del sindicalismo —encabezado por Framini y aliado a un nuevo actor, la militancia juvenil— inició el varias veces anunciado “giro a la izquierda” y lanzó una nueva ola de Resistencia (la Juventud Peronista, que hizo por entonces su aparición pública, instó a “la insurrección para lograr el retorno incondicional de Perón”). Ante esta situación, para evitar el endurecimiento de la proscripción, el Consejo Superior se acercó al resto de los partidos con el propósito de convencerlos de que, dado que el peronismo había probado ser inerradicable de la sociedad, tarde o temprano, mejor no demasiado tarde, había que legalizar su existencia. La iniciativa no cayó en oídos sordos, en parte porque la intervención militar amenazaba ahora con negarle sus derechos también al resto de los partidos: así se logró por primera vez un diálogo entre la UCRP y el peronismo, bajo la elocuente denominación de Asamblea de la Civilidad (diálogo al que, en marzo de 1963, se sumarían la UCRI, los conservadores populares, los socialistas, los demócratas progresistas y los demócratas cristianos). De todos modos, este reconocimiento de la “inevitabilidad” del peronismo tardaría todavía varios años en decantar.

Otro efecto de la nueva situación creada por ese hecho inevitable fue que otras fuerzas políticas replicaron los intentos de Frondizi y buscaron coaligarse con sectores del movimiento proscripto. Y, en consecuencia, se repitieron en ellas los desprendimientos y cismas debidos al choque entre quienes optaban por este camino y quienes seguían fieles a las tesis antiperonistas. Parte de los intransigentes, los democristianos y los conservadores populares depositaron sus esperanzas en la formación de un Frente Nacional, en busca de una nueva salida electoral que evadiera las proscripciones, mientras que desprendimientos socialistas y comunistas, anticipando el fracaso de esa opción, se inclinaron por coaligarse con los gremios combativos y acelerar el “giro a la izquierda” del movimiento. Ambos intentos expresaban la común frustración de

no haber podido seducir a porciones significativas del electorado desde 1955, y también una revisión de lo que el peronismo había significado y su posible orientación futura. Por lo pronto, el efecto más notable fue la fragmentación del campo político y la dificultad creciente para formar una mayoría de cualquier signo.

Las disidencias también se agravaron entre los seguidores de Perón. Mientras el Consejo propalaba su Plan para la Concordancia y la Pacificación Nacional, los sectores duros se lanzaron a organizar huelgas y protestas. La CGT realizó varios paros generales en mayo y junio de 1962, denunciando los acuerdos con el FMI de Álvaro Alsogaray, quien nuevamente ocupaba el cargo de ministro de Economía. Las 62, impulsadas ahora por Framini y otros combativos como Amado Olmos, se reunieron en julio de 1962 en Huerta Grande, Córdoba, para lanzar un programa revolucionario que a partir de entonces sería la expresión del afán transformador del peronismo y de su afinidad creciente con las ideas socialistas. Perón, por su parte, siguió dejando hacer a unos y otros.

Proscripción más pacto más participación acotada del peronismo fue una fórmula que demostró no poder funcionar. ¿Se intentaría ahora una proscripción más amplia, una vuelta al proyecto de noviembre de 1955? Tampoco esta vez los militares lograron ponerse de acuerdo. Aunque los antiperonistas duros habían ganado posiciones en los cuarteles, a medida que se frustraban los intentos de Frondizi por hallar una vía para la integración y Aramburu perdía capacidad de contenerlos, no lograron eliminar la resistencia de otros grupos castrenses, que pretendieron orientar al gobierno de Guido por una vía media para evitar la radicalización del peronismo. A consecuencia de ello, desde abril de 1962 se produjeron sucesivos conflictos entre facciones militares, cada uno de ellos seguido por un cambio de ministro del Interior y de planes políticos, hasta que en septiembre la tensión desencadenó violentos choques armados.

Todo esto reveló que la irresolución del “problema peronista”, la disputa sobre las reglas de juego —que, debido al bloqueo entre los bandos en pugna, se extendía también dentro de las Fuerzas Armadas— y la desinstitucionalización de los conflictos políticos llevaban a que cada vez más se confiara sólo en las armas como vía para crear y ejercer el poder. Este hecho, naturalmente, iba en detrimento de la vía electoral. Dado que los vencidos en cada compulsión no consideraban que el resultado los limitara o les impidiera recurrir a otros medios para tomar revancha y recuperar poder (como sucedió con la UCRP durante el gobierno de la UCRI), se fue propagando la convicción de que sólo la movilización de



Azules y colorados. Tanques de los azules en la base naval de Punta Indio, abril de 1963. Archivo General de la Nación. ▀

Pero, si bien los azules lograron que en esas elecciones se permitiera la participación de los “justicialistas”, los colorados no quedaron con las manos vacías: se mantendría la proscripción de los “adictos a Perón”. La UP de Vandor fue autorizada a participar y formó para ello un frente con la UCRI y otros partidos menores. Sin embargo, cuando Perón anunció que apoyaría a Vicente Solano Lima –un conservador popular que se declaraba su fiel seguidor– como candidato a presidente de ese frente, la Justicia optó por impugnar sus listas. Perón logró entonces que la UP y los gremios lo acompañaran en su tercer llamado a votar en blanco, al que respondió el 19% de los votantes. El candidato de la UCRP, Arturo Illia (único dirigente de ese partido que había triunfado en las elecciones a gobernador del año anterior), se impuso con poco menos del 26% de los votos frente a la UCRI, que obtuvo el 16% (Aramburu y los neoperonistas alcanzaron porcentajes menores).

Así fue que, en el momento en que en las Fuerzas Armadas se imponía la visión “integracionista” que había impulsado Frondizi, en la política civil triunfaba la postura contraria, la misma que entre 1958 y 1962 había vetado desde los cuarteles los intentos del líder desarrollista. Peor aún, las tensiones que habían signado la suerte de la Libertadora volvían a hacerse presentes. Y esta vez la salida electoral no sería, ni para los militares ni para muchos civiles, una solución superadora sino

apenas un recurso transitorio hasta tanto se resolvieran las diferencias allí donde realmente se definiría el futuro del país: en los cuarteles y en los términos revolucionarios que reclamaba la hora. De modo que las elecciones de 1963 no sólo fueron objetadas por quienes votaron en blanco, sino también por muchos otros que dudaban más o menos abiertamente de que fueran el procedimiento adecuado para establecer un orden institucional duradero y reencaminar el país. Y es que a esa altura ya eran muchos los que creían que la Argentina no ofrecía las condiciones necesarias para que la promoción del desarrollo económico, que requería controlar la puja distributiva y asegurar un orden estable, fuera compatible con la democracia electoral y la libertad sindical (nunca unas acotadas). Se estaba preparando el terreno para que, tanto en el campo civil como en el militar, se impusiera una desconfianza generalizada hacia el gobierno de los partidos y se asumiera que sólo las Fuerzas Armadas podían gobernar y asegurar el progreso. El plan Cominates había abierto la puerta a esta postura, y el fracaso de Frondizi la había legitimado en los cuarteles, en círculos empresarios, sindicales y políticos y en amplios sectores de la opinión pública.

### **3. Arturo Illia: un gobierno moderado en la escena de la revolución**

Electo en 1963 por la UCRP con un muy bajo porcentaje electoral, Illia apostó a mantener divididos a los peronistas y los militares, viendo en ello el único camino para la supervivencia de una frágil institucionalidad democrática. La fórmula ya utilizada por Frondizi, consistente en aplicar o levantar –según la conveniencia circunstancial del gobierno– la proscripción que desde 1955 pesaba sobre los candidatos que se identificaran con Perón, ahora fue usada por Illia contra el que consideró su principal enemigo: el neoperonismo controlado por Vandor. Este choque entre Illia y Vandor se agravaría por el intento del primero de reformar el modelo sindical heredado, y por la presión que ejerció Perón para debilitar a los neoperonistas, aun al precio de dividir la CGT y dar alas a la izquierda del movimiento. El gobierno de la UCRP, pese a los buenos resultados económicos que logró, hallaría escaso eco para sus planteos en una opinión pública que, desde mediados de la década de los sesenta, se identificó cada vez más con alguna de las posiciones polares que otros actores políticos le proponían: la de una revolución social, a la que ahora parecía apostar el propio Perón, y la de una revolución nacional encabezada por las Fuerzas Armadas. Éstas, por lo pronto, se impondrían, gracias a que sumaron al control de los medios armados la idea muy difundida de que eran las únicas capaces de imponer orden y acelerar el desarrollo.

#### **Una tregua demasiado frágil**

La llegada de Illia a la presidencia no fue acompañada por nada parecido a la ola de expectativas que Frondizi había sabido concitar. Debido ante todo, aunque no solamente, a su insuficiente legiti-

mación electoral, apenas pudo engalanar su toma de posesión con las insignias de una modesta ansia de tranquilidad y el deseo de que se prolongara la tregua posterior a las confrontaciones que habían cerrado el breve ciclo desarrollista. Para concretar esa aspiración, el nuevo mandatario eventualmente contó con el concurso de los actores predominantes en sus respectivos campos: los azules del Ejército y los participaciónistas de los gremios. Sin embargo, ninguno de los dos figuraba en la lista de aliados a los que Illia deseaba acercarse para adquirir bases más sólidas y una efectiva capacidad de gobierno. Y he allí la raíz de algunos de los muchos obstáculos que habría de enfrentar.

Illia y la UCRP no ocultaban su inclinación por los colorados, afirmada tanto en razones históricas –la común preferencia por una política antiperonista lo más dura y sostenida posible– como en motivos más inmediatos –la debilidad de esa facción militar la volvía atractiva para un gobierno también débil, cuyo futuro dependía de que ningún actor se destacara demasiado–. Por eso, si bien mantuvo al frente del Ejército al jefe azul, el general Onganía, Illia desafió su autoridad promoviendo a puestos de mando a sus adversarios internos. Algo semejante intentaría en el campo gremial. Los combativos habían ganado terreno gracias al fracaso de la integración y al apoyo que ahora recibían de Perón, cada vez más receloso de las ambiciones de Vandor. Pero era éste quien controlaba las principales organizaciones y encarnaba el núcleo duro del modelo sindical que Frondizi había relegitimado y que, a los ojos de la UCRP, constituía el verdadero obstáculo para resolver la “cuestión peronista” y dar estabilidad al sistema democrático. De allí que Illia apuntara a horadar las bases institucionales del poder de la “burocracia sindical” a través de la democratización de la vida interna de los gremios, la autorización de más de una organización por rama de actividad y la representación de las minorías en las conducciones. Éstos eran objetivos que también compartían la izquierda y el peronismo combativo, y que, como era de prever, despertaron la ira del grueso de los dirigentes, no sólo de los vandoristas, alentándolos a olvidar sus diferencias frente a un enemigo común.

El hecho de que Illia se esmerara en preservar o restablecer equilibrios entre los varios Goliats con los que debía lidiar se ajustaba a su precaria legitimidad, pero no era suficiente para torcer su destino. Porque para afirmarse y afirmar la democracia no sólo debía combatir las “formas autoritarias y corporativas del pasado” sino también otras apuestas, más amenazantes por ser mucho más innovadoras: las que prometían terminar con los problemas nacionales a través del ejercicio



En julio del año siguiente logró imponerse en las internas que oficializaron la conducción del Partido Justicialista, finalmente aceptado por el Poder Judicial. Pero ni a Illia ni a otros actores partidarios les resultaba atractiva o siquiera tolerable esta versión laborista del peronismo: inseguros de sus bases electorales, no vieron con buenos ojos tener que repartir entre más candidatos los votos disponibles y sospecharon, con razón o sin ella, que dado que debían lidiar con poderes corporativos desafiantes, como el militar y el sindical, si permitían que uno de ellos hiciera pie en la arena electoral, ya no podrían mantenerlo a raya. Retrospectivamente, podría extraerse la conclusión opuesta: de la formación de un peronismo laborista, interesado en la convocatoria regular a elecciones, dependía la supervivencia del sistema vigente frente al intervencionismo militar. Desde esta perspectiva, puesto que Illia y su gobierno se empeñaron en cortarle las alas a ese peronismo, cabría concluir que así clausuraron la única posibilidad que tenía la democracia, en cualquier caso bastante acotada.

Illia, un hombre que hacía gala de una honestidad personal a toda prueba y de una fidelidad hacia los compromisos asumidos muy poco común en la política argentina –y que se esforzaba por mostrarse en cuanto a eso, y en todo lo demás, como un álgido alter ego de Frondizi, con la esperanza de no terminar igual que él–, descubriría demasiado tarde que esas virtudes también podían traerle problemas. Su terca determinación de defender las promesas realizadas durante la campaña electoral (pese a que no habían sido validadas en las urnas y a que el curso de los acontecimientos no demostraba su pertinencia) abonaría su imagen como exponente de la “vieja política”, mal dotada para enfrentar los cambiantes tiempos que corrían, ante una opinión pública y grupos organizados ya por otros motivos, dispuestos a desconfiar de él y a considerarlo incapaz, tibio y, sobre todo, lento.

### **Illia en funciones: una nueva versión de políticas conocidas**

En líneas generales, el gobierno de la UCRP continuó la política económica y social aplicada por las gestiones anteriores, aunque introduciendo algunas variantes: se puso el acento en el nacionalismo económico, y además en la industrialización, en la distribución del ingreso y la garantía de los derechos sociales, valores con los que se habían identificado ya tanto los peronistas como los desarrollistas. Los radicales del pueblo, ansiosos por mostrarse capaces de defenderlos de un modo más conse-

cuenta y eficaz, derogaron los contratos petroleros de Frondizi y enviaron al Congreso un proyecto de ley que establecía el salario mínimo, vital y móvil, para aumentar los ingresos de los trabajadores menos calificados y de regiones atrasadas, en general no cubiertos por las paritarias. Se dispuso además el control de precios de los alimentos de consumo masivo y de los medicamentos, junto con otras medidas destinadas a mejorar la atención sanitaria pública y gratuita. En conjunto, la política económica buscó fortalecer el modelo de pleno empleo, intervencionismo social, mercados protegidos e industrialización por sustitución de importaciones, modelo que ni siquiera la Libertadora había abandonado.

El resultado fue, en principio, positivo: la economía se reactivó aprovechando las inversiones acumuladas durante el gobierno de Frondizi y dejó atrás la recesión desatada en 1962 (fruto, una vez más, de la falta de divisas para solventar las importaciones). Pero eso no bastó para resolver dificultades estructurales que subyacían al crónico desequilibrio del comercio exterior y la falta de financiamiento para las inversiones. Las medidas nacionalistas incluso retrajeron las inversiones externas en el sector petrolero, por lo que agravaron esos problemas. Para peor, las políticas distributivas que pretendían seducir a los trabajadores chocaron con la animosidad del sindicalismo, que las consideró insuficientes. Movida principalmente por el rechazo al proyecto de reforma de sus organizaciones, a la fiscalización de sus elecciones y al manejo de los fondos sindicales por parte del Ministerio de Trabajo, la CGT lanzó un plan de lucha entre mayo y junio de 1964. El Ejecutivo no quiso reprimir y se limitó a solicitar a la Justicia que frenara las tomas de fábricas, medida que no resultó eficaz.



### **Plan de lucha de los gremios**

Como señala Daniel James, durante el plan de lucha fueron ocupadas cientos de plantas industriales y se bloqueó la producción de muchas otras, lo que expuso la debilidad de Illia. Era tan evidente que el plan tenía al gobierno por destinatario que muchos empresarios colaboraron con las ocupaciones para evitar actos de sabotaje y mantener la buena relación con los gremios.

Además de poner coto a los proyectos de reforma del modelo sindical, Vandor apuntó a los militares y al propio Perón: quería convencerlos de que debían aceptar su poder de veto cuando diseñaran sus estrategias para el futuro. 

Los sectores medios tampoco resultaron presa fácil para la seducción oficial. Muchos se dejaron tentar por las diatribas que los desarrollistas, la prensa empresarial y de derecha, y los cada vez más desafiantes voceros militares lanzaban contra el Ejecutivo. Aun cuando la economía creció a buen ritmo en 1964 y 1965 y los profesionales, pequeños empresarios y comerciantes se contaban entre los más beneficiados, muchos tendieron a creer que era posible y necesario hacer más: convencidos de que el país requería un orden público más riguroso y un control más férreo de la inflación y del activismo gremial, adhirieron al modelo que prometía “desarrollo y seguridad”, que Brasil estaba instrumentando gracias al régimen militar instaurado allí en 1964.

El movimiento estudiantil y los universitarios en general hallaron sus propios motivos para no simpatizar con Illia. Si bien éste dio continuidad a los incrementos presupuestarios, el cogobierno y la autonomía, y fortaleció los planes de investigación en ciencia y técnica, sus logros quedaron deslucidos debido a la creciente adhesión de los universitarios a las ideas revolucionarias, principal aunque no exclusivamente de izquierda. Y también debido a sus constantes demandas de mayores recursos, que el gobierno ya no pudo atender. Los desencuentros se agravaron a raíz de la invasión estadounidense a Santo Domingo cuando Illia estaba estrechando lazos militares con los Estados Unidos (había vuelto a comprarles equipamiento y a participar de sus programas de entrenamiento). La reivindicación gubernamental de la “autodeterminación de los pueblos” fue considerada tibia e inconsistente por las organizaciones de estudiantes y la izquierda. Por si esto fuera poco, su crítica a Washington bastó para que los militares, deseosos de participar de la cruzada anticomunista y de ganar puntos en la estima de sus pares norteamericanos, juzgaran que coqueteaba con un regionalismo izquierdista sumamente peligroso para la seguridad nacional. Un terreno en el que sí se pudo avanzar fue Malvinas: abandonando la actitud quietista de sus predecesores, en 1965 el gobierno de Illia logró que el litigio se aceptara como un caso de descolonización (aunque uno particular, pues el reclamo no lo hacía la “población nativa” del territorio en disputa) en las Naciones Unidas. Desde entonces, ése sería el argumento más sólido para forzar al Foreign Office a sentarse a negociar.

Es comprensible que, en este clima de críticas cruzadas y debilidad política, Illia no pudiera poner coto al poder de Onganía en el Ejército. El caudillo azul había incrementado su prestigio sobre el conjunto de los uniformados al restablecer la disciplina interna y dejar atrás los choques de 1962 y 1963, gracias a sus indiscutibles dotes de jefe y al im-

pulso dado a la lucha contra el comunismo como misión esencial de las Fuerzas Armadas. Misión que la oficialidad abrazó con fervor debido a sus diferencias en los demás terrenos y a los peligros que representaba a sus ojos un movimiento popular que coqueteaba cada vez más con la izquierda. Fue por eso que las tendencias que experimentaron en esos años todos los ejércitos de la región –intensificación de las actividades de inteligencia, asistencia a academias militares en Estados Unidos y adhesión a la doctrina de seguridad nacional, de acuerdo con la cual primaban los “enemigos internos” en sus hipótesis de conflicto– tuvieron especial intensidad en nuestro país.

La proliferación de los focos guerrilleros pareció justificar esta peculiaridad: los jóvenes universitarios que se involucraron en un nuevo intento de crear una guerrilla rural en Taco Ralo, al norte de Córdoba, le hicieron un flaco favor a Illia al ofrecer la evidencia empírica que la doctrina de la seguridad nacional estaba necesitando. Aunque el grupo fue rápidamente desarticulado por la policía, su ejemplo hizo escuela en círculos de la izquierda marxista y peronista: en 1964 surgieron de esta última el Movimiento Revolucionario Peronista (MRP) y las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP). Ambos se desmembraron a mediados de 1966, tras realizar unas pocas acciones. Pero otras agrupaciones similares aparecerían enseguida. En este clima, los intentos de Illia de favorecer a los colorados fueron percibidos en los cuarteles como atentados contra la salud de las instituciones armadas y alentaron el rechazo de la oficialidad a la democracia de partidos, vista como fuente de divisiones y conflictos. De allí que, cuando Onganía pasó a retiro a mediados de 1965, quedaran al frente de la fuerza oficiales que eran sólo leales a él.

Otro terreno donde el gobierno de Illia se reveló mal preparado para adaptarse a los tiempos que corrían fue el de las comunicaciones, que vivieron cambios acelerados en esta etapa. Los programas televisivos de actualidad se multiplicaron y cobraron gran influencia. Surgieron sofisticadas revistas de análisis sobre la situación del país y el mundo, como *Primera Plana*, *Panorama* y *Confirmado* desde la derecha, *Che* y *Usted* desde la izquierda, que replicaban localmente los modelos que estaban revolucionando el género en los países centrales. Considerando que prestarse a la exposición periodística era indigno de su investidura, Illia adoptó ante esta prensa y sus críticas una actitud retraída, que lo mostró débil y carente de argumentos. El presidente radical se justificó señalando que “los hechos hablan por sí solos”. Recordemos que Perón había dicho algo por el estilo –“mejor que decir es hacer”–, pero se había cuidado de no ser fiel a ese lema.

El campo en el que finalmente se reveló la limitación más seria de la estrategia oficial fue la relación con el peronismo en sus dos versiones, electoral y sindical, ahora estrechamente conectadas entre sí. Atento al problema de legitimidad que enfrentaba, Illia anunció que se eliminarían progresivamente las proscripciones. Suponía que si administraba esa progresividad con prudencia, podría mantener divididos a sus adversarios y formar una mayoría que lo apoyara. La perspectiva de una mayoría antiperonista estaba facilitada por el declive de la UCRI, que muchos consideraban irreversible. Y podría asegurarse haciendo alianzas con otras fuerzas y líderes por el momento dispersos.

Como Frondizi años antes, para ello Illia debía presentarse a la vez ante la izquierda y la derecha como la única opción capaz de evitar que los peronistas volvieran al poder. Pero sucedió que esa pretensión era ahora aún menos convincente que entonces para los votantes y dirigentes de ambos sectores del espectro político. Ejemplo de ello brindó Oscar Alende, gobernador bonaerense por la UCRI cada vez más alejado de Frondizi, quien buscó atraer los votos peronistas mostrándose atento a los reclamos sindicales, indignado por la tibieza de Illia ante los “poderes imperiales” y deseoso de reemplazarlo para que se pudiera “destrabar el desarrollo nacional”. Entre los conservadores, dirigentes ya probados en su antiperonismo como Aramburu y Alsogaray usaron esas credenciales para refutar los intentos oficiales de presentarse como única opción contra el “caos peronista”. Y, por otro lado, tampoco la UCRP buscó seriamente un acuerdo: sus líderes continuaron fieles a la regla de oro de considerar que toda alianza era contradictoria con la definición del radicalismo como único y auténtico representante de la voluntad del pueblo. Y se esmeraron en hacerla realidad.

La única opción que le quedaba al gobierno de Illia era mantener dividido el caudal justicialista y rogar que le alcanzara el tiempo para probarle a un número suficiente de votantes de las demás extracciones que su opción moderada era la más adecuada para salir adelante. De allí que, al acercarse las elecciones parlamentarias de 1965, insistiera en ofrecer la zanahoria de la competencia electoral a los neoperonistas mientras agitaba el garrote de la limitación del poder sindical y la exclusión innegociable de Perón. La cuestión gremial se afrontó con un decidido ataque al “modelo heredado”. Ante esto, la CGT anunció para 1965 una nueva edición de sus planes de lucha, que provocaría un gran perjuicio al gobierno al partir aguas entre los amplios sectores medios movilizados y radicalizados (universitarios, juventud y organizaciones católicas de base, e incluso pequeños

empresarios), y todos aquellos que privilegiaban la conservación del orden, que eran mayoría en las jerarquías de la iglesia, las Fuerzas Armadas y la gran empresa, pero también poblaban las clases medias. Illia apareció aislado y asediado, incapaz de representar los intereses de ninguno de los dos bandos.

También los peronistas se dividieron, en su afán por controlar y orientar el movimiento de protesta, debido a la puja sorda entre Perón y Vandor. Y un duelo ya abierto se disparó a raíz del “Operativo Retorno”: Perón intentó volver al país en diciembre de 1964, para recuperar contacto con sus bases y acorralar a los militares y a Illia; pero el resultado fue ambiguo, porque Vandor y Las 62 incumplieron su promesa de movilizarse para forzar su ingreso al país y el líder quedó en *off side* cuando su avión fue detenido en Brasil. El gobierno de Illia se vio obligado a mostrar el peor rostro de la proscripción faltando a su compromiso de levantarla; pero Perón no pudo evitar que quedara en evidencia que el sistema político necesitaba su ausencia para mantenerse en pie y que tenía los medios para asegurarla. Desde entonces ya no dudaría en alentar la revuelta, tanto contra el gobierno como contra “los traidores”. Sus arengas lograrían dividir a la CGT y, en enero de 1966, incluso a Las 62: Framini y otras figuras como Olmos y Alonso se alejaron del vandorismo y crearon las “62 organizaciones de pie junto a Perón”. La fractura se replicó en marzo en la bancada de Diputados y posteriormente en las listas que competirían por el voto peronista en las provincias. Con todo, como veremos, el gobierno estaba lejos de poder aprovechar estas divisiones.

### **La lucha de ideas y el nuevo rol de la juventud**

Durante la segunda mitad de los años sesenta, en un vivo reflejo de lo que ocurría en el mundo desarrollado, la Argentina vivió una verdadera revolución de las costumbres, las creencias y las expectativas. El bienestar económico acumulado desde la segunda posguerra; la crisis de las tradiciones y las ideas conservadoras que habían predominado en la familia, en la educación y en general en la vida social durante los años cincuenta; y la revolución tecnológica en las comunicaciones y el transporte —que, con la difusión de los vuelos a reacción, las computadoras y la exploración espacial parecían indicar la aceleración sin límite del progreso— dieron un color peculiar a esos años. Una de las características de esta época fue que la juventud pasó a ser un actor

decisivo y autónomo, público predilecto de los nuevos bienes y servicios y también de los discursos, y pronto, por extensión, de la política: el mundo que parecía estar tomando forma era uno en el que los jóvenes, por su distancia respecto de las tradiciones y su disposición a impulsar y adaptarse a los cambios, serían protagonistas estelares.

El impacto local de todo ello fue particularmente intenso por varios motivos. El más decisivo fue, tal vez, la acumulación de frustraciones con los sucesivos proyectos reformistas, frustraciones que habían fomentado una visión negativa de las generaciones ya maduras que las habían protagonizado. Este punto de vista sería propagado con especial entusiasmo por intelectuales coetáneos de quienes aparecían como merecedores de la furia de los más jóvenes, y que de este modo canalizaban su propia frustración por el resultado de proyectos que en su momento los habían seducido. Su avanzada edad, como en el caso del ya consagrado Arturo Jauretche pero también en el de otros como Juan I. Hernández Arregui—que recién en estos años alcanzó popularidad—, no les impidió convertirse en ideólogos de una visión “juvenil” de la historia y de la política nacionales; visión que se hacía eco de los vientos llegados desde el exterior para proponer una “etapa revolucionaria” que finalmente permitiría cumplir el destino que hasta entonces se había mostrado esquivo. Para ello se inspiraron en las ideas regenerativas y refundacionales que habían animado en sus orígenes tanto al radicalismo como al peronismo, cuyas promesas recogieron y radicalizaron.

Además, y contradictoriamente, el quiebre entre generaciones se magnificó debido a que, pese a esa visión tan negativa sobre los “viejos políticos” (visión de la que sólo se salvaba Perón —aunque no del todo—, y no sólo por su posición privilegiada en el corazón del pueblo sino también por su situación de exiliado y perseguido político), el país se había modernizado a gran velocidad en los diez años transcurridos desde 1955. Y esta modernización había impactado especialmente sobre los sectores medios educados por varias razones: el fácil acceso a la universidad y a las corrientes de pensamiento renovadoras por entonces en boga en el mundo occidental (el psicoanálisis, el existencialismo, el marxismo); la liberación de la mujer y su rápida integración a la vida cultural y económica; y la difusión del rock, el *hippismo* y otras formas de “espiritualización” de la vida y rechazo a la “integración al sistema”, ya fuera en la forma de vestir, las críticas al trabajo y la familia, o el desinterés por los bienes materiales.

## Las familias en tensión



*La Familia Falcón*, 1963. Comedia de gran éxito creada por Hugo Moser y emitida por Canal 13. Archivo *Clarín*.

Hasta mediados de los sesenta la institución familiar se había mantenido a resguardo de los cambios sociales y la modernización, reproduciendo en su seno las pautas patriarcales tradicionales. Así lo revelan modelos mediáticos como los de *La familia Falcón* (1962) y *Los Pérez García* (1940-1966), que reflejaban el “mito de la intimidad protegida”: la vida familiar como refugio seguro y fuente de sosiego frente a un espacio público crispado, en transformación constante, violento y competitivo. Un padre proveedor y guía moral de la familia, una madre que cuidaba a los suyos desde su rol de esposa fiel y reina del hogar, y unos hijos subordinados a la experiencia de sus mayores eran los prototipos de la “familia decente”. Al avanzar la década, ese modelo tuvo que enfrentar crecientes desafíos: una vez que aceptaban cuestionar las pautas de autoridad heredadas, los padres no sabían muy bien cómo encarar la educación de sus hijos; de allí la rápida difusión del psicoanálisis en las revistas dedicadas a la familia (cabe destacar el éxito de *Escuela para Padres*, que Eva Giberti publicaba desde 1956, así como la modernización de publicaciones como *Claudia*, seguida poco después, aunque con una línea más conservadora, por el semanario *Gente*). La incomunicación y los celos entre generaciones serían recogidos en notables producciones literarias y

cinematográficas; una de las más destacadas fue *Diario de la guerra del cerdo*, una novela de Adolfo Bioy Casares, de 1969, que se convirtió en largometraje en 1975, dirigido por Leopoldo Torre Nilsson. ■

Si bien los cambios reseñados expresaban fenómenos distintos, para muchos parecían tener una misma raíz y converger en la misma meta: un cambio epocal que afectaría los cimientos de la convivencia social, abarcando desde la experiencia de la sexualidad y los lazos de solidaridad, familia, educación y trabajo, hasta el sistema político. El cuestionamiento plebeyo de las jerarquías, al que ya nos referimos en el capítulo 1, se estaba extendiendo de las relaciones entre clases a toda relación de poder, desde el plano de lo “micro” hasta el plano global (lo que Guillermo O’Donnell, en *El Estado burocrático autoritario*, describió como el origen de una “crisis de dominación social”). Todo ello despertó la expectativa de, y el temor a, una revolución integral inminente.

Las señales de cambio en el terreno político también eran muy diversas y, vistas retrospectivamente, claramente contradictorias en muchos aspectos. Pero en el clima entonces reinante podían parecer fácilmente traducibles a unos pocos y convergentes signos de “época” —la revolución cubana, el movimiento de descolonización del Tercer Mundo, el surgimiento de experimentos guerrilleros en todos los continentes y la diversidad de las experiencias socialistas en el este europeo y en Asia— que indicaban con claridad la descomposición del sistema político y económico y el nacimiento de un mundo nuevo. Uno en el que los ideales de justicia finalmente se harían realidad.

Cabe señalar además que, si estas expectativas hallaron un suelo especialmente fértil en la Argentina, fue gracias a la convergencia entre un rasgo social y otro propiamente político de la situación que se vivía. El “giro a la izquierda” de las clases medias tras la desilusión con Frondizi, marcado en las elites ilustradas, que se sintieron ignoradas por la política de partidos (naturalmente, ellas no veían atractivo alguno en un personaje provinciano y desde todo punto de vista antiguo como Illia), convergió con el giro en esa misma dirección de parte del peronismo político y sobre todo del sindical. La diferencia entre esta coincidencia y otra casi opuesta en el vecino Brasil es notable y explica la divisoria de aguas sociopolítica que se produjo durante estos años entre ambos países. No sólo el desarrollismo del gobierno de Juscelino Kubitschek había sido mucho más satisfactorio para las clases medias brasileñas que el programa de Frondizi para sus pares argentinas; también lo era el impulsado por los militares brasileños desde 1964: éstos habían escogido

como aliados a los profesionales y universitarios, sectores que respondieron integrándose con entusiasmo a los esfuerzos modernizadores y desoyendo los cantos de sirena de la revolución social. En Argentina, donde la posición social y política de esos sectores había sido tradicionalmente más sólida y gravitante, la situación parecía mucho menos favorable para ellos, y eso provocó una ola de resentimiento y radicalización. Además, hallaron al alcance de la mano canales para expresar esos sentimientos: sus demandas sectoriales y su visión de los problemas coincidieron por primera vez en décadas, y de modo muy espontáneo (lo que muchos considerarían como una prueba de su “necesidad histórica”), con las de un activo y cohesionado mundo obrero.

¿En qué consistió concretamente el ideario revolucionario que ganaba los ánimos de la sociedad, y en particular de las nuevas generaciones? Aludimos ya a la centralidad que la noción de justicia tuvo en él. Pero su peculiaridad fue, más que esto, la función política atribuida a las convicciones: los “ideales” cobraron una gran relevancia, no tanto porque hubiera un consenso sobre los valores y las metas a perseguir como por la coincidencia en que las ideas eran el motor primordial de la acción. Más que un acuerdo sobre una visión del mundo, había rechazo a las “ideas tradicionales” (entre las que a veces se incluía a algunas que no eran nada viejas, como las desarrollistas) y fe en la capacidad de otras, “nuevas”, para cambiar el país. Antes incluso de que se optara por las vías violentas (un efecto, antes que una causa, de este proceso), la ética y la estética de la revolución ya habían hecho el trabajo necesario para que el “pasaje de la idea al acto” permitiera identificar al nuevo protagonista de la política, llamado a ser el artífice del futuro: el “militante”. Bajo su romántica advocación, las ideas se politizaron y la política se ideologizó: pasó a considerarse una actividad creativa e imaginativa que desafiaba los límites de lo posible.

“Militante” era aquel que llevaba a la práctica sus convicciones y estaba dispuesto a sacrificarlo todo para alcanzar fines nobles y supremos. Su contracara era el político burgués, que con su falseada instrumentación de la “democracia formal” en los años anteriores había dado sobradas muestras de su incapacidad para ser fiel siquiera a sus propias reglas, de tender a la transacción, al acomodamiento oportunista entre creencias contradictorias, y a someterse a las “condiciones reinantes”. La “ética de la autenticidad” pudo así abarcar distintas posiciones en tensión —de izquierda, cristianas, populistas o nacionalistas— que no obstante se confundirían en el caldero de la militancia que ofrecían las universidades y las organizaciones juveniles de todo tipo. No fue

casual que, dentro de la izquierda, se impusieran en este clima los grupos inclinados a otorgar a “la acción” un papel decisivo en los procesos de cambio sobre “los determinantes estructurales”: de allí el auge de los guevaristas, los maoístas y los trotskistas, a costa de comunistas y socialistas. Tampoco fue casual la convergencia de esa militancia en una actitud reactiva frente a las instituciones de la democracia liberal, en una escala que iba del desprecio al franco rechazo.

Esta actitud desentonaba fuertemente con lo que había sucedido una década atrás, cuando una renacida fe republicana y liberal propició el final del régimen peronista. Visto desde la perspectiva que brindaba una década de proscripción, ese efímero reverdecer sólo podía explicarse como una anomalía extemporánea o, peor aún, como un crédito injustificadamente otorgado a una “superestructura formal”, la de la Constitución, cuya función había sido instrumentar la dominación social y política. De allí las analogías ahora en boga entre el falseamiento de la voluntad popular en la “década infame” y las no menos irritantes restricciones impuestas desde septiembre de 1955. El divorcio entre forma democrática y expropiación de los derechos de las mayorías en ambos períodos fomentó por tanto un *revival* de los “temas” dominantes en el debate ideológico de los años treinta –nacionalismo y antiimperialismo–, y a su vez se alimentó de él.

En rigor de verdad, las ideas nacionalistas venían ejerciendo una fuerte influencia en la vida pública ya desde comienzos del siglo XX. Pero fueron la crisis del modelo agroexportador y el fraude electoral los que permitieron que, desde 1930, se debilitara la confianza en los dos pilares del liberalismo –el libre comercio internacional y la democracia pluralista– y que el nacionalismo adquiriera prestigio primero entre las fuerzas de derecha y poco después entre las de izquierda, que abrazaron su denuncia del imperialismo, su reivindicación de los caudillos federales y sus expresiones de resistencia a la “internacionalización” y “liberalización” del país, dos fenómenos a los que ahora se achacaban todos los problemas. Ni el peronismo ni el desarrollismo carecieron de inspiraciones de este tenor, pero ambos terminaron por enfrentarse con los intelectuales nacionalistas. Y si algo caracterizó sus políticas fue la apuesta por reinsertar al país en el mundo asociándolo a las tendencias externas que, según creían, le permitirían retomar la senda del progreso. Los nacionalismos de los años sesenta, fueran de izquierda o de derecha e independientemente de su mayoritaria inscripción en el campo peronista, desconfiaban en cambio de estas ideas de progreso y se parecían más a sus antecesores de los años treinta. Reactivos a la noción de moderniza-

ción, los animaba un ansia de restauración, sustentada, tal como explica Halperin Donghi, en una mirada revisionista de la historia nacional: la obsesión era recuperar la comunidad de destino entre pueblo y ejército; entre empresariado, clases medias y movimiento obrero; entre la gran metrópoli y las provincias, comunidad anterior a las divisiones que el liberalismo y la integración al mundo habrían introducido en su seno.



### La reedición del revisionismo histórico

Los nuevos nacionalistas de los sesenta, mayoritariamente de izquierda, como Hernández Arregui, Rodolfo Puiggrós y Jorge Abelardo Ramos, heredaron de los derechistas que en los años treinta fundaran el revisionismo (Ernesto Palacio, Julio Irazusta) su actitud antiintelectual y antiuniversitaria: la intelectualidad argentina, por ser liberal, habría estado divorciada de "lo nacional" y habría promovido la escisión entre el pueblo y las elites desde las instituciones educativas. De esta "traición de la *intelligentsia*", que rastreaban ya en los orígenes de la nación (la habrían iniciado los rivadavianos y la generación del 37), surgió el imperativo de impugnar toda la producción académica (algo que despertó el entusiasmo del estudiantado, deseoso de rebelarse contra sus docentes) y oponerle una interpretación "alternativa" de los problemas y la historia nacionales inoculada contra los vicios del liberalismo, a saber, el elitismo y el universalismo (a los que se atribuían las objeciones hechas a líderes populares como Perón, Yrigoyen y Rosas). Fue en estos términos que se produjo el "encuentro" entre viejos y nuevos nacionalismos. Jauretche celebró la reinterpretación que Ernesto Sabato, desde la izquierda, realizara del peronismo, en una carta que tendría amplia difusión: "El ochenta por ciento de los argentinos, y Ud. entre ellos, coincidimos en lo fundamental: la liberación nacional, la justicia social y la soberanía del pueblo [...] pero entretanto, una mano extranjera organiza el cipayaje y los vendepatrias". Y, en *Los profetas del odio* (1957), sostuvo: "Hay dos Argentinas paralelas: una, la de la realidad, que se elabora al margen de los estratos formales, y otra, la de las formas, que intenta condicionarla y contenerla en su natural expansión: la *intelligentzia* pertenece a ésta". Abelardo Ramos, en *Revolución y contrarrevolución* (1957), denunciaba que "la completa subordinación argentina al imperialismo, sobre todo a partir del 1900, engendró una ideología [...] una intelectualidad traductora; la aparición de 'medievalistas' como José Luis Romero en un país que vivió entre lanzas emplumadas hasta el siglo XX; la proliferación de la literatura

fantástica del género de Borges, otro prófugo de nuestra realidad [...] la ignorancia o el menosprecio de todo lo criollo [...] la glorificación de la Democracia sin contenido y el desconocimiento del problema imperialista”. En su libro más influyente, *La formación de la conciencia nacional* (1960), Hernández Arregui afirma: “Ésta es la crítica –inspirada en un profundo amor al país y fe en el destino racional de la humanidad– contra la izquierda argentina sin conciencia nacional y el nacionalismo de derecha, con conciencia nacional y sin amor al pueblo [...] este libro está destinado a la juventud argentina que hoy, desorientada, busca un lugar en la lucha por la liberación [...] Los jóvenes ejecutan las revoluciones que los viejos han preparado”. ■

Esta avanzada del nacionalismo de izquierda se alimentó del giro del peronismo en esa dirección y también del clima generado por los “movimientos de liberación” por entonces en auge en todo el Tercer Mundo. Entre ellos, el nasserismo, confluencia de militares y sectores populares egipcios contra la dominación imperial británica, fue uno de los modelos más atractivos dadas sus ostensibles similitudes con el régimen de Perón, aunque, por eso mismo, también se lo podía considerar favorable a un “militarismo populista” nada fácil de compaginar con las expectativas revolucionarias locales. Estas y otras controversias convirtieron al campo nacionalista en terreno de disputa entre proyectos muy distintos y, debido a ello, hubo muchos nacionalismos pero no un movimiento nacionalista. Cuanta más atención concitaba el “ser nacional”, más difícil se hacía saber en qué consistía y más intenso era el debate al respecto. No obstante, mientras tuvieron contra qué o contra quiénes unificarse, estas diversas corrientes nacionalistas sabrían mostrarse solidarias entre sí.

La disputa dentro de ese campo nacionalista alcanzó a todos los actores e instituciones, incluidas las Fuerzas Armadas. En ellas estaba ganando espacio un anticomunismo virulento y convencido de que el choque entre los dos bloques mundiales tendría como epicentro a países como la Argentina. La escalada insurgente y represiva en Indochina y el norte de África desde mediados de la década pareció confirmar esta hipótesis. Y la preparación en contrainsurgencia en la Escuela de las Américas, administrada por militares de Estados Unidos en Panamá, pareció más oportuna que nunca. En el caso argentino, el entrenamiento militar fue acompañado del esfuerzo por “recristianizar” a las Fuerzas, librándolas de todo “resabio de laicismo liberal”. En este aspecto los nacionalistas coincidían, sin querer, con los revolucionarios de todo pelaje: según unos y otros, al promover el individualismo y la neutralidad valorativa

con la excusa de asegurar el “estado de derecho”, los liberales vaciaban de contenido el orden común y tornaban impotentes a las naciones y los pueblos. De allí que, para cada vez más uniformados, sólo un Occidente cristiano que defendiera valores indiscutibles contra el “nihilismo socialista” podría imponerse en la lucha que se avecinaba. Sin embargo, en franjas minoritarias aunque no irrelevantes de la oficialidad joven fue hallando también adeptos la versión popular del nacionalismo –la nasserista–, que invitaba a revalorizar la experiencia peronista y propugnaba la ruptura con el imperialismo y los “intereses oligárquicos” que hasta entonces habían dominado tanto la vida política como la militar.



### **La doctrina de la Seguridad Nacional**

Fue expuesta con claridad por el general Juan C. Onganía en un discurso pronunciado en West Point en agosto de 1964, durante la Conferencia de los Ejércitos Americanos. En sus términos, se trataba de hacer pedagogía. Así, sostuvo que “estamos alineados en la causa común de América: defender nuestro sistema de vida occidental y cristiano contra los embates del totalitarismo rojo” (*La Razón*, 22 de septiembre de 1965). Otro oficial que sentó doctrina al respecto fue Osiris Guillermo Villegas, quien en *Políticas y estrategias para el desarrollo y la Seguridad Nacional* (1969) afirmó que “el mundo actual exige una especial coordinación entre el Desarrollo y la Seguridad” y explicó que cualquier interés contrapuesto al “nacional”, por definición único y permanente, debía considerarse “antinacional”. 

Una lucha ideológica similar, por el control de otra institución tenida hasta entonces por sólido y disciplinado baluarte del orden, se venía dando ya, y de modo mucho más abierto, en la iglesia católica. También en este caso intervinieron factores externos y peculiaridades locales. Desde 1962, año del Concilio Vaticano II en Roma (seguido poco después por uno equivalente de la iglesia latinoamericana en Medellín), habían comenzado a soplar vientos de cambio en la curia: se cuestionaba la tradición conservadora y se invitaba a incorporar o enfatizar el compromiso social. Esto resultaba muy atractivo para una iglesia como la argentina, que en los años previos se había involucrado en los asuntos políticos del país y había incrementado su influencia a medida que el estado entraba en crisis. La iglesia gravitaba crecientemente en la educación y también en la asistencia social a través de organizaciones

voluntarias que se volvieron masivas en aquellos años (la Acción Católica, las juventudes católicas, etc.). Su jerarquía y su activismo habían ganado protagonismo por haber sido decisivas en la caída de Perón. Aunque no tuvo el éxito esperado en promover un partido propio, la Democracia Cristiana, sí triunfó en su intento de “recristianizar” a la dirigencia de los otros partidos, por ejemplo la de ambos radicalismos. En medio de la crisis de legitimidad que azotaba al sistema político, los partidos y los gobiernos tomaron la costumbre de apelar a la iglesia para ganar consenso. Su influencia en las Fuerzas Armadas creció aún más rápidamente, y no sólo por ser un arma contra el liberalismo: dada la confusión respecto de los intereses nacionales que debían proteger, los militares se refugiaron en la creencia, ilusoria pero por el momento eficaz, de que, si en su origen la nación se había basado en la fe cristiana, para recuperar el rumbo debía volver a ella.

Aunque la curia simpatizaba con esta idea, en su seno y en la feligresía —en mayor medida que entre los militares— faltaba un consenso sobre el significado y la orientación de esa recristianización. Y por lo tanto, a medida que su influencia crecía, la iglesia fue perdiendo unidad. Si bien después de 1955 aún parecía actuar como poder moderador, paso a paso se fue intensificando una lucha interna que dificultó el cumplimiento de ese rol: la iglesia se tornó un campo de batalla entre los ortodoxos, que se sentían cada vez más amenazados por cualquier intento de reforma y por lo tanto se hacían más y más conservadores, y los reformistas, que ante los obstáculos que aquéllos imponían a los cambios promovidos por el Concilio Vaticano II y Medellín o a los que ellos querían validar a su sombra, fueron politizándose y radicalizándose; es decir, subsumiendo los conflictos internos en el marco más amplio de los que azotaban al país. En este contexto, los jóvenes católicos confluyeron con su pares de izquierda marxista y peronista, y sintonizaron cristianismo con revolución.



### **Cristianismo y Revolución**

Los sectores más radicalizados del clero se agruparon en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM), que adquirió visibilidad cuando se solidarizó con los planes de lucha de la CGT en 1964 y 1965. A partir de 1966 un sector del MSTM lanzó la revista *Cristianismo y Revolución*, que de inmediato se convirtió en el órgano de difusión de un amplio espectro de la militancia cristiana y peronista. Uno de sus principales

orientadores fue el padre Carlos Mugica, y en su redacción participaron varios de los futuros fundadores de la organización Montoneros. El MSTM combinó la doctrina que sostenía que la redención social era el remedio para los males del hombre moderno con las teorías marxistas que daban una explicación histórica y científica de la inevitable decadencia y desaparición de la sociedad de clases. Ambas corrientes coincidían en proponer la acción política y el sacrificio personal como vías para acelerar esos cambios. Y compartían por sobre todo el desprecio hacia las formas liberales y las instituciones “burguesas”: ni la política de partidos ni las elecciones servían para hacer realidad los auténticos intereses del pueblo. Las dos coincidieron además con el populismo nacionalista en la afirmación de que el pueblo argentino tenía potencialidades dormidas y que la misión de los militantes y creyentes era despertarlas para construir un nuevo orden (llámese comunidad cristiana, reino de la justicia social o socialismo). Además, sus militantes convergieron en el mismo espacio urbano –los nuevos asentamientos ignorados por las estructuras gremiales y partidarias– y político –el “peronismo de base”, donde anidaba la voluntad popular más genuina–. El acercamiento al peronismo se vio facilitado, a su vez, por la reconciliación entre el Vaticano y Perón, consagrada en 1963 cuando a éste se le levantó la excomunión impuesta en 1955 (lo que, cabe aclarar, obedeció a una búsqueda de colaboración con fines muy distintos a los revolucionarios). ■

Los conservadores no se quedaron atrás en el proceso de politización: las jerarquías y sus aliados militares y civiles asumieron que esta amenaza “interna” a la comunidad cristiana era letal para el orden social, pues corroía a la institución que era su fundamental defensora. Como ha explicado Loris Zanatta, esta lucha se produjo dentro del “mito de la nación católica” y en alguna medida le dio aún más crédito, dado que ambos bandos coincidían en que la solución para el país era una “auténtica sociedad cristiana” y sólo diferían en cuanto a si esa sociedad debía ser el reino de la justicia social en la tierra o el del restablecimiento de las jerarquías amenazadas por un igualitarismo desbordado.

La militancia juvenil católica, como vemos, desempeñó un papel fundamental en el fenómeno más relevante de esta etapa en el campo de las ideas: la confluencia entre la izquierda revolucionaria y el peronismo. Ella facilitó, entre otras cosas, que estos dos actores se brindaran mutuos y valiosos servicios de legitimación. Como ha explicado Vicente Palermo, “la reinención del peronismo les debe mucho a intelectuales en su mayoría provenientes de una izquierda a la deriva en busca de

sus objetos de deseo: la clase trabajadora y la nación antiimperialista”. Las “izquierdas nacionalizadas” empezaron a ver en el peronismo, en vez de la versión “aberrante” de la activación de las masas que habían postulado la sociología de Germani y la izquierda de los años cincuenta, una variante exitosa de coalición entre los distintos componentes del pueblo, en la clave de las teorías de la dependencia y de los frentes nacional-populares en boga. E hicieron algo más: dieron una justificación “científica” al ejercicio intenso y regular de la violencia, consagrada como “partera de la historia” –algo que le había faltado a la Resistencia–, y racionalizaron el desprecio hacia otros recursos políticos. La Resistencia fue reinterpretada, bajo la lente del marxismo leninista, el maoísmo y el guevarismo, como prehistoria de una guerra revolucionaria que debía ingresar en su etapa decisiva: sobre el suelo fértil de los sabotajes, las huelgas prolongadas y políticas y los “caños” simbólicos, los revolucionarios se lanzaron a difundir una “ética de la violencia” que permitiría profundizar las luchas y contradicciones que animaban al peronismo, pero que éste era incapaz de llevar a su conclusión. El militante revolucionario y el guerrillero serían los protagonistas heroicos de esa ética, y en última instancia, los llamados a ejercer la conducción. Siempre y cuando Perón lo permitiera.



### **Peronismo y revolución**

Cooke, de vuelta en el país desde 1964, escribió en *Peronismo y revolución* (1966): “El peronismo es, por su composición social y sus luchas, revolucionario por esencia [...] Lo que llamamos ‘burocracia peronista’ es, en síntesis, una capa dirigente que opera con los mismos valores del enemigo y es incapaz, por lo tanto, de conducir a las bases a la toma del poder, sin lo cual no hay salida ni para las clases trabajadoras ni para el país, pues ya hemos entrado en una etapa en que [...] revolución social y liberación nacional no son objetivos diferenciados sino dos aspectos de un mismo proceso indivisible”. Aunque Cooke no era ya un colaborador cercano de Perón y falleció ese mismo año, su prédica tuvo más eco que antes. En *La formación de la conciencia nacional*, Hernández Arregui apostaría, en esos años y en esta misma clave, por “un reencuentro entre el ejército y el proletariado”. Sin embargo, tras el golpe de 1966 se vería obligado a corregir su planteo y, ya en 1970, sostendría que, al haber optado el ejército por el colonialismo, la revolución dependería del “crecimiento de formas clandestinas de lucha”. ■

La revisión de las posiciones “antipopulares” de la izquierda de los años cuarenta y cincuenta y de su negativa a acompañar al peronismo por “prejuicios liberales y clasistas” se correspondió con el llamado a integrarse al “campo del pueblo”. Esto resultó sumamente seductor para una generación de estudiantes y profesionales que atribuía en alguna medida el fracaso de las apuestas políticas de sus padres y sus maestros a lo sofisticado de sus argumentos y análisis, y sólo deseaba quedarse con aquellos que “servían para actuar”. Reconciliándose con las masas esperaban, además, obtener la autoridad moral necesaria para seguir criticando a Perón por no haber hecho la revolución prometida, por sus “errores de conducción” y por haber usurpado las luchas populares para su endiosamiento personal. Con lo que reeditaban, tal vez sin advertirlo, muchas de las críticas que la izquierda e incluso el radicalismo habían hecho al peronismo en las décadas anteriores.

### **La derrota de Vandor y el golpe**

La única posibilidad de que el peronismo se integrara al sistema político existente y refrenara su giro a la izquierda dependía de que Vandor tuviera éxito en su plan de conformar una fuerza política autónoma respecto de Perón y capaz de ganar elecciones locales y provinciales con candidatos tolerables para los militares. Pero, para crear esta versión laborista y anticomunista del peronismo, Vandor debía mantener alineados a los sindicatos. Y para eso necesitaba confrontar con el gobierno. A su vez, éste necesitaba poner coto a las presiones sindicales y debilitar a Vandor para fortalecer su control de la situación. De allí que fuera tan difícil un pacto de no agresión entre ambos. Quien más perdía en este juego era Illia, pero él no lo entendió así. Con el fracaso del Operativo Retorno, el declive de Perón volvió a parecer inevitable, y Vandor a aparecer como el destinado a beneficiarse. Probablemente los radicales pensaron de este modo y subestimaron la capacidad de Perón de contraatacar, e incluso de insistir con su vuelta al país (tenía 69 años, y los rumores sobre su delicado estado de salud eran cada día más creíbles). Por eso vieron en el jefe sindical el enemigo prioritario a combatir.

A partir de marzo de 1965 se realizarían elecciones de diputados y gobernadores en todo el país. La Justicia habilitó a los neoperonistas para participar en los comicios, pero no al Partido Justicialista ni a los candidatos que declararan lealtad a Perón. El principal beneficiario de esta fórmula sería, una vez más, la Unión Popular de Vandor, que obtuvo

buenos resultados en Córdoba, en Buenos Aires y en las provincias del norte (reunió en total el 31% de los votos contra el 30% del gobierno, y su bancada ascendió a 52 miembros). Atemorizado ante este avance vandorista, Illia decidió manipular el filtro de las “proscripciones residuales” y permitió que en abril participara en Mendoza una lista del PJ leal a Perón. E incluso que su esposa, María Estela Martínez, viajara al país para apoyar esa lista y denostara a la UP a través de los medios oficiales. Dos días antes de la votación, Illia autorizó incluso la difusión de una grabación del propio Perón en este tono. El resultado fue que el candidato de Vandor salió tercero, detrás del PJ, y su proyecto político se derrumbó.



Destitución de Arturo Illia tras el golpe de estado encabezado por el general Juan Carlos Onganía, jefe de las Fuerzas Armadas. Momento en el que Illia abandona la Casa de Gobierno. Archivo General de la Nación.

Pero el efecto no previsto por los radicales fue que ese resultado convenció a los militares de que la única salida era una revolución que aplicara el programa del desarrollismo, en la versión autoritaria que había ido madurando. Para colmo, el gobierno siguió fortaleciendo inadvertidamente ese consenso militar, no sólo con sus así llamados “pasos de tortuga”, sino con su insistencia por orientar esos pasos contra el

gremialismo. Creyendo que el traspie de Vandor le proporcionaba las esperadas condiciones para hacerlo, dictó decretos que promovían la democracia y el pluralismo sindical. Ante esto Vandor, y con mayor contundencia José Alonso de las “62 de pie”, respondieron apostando por el golpe militar: dado que no podían esperar ya mucho de la arena electoral, consideraron que era mejor clausurarla y renovar el acuerdo entre los “factores de poder”. Los sindicalistas coincidieron así con el diagnóstico de los militares: los partidos eran innecesarios e incluso inconvenientes y había quedado demostrada la superioridad de la representación directa de los intereses sectoriales, que sería fácil subordinar a un “gobierno técnico” si éste contaba con un jefe capaz de concentrar el poder, que residía en las Fuerzas Armadas, el único actor institucional que podía “defender los intereses nacionales permanentes”.

Durante el otoño de 1966 ya era un secreto a voces que se planeaba un golpe. La prensa discutía abiertamente quiénes serían los nuevos funcionarios de gobierno y qué planes pondrían en marcha. Los partidos fijaban posición al respecto; en algunos casos, como el de Frondizi, con entusiasta disposición a buscar coincidencias con las futuras autoridades. Finalmente, el 28 de junio el presidente Illia fue “expulsado” de la Casa Rosada, tras su negativa a renunciar. Y el general Onganía fue inmediatamente designado en su reemplazo por la autoridad revolucionaria, la Junta de Comandantes.

## **4. La Revolución Argentina: de la suma del poder a la impotencia**

El golpe de 1966 catapultó al general Onganía al control casi total del estado: avalado por el éxito logrado por sus pares brasileños en la aplicación de un “autoritarismo desarrollista”, Onganía ejercería un “gobierno técnico” y “apolítico”, que duraría “todo lo necesario” para cumplir sus objetivos. Las cosas, sin embargo, no resultaron tan sencillas: Onganía pretendió utilizar el amplio apoyo civil y militar que recibió para imponer un sistema corporativo, que muchos militares resistieron y que tampoco encontró eco entre los políticos de derecha y los empresarios. En tanto, entre las clases medias y los políticos moderados el rechazo fue general, y los alentó a sumarse a las protestas que ya motorizaban el peronismo y las fuerzas de izquierda. El amplio movimiento de masas resultante de esta convergencia, excluido de todos los canales institucionales, tendió rápidamente a radicalizarse. Así lo demostró el Cordobazo, que en mayo de 1969 hirió de muerte al onganiano. Los gobiernos subsiguientes, encabezados por los generales Levingston y Lanusse, deberían lidiar con un clima abiertamente dominado por la violencia política, con una autoridad estatal cada vez más precaria. Perón, que fue quien más contribuyó a activar esa movilización, comenzaría a ser visto entonces como el único capaz de desactivar el clima prerrevolucionario que se había instalado en el país.

Con una naturalidad acorde con la creencia de estar poniendo “las cosas en su lugar”, los militares anunciaron el comienzo de una etapa completamente nueva en la vida del país, a la que llamaron “Revolución Argentina”. Según se proclamaba, se abriría con ella una vía pacífica, occidental y cristiana hacia el progreso. Para concretarla empezaron por corregir los errores cometidos, según ellos, por la Libertadora, fallida por sus propias limitaciones tanto en los fines que se dio,

como en el tiempo que estimó necesario para ejecutarlos: creyendo que sólo debían resolver una cuestión política, los militares del 55 habían ignorado las trabas estructurales para el desarrollo. A partir del 66, en cambio, se daría absoluta prioridad a lo económico y sólo tras haberlo resuelto se atendería a los actores sociales y, por último, a la política. En el ínterin, el conjunto de la sociedad tendría que someterse a los designios de un gobierno autocrático que velaría por sus intereses “desde arriba”, sin consultarla en lo más mínimo.

Para ello los militares asumieron plenos poderes revolucionarios, que no ejercerían en forma directa, sino delegándolos en Onganía. Gracias a esto, el presidente de facto contó con recursos que ningún otro jefe militar, y por supuesto ningún civil, había podido siquiera soñar: no sólo ejercería el Poder Ejecutivo durante un plazo indeterminado, con total libertad para decidir sobre funcionarios y políticas, sino también el Poder Legislativo y los poderes provinciales. Y, además, tendría amplias atribuciones sobre las Fuerzas Armadas. Aunque debería rendirles cuentas por los avances del “programa revolucionario”, someramente enunciado en un acta por la Junta de Comandantes, dado que esta Junta se autodisolvió tras nombrarlo presidente, Onganía tuvo también desde entonces poder de decisión absoluto sobre los ascensos, destinos y retiros de los mandos (y de hecho reemplazó dos veces en los años siguientes al jefe del Ejército), por lo que tampoco la fuente militar de su poder significó un obstáculo para sus designios. El grueso de los actores organizados y de la opinión pública acató en principio la nueva situación. Pocos se sorprendieron con las ambiciosas proclamas golpistas o se alarmaron ante el anuncio de que el nuevo régimen duraría lo que hiciera falta para completar sus metas. Para buena parte de los civiles, la autonomía militar era el último recurso para restablecer el orden, poner en su lugar a los actores politizados y acabar con las constantes disputas entre intereses. Pero aquello no sería nada fácil de conseguir: las Fuerzas Armadas no habían intentado sostener un ejercicio prolongado del poder desde 1943, y nunca con el alcance que ahora pretendían. Y, en mayor medida que entonces, tropezaron con una falta de cohesión interna que desmentía su pretensión de ser la única institución a salvo de las luchas facciosas. También chocaron con un desafiante movimiento de masas en el que convergían las expectativas más diversas y que, excluido por completo del sistema institucional, no estaba obligado a refrenarlas ni negociarlas y podía encauzarlas con un objetivo por demás seductor: el de que otra revolución, nacional y además popular, pronto les daría plena satisfacción.

## Onganía y el tiempo económico

Tras asumir la presidencia de la nación, Onganía anunció que conformaría su gabinete según las premisas que la Revolución había establecido para su primera etapa: asepsia ideológica y capacidad técnica. El objetivo era asegurar que el gobierno se abstuviera de “hacer política” y se ocupara exclusivamente del desarrollo de la industria, la construcción de infraestructura y el progreso técnico en todas sus formas. Durante sus primeros dos años en la presidencia, esta fórmula resultó eficaz. Vandor y Alonso vieron en el gobierno un aliado para resistir al enemigo común –la izquierda que ganaba terreno en las bases gremiales– y ayudaron a que el número de huelgas disminuyera abruptamente. El gobierno de facto tampoco halló abiertas resistencias en los partidos, pese a que los prohibió y expropió sus bienes para obligarlos a disolverse. La política económica, por su parte, tuvo margen para combinar medidas “duras” (privilegios a la inversión extranjera, apertura comercial y suspensión de las paritarias) con otras desarrollistas, como la promoción crediticia y fiscal de la industria y un número impresionante de obras públicas.

Pero al cabo de un tiempo se comprobó que la política se resistía a desaparecer. El cierre de los canales institucionales favoreció involuntariamente las vías extrainstitucionales y las posiciones más radicalizadas. Los partidos se replegaron, pero incluso los más moderados se prepararon para resistir desde la ilegalidad los intentos de disolverlos. Y, en cuanto se les presentó la oportunidad, se sumaron a acciones de protesta. Con todo, fue el propio gobierno el que proveyó los primeros estímulos para reactivar la lucha política. Muchos de los funcionarios que rodeaban a Onganía fueron desde el principio inconsecuentes con las premisas proclamadas por su jefe: seleccionados entre los más fanáticos nacionalistas y católicos de derecha, los responsables de las áreas de Educación, Comunicación, Interior y Trabajo no ocultaron su interés por utilizar esas posiciones para combatir a sus enemigos liberales, marxistas y peronistas de izquierda, sacrificando la “eficacia técnica”. –

Esto, a su vez, puso en evidencia un problema más serio, que anidaba en la relación entre las Fuerzas Armadas y Onganía. Y es que, mientras que la mayoría de los oficiales pretendía replicar el desarrollismo autoritario que venían implementando sus pares de Brasil (donde la dictadura había coronado sus logros económicos con elecciones locales y legislativas, en las que se dejó participar a opositores moderados y se impuso una fuerza oficialista), Onganía y sus seguidores más fieles tenían

en mente la España de Franco. Allí también se aplicaban políticas desarrollistas, pero dando continuidad a un orden político corporativista que prescindía de partidos y elecciones no sólo como medida transitoria sino para extirpar definitivamente todo rastro liberal y democrático. Onganía y los suyos buscaron además utilizar el poder que les habían delegado las Fuerzas Armadas para instaurar una política cultural y educativa clerical y retrógrada y crear formas “alternativas” de representación de intereses que nada tenían que ver con la Constitución de 1853 –cuyo respeto proclamaban los militares y los civiles desde 1955– y mucho con los proyectos filofascistas de 1943 y con los rasgos que se le atribuían al régimen peronista. En suma, no sólo “hacían política” sino que la hacían en una dirección que no contaba con consenso en los cuarteles, e incluso chocaba con el liberalismo de la política económica –cosa que también provocaría tensiones con los empresarios–.



Onganía consagra la nación al Inmaculado Corazón de María, Luján, noviembre de 1969. Archivo General de la Nación.

El desarrollismo corporativista pudo imponerse en España gracias a un liderazgo autocrático y militar consolidado por la sangrienta guerra ci-

vil, tres décadas de comunión con la iglesia católica y la clase empresarial, y el férreo control de los gremios creados para prevenir un rebrote comunista. Si bien ninguna de esas condiciones existía en la Argentina, Onganía intentó generarlas valiéndose de su prestigio personal: su imagen transmitía a civiles y militares la síntesis exacta que parecía hacer falta entre capacidad técnica, disciplina, apego a las normas, austeridad y voluntad decisoria. Muchos pensaban, incluso, que su fervor nacionalista y religioso permitiría recuperar los sentimientos de pertenencia a la comunidad que creían extraviados tras años de conflictos intestinos y de gobiernos civiles impotentes e inconsecuentes con las reglas que proclamaban.

Como ha explicado O'Donnell, el objetivo principal de Onganía era sellar una alianza con los empresarios más poderosos, nacionales y extranjeros, e integrar subordinadamente en ella a los sindicatos, con la proporción correcta de palos y zanahorias. Al igual que Frondizi, buscó "acelerar el desarrollo" para ganar ambos apoyos a la vez. Y en el ínterin tomó medidas inmediatas para "frenar el desorden". Las radios y televisiones públicas fueron puestas en manos de fanáticos derechistas que celebraron a rienda suelta la "moralidad pública" del nuevo gobierno, oponiéndola a la degradación que atribuían a los políticos de partido y a quienes promovían costumbres e ideas "liberales". Alentaron así el "consenso pasivo" de la sociedad, el acatamiento dócil de todo lo que dispusieran las autoridades. Se prohibieron y cerraron, además, numerosas publicaciones independientes. Y con la misma tónica se trató a las universidades nacionales, consideradas las principales promotoras de una cultura disolvente y atea, y de la "falsa modernidad" donde anidaba la subversión. Ésta debía ser extirpada, aun al precio de sacrificar la calidad académica. Por lo tanto, no sólo se procedió a intervenir las casas de altos estudios sino también a designar a derechistas recalcitrantes para dirigirlos, y, cuando ello generó resistencias, se las reprimió con toda la fuerza posible para escarmentar a los "factores disolventes". El episodio más dramático a que dio lugar esta política fue la "noche de los bastones largos": cientos de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires fueron apaleados delante de la prensa mientras se los desalojaba de las facultades que habían tomado en protesta por la intervención de la universidad. Muchos de los docentes involucrados fueron despedidos o renunciaron a sus cargos y emigraron para seguir desarrollando sus actividades en los Estados Unidos y Europa. Por su parte, muchos estudiantes se convencieron de que sólo una acción igualmente violenta, de signo inverso, modificaría la situación.

## Clausura de la universidad autónoma e inicio de la “fuga de cerebros”

La “noche de los bastones largos” fue el comienzo de una serie de persecuciones y purgas que se prolongaría por más de tres lustros. Fue también el fin de Eudeba, el proyecto cultural más ambicioso emprendido por la Universidad de Buenos Aires. Como consecuencia, su impulsor Boris Spivacow fundaría en esa misma primavera de 1966 el Centro Editor de América Latina, que se transformaría en una fenomenal usina de difusión cultural y científica en los años siguientes. Mientras tanto, las editoriales de Buenos Aires se convirtieron en plataforma de lanzamiento de la nueva literatura latinoamericana (autores como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa publicaron en ellas algunas de sus primeras obras). La represión en los ámbitos públicos contrastó así con la explosión de la actividad editorial privada, atenta a una demanda que era producto de los mismos esfuerzos modernizadores que Onganía decía continuar. Las universidades públicas no recuperaron la calidad académica ni la gravitación social que habían alcanzado en la década anterior, debido en parte a cómo se saldó en este contexto el debate entre “politizados” y “cientificistas”: los profesores y estudiantes más activos tendieron cada vez más a relegar los intereses académicos con el objetivo de transformar la universidad en una trinchera más de la lucha revolucionaria, considerando reaccionario todo lo que no sirviera a esos fines.



Página de *Crónica*, edición de la mañana, sábado 30 de julio de 1966.



el ministro de Economía Adalberto Krieger Vasena un interlocutor dispuesto a atender sus pedidos a través de los mecanismos tradicionales: las asociaciones existentes y las prácticas particularistas de contacto directo con los funcionarios, en las que se intercambiaban beneficios más o menos focalizados por apoyos “a la gestión”.

Recordemos que la Unión Industrial Argentina (UIA) había sido rehabilitada tras la caída de Perón, y que la mayoría de las empresas y cámaras sectoriales había vuelto a integrarse a sus filas tras abandonar la Confederación General Económica (CGE), creada por aquél. Si bien la UIA festejó los alicientes crediticios y la inversión en infraestructura, tuvo también motivos de disputa con Onganía debido a la apertura comercial y otras medidas antiinflacionarias. Por lo general, las cámaras sectoriales diferían entre sí en estos terrenos (por ejemplo, mientras algunas aprobaban los insumos importados baratos, los productores locales de esos bienes querían cerrar la importación) y frecuentemente realizaban gestiones por su cuenta. La CGE –que siguió representando a parte de la pequeña y mediana industria y el comercio, sobre todo del interior– tampoco mostró demasiada cohesión: actuaba como plataforma para que los sectores más débiles del empresariado consiguieran beneficios específicos de gobernadores y ministros, mientras su presidente, José Ber Gelbard, defendía una visión nacionalista y proteccionista y rechazaba los acuerdos con el FMI y las medidas antiinflacionarias que afectaban el consumo. Dado que la política industrialista había vuelto a financiarse con retenciones a las exportaciones de alimentos (exportaciones que se incrementaron y siguieron siendo rentables por la maduración de las inversiones y el alza de los precios internacionales), las entidades agropecuarias tenían sus propios motivos para oponerse a Onganía. Y lo hicieron a través de posturas que iban desde la ortodoxia liberal de la Sociedad Rural hasta el populismo de las Ligas Agrarias y la Federación Agraria Argentina.

En resumidas cuentas, el campo empresario presentaba una marcada heterogeneidad estructural y asociativa, lo que conllevaba serios problemas para coordinar su acción colectiva y articular sus intereses generales. Por eso mismo, una propuesta como la de Onganía no podía sino agravar las cosas: los empresarios vieron con buenos ojos que figuras afines ocuparan el Ministerio de Economía y lo orientaran a facilitarles las cosas, pero recelaron de los planteos corporativistas. Y dada la tensión entre éstos y la gestión económica, buscaron sacar el máximo provecho a través de concesiones puntuales e ignoraron las invitaciones a integrarse al régimen.

La Revolución Argentina, que aspiraba a resolver los problemas de representación empresarial y también a actuar como expresión general del capital compensando el poder de los sindicatos, tuvo por tanto poco eco en aquellos a quienes pretendía beneficiar. Y lo pagaría muy caro ante una sociedad fuertemente movilizada y politizada en todos sus estamentos, cuyas demandas se intensificaron en vez de morigerarse a medida que se lograban resultados económicos positivos: como le había sucedido a Frondizi y en alguna medida también a Illia, Onganía descubrió demasiado tarde que, dado que lidiaba con actores movilizados estrechamente articulados entre sí y con el estado, los apoyos que podía comprar con beneficios económicos serían efímeros mientras no resolviera el complicado rompecabezas donde se tramaban la política y la agregación de intereses.

Para colmo, las políticas de modernización acelerada aplicadas agudizaron ciertas tensiones entre intereses empresariales, en particular entre los extranjeros —que tenían más recursos para invertir y por lo tanto para obtener a cambio concesiones del gobierno— y los nacionales —incluso los grandes, que no contaban con la tecnología ni el financiamiento imprescindibles para competir en esa escala—. En la producción de bienes durables y combustibles, las empresas nacionales —otrora favorecidas por Frondizi e Illia a través de mercados protegidos, créditos subsidiados y excepciones impositivas— perdieron posiciones frente a sus competidoras extranjeras. A raíz de ello, algunos denunciarían el moderado liberalismo que Krieger usaba para atraer inversiones y frenar la inflación como parte de un plan “antinacional” y “proimperialista”, a tono con las proclamas que lanzaban la CGT y la CGE. Argumentos que encontraron oídos atentos en los oficiales nacionalistas del Ejército.



### **Las empresas nacionales ante el régimen**

La situación de los empresarios argentinos frente a la competencia externa quedó bien ilustrada cuando, en respuesta a las presiones de la UIA, se dictó la Ley de Rehabilitación de Empresas. Esta ley permitió una fenomenal distribución de favores fiscales y crediticios entre empresas nacionales, que descargaron en el fisco parte de las deudas contraídas años antes para expandirse. La norma se aplicó en forma selectiva y el acceso a sus beneficios dependió de la habilidad del interesado para recorrer los despachos oficiales. Un caso emblemático fue el del grupo SIAM-Di Telia, fabricante de automóviles y electrodomésticos que enfrentaba crecientes

dificultades debidas a su anticuada tecnología y a la competencia de las multinacionales. En conflicto con el régimen por otros motivos (la promoción del arte moderno y las ciencias sociales que realizaba la familia propietaria a través del instituto homónimo), el grupo se vio obligado a vender parte de sus activos y cerrar otras plantas, hasta que, en 1970, se dispuso su estatización.



El presidente Onganía junto a su ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena. Archivo *Clarín*. ■

Las medidas destinadas a racionalizar el sector público también encontraron resistencia en esa ala nacionalista del Ejército, que tomaba cualquier iniciativa que afectara a las empresas del estado, y en particular a las industrias para la defensa, como un ataque a la soberanía nacional. Algo similar sucedió con los planes para reformar los ferrocarriles y los puertos: cuando a fines de 1966 la CGT amenazó con un paro general contra dichos planes, la respuesta oficial fue que se le quitaría la personería legal a los sindicatos que lo acataran; pero de todos modos la iniciativa quedó atascada dentro del propio Ejecutivo, que siguió solventando el déficit de esas y otras empresas. Excedidas en mano de obra y gestionadas de forma ineficiente, sus costos sobrepasaban crónicamente sus ingresos, lo que también se debía a que los precios de los bienes y servicios que producían se fijaban con criterios políticos: se subsidiaba así el consumo y la producción en general, y en particular aquellas actividades que los usaban como insumos básicos.

En suma, Krieger logró bastante poco en lo atinente a la apertura comercial, el ajuste del gasto y el aumento de los impuestos. El alza de precios continuó: la reducción de costos provocada por las inversiones públicas y privadas no bastó para detenerla en ese contexto signado por las pujas de precios entre sectores empresariales, y por altos niveles de empleo y consumo. Del 31,9% de 1966 pasó al 29,2% en 1967 y todavía fue del 16,2% en 1968, lo cual redundó en crecientes tensiones con los gremios. El congelamiento de las paritarias dispuesto tras el golpe había sido tolerado por la cúpula cegetista, decisión que la complicó a la hora de enfrentar a los sectores combativos. Lo sucedido con una frustrada huelga general a fines de 1966 fue aleccionador, como lo fue asimismo la imposición de una ley de arbitraje obligatorio que permitía que el Ministerio de Trabajo interviniera desde entonces en todos los conflictos laborales. En compensación, los participacionistas obtuvieron aumentos selectivos de salarios (para la UOM y los textiles) y la continuidad de normas que limitaban la democracia interna en sus organizaciones. Pero ninguna de estas “zanahorias” alcanzó para prestigiarlos ni para limitar las protestas (los aumentos selectivos incluso las alentaron). Y la andanada de reclamos pronto llevó al gobierno a administrar nuevas dosis de “palos”.

Por otro lado, el corporativismo oficial tampoco tuvo eco en Vandor ni en los neoperonistas más representativos (con la sola excepción de Alonso). Ellos sí aceptaban que, mientras no se solucionara el problema de la proscripción, debían entenderse con la otra “corporación nacional” —el Ejército— para preservar el poder gremial. Además, muchos sindicalistas consideraban que Onganía era tan pragmático como Perón y no se preocuparon por sus devaneos franquistas. Pero cuando éstos comenzaron a generar tensiones en los cuarteles, su fe en él decayó velozmente. En un clima de creciente desconcierto respecto de los planes políticos del régimen, las protestas se alimentarían en gran medida de la percepción generalizada de que el gobierno estaba cada vez más encerrado en sí mismo. Sin embargo, ello no basta para explicar la fenomenal activación de la movilización contestataria que se registró a partir de 1968.

El primer factor a tener en cuenta para una explicación más exhaustiva de este fenómeno es que el peronismo político, y en particular Perón, la foguearon sin disimulo cuando se quedaron sin ninguna otra carta ante un poder que se empeñó en ignorarlos. A ninguno de ellos escapó que la prohibición de los partidos colocaba a los gremios en una posición privilegiada para canalizar demandas de

todo tipo y “hacer política” tanto en los lugares de trabajo como en la escena pública. Otro factor fue la maduración de la dirigencia fogueada en la Resistencia, y la confluencia de los idearios del peronismo de base y de la izquierda revolucionaria, alentada ahora también por el ejemplo del “mayo del 68” francés. El golpe había liquidado, además, los planes de reemplazo del modelo sindical heredado, y había dejado sin perspectiva alguna a los dirigentes moderados, independientes, radicales o socialistas. A su vez, la política proindustrial con clausura de las paritarias en un contexto inflacionario y de pleno empleo alentaba a las empresas a ceder ante las presiones de sus empleados: no les convenía enfrentarlos porque no podían reemplazarlos fácilmente, y en cambio era fácil responsabilizar al gobierno por no poder satisfacer sus demandas o satisfacerlas rompiendo la unidad de las cámaras y trasladando los costos a sus precios. A ello se sumaba, por ejemplo en el sector automotriz, el hecho de que, desde Frondizi, algunas grandes empresas habían alentado la creación de sindicatos propios para facilitar las negociaciones específicas y sortear los obstáculos que imponían las paritarias nacionales, cosa que favoreció a los sectores combativos que tomaron el control de esas nuevas organizaciones. Combinado con una dirigencia tradicional que no obtenía demasiado por colaborar con el gobierno, todo esto permitió que el sindicalismo combativo motorizara una ola de protestas nunca vista y que se propagó de una ciudad a otra por todo el país.

Ya a comienzos de 1968 se formó una mayoría combativa en la conducción de la CGT. Cuando Vandor y Alonso la abandonaron en señal de disconformidad, la central se rebautizó “CGT de los Argentinos” y abrazó un programa decididamente revolucionario, encolumnada detrás del combativo dirigente gráfico Raimundo Ongaro. El gobierno no tuvo mejor idea que responder a esta novedad con la receta que había aplicado, y seguía aplicando, en las universidades, alentando la confluencia entre los activadores de la protesta en ambos terrenos. La tensión que se fue acumulando estalló en mayo de 1969. A raíz de un conflicto menor en los comedores de la Universidad del Nordeste, un estudiante fue muerto por la policía. Los estudiantes de todo el país se movilizaron. Primero se desató el Rosariazo: grupos universitarios y gremiales se volcaron a las calles de la ciudad desbordando a la policía y sólo se replegaron cuando el Ejército ocupó el centro y el populoso cinturón industrial.



Agustín Tosco, al frente de una movilización del sindicato de Luz y Fuerza. Archivo General de la Nación.

Las dos CGT llamaron a una huelga general para el 30 de mayo a raíz de la muerte de otro manifestante en esas refriegas. Pero un día antes se desató una nueva revuelta, aún más intensa, en Córdoba: miles de estudiantes y trabajadores encabezados por Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, y René Salamanca, líder maoísta de Sitrac-Sitram, gremio de varias automotrices de la ciudad, con el apoyo activo de los vecinos, incluso de barrios acomodados, ocuparon las calles, levantaron barricadas e hicieron huir a la policía. Actuaron movidos tanto por la solidaridad con sus pares del litoral como por las demandas específicas desatendidas y el generalizado rechazo hacia las autoridades locales, tercamente empecinadas en poner en práctica el corporativismo, pese a la resistencia incluso de políticos de derecha y sacerdotes católicos de esa devota provincia.

El Ejército tardó dos días en restablecer el orden, y dejó a su paso 14 muertos e imágenes que revelaban una sociedad en ebullición y la fragilidad del poder gubernamental. Imágenes que ya no podían atribuirse a “grupúsculos subversivos” ajenos al “cuerpo sano” de la ciudadanía, como quiso hacer creer el gobierno. Lo más preocupante para Onganía sería que no sólo recibió críticas por la represión desatada, sino también por su ineficacia para administrarla.

## El Cordobazo

Fue una demostración de fuerza para los revolucionarios, pues por primera vez, y de forma espontánea, lograron sumar en sus filas a amplios sectores de la sociedad. Desde entonces ganaron confianza, entendieron que se había abierto una "situación prerrevolucionaria" en el país y proclamaron que la próxima etapa sería llevar la "guerra de clases" a una escala nacional. El común de la gente que se plegó a la pueblada tuvo móviles mucho más modestos: el hartazgo de un régimen que se mostraba indiferente y soberbio y la falta de mecanismos representativos para canalizar sus demandas. Por cierto, la solidaridad de la gente hacia los militantes revolucionarios (las crónicas hablan de espontáneas colaboraciones para frenar a las fuerzas de seguridad, por parte de vecinos de toda condición que aportaban combustible para las bombas molotov o permitían incluso que los francotiradores se apostaran en sus azoteas) evidenció la fluidez del contacto entre ambos campos a partir de la cerrazón oficial. Las imágenes que ofreció la televisión, y que escaparon al control del gobierno, le dieron un enorme impacto y alcance al acontecimiento: como explica Mirta Varela, la sociedad se vio "tal como era", con lo que se creó una ilusión de autenticidad que vació todavía más de legitimidad el poder del estado.



Los manifestantes enfrentan a las fuerzas represivas. Córdoba, 30 de mayo de 1969. The Associated Press. ▀

La rebelión cordobesa puso en evidencia, en suma, que el consenso pasivo inicial ya no existía, que, a fuerza de darlo por supuesto, el régimen se había transformado en una superestructura aislada, y que ningún actor social relevante estaba dispuesto a ir en su ayuda. Fuerzas moderadas como el radicalismo habían participado de la lucha callejera y, creyéndose relegitimadas por la misma sociedad que tres años antes las había repudiado, le plantearon sus exigencias al gobierno. En el ínterin, éste sólo había logrado seducir a algunos políticos neoperonistas y nacionalistas de derecha –aquellos que no sacrificaban ninguna base electoral ni estructura sólida– con sus esquemas corporativos. Eso no alcanzaba para que Onganía lograra ahora lo que no había querido hacer en 1966: rodearse de civiles mínimamente representativos. Pero de todos modos lo intentó, designando “gobernadores naturales” a quienes les ordenó sumar apoyos locales (entre los beneficiarios se contarían algunos neoperonistas, como Elías y Felipe Sapag, de Neuquén).



Juan Carlos Onganía, caracterizado como Adolf Hitler en una caricatura publicada por la revista de humor político *Tía Vicenta*.

La revuelta también provocó temores nuevos en las filas sindicales y permitió que, pocos meses después, la balanza volviera a favorecer a los dialoguistas. Pero el impacto más serio para la supervivencia de Onganía fue el que se registró en los cuarteles y que tuvo un signo opuesto. Como dijimos, allí no existía la supuesta cohesión de la que se hablaba, y los recelos aumentaban junto con los problemas. Muchos comenzaban a preguntarse si el origen de éstos no estaba en el propio Onganía y en lo que cada vez más se parecía a un intento de reflotar el proyecto de Lonardi. Para colmo, a falta de otros canales de representación, las tensiones entre grupos de uniformados

se volvían fácilmente expresión de todo tipo de reclamos sectoriales, que las complicaban aún más. En parte, esas disputas expresaban viejos conflictos: los liberales que rodeaban al ahora jefe del Ejército, el general Alejandro Lanusse, rechazaron cada vez más abiertamente los planes corporativistas. Pero también hubo elementos nuevos: desde 1968, gracias al auge del antiimperialismo en la región, a cierto relajamiento de la fobia anticomunista y al atractivo que ejercieron los experimentos militares populistas en Perú y Bolivia, los oficiales “nasseristas” que simpatizaban con estas posiciones se multiplicaron y abandonaron el silencio que prudentemente habían guardado.

Ni siquiera Onganía fue indiferente a este clima: para equilibrar las cosas con los liberales de Lanusse despidió a Krieger, responsabilizándolo por las protestas, concedió aumentos salariales del 20%, y a comienzos de 1970 devolvió las obras sociales a los gremios e incrementó sus recursos con los aportes obligatorios de trabajadores y empleadores. También permitió la convocatoria a un congreso normalizador de la CGT en el que los dialoguistas recuperarían la conducción. Supuso que estos gestos no sólo le permitirían sintonizar con el gremialismo sino también con grupos católicos, políticos y empresarios cuya simpatía había ido perdiendo. Y enmarcó todo ello en un esfuerzo por “profundizar la Revolución”. Nada de eso, sin embargo, reparaba la relación con sus pares: más bien la empeoraba, porque dejaba ver que su vocación corporativista aún persistía o, peor, iba en aumento.

### **Levingston y el tiempo social: inflación y violencia**

Onganía se mantuvo en la presidencia durante un año más, porque su prestigio en los cuarteles tardó en agotarse. Y la coalición militar dispuesta a (y capaz de) desplazarlo tardó aún más en formarse, no sólo por el riesgo de reabrir conflictos que pocos años atrás habían sido muy violentos, sino porque echar a Onganía exigiría negociar con los partidos declarados “caducos” en 1966 y correr otro riesgo grave: que, al abrirles la puerta, quisieran llevarse por delante todos los “logros” que los militares y sus aliados empresarios creían haber alcanzado. No sólo las promesas gloriosas iniciales sino el propio papel de estos actores frente a la sociedad estarían entonces en peligro. Tuvo que producirse una nueva conmoción, tan fuerte para el ánimo de los uniformados como el Cordobazo, para que aceptaran que el reemplazo del presidente era inevitable.



El general Agustín Lanusse y el hijo de Pedro Eugenio Aramburu junto al féretro del ex presidente ejecutado por Montoneros, julio de 1970. Archivo General de la Nación.

Esa conmoción provino de un grupo guerrillero recién creado, Montoneros, que secuestró al ex presidente Aramburu el 29 de mayo de 1970. El audaz operativo no pudo ser previsto ni desbaratado: el cuerpo sin vida de Aramburu fue hallado más de un mes después y los responsables no pudieron ser detenidos (aunque varios de ellos caerían pronto en otras acciones armadas). Eso puso en evidencia la ineficacia de las medidas de represión y lo desafiantes que habían llegado a ser las guerrillas, incluso para la integridad de los más poderosos. Pero lo más grave de todo fue que el aislamiento del régimen quedó a la vista: las muestras de solidaridad civiles fueron escasas y en amplios sectores hubo más o menos abierta simpatía hacia los perpetradores, cuya acción se justificó porque la violencia de los militares era anterior y antipopular. Según una fórmula que usarían voces de muy distinta orientación, “la violencia de abajo era una respuesta a la violencia de arriba”, y la acción clandestina e ilegal era el único instrumento que les quedaba a los ciudadanos cuando sus derechos eran ignorados. La misma Conferencia Episcopal Argentina emitió poco después una declaración que decía: “La opresión ejercida por los grupos de poder puede dar la impresión de mantener la paz y el orden, pero en realidad no es sino un germen de rebeldía”. Recordemos que Aramburu cargaba responsabilidades por los fusilamientos de José León Suárez. La selección del blanco fue

justificada por los Montoneros como un “acto de justicia popular” por esa razón. Pero la víctima era también en ese momento la cabeza del intento de sectores civiles y militares de iniciar una apertura política; por ello, esos sectores atribuyeron la impunidad de sus asesinos a la secreta colaboración que les habrían prestado desde el gobierno.

El hecho tuvo un impacto profundo sobre la vida del país, que se internó a partir de entonces en un clima abiertamente dominado por la violencia política, y por una muy particular, tanto en sus modalidades como en su intensidad. Ya no se trataba de la violencia dispersa y acotada de la Resistencia, ni tampoco del estallido espontáneo del Cordobazo, sino de su uso planificado contra la vida de los “enemigos”. El de Aramburu no fue el único caso: en junio de 1969 Vandor había sido baleado en la sede de la UOM, y en agosto de 1970 Alonso correría igual suerte. Ambos crímenes tuvieron el efecto de arrojar al gremialismo en brazos de Perón y abonaron la idea de la “eficacia” de la lucha armada, que creció a pasos agigantados. En aquella época operaban ya activamente el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR); pero la organización más exitosa sería sin duda Montoneros, que pronto absorbió a las FAR. Al igual que el PC en el final del régimen peronista, Frondizi en 1958 y Vandor en los sesenta, Montoneros aspiraba a darle una conducción al movimiento de masas, que a su entender carecía de ella y por lo tanto de fines claros y definidos. E igual que todos sus predecesores descubriría que, si de algo no carecía el peronismo, era de conducción. Sin embargo, en un principio pudo contar con su aval –silencioso o explícito según los casos– y con un clima social favorable tanto por la ola de protestas (que continuó), como por la solidaridad de la opinión pública (según encuestas de la época, cerca del 50% de los ciudadanos simpatizaba con la guerrilla) y el entusiasmo de la militancia juvenil.



### **Montoneros y el ERP**

Liderado por Mario Firmenich, Montoneros pasó en poco tiempo de ser un grupo minúsculo a reunir miles de militantes y a actuar como la más aceptada y decidida de las organizaciones que nutrían la llamada Tendencia Revolucionaria del peronismo en las universidades, las villas y los sindicatos. Tuvo la peculiaridad de integrar a militantes católicos, incluso a nacionalistas de derecha, con otros de izquierda marxista, a diferencia de la otra gran guerrilla del período, el ERP, fundado casi simultáneamente,

pero que abrevaba en el trotskismo y el guevarismo y aspiraba a formar un partido de vanguardia alejado de las ambigüedades del peronismo. Existieron de todos modos notables similitudes entre ambos grupos. En primer lugar, la muy reciente conformación y el acelerado crecimiento, que llevaría a ambos a predecir que la movilización y radicalización de las masas experimentaría sucesivos saltos cualitativos hasta provocar la caída del régimen y del capitalismo. Compartieron también su concepción de la violencia: ella constituía un instrumento para educar a las masas en la lucha irreconciliable contra sus enemigos, una vía para catalizar la división del campo político en dos fuerzas contrapuestas y para crear solidaridad y compromiso revolucionario. Cuanto más intenso fuera su uso y menos concesiones merecieran la negociación y las vías institucionales, más acelerado sería el avance revolucionario. Sobre esta base, Montoneros postulaba que matar contrarrevolucionarios era el acto más elevado de lucha política, práctica que se volvió otra peculiaridad suya, a diferencia de otras guerrillas de la época en países vecinos, que se cuidaron de cometer asesinatos. Tras el éxito logrado con Aramburu, Montoneros cometió un gran número de atentados contra "representantes del enemigo": militares, policías, empresarios y jueces que juzgaban a sus miembros. El ERP, en principio, se dedicó a robar alimentos para distribuirlos en las villas, acumular armas y desarrollar una guerrilla en el monte tucumano (siguiendo el ejemplo del Che, que había muerto en 1967 mientras intentaba hacer algo semejante en Bolivia), por lo que sus operaciones fueron menos sangrientas. Con el tiempo, sin embargo, terminó imitando algunas de esas prácticas de Montoneros. ▀

**El divorcio entre los tiempos y los planes con que actuaba Onganía y lo que las cúpulas militares percibían como problemas urgentes a atender era irreparable desde hacía tiempo. Lanusse, que compartía la propuesta de apertura impulsada por Aramburu, encabezó la conspiración, sumando primero a los mandos del Ejército y luego a las otras fuerzas. De modo que cuando finalmente le exigió la renuncia al presidente, el 8 de junio de 1970, éste no tuvo medios para resistir. El "recambio" pudo considerarse un éxito, por cuanto evitó otro choque abierto entre facciones militares. Pero había insumido un tiempo muy valioso. La Junta de Comandantes, recompuesta meses antes y controlada ahora por Lanusse, designó presidente al general retirado Roberto M. Levingston. El flamante funcionario carecía de gravitación en los cuarteles y aceptó la condición de que consultaría con los comandantes todas las "cuestiones importantes". Si éstos creyeron que de este modo evitarían**

los problemas de un Ejecutivo autónomo, se equivocaron, porque Levingston retomó los esfuerzos de su predecesor por “profundizar la revolución”. Y con ese fin buscó también apoyos entre los nacionalistas, aunque privilegiando a los más populistas, queriendo imitar el tipo de alianza que el ejército peruano había sellado con sectores populares e intelectuales años atrás. Los neoperonistas, por tanto, alcanzaron aún más gravitación que al final del onganato: ocuparon el Ministerio del Interior y desde allí promovieron la “recreación del Movimiento Nacional” que había reunido a “pueblo y ejército” bajo el primer peronismo. A esta cruzada se sumaron Oscar Alende, de la UCRI, y Aldo Ferrer, economista que ocupó en un principio la cartera de Obras Públicas y luego pasó a la de Economía cuando Levingston se desembarazó de los funcionarios que la Junta le impusiera al inicio de su gestión.

Estas y otras figuras civiles celebraron algunas medidas proteccionistas y la política laboral más generosa que Levingston impulsó. Pero nada alcanzaba ya para romper el aislamiento del régimen: el presidente no ganó mayor consenso en la sociedad con esos gestos, y a causa de ellos perdió la confianza de los círculos financieros y de las grandes empresas. La inflación, que finalmente Krieger había logrado reducir al 7,6% en 1969, volvió a trepar al 13,2% al año siguiente y durante 1971 llegó al 34,7%. Las protestas sindicales se reactivaron y el anuncio de que pronto habría un “plan de apertura” incentivó a los políticos a reclamar un cronograma electoral concreto, lo que no era fácil de compatibilizar con la idea de “profundizar la Revolución”. En suma, pocos meses bastaron para advertir que el nuevo presidente estaba agravando los problemas heredados. La sensación de fracaso dominó a los uniformados: al igual que los partidos políticos, habían resultado impotentes para crear un orden estable. La Argentina comenzaba a verse como un país ingobernable.

El debilitamiento de la autoridad estatal era el problema clave. El estado intervenía en una infinidad de asuntos con el afán de regularlos o gestionarlos, pero no lograba ni una cosa ni la otra; más bien los convertía en fuentes de demandas que no satisfacía y que lo deslegitimaban. Su debilidad y falta de autonomía frente a los grupos sociales y las corporaciones generaron, en consecuencia, crecientes desequilibrios estructurales. El más relevante de ellos, la inflación: Argentina era ya entonces un caso único por la continuidad en el tiempo de tasas muy altas de alza de precios.



### **De la inflación se han dado muchas explicaciones**

Algunos intentos de explicar la persistencia de este fenómeno ponen el acento en la responsabilidad del estado: el déficit público. Otros, en factores estructurales que desequilibran la economía: la puja distributiva. En el caso argentino, dada la extrema manifestación del problema, estos factores se combinaron y se les sumaron otros. En cuanto al déficit, el problema básico era que cuando los impuestos no cubrían los gastos y éstos no podían reducirse ni aquéllos aumentarse (por los conflictos que una u otra solución acarrearía), los gobiernos tendían a recurrir a una solución sencilla y no conflictiva en lo inmediato: emitir moneda. Si la producción no crecía lo suficiente, la mayor cantidad de moneda circulante provocaba el alza de los precios, lo que significaba que el sector público, para equilibrar sus cuentas, aplicaba un "impuesto inflacionario" a quienes recibían esa moneda (los asalariados, en primer lugar): los ingresos de la población, aunque aumentaran nominalmente, en realidad disminuían. En cuanto a los factores estructurales, la clave radicaba en los empresarios monopólicos u oligopólicos que fijaban arbitrariamente los precios de sus bienes y servicios y obtenían importantes ganancias sin necesidad de ampliar sus actividades ni de ser más eficientes. Ello llevaba a otros a tratar de imitarlos y a los sindicalistas a buscar recuperar lo que los salarios perdían en poder de compra. Si de esta puja no resultaba un sector dominante o un pacto estable, la disputa se extendía: el alza encadenada de precios era efecto de esa inestabilidad y la agravaba. Al combinarse ambos factores, los actores sociales y el estado buscaban permanentemente reacomodar sus precios para mejorar su situación o reparar las pérdidas ocasionadas por cambios previos. Y ello daba por resultado la implantación de mecanismos indexatorios: cláusulas de actualización de precios en los contratos, los alquileres, los proyectos de obra pública, las transacciones financieras, las paritarias, etc. Esto reproducía hacia el futuro la inflación pasada y, a la larga, la aceleraba. Debido a todo esto, la confianza en la moneda tendía a desaparecer hasta que, finalmente, los valores reales de los bienes se fijaban en otra moneda confiable: la "dolarización" permitía a los más poderosos escapar al impuesto inflacionario y a la puja distributiva, pero al hacerlo agudizaba el problema fiscal y distributivo, pues dicho impuesto se concentraba más y más en las espaldas de quienes no podían dejar de usar la moneda local. ▀

Una de las consecuencias de este deterioro del contexto económico y de la violencia política fue el repliegue de las multinacionales que habían entrado en el país con Frondizi. Escogidas como blanco privilegiado por la guerrilla (se multiplicaron los secuestros de gerentes, las bombas en sus locales o plantas fabriles, en ocasiones para apoyar medidas de fuerza gremiales) y ahora también por la crítica gubernamental (Ferrer, quien seguiría a cargo de Economía un tiempo después de la partida de Levingston, era abiertamente contrario a su presencia), dejaron de invertir o cerraron sus puertas, y su peso económico empezó a reducirse.

Levingston, para empeorar todavía más las cosas, insistió en su “apertura política” con la tesis onganiana de que los partidos preexistentes debían disolverse para que sus dirigentes fueran admitidos en la nueva etapa política. Exigió además abiertamente a Perón un “renunciamiento”: la promesa de que no aspiraría a la presidencia como condición para su regreso al país. Lo único que consiguió fue convencer al radicalismo de que no habría forma de acordar con los militares y que por lo tanto era preciso hacerlo con Perón. Así nació, en noviembre de 1970, la Hora del Pueblo, una versión ampliada de la Asamblea de la Civildad, en la que esos dos partidos, más algunos otros menores, aunaron esfuerzos para frenar los intentos de disolverlos o fracturarlos y para buscar una pronta salida electoral.

Más que a este instrumento, Perón apostaba ahora a la movilización y la protesta, incluido el ejercicio de variadas formas de violencia. De allí su abierto respaldo a Montoneros: a diferencia de los políticos y los sindicalistas peronistas, que seguían haciendo un juego ambiguo respecto de su regreso al país y mantenían abiertos canales propios de negociación con el gobierno, los jóvenes guerrilleros enarbolaron una bandera inequívoca, “Perón o muerte”, y con ella llevaron a cabo una ola de atentados para dejar en claro que hablaban en serio. Al darles rienda suelta, Perón apuntaba a un retiro rápido y no negociado de los militares del poder, y a la vez a presentarse frente a éstos y los demás defensores del orden social como la última carta con que contaban para no perderlo todo. Algo que cada vez más empresarios, políticos y eclesiásticos temían, y ante lo que se preguntaban: ¿para qué tanto tiempo y esfuerzo malgastados en quimeras como las de Onganía antes y Levingston ahora, si tenían a mano otro militar que había demostrado ser capaz de asegurar un orden estable, indiscutiblemente cristiano, manteniendo a los gremios lejos del comunismo? Como sostiene Samuel Amaral, en las circunstancias reinantes, “el enemigo del pasado empalidecía frente a los potenciales enemigos del presente”.

Finalmente, tras un nuevo estallido de protestas con epicentro en Córdoba que se conocería como “viborazo” y que contó con una importante presencia de la guerrilla, el 23 de marzo de 1971 la Junta desplazó a Levingston. Asumió en su lugar Alejandro A. Lanusse, quien retuvo la comandancia del Ejército: la emergencia dispuso de momento las resistencias a entregar una “nueva carta blanca” al hombre fuerte de la fuerza; el poder militar debía alinearse si aspiraba a salvar lo que se pudiera de la tormenta. Un alineamiento similar detrás de Perón se produjo mientras tanto en el peronismo: ya no habría más muestras de independencia en los gremios, que pidieron en masa el regreso incondicionado e inmediato de su líder. El fin de Levingston fue también el del neoperonismo, que desapareció de casi todos los distritos: con la única excepción de los Sapag en Neuquén, los caudillos locales se subordinaron al líder. Lo que quedaba de la Revolución Argentina sería un duelo personal entre Perón y Lanusse, con el telón de fondo de una revolución popular en ciernes.

### **Lanusse y el tiempo político: un intento tardío de contener la revuelta**

A comienzos de abril Lanusse proclamó el fin de las prohibiciones impuestas a los partidos en 1966 y el inicio de la normalización institucional, que incluiría elecciones sin restricciones. Éstas se confirmarían en agosto, en ocasión de una reunión entre el presidente y los representantes de la Hora del Pueblo. Pero el anuncio generó un eco moderado entre los dirigentes civiles, indiferencia en la opinión pública —ya ganada por el ánimo antimilitar— y abierta oposición de los sectores castrenses. Aunque la Junta lo avaló, los oficiales que aún velaban los sueños de grandeza de Onganía y Levingston se pronunciaron contra el “regreso al pasado” y empezaron a conspirar. A los pocos días hubo un primer intento de derrocar al gobierno, que se repetiría en mayo y en octubre de 1972. El temor a una radicalización derechista o a una crisis de las Fuerzas Armadas asedió desde entonces a Lanusse con tanto vigor como la amenaza revolucionaria. La indisciplina y un llamativo “asambleísmo” se instalaron en la oficialidad y perdurarían durante años.

La apertura estaba dirigida ante todo a romper el aislamiento del régimen, pero tenía también por objetivo aislar a los grupos armados y a los revolucionarios en general. De allí que, simultáneamente a su anuncio y al de la reapertura de las paritarias sin topes salariales, Lanusse to-

mara una serie de medidas para intensificar la represión sobre aquéllos: en junio promulgó la Ley de Represión del Terrorismo, que habilitó la creación de una Cámara Federal específica para esos delitos y la intervención de los jueces castrenses. Su plan de “apertura más represión legal”, sin embargo, llegó demasiado tarde para romper el cerco tendido por la acumulación de errores militares y la paciente articulación de demandas de todo tipo por parte del peronismo. El empuje inicial que Lanusse imprimió a su gestión pronto se fue debilitando. Además tuvo que lidiar con el mal humor castrense provocado por una violencia guerrillera cada vez más enfocada en objetivos militares, violencia que el gobierno no podía reprimir más duramente sin correr el riesgo de concitar el apoyo de amplios sectores sociales hacia la guerrilla.

Y es que esa violencia se había transformado en la pieza clave del ajedrez que Lanusse jugaba con Perón. Pese a la creciente eficacia de la represión (el número de detenidos y condenados se incrementó aceleradamente), las acciones de las organizaciones armadas también fueron en aumento. Ellas lograban incorporar cada vez más seguidores, reemplazando holgadamente a los que perdían. Y eso fortalecía su diagnóstico de la situación y desmentía el del gobierno: una vez instalado el clima “prerrevolucionario”, a mayor represión correspondería mayor resistencia y mayor prestigio de los rebeldes en la sociedad, frente a un régimen que parecía ser el responsable de todos los males. Perder militantes en acciones frecuentemente temerarias y mal preparadas no significaba, por lo tanto, un problema grave; por el contrario, abonaba la idea de una ola imposible de detener y protagonizada por militantes sacrificados. Y por eso mismo crecía en los cuarteles la impresión de que se estaba perdiendo la guerra, de que Lanusse era demasiado tibio y liberal, y de que era necesario volver a la “mano dura”. Una opinión que permitió a los sobredimensionados aparatos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de seguridad operar cada vez más autónomamente.

El debilitamiento del estado, resultante del régimen de alta inflación, encontró así un correlato fiel en la extinción progresiva del control público y legal de la violencia estatal, cuyo uso ilegal no era una novedad en modo alguno: basta recordar los fusilamientos de 1956. Lo novedoso fue la amplitud y la pretendida legitimidad de esas acciones, efectuadas desde un aparato estatal cuya autoridad y cohesión estaban sumamente comprometidas. La muerte de los guerrilleros presos en Trelew, en agosto de 1972, fue la evidencia más trágica de ese problema.

### La pasión según Trelew

El 15 de agosto de 1972 la guerrilla intentó una fuga masiva del penal de Rawson, donde se concentraba buena parte de los detenidos del ERP, FAR y Montoneros. Finalmente, sólo seis de sus máximos dirigentes lograron escapar en un avión a Chile. Otros 19 fueron detenidos en el aeropuerto local y trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar.



Rendición de los 19 prisioneros en las puertas del Aeropuerto de Trelew, agosto de 1972.

El 22 de agosto la Armada informó que, en un nuevo intento de fuga, habían muerto 16 de ellos, pero los tres sobrevivientes dieron testimonio de una masacre premeditada. La solidaridad que el hecho despertó en el peronismo (el PJ decidió velar a tres de los caídos en su sede central) y en la sociedad en general convenció a la guerrilla de su tesis sobre la “escalada”. Y llevó a los militares a sacar conclusiones que serían aún más perjudiciales para el futuro del país: dado que no se podía quebrar la voluntad de lucha de esa militancia en las cárceles, y que su muerte a plena luz del día producía mártires aún más peligrosos, la solución sería combatirla con el método del secuestro y la desaparición. ▀

Mientras tanto, Lanusse intentaba someter la Hora del Pueblo a las condiciones del así llamado Gran Acuerdo Nacional: los políticos, incluido Perón –ya admitido como parte en la negociación para asegurar una transición “controlada”–, debían aceptar ciertas reglas, entre

las que se destacaba el repudio a la guerrilla. De no ser así, las Fuerzas Armadas considerarían la apertura como “un salto al vacío” y la rechazarían. Lanusse además abrió un canal personal de negociación con Perón y le ofreció la restitución del cadáver de Evita (los militares de la Libertadora lo habían escondido durante más de veinte años en un cementerio italiano bajo una lápida falsa), la devolución de su grado militar y el cierre de las causas judiciales en su contra. Pero nada de eso convenció al líder exiliado: como resume Samuel Amaral, “ellos lo necesitaban pero no confiaban en él; él no confiaba en ellos ni los necesitaba”. Pesaba aún la apuesta por ganar tiempo que hacían los militares más antiperonistas y que chocaba con el temor inverso del propio Perón: la posibilidad de que su salud se deteriorase y ya no pudiera volver llevaba a aquéllos a dilatar las cosas y a éste a cerrar el cerco sobre sus adversarios por todos los medios que tenía a mano. Para colmo, la pretensión de crear una gran coalición antiperonista y eventualmente ser su candidato volvía a Lanusse poco confiable no sólo para Perón sino también para los demás partidos políticos —que no veían ventaja alguna en ser herederos de los militares— y para muchos militares que temían que aquél rifara la Revolución Argentina para pavimentar su carrera política. De allí que, pese a la fina ingeniería con que Lanusse intentó cimentar la coalición de sus sueños (en particular, la elección presidencial con doble vuelta, motivada por el cálculo de que el peronismo repetiría, como mucho, sus porcentajes de 1962 y 1965), las fuerzas no peronistas terminaron dispersándose.

Perón, desde lejos, tal vez creyó que la situación no era tan distinta de la que había vivido y enfrentado con éxito en octubre de 1945: un ejército dividido entre aceptar su liderazgo salvador o excluirlo, presionado por un movimiento popular desafiante —pero en última instancia más inocuo de lo que parecía— que insistía en que lo dejaran hacer su “revolución en paz”. Recordemos que entre 1944 y 1945 Perón no había logrado convencer a los empresarios de la existencia real de un peligro comunista que justificara sus concesiones al sindicalismo. Tal vez ahora fuera él quien no creía en la gravedad de esa amenaza, o acaso considerara conveniente para sus fines que todos los partidarios del orden la sintieran durante un tiempo en carne propia. El clima antimilitar era parte de esta fórmula: dado que no podía contar con los aliados de uniforme que necesitaba, no sólo para volver sino para estabilizarse en el poder, lo mejor era minar lo más posible el poder castrense.

Como fuera, un poco por su excesiva autoconfianza y otro poco por la escasa confianza que le inspiraban los dueños del poder —que final-

mente aceptaban compartirlo con él—, Perón siguió alimentando el fuego de la guerrilla: dio pasos en dirección contraria a lo que el GAN le reclamaba, incorporando a uno de los jefes de Montoneros, Rodolfo Galimberti, y a otros dirigentes de la Tendencia Revolucionaria, el ala izquierda del movimiento, al Consejo Nacional del Justicialismo.

Lanusse no ignoraba el significado de esas decisiones, pero no tuvo más remedio que aceptar el modo en que Perón deseaba hacer las cosas. Y es que, en su interpretación de la situación, el peor escenario posible era el que buscaban los duros del frente militar: que Perón muriera en Madrid sin haberle retirado su aval a los revolucionarios. Igual que muchos otros defensores del orden, Lanusse apostaba por su viejo adversario en contra de sus nuevos enemigos. Pero el proceso resultó ser mucho más costoso de lo que imaginaba y escapó por completo a su control y el de las Fuerzas Armadas.



### **La ambigüedad del “mito viviente”**

Lanusse reconoció demasiado tarde las complicaciones que generaba el “mito viviente” de Perón, la posibilidad de estar simultáneamente presente y ausente que le ofrecía el exilio, y que le permitía convocar las más diversas expectativas. “Le ha tomado el gusto al papel de mito [...] pretende seguir beneficiándose con la ambigüedad”, decía Lanusse en julio de 1972. Lo que no advertía era que, si bien los militares y el antiperonismo estaban pagando el precio de la proscripción y del sinnúmero de errores cometidos a su sombra, era ya demasiado tarde para corregirlos sin desatar aún mayores conflictos cuando el mito y la realidad se encontraran. Como explican Silvia Sigal y Eliseo Verón, cuando se quiso transformar el regreso del líder en la salida de la crisis política, él se reveló como su peor catalizador. 

La llegada de Perón al país, el 17 de noviembre de 1972, pareció abrir un resquicio para la pacificación: no hubo mayores tensiones con el gobierno y las movilizaciones populares no parecieron encaminarse hacia una escalada violenta; Perón se definió como “prenda de paz”, recibió a todos los que fueron a visitarlo y a todos les dijo lo que querían escuchar —incluso les prometió a los militares una “participación orgánica” en el futuro gobierno y en la “reconstrucción nacional”—. De las condiciones que Lanusse había querido imponerle, aceptó implícitamente una, la exclusión de su candidatura: al haber postergado su

regreso para después de la fecha límite de agosto de 1972 impuesta por la ley de convocatoria a elecciones a todos aquellos que quisieran presentarse como candidatos, no podría serlo. Pero lo hizo dejando en claro que, en última instancia, no necesitaba ceder en nada. Y eligió como sustituto a alguien que tampoco cumplía con ese requisito y era tan dependiente de él como afín a la Tendencia: Héctor J. Cámpora, hasta entonces su delegado personal. La designación de Cámpora reflejaba su disposición a privilegiar a Montoneros tanto como a su propio entorno, en el que ya se destacaba José López Rega, un ex policía que se había convertido en su secretario y en confesor espiritual de su esposa María Estela Martínez, y que estaba congregando a la ultraderecha del movimiento a su alrededor. La colaboración táctica entre dos facciones tan distantes se explica porque tenían en común, entre ellas y con Perón, el interés prioritario de relegar a los sindicatos. Cámpora había sido electo en desmedro de Antonio Cafiero, candidato de Las 62. Algo semejante sucedió con la integración del Consejo del PJ, en el que recién poco antes de las elecciones Perón aceptó el ingreso de los otrora laderos de Vandor: el secretario de la CGT, José I. Rucci, y el jefe de la UOM, Lorenzo Miguel. Lo mismo ocurrió en la composición de las listas de candidatos: los gremios recibieron sólo algunas vicegubernaciones y muchas menos bancas de las que esperaban. Perón se preparaba así para lidiar con un sindicalismo unificado y movilizado que había logrado retener su poder como “columna vertebral del movimiento” durante su exilio, frustrando todos los intentos de “desperonizarlos”. Y que, gracias a Onganía y Lanusse, había obtenido un férreo control de las obras sociales, convertidas ahora en una enorme fuente de recursos. No había a sus ojos nada más amenazante.

La fórmula Cámpora-Solano Lima, de todos modos, fue aceptada por Lanusse. Lo único que le importaba era salir del paso, atravesar el desfiladero serpenteante entre un golpe “ultra” y la revolución. En el ínterin, Perón volvió a Europa. No tomó parte de la campaña ni de las elecciones del 11 de marzo de 1973, que, al igual que las de 1963, se dieron en un contexto de escaso o nulo consenso sobre la legitimidad del poder en juego. Para muchos, la votación permitía retomar la “revolución inconclusa” del primer peronismo. Para otros, dar inicio a una mucho más amplia. Para algunos más, detener los afanes revolucionarios de éstos y aquéllos. No hubo acuerdo posible entre esas posiciones, y no sólo porque Perón ya había entrado en la fase final de su vida sino porque tampoco tenía una cabal idea de la virulencia de las fuerzas que había desatado para lograr su objetivo, ni de los pasos necesarios para

**ponerlas en caja. Esto permite comprender que el retiro de los militares del poder, que por entonces parecía clave para resolver todos los problemas del país y superar todas las confusiones e incertidumbres, se trocara pronto en su opuesto: una vez hecho a un lado ese enemigo definido y aislado, lo que había parecido claro y evidente se volvería oscuro y se complicaría enormemente.**

## 5. De la “primavera de los pueblos” ai imperio del terror

La organización armada Montoneros y la Tendencia Revolucionaria del peronismo ocuparon durante el corto gobierno de Cámpora el centro de la escena política. Pero con el retiro de los militares a los cuarteles, se había impuesto una nueva ley de hierro: las disputas de poder se resolverían de allí en más en el seno del peronismo, lo que en el contexto de debilidad institucional imperante implicaba la puja violenta entre las facciones contrapuestas del movimiento. En 1974, la muerte de Perón agravaría enormemente el vacío de poder, la pérdida de control sobre la economía y el choque de las fuerzas en pugna. Y la presidencia de Isabel sólo aceleraría esta descomposición de las instituciones democráticas, con su aval explícito al terrorismo de ultraderecha y cada vez más duros planes de ajuste, que de todos modos estuvieron lejos de contener la puja distributiva y la inflación. En este contexto, mientras las guerrillas retomaban la acción armada creyendo que con ello podrían reabrir el proceso revolucionario, los militares, contra lo que se había pensado sólo tres años atrás, serían llamados por gran parte de la sociedad a ejercer una vez más el poder y restablecer el orden. Tarea que encararían las tres fuerzas con planes represivos y refundacionales mucho más ambiciosos que todos los intentados hasta entonces.

### “Cámpora al gobierno, Perón al poder”

Cámpora se impuso en las elecciones con el 49,5% de los votos. Balbín, que ocupó el segundo puesto con sólo el 21%, renunció a la segunda vuelta. Fue la gota que faltaba para que la salida electoral se convirtiera en una derrota absoluta para Lanusse y las Fuerzas Armadas. El Frente Justicialista de Liberación con que el peronismo con-

currió a las urnas (reunía al Movimiento de Integración y Desarrollo de Frondizi, a los conservadores populares y a algunos democristianos y socialistas) no había levantado un programa revolucionario. Pero los discursos de Cámpora sí lo hicieron, anticipando la entronización de un “poder popular” y el fin de la opresión “militar oligárquica”. En su campaña tuvieron un protagonismo central la Juventud Peronista y la organización Montoneros. Y ésta terminó de convertirse en un fenómeno de masas durante su transcurso: miles de jóvenes se agolparon bajo sus banderas en los actos públicos y firmaron las fichas de afiliación con las que intentaría tallar en la interna del PJ. El poder que había permitido al peronismo retomar el gobierno tras diecisiete años de proscripción, decía Montoneros, era el de la movilización popular canalizada y conducida por la guerrilla.



Héctor Cámpora saluda a la multitud desde el balcón de la Casa de Gobierno, el día de su asunción, 25 de Mayo de 1973. Presidencia de la Nación.

El día de la asunción, el 25 de mayo, esos miles de simpatizantes movilizados humillaron a los militares en las calles y exigieron la liberación de los presos políticos en una demostración de fuerza que, al día siguiente, fue legalizada por el Congreso cuando todas las bancadas votaron una amnistía irrestricta. En la asunción, la presencia de Salvador Allende, presidente chileno por el Frente Popular, y de su par cubano, pareció ratificar que el peronismo gobernaría contra el orden constituido.

Las urnas arrojaron otras lecciones: desde el llano, el peronismo había recuperado la mayoría electoral que disfrutara en sus años dorados. Y, contra lo previsto, la extinción del desarrollismo (que, obligado a abandonar la sigla UCRI, se había dividido en el MID y el Partido Intransigente) no benefició a la UCR balbinista, que sumó menos votos que antes de 1955 y no obtuvo ninguna gobernación, sino a la fuerza hasta entonces proscripta. En suma, el escrutinio probó que sólo Perón podía darle legitimidad electoral al ejercicio del gobierno. Aunque pronto se vería que eso no alcanzaba, y nunca había alcanzado, para conquistar la democracia.

La victoria del peronismo fue tan demoledora que impuso una nueva ley de hierro a las disputas de poder: a partir de entonces, ellas se resolverían en su seno, lo que, a falta de reglas de juego y consensos internos, significaba: en la puja abierta entre sus facciones. Cámpora fue rebasado por esta puja desde la puesta en funciones de su gestión: el gabinete se integró de forma más o menos equilibrada, con un buen número de peronistas tradicionales sin poder propio, los sindicatos reclusos en el Ministerio de Trabajo, López Rega en Bienestar Social y la Tendencia Revolucionaria en Interior, Cancillería y la UBA. Pero la Tendencia tenía la iniciativa y quiso demostrarlo empleando los mismos recursos que había usado con los presos: ocupó una gran cantidad de reparticiones públicas, se atrincheró y exigió el reconocimiento de los funcionarios que "la juventud movilizada" promovía y respaldaban "los fierros", impugnando a los que pretendían designar los ministros de cada área. No hizo falta más para que los bandos que circunstancialmente habían coincidido en el objetivo de reponer a Perón en el poder chocaran abiertamente. Bajo la Revolución Argentina se habían enfrentado, dentro y fuera del estado, distintos proyectos revolucionarios, más o menos "nacionales" y "populares" según los casos. Ahora la lucha política se ordenó según otra lógica: cada vez quedaba más en claro quiénes eran los auténticos revolucionarios. Pero ello no les permitió ganar apoyo en los sectores cuyos intereses decían defender. Al contrario, fueron aislándose cada vez más de ellos en su enfrentamiento con

otro conjunto de actores, que rápidamente olvidaron sus promesas de cambio para coordinar sus esfuerzos en dirección contraria, incluso a través de los medios contrarrevolucionarios más extremos.

Perón buscó, en principio a través de Cámpora, lanzar iniciativas moderadoras de estos conflictos: en el terreno económico impulsó un pacto social para contener la puja distributiva y estabilizar la economía; en el político, un pacto entre partidos orientado a promover lo que llamó una "democracia integrada" y a crear consenso en torno a las reglas de juego. Este pacto político, sellado en un abrazo histórico con Balbín (sintomáticamente, hasta entonces ni siquiera se conocían personalmente), implicó un compromiso interpartidario de defensa de las instituciones que tenía dos claros destinatarios: los militares y las guerrillas. En cuanto al "pacto social", se tradujo en un compromiso firmado entre el ministro de Economía, José Ber Gelbard, la CGT y la CGE (luego sería avalado por el resto de las entidades empresarias), que congelaba las paritarias por dos años, postergando la esperada recuperación salarial, y daba prioridad a la lucha contra la inflación (que había llegado ya al 58,5% en 1972 y en los primeros meses de 1973 se aceleró todavía más) por medio del simultáneo congelamiento de precios y tarifas, para aumentar la inversión e impulsar el crecimiento. Los sindicatos aceptaron a regañadientes. El ministro de Trabajo, que había anticipado un reajuste de salarios del 100%, debió desdecirse y convencer a sus representados de que aceptaran un módico 20%.



### **La concertación requería condiciones que estaban ausentes**

El programa económico del peronismo se inspiraba en el que habían aplicado los países europeos a partir de los años cincuenta: contener la puja distributiva y llevar adelante políticas de estímulo a la inversión y el consumo que permitieran un crecimiento sostenido y socialmente integrador. Pero las condiciones reinantes en la Argentina en los años setenta diferían mucho de las de la Europa de posguerra. En primer lugar, se requerían fuertes organizaciones sectoriales e instituciones públicas eficaces y ampliamente legitimadas. Dado que el acuerdo dependía de que los actores sectoriales limitaran sus demandas inmediatas confiando en mejorar su situación futura, obviamente no sería posible si dentro de las organizaciones de intereses que firmaban los acuerdos, o en otras que buscaran representar a los mismos sectores, surgían voces que los rechazaban; y mucho menos si a eso se

sumaba la desconfianza hacia el futuro a consecuencia de la inestabilidad política o la persistencia del déficit público. En esas condiciones, los actores priorizarían la obtención de satisfacciones inmediatas, aunque fueran efímeras. Para disuadirlos, el gobierno peronista debía frenar en seco la inflación y hacer efectivas las penalidades contra quienes violaran el congelamiento de precios. Pero el contexto político convulsivo le impidió hacerlo. Y a eso se sumó, desde octubre de 1973, el impacto del alza internacional del petróleo sobre los precios internos y los insumos importados. Los empresarios empezaron a reducir la producción, previendo que, al fracasar el pacto, se sincerarían los precios. A raíz de esto cayó la inversión y hubo desabastecimiento y mercado negro. Por lo tanto, crecieron las protestas de las bases contra las cúpulas que habían pactado y frenaban los reclamos, acicateadas por los sectores combativos y de izquierda. ■

Desde un comienzo estuvo claro que el principal obstáculo para el éxito de las medidas moderadoras serían los conflictos internos del peronismo. Hecho que se pudo constatar ya en el trámite de algunas leyes esenciales, como las que debían proveer recursos para eliminar el déficit: la Ley Agraria, que establecía cargas e incluso la expropiación de las tierras improductivas, no generó tanta resistencia en los propietarios rurales (que, de todos modos, gracias al aumento de la producción y de los precios internacionales, tenían momentáneamente asegurada su rentabilidad) como en las bancadas oficiales, que impidieron su aprobación. Estos problemas se manifestarían dramáticamente en otro hecho, del que se había esperado la más plena comunión: el regreso definitivo de Perón al país, que se concretaría el 20 de junio. Los Montoneros se prepararon para disputar con la CGT el protagonismo en el acto masivo que daría marco al evento, y para el que se montó un escenario en las cercanías del aeropuerto de Ezeiza. No contaban con que también deberían enfrentarse con las bandas de ultraderecha movilizadas por López Rega y sus secuaces que, a diferencia de la CGT, no tenían bases propias que oponer a las de la Tendencia, por lo que sólo recurriendo a las armas podrían controlar la movilización, o bien frustrarla. Y eso fue lo que sucedió: poco después de que aterrizara el avión que traía a Perón, empezaron los disparos entre las bandas parapoliciales y Montoneros. Los hombres de López Rega ganaron la partida: generaron la estampida de la multitud desarmada, y en medio de la confusión secuestraron, torturaron y asesinaron a decenas de militantes del bando contrario.

La movilización social había atravesado, desde el Cordobazo, un largo ciclo de expansión incorporando cada vez más ámbitos y actores. Pero desde la masacre de Ezeiza, suerte de reverso de los sucesos de 1969, el efecto combinado del temor y la desconfianza hacia los proyectos de cambio comenzó a sentirse en todos los terrenos. Los grupos cristianos ofrecen un buen ejemplo. Muchos sacerdotes, militantes de grupos católicos y docentes y estudiantes de escuelas de esa confesión se habían sumado a la Tendencia, incluso a Montoneros. Pero desde que reformistas y revolucionarios empezaron a ser blanco de la ultraderecha peronista, la tenue frontera que los había conectado se convirtió en una grieta marcada a sangre y fuego. Mientras que los reformistas volvieron sobre sus pasos y por temor o decepción se reconciliaron con las posiciones conservadoras y priorizaron la unidad y el orden de la institución, los más comprometidos y combativos quedaron atrapados en la lógica de la guerrilla y se fueron aislando cada vez más de las bases. Por su parte, las posiciones integristas, minoritarias en principio en las jerarquías, brindaron a los prelados conservadores, ahora ampliamente mayoritarios, un refugio seguro y argumentos para enfrentar la amenaza que creían tener ante sí: la división de la iglesia por obra de la infiltración subversiva. El fenómeno se repetiría en los sindicatos, en las instituciones públicas y hasta en las asociaciones barriales.

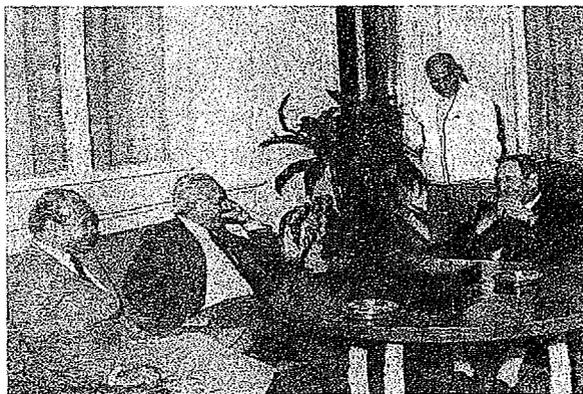


Aeropuerto de Ezeiza. Arribo de Perón en noviembre de 1972. Archivo General de la Nación.



Bosques de Ezeiza, 20 de junio de 1973. Archivo General de la Nación.

Con Perón en el país, no había ya razón alguna para que no ejerciera directamente el poder. El tiempo de Cámpora se agotó: el 12 de julio, pese a la oposición de la Tendencia, Cámpora y su vicepresidente presentaron sus renunciaciones y se convocó a nuevas elecciones para el 23 de septiembre. Se inició entonces una nueva puja en torno a quién acompañaría a Perón en la fórmula, puja reveladora de los temores que existían sobre su salud y de los disensos sobre cómo y en qué dirección se procesaría su eventual sucesión.



Reunión de Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, líder de la oposición y presidente de la Unión Cívica Radical, el 14 de diciembre de 1973; también están presentes Vicente Solano Lima, del Partido Conservador y ex vicepresidente de Cámpora, y José López Rega, secretario privado de Perón y ministro de Bienestar Social. Secretaría de Prensa y Difusión de la Nación.

La Tendencia propuso nuevamente a Cámpora, los sindicatos a Rucci y unos pocos, más prudentes, al líder radical Ricardo Balbín, con vistas a dar solidez y continuidad al acuerdo interpartidario. Tal vez Perón podría haber optado por este último, pero la situación lo volvía un modo casi seguro de entregar el poder a un no peronista e incumplir su promesa de que su “único heredero sería el pueblo”. Como fuera, la fórmula interpartidaria halló también demasiadas resistencias entre los peronistas y los radicales, y reveló la escasa comprensión de los riesgos que se corrían, por lo que terminó sucediendo lo peor: triunfó López Rega y se optó por María Estela Martínez, conocida ya como “Isabelita”.

Perón sería electo junto a su esposa por nada menos que el 62% de los votos. Había logrado finalmente su cometido: volver a la presidencia gracias a una votación masiva. Pero en última instancia descubriría que también él, al igual que Lanusse, había consumido demasiado tiempo en alcanzar la meta, y que ya no tendría el mínimo necesario para estabilizar la situación.



El presidente Perón y la vicepresidenta en el Teatro Colón, 25 de Mayo de 1974. Archivo *Clarín*.

Cerrado el ciclo signado por la limitación de la soberanía popular, no sucedería nada parecido a la recomposición de la legitimidad del orden político sino más bien lo contrario.

## La muerte de Perón y el fin de la revolución peronista

Perón había cambiado drásticamente de aliados en las semanas previas a la elección: se recostaba ahora en los gremios para que, junto con López Rega, lo ayudaran a controlar a Montoneros. En respuesta a su actitud, dos días después de la histórica votación un comando montonero asesinó a Rucci. Si hasta entonces había existido alguna ambigüedad de Perón con respecto al uso de la violencia legal e ilegal contra la Tendencia, tras ese hecho dejó de haberla. En los meses posteriores permitió que los recursos estatales y los hombres de las fuerzas de seguridad y del Ejército nutrieran las bandas de ultraderecha. La más poderosa de ellas, la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), liderada por su ministro de Bienestar Social José López Rega, asesinaría entre fines de 1973 y comienzos de 1976 a cerca de un millar de militantes y dirigentes de izquierda. Montoneros, en represalia, intensificó sus operaciones armadas, aunque formalmente no levantó la tregua declarada en mayo. Cosa que sí hizo el ERP, que la había aceptado tácitamente: en enero de 1974 atacó un cuartel del Ejército en la localidad bonaerense de Azul. Atentado que Perón aprovechó para enviar al Congreso una reforma del Código Penal que castigaba duramente las "actividades subversivas" y restablecía los métodos de Lanusse. También fueron prohibidas varias publicaciones de izquierda.

Los funcionarios ligados a la Tendencia comenzaron a ser desplazados de sus puestos. En enero fue el turno del gobernador bonaerense, sustituido por un hombre de la CGT. En marzo le tocó al cordobés, expulsado del cargo por un golpe policial. La ruptura era inevitable y se produjo el 1º de mayo de 1974: en la concentración realizada en Plaza de Mayo por el Día del Trabajador, las banderas de Montoneros ocuparon un espacio preeminente y sus consignas se impusieron sobre las demás voces: "¿Qué pasa general, que está lleno de gorilas el gobierno popular?", coreaban. Perón respondió con violencia, repudiando a "esos estúpidos que gritan" y reivindicando el rol de la CGT, de modo que Montoneros se retiró de la plaza y la dejó semivacía. El presidente aceleró entonces la remoción de funcionarios de ese sector. Pero más urgente que eso, como expuso en su discurso, era reemplazar a Montoneros en su capacidad de movilizar a las masas, o de frenarlas. Y ese reemplazo sólo podían ofrecerlo los gremios: los caudillos de provincia, que contaban con bases electorales propias y por lo tanto con una legitimidad de masas que contraponer tanto a la izquierda como a los sindicatos, no habían llegado a conformar un actor partidario cohesionado como para pesar en este terreno.



Titular de *Crónica*, martes 25 de septiembre de 1973.

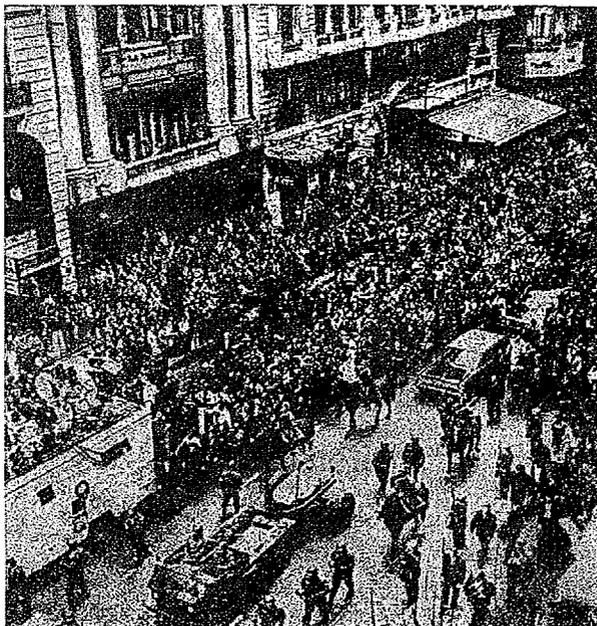
En pago por la contribución que se le pedía ahora a la CGT, el gobierno había hecho votar en noviembre de 1973 una nueva Ley de Asociaciones Profesionales que reforzaba el poder de las conducciones nacionales frente a las seccionales y las comisiones internas. Pero nada resultó suficiente porque otro hecho complicó la sintonía que se estaba buscando: el pacto social terminó de naufragar en esos meses. Los sindicatos habían hecho lo posible por respetarlo, pero desde que los precios comenzaron a descontrolarse (la inflación fue sólo del 4% en la segunda mitad de 1973, pero alcanzó el 24,4% en 1974) habían sido desbordados por la presión de las bases, deseosas de “actualizaciones” salariales. Ello llevó a la cartera laboral a usar cada vez más frecuentemente la conciliación obligatoria. Y los jefes gremiales, viendo la oportunidad de lograr lo que se les había negado en mayo de 1973, aumentaron el precio de su colaboración: convocaron para el 12 de junio de 1974 una concentración masiva en la Plaza de Mayo, con la intención de demostrar que el gobierno seguía controlando “la calle” y de plantearle al mismo tiempo sus postergadas demandas. Como fuera, su ingreso al selecto círculo de la toma de decisiones sólo les sirvió para comprobar de primera mano cómo se escapaba totalmente de control el encadenamiento de alzas salariales, inflación y deterioro de los ingresos reales.

---

### La "teoría del cerco"

La izquierda peronista debió recurrir a argumentos forzados para justificar las decisiones de Perón en su contra. Dejó así en evidencia la problemática convivencia entre el mito y la realidad de su liderazgo, y lo difícil que le resultaba romper con él sin aislarse de las bases peronistas. La "teoría del cerco" se usó, en este marco, para atribuirle a una conspiración la responsabilidad que no se quería cargar sobre las espaldas del viejo líder. En algunos casos se culpaba al "entorno" y a la figura que lo controlaba, el "brujo López Rega". En versiones aún más creativas se culpaba a la CIA y al imperialismo. ▀

Puede decirse por tanto que la muerte de Perón, el 1º de julio de 1974, ocurrió en las peores condiciones: agravó inconteniblemente el vacío de poder, la pérdida de control sobre la economía y el choque de las fuerzas en pugna.



Cortejo fúnebre del presidente Juan Domingo Perón, *La Razón*, año LXX, núm. 23 473, 2 de julio de 1974.

Isabel, su sucesora, carecía de las capacidades mínimas para enfrentar estos problemas, aunque de todos modos obtuvo cierto respaldo de la dirigencia política y sindical peronista, carente de una mejor alternativa y aterrorizada por la cercanía del abismo. Circunstancia ésta que pasó desapercibida para Montoneros, que dio por muerto al PJ y las instancias "formales" del movimiento y se lanzó a disputar la conducción de las masas acusando a Isabel de haber "traicionado" al general. Al mes siguiente Montoneros proclamó abiertamente el reinicio de la lucha armada y poco tiempo después anunció su regreso a la clandestinidad. Desde entonces se desplegó el recurso a la violencia sin límite alguno.

Mientras tanto, inspirada por López Rega, la presidenta intentó transformarse en barrera contra el caos frente al resto de los actores y la opinión pública, congraciándose en particular con quienes más podían ayudarla a lograr esa conversión: las Fuerzas Armadas y los grandes empresarios. De allí que no dudara en ignorar a la oposición radical y a los sectores representados por Gelbard y la CGE: era el precio a pagar para poder ofrecer, a quienes deseaba como sus nuevos aliados, el ajuste económico y el combate inclemente de la "infiltración subversiva" que tanto reclamaban. Las listas de condenados a muerte por la Triple A comenzaron a circular en los medios. Muchas de esas amenazas se cumplieron, sobre todo contra figuras que no pertenecían a la guerrilla sino que en su momento habían expresado expectativas más compartidas de cambio: fue el caso del ex rector de la UBA Risieri Frondizi, el sacerdote tercermundista Carlos Mugica y el diputado de la Tendencia Rodolfo Ortega Peña. Los cadáveres acribillados de intelectuales, artistas y sindicalistas combativos pretendían aleccionar a quienes en algún momento habían simpatizado con ellos y que, con cada día que pasaba, más se replegaban en la esfera privada y el silencio.



### **Purgas en la universidad**

La educación en general y las universidades en particular fueron blanco privilegiado del terrorismo de derecha. Desde 1966 la vida universitaria era considerada por unos y otros como "trinchera" de una batalla que la excedía. Cuando Rodolfo Puiggrós asumió el rectorado de la UBA, la rebautizó "Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires" e impulsó las llamadas "cátedras nacionales" sin mediar concursos ni ningún otro criterio académico, desplazando a profesores considerados derechistas, "liberales" o "cientificistas". Meses después, cuando Perón asumió la

presidencia de la nación, Puiggrós fue reemplazado y las purgas se ensañaron con la izquierda y beneficiaron a los peronistas ortodoxos, católicos y ultranacionalistas. A partir de la asunción de Isabel, esas purgas se transformaron en una generalizada y cada vez más violenta persecución de los "infiltrados".

La presidenta y su inspirador ministro encontraron, sin embargo, que la tensión reinante era tan propicia para que perdieran los frágiles apoyos recibidos por herencia o circunstancial necesidad, como inconveniente para que pudieran ganar otros más acordes con sus objetivos. La relación con los gremios fue el mejor ejemplo de ello. El sindicalismo acordó terminar con lo que quedaba del Pacto Social, pero lo hizo por razones opuestas a las del vértice gubernamental: a poco de morir Perón, los dialoguistas de la CGT habían sido desplazados por quienes priorizaban los intereses corporativos a toda costa, liderados por Lorenzo Miguel, quien, como sostiene Liliana De Riz, en el ejercicio de un vandomismo ortodoxo reclamó la reapertura de las paritarias para contener a las bases y reducir la influencia de la izquierda. Simultáneamente, en conjunción con el gobierno, se dieron otros pasos concretos en este último terreno: la influencia de la Tendencia y del clasismo en los sindicatos disminuyó drásticamente. Los antiguos referentes de la "CGT de los Argentinos" —Ongaro, Tosco y Salamanca— perdieron entre mediados de 1974 y principios de 1975 el control de sus gremios y buena parte de sus activistas fueron expulsados de las organizaciones. No pocos de ellos serían víctimas de atentados de la Triple A. Las huelgas originadas por presión de las bases disminuyeron notablemente desde entonces, pero sólo para dar paso a demandas bastante similares, motorizadas por las cúpulas.



### **Las Tres A frente al sindicalismo combativo**

La seccional de la UOM de Villa Constitución era un caso emblemático de sindicalismo combativo y de la capacidad contestataria de los militantes obreros cuando contaban con un entorno social movilizado. En 1974 habían resistido con éxito un plan de despidos en la principal empresa de la ciudad, Acindar, gracias a la cohesión del activismo gremial y la solidaridad de los comerciantes, empleados y vecinos. Pero en marzo de 1975 las Tres A se tomaron revancha: "Irrumpen las fuerzas de la Policía Federal con grupos parapoliciales y toman todo el complejo

industrial [...] detienen como a 300 o 400 compañeros [...] y hay una huelga que dura como dos meses por nuestra libertad [pero] los compañeros tienen que volver a la fábrica [...] las Tres A [amenazan a los activistas]: si no renunciaban los iban a matar [...] después empezaron a matar compañeros”.

Las citas están tomadas de Alberto Piccinini, testimonio al Archivo de Historia Oral. 

No fue necesario que pasara mucho tiempo, por tanto, para que el equivoco entendimiento entre Isabel y los sindicalistas se evaporara. Gelbard había renunciado en octubre. Su sucesor aprobó un incremento de salarios que autorizó trasladar a los precios, buscando congraciarse tanto con empresarios como con gremialistas, con lo cual se descontrolaron las restantes variables: tipo de cambio, tarifas y demás precios. Las presiones de la CGT crecieron y el ritmo inflacionario se aceleró. En mayo de 1975, Isabel y López Rega quisieron dar un golpe de timón y nombraron ministro de Economía a Celestino Rodrigo, quien adoptó una terapia de shock para imponer un ajuste más duro y colocar a los gremios a la defensiva. La devaluación esta vez fue del 100%, el aumento de tarifas aún mayor y la suba de los salarios muy inferior. Las protestas sindicales se desbordaron: la reacción espontánea de las bases tomó desprevenida incluso a la CGT, que, con el país ya paralizado, decidió llamar a una huelga general de 48 horas. Todavía sobrevivía una capacidad de contestación que el gobierno había pasado por alto. Debido a ello tuvo que volver sobre sus pasos y acceder a reabrir las paritarias. Su última esperanza era que los empresarios ayudaran a sostener una política orientada a favorecerlos. Pero las patronales firmaron aumentos de hasta el 200%, seguras de poder transferirlos inmediatamente a los precios. Cuando Isabel advirtió la trampa en que había caído, ya era tarde. Anunció que no aceptaría esos acuerdos, pero la movilización sindical volvió a torcerle el brazo: con la Plaza de Mayo repleta de obreros, debió desprenderse de Rodrigo y de López Rega y rendirse ante la CGT.

Corría el mes de julio de 1975. Isabel pidió licencia por cinco semanas. La presidencia provisional fue asumida por Ítalo Lúder, titular del Senado y representante del ala moderada del justicialismo. Las esperanzas de muchos dirigentes peronistas y radicales se centraron en que Isabel no retomara sus funciones y con este fin se presentaron varios pedidos de juicio político. Se barajó también la posibilidad de formar un gobierno cívico-militar de emergencia o adelantar las elecciones.

Pero las probabilidades de encontrar una salida institucional no eran muchas: había que resolver problemas cada vez más acuciantes y persistían los disensos entre facciones partidarias y entre éstas y los sindicatos. Los gremios se habían adueñado del poder cuando Isabel terminó de perderlo: así lo reveló la designación en Economía de Antonio Cafiero, quien, tras un efímero e inadvertido intento de reeditar el pacto social, se resignó a administrar la escalada de salarios, precios, tarifas y tipo de cambio con la expectativa de ganar tiempo. En octubre, cuando Isabel volvió de su retiro, la mayoría de los peronistas (en particular los "verticalistas") prefirió que retomara sus funciones. La presidenta intentó una vez más, con un nuevo ministro de Economía, ejecutar el ajuste necesario para seducir a empresarios y militares. Pero las medidas fueron insuficientes para detener la inflación, aun cuando permitieron que los salarios siguieran perdiendo la carrera contra ella. La espiral de descomposición de la autoridad gubernamental era ya incontenible. Y prácticamente todos los protagonistas se ocuparon de adoptar las posiciones que creían más convenientes para esperar el golpe.

### **El descenso al infierno**

Entre marzo de 1975 y marzo de 1976 la inflación fue del 566,3%. Se esperaba, por lo tanto, que en cualquier momento estallara la hiperinflación y se produjera la total extinción de la moneda. El déficit público en 1975 también batió todos los récords: alcanzó el 12,6% del PBI. El desempleo superó el 6% a fines de ese año, otro máximo histórico. Con las reservas prácticamente agotadas, el país estaba a punto de dejar de pagar su deuda externa. Todos estos eran patentes indicadores de la extinción de la autoridad del estado sobre la vida económica y los comportamientos sectoriales: los actores llevaban al extremo la defensa de sus intereses inmediatos o buscaban sacar ventaja circunstancial de la situación, y en conjunto producían un creciente perjuicio colectivo. La política tendía así a extinguirse como espacio institucional de convivencia y mostraba su crudo rostro como imposición violenta de unos sobre otros. Para probarlo, también el uso de la fuerza terminó de escapar al control estatal, o al menos a toda regulación legal: en diciembre de 1975 se contabilizaron 62 muertes violentas por razones políticas, en enero ascendieron a 89 y llegaron a 105 en febrero; la mayoría eran cadáveres que aparecían por las mañanas acribillados en zonas periféricas de las principales ciudades del país.

En este contexto, no es para asombrarse que, contra lo que se había pensado sólo tres años atrás, los militares fueran llamados a retomar el poder. Convocatoria ésta que no supondría una mera reedición del rol que habían cumplido en el pasado, ya que implicó un grado extremo de autonomía militar y de cesión de soberanía por parte de la sociedad. El llamado a que pusieran orden, por los medios que fueran, supuso una auténtica “carta blanca” para actuar, por un tiempo indefinido, en defensa de un “bien común” igualmente indefinido. Los jefes militares lo entendieron muy bien y dejaron correr el tiempo hasta que ese consenso se consolidara y borrara de la memoria el no tan lejano momento en que habían fracasado y habían sido expulsados del gobierno, de mala manera, por esa misma sociedad.

Por supuesto que este consenso a favor del golpe militar no tuvo la misma intensidad ni tampoco el mismo contenido para las distintas capas sociales y grupos de opinión. Como puso en evidencia el episodio de las paritarias de 1975, la gran burguesía financiera, industrial y terrateniente, que desde 1973 había estado a la defensiva, hizo uso de la inflación –cuyas reglas conocía mejor que nadie– para abortar todos los intentos de ordenamiento económico que pudieran implicar la permanencia del peronismo y de los “políticos populistas” en el gobierno. Había llegado la ocasión de la revancha y no la dejaría pasar: esperaba imponer sus preferencias económicas, y también políticas, y terminar con el populismo, al que responsabilizaba de todos los males, aunque no estaba muy claro qué medidas específicas eran necesarias para combatirlo. Y, por eso mismo, se volvió más importante el aspecto represivo de su apuesta: lo primero era asegurar el triunfo de la contrarrevolución.

Muchos otros actores terminarían coincidiendo circunstancialmente con esta posición. Y hacia el final, incluso las bases del peronismo lo hicieron. La marcha acelerada hacia la hiperinflación equivalía a una muerte anunciada para los empresarios y comerciantes pequeños y medianos. No muy distintos temores agobiaban a los gremios, que en su breve paso por el vértice gubernamental habían advertido que ya no podían competir con el alza de precios y que por lo tanto sus medios de acción sectorial y política iban camino a agotarse. De todo aquello sólo podían esperar grandes males: ser barridos por la izquierda sindical o por la implosión del peronismo, en ambos casos con riesgo de muerte para el modelo sindical. De allí que para los sindicalistas, y también para muchos políticos peronistas, permitir que Isabel siguiera administrando hasta el final esa muerte lenta no tenía mayor atractivo. ¿No era mejor que los militares se hicieran cargo?

Ni siquiera quienes aspiraban a convertir la debacle gubernamental en ocasión para un nuevo y definitivo avance revolucionario estuvieron en contra de que eso sucediera. Porque hacían un cálculo inverso al de los gremialistas: rememorando la situación vivida entre 1972 y 1973, estimaban que, ante una mayor represión abierta y una más directa exposición de los militares, más fácil les resultaría contraponer a dos bandos inconciliables, pueblo y antipueblo, y alentar a las masas a seguirlos. La intensificación de sus acciones armadas entre 1975 y principios de 1976 se fundó en esta lógica: la guerrilla estaba convencida de que el breve interregno democrático había sido una fuente de equívocos y esperaba que las cosas volvieran a verse claras y a favorecerla. No tuvo en cuenta la marcada diferencia existente entre la etapa de auge de la movilización social y la que ahora se vivía: la sociedad no dejaba de retraerse; la gran mayoría favorecía por temor o decepción una salida conservadora que asegurara un mínimo orden; el peronismo había dejado de ser el gran articulador de la contestación y las promesas de cambio; y, contra lo que el ERP y Montoneros creían de sí mismos, ellos no podían sustituirlo. La intensificación de las acciones armadas respondía a la convicción de que se aproximaba la batalla decisiva. Pero, si es que había habido alguna, ya había quedado atrás y los revolucionarios la habían perdido.

Pese a su creciente aislamiento político, todavía encontrarían miles de militantes dispuestos a participar de acciones destinadas a golpear simultáneamente a las fuerzas represivas y a los "enemigos políticos y de clase": ataques a bases militares, secuestros y asesinatos de empresarios, sindicalistas y políticos, "ajusticiamiento" de oficiales militares y de las fuerzas de seguridad, etc. A comienzos de 1976, las muertes en su haber sumaban 576. Mientras imaginaban que con ellas arrinconaban a sus enemigos y alentaban a las masas a acompañarlos en el "salto cualitativo" futuro, profundizaban su descrédito y reforzaban en amplios sectores la convicción de que era necesario terminar de una vez con esa izquierda violenta e incorregible. Agotaron así la solidaridad que se habían ganado en la etapa previa, mientras perdían a sus militantes más valiosos, ya que muchas de sus operaciones fueron resonantes fracasos militares.



### **La última batalla de la guerrilla argentina**

El ataque a Monte Chingolo, en diciembre de 1975, fue la última batalla de la guerrilla argentina, y se concretó a sabiendas de que el Ejército conocía al detalle el plan de ataque. El líder del ERP, Mario Santucho,

estimó que aun un fracaso militar proveería un triunfo político: demostraría la capacidad de movilización y la voluntad de lucha de los guerrilleros, forzaría a las Fuerzas Armadas y de seguridad a emprender una represión abierta en zonas urbanas, y polarizaría la escena política. “Cincuenta y pico de muertos... muchos cuadros políticos, [aunque] se supo que estaba entregada, [...] se reivindicó como un éxito político”, recuerda Eduardo Anguita (Archivo de Historia Oral). El mismo Santucho expresaría aún más claramente este temerario optimismo al producirse el golpe: a través del órgano de prensa del ERP, *El Combatiente*, lanzó una convocatoria que no tenía posibilidad alguna de prosperar: “Argentinos, a las armas. Un río de sangre separará a los militares del pueblo argentino. El gobierno militar no tiene posibilidades de derrotar al movimiento de masas [...] da comienzo a un proceso de guerra civil abierta que significa un salto cualitativo en el desarrollo de nuestra lucha revolucionaria”.

Las citas de Roberto Santucho están tomadas de *El Combatiente*, núm. 210, 30 de marzo de 1976. 

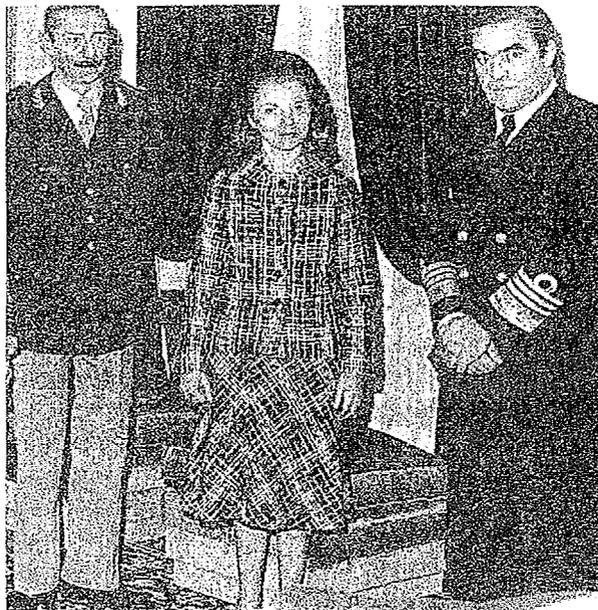
Fue así que, aunque Montoneros y el ERP ocupaban el centro de la atención con sus acciones espectaculares, su capacidad de incidir en el proceso político decayó rápidamente. Su trágico error, fruto en alguna medida de una interpretación exageradamente favorable de sus éxitos anteriores, resultaría funcional a la maduración del consenso contrarrevolucionario en el campo militar, que hacia marzo de 1976 proveyó a los mandos el sustento necesario para poner en marcha un proyecto político refundacional de amplísimos alcances.

En poco más de tres años, junto a los cambios en el consenso externo, se había producido una mutación radical en los consensos internos de las Fuerzas Armadas. Aquel “se van / se van / y nunca volverán” de marzo de 1973 había calado hondo en las filas, pero en direcciones bien distintas. Lanusse y su sector habían extraído del fracaso de la Revolución Argentina la enseñanza de que involucrarse directa y prolongadamente en el manejo de la cosa pública era algo que los militares no podían ni debían volver a intentar. De ello resultaría una actitud “profesionalista y prescindente”. Otro sector, el que en su momento había acompañado a Levingston, y que con el triunfo de Cámpora llegó a controlar el Ejército, extrajo conclusiones opuestas: las políticas liberales y represivas habían llevado al fracaso a la revolución anunciada en 1966, revolución que todavía estaba pendiente y que sólo triunfaría si lograba ser auténticamente nacional y popular. De

allí que se promoviera un acercamiento a la Tendencia (del que nació el Operativo Dorrego: un plan de actividades conjuntas de militares y Montoneros en villas de emergencia) para restañar las heridas abiertas desde 1955 entre "pueblo y ejército". Pero esta idea fue tan efímera como el propio Cámpora. Desde su caída había tomado el control del Ejército, y de la Armada por intermedio de Emilio Eduardo Massera, un integrismo nacionalista que también pretendía hacer participar a las fuerzas en el nuevo experimento peronista, pero de la mano de su ala derecha. Ésta, obviamente, no era una posición compartida por el grueso de la oficialidad. En ella comenzó a madurar, por lo tanto, bajo el formato del "profesionalismo prescindente" pero con un ánimo cada vez más alejado del que le había dado Lanusse, una nueva versión de la tesis de "los guardianes últimos del orden", que en cierto modo replicaba la evolución que habían vivido los azules desde el comunicado 150 hasta el proyecto autoritario de Onganía, pero en una variante mucho más radicalizada: las fuerzas serían prescindentes y no se involucrarían en la política civil, pero sólo mientras la nación no corriera el riesgo de caer en manos de los "subversivos". O hasta que pareciera que ello era factible. En ese caso, habría llegado el momento de una intervención militar mucho más intensa que todas las anteriores: una que no se limitaría a "poner orden" ni a excluir a un sector civil "desviado" del ejercicio del poder político, y ni siquiera a cambiar esta o aquella política para "acelerar el desarrollo", sino que curaría al cuerpo de la nación, enfermo de pies a cabeza, inyectándole por la fuerza el antídoto contra sus males.

Ésta fue la postura que adoptó el Ejército cuando Isabel designó para conducirlo a Jorge Rafael Videla, una figura hasta entonces auténticamente prescindente de la vida política, incluso de los conflictos internos, y que debido a lo primero hizo pensar al Ejecutivo que no se plegaría a las conjuras golpistas, y debido a lo segundo persuadió a sus colegas uniformados de que lo haría sin ánimo de favorecer a ninguna facción interna en particular, y con el solo fin de asegurar la unidad de acción de las Fuerzas Armadas.

Era fácil advertir la coincidencia entre la idea que iba imponiéndose en los cuarteles y el diagnóstico que simultáneamente había madurado en los círculos empresarios, eclesiásticos y políticos conservadores. Reflejo del hecho de que esas elites experimentaban en conjunto y en carne propia la crisis de gobernabilidad y la amenaza guerrillera.



La presidenta María Estela Martínez de Perón, junto al general Jorge Rafael Videla y al almirante Emilio Eduardo Massera, titulares del Ejército y de la Armada, respectivamente. *Clarín*, 12 de septiembre de 1975.

Tal vez la novedad más significativa de este consenso contrarrevolucionario en las Fuerzas Armadas fue que se debilitaron las inclinaciones —nacidas en los años treinta y hasta entonces muy extendidas— a favor del proteccionismo industrial y el estatismo. Estos dos principios habían inspirado todavía a la Revolución Argentina, que le dio cierta continuidad a las políticas aplicadas por el peronismo y el desarrollismo. Pero ahora, en desmedro de la tesis que asociaba desarrollo y seguridad, ganó crédito la idea —que ya estaba llevando a la práctica Augusto Pinochet en Chile tras el golpe contra Allende de 1973— de que el progreso se conquistaría, junto con el orden, cuando se eliminaran las regulaciones al comercio, a las relaciones laborales y a la circulación de capitales, y las responsabilidades del estado se limitarían a administrar justicia y dar seguridad y estabilidad a la moneda.



### **El auge del modelo neoliberal en el mundo y su impacto en la región**

A mediados de los años setenta, el *establishment* librecambista local y sus ahora numerosos y entusiastas seguidores en los cuarteles encontraron sustento, para las ansias refundacionales que pretendían poner en práctica en el estado y la economía, en los discursos que habían ganado prestigio político y académico en el mundo desarrollado. Se trataba de pronunciamientos contrarios al Estado de Bienestar, al que se consideraba el origen de los múltiples problemas que asolaban a las democracias y las economías capitalistas: sobrecarga de demandas, inflación, inestabilidad creciente y supuesta debilidad ante el avance mundial del comunismo. Para combatirlos era necesario implementar reformas "liberalizadoras" que limitaran las áreas de injerencia estatal y dejaran en manos de los mercados la distribución de recursos y oportunidades en la sociedad. 

En el caso argentino, esta visión neoliberal permitió reinterpretar el largo ciclo de inestabilidad y fracaso de los sucesivos experimentos militares como el fruto de una persistente incapacidad para reflatar un orden económico previo, estable y exitoso, caracterizado por la debilidad de los sindicatos, por la fortaleza de las relaciones de autoridad en todos los ámbitos y por una "democracia limitada". Toda la historia del siglo XX argentino podía verse, desde el escenario que ofrecía la crisis de 1976, como una saga de frustraciones que de todos modos habían abonado el terreno para que, en su hora más trágica y decisiva, hiciera eclosión un espíritu de renacimiento, una auténtica "comunidad nacional" que arrancaría de cuajo los problemas y recuperaría las tradiciones y políticas que nos habían hecho grandes como nación.

Con todo, este proyecto neoliberal distaba de ser hegemónico. No contaba siquiera con apoyos civiles y militares consistentes y coexistía con los remanentes de otros proyectos no del todo abandonados: el desarrollista autoritario que pretendía emular a Brasil, el ordenancista liberal que imaginaba abrirse más o menos rápidamente a la participación de los partidos, e incluso el corporativo integrista que soñaba con tomar revancha del fracaso de 1969. La convivencia entre ellos no fue para nada sencilla, y se complicó aún más en un sistema institucional que militarizó por completo la administración del estado y, al hacerlo, trasladó los disensos internos a todas las áreas y niveles de la gestión pública.

Otra conclusión que los militares de 1976 extrajeron de los fracasos de sus antecesores fue que no debía delegarse el poder gubernamental en un jefe retirado ni mucho menos en políticos o técnicos civiles, sino que los uniformados debían ejercerlo directa y orgánicamente trasladando la cadena de mandos y la “comunidad de objetivos de las tres Fuerzas Armadas” a la gestión de gobierno. Porque se suponía que los uniformados en actividad, debido a su control de los medios armados, eran los únicos capaces de imponer autoridad y eran también los únicos garantes confiables de los objetivos refundacionales. Así volvieron a atribuirse una supuesta inmunidad contra los virus del desorden y el carácter faccioso que asolaban al país. Atribución que coincidió con la fe ciega de muchos civiles, después de los tres años de inestabilidad que habían desdibujado el recuerdo de los anteriores tropezones castrenses.

Lo cierto es que, salvo en el “plan antisubversivo” —concebido y puesto en marcha antes de la toma del poder y avalado monolíticamente por los altos mandos de las tres fuerzas—, en todos los demás asuntos el programa de gobierno del Proceso de Reorganización Nacional inaugurado por el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 tenía tanto de radical como de vago y genérico. Hecho que no se resolvió sino que se agravó con el tiempo. Sus metas, en particular las institucionales y las económicas, eran tan ambiciosas como ambiguas. En este sentido, saltan a la vista las diferencias con las dictaduras iniciadas en 1964 en Brasil y en 1973 en Chile: aquí no hubo cohesión programática inicial ni tampoco disciplina y liderazgo militar para contener y procesar los desacuerdos.



Portada de *Última Hora*, 24 de marzo de 1976.

Para colmo, la cohesión lograda en torno al plan antissubversivo fue cualquier cosa menos una plataforma para construir una autoridad estatal reglada y cohesionada. La creencia de estar protagonizando una "cruzada contra el demonio", y su correlato de indiferencia a las reglas del derecho, con que se concebía el combate contra los "subversivos" y sus cómplices o simpatizantes, subordinaban y condicionaban la forma de asumir el rol castrense, y por extensión el modo en que se concebían todos los demás asuntos. Como ya dijimos, para los militares la decadencia argentina demostraba a las claras que la sociedad estaba enferma. El factor patógeno eran unos actores que actuaban como virus y no sólo eran incorregiblemente malignos sino que habían perdido toda condición humana. Por esa razón debían ser extirpados, para que el mal no se propagara. La destrucción purificadora y el disciplinamiento por el terror adquirieron, en consecuencia, fines mucho más extensos que los hasta entonces otorgados a la represión. Dado que ya no se trataba simplemente de imponer nuevas reglas de juego sino de cambiar a los actores y eliminar a muchos de ellos, el instrumento adecuado no era un estado regido por el derecho, ni siquiera por uno muy represivo. El estado debía subordinarse a las necesidades de la contrarrevolución o, como se decía entonces, de la "refundación de la república", y sólo volvería a ser confiable como instrumento del orden una vez alcanzada esta purificadora empresa destructiva. Se entiende entonces que el régimen de 1976 pergeñara una relación con el aparato público y la sociedad en la que se reservaba por largo tiempo un margen muy amplio de arbitrariedad: el poder se ejercería a través del estado, pero también por encima y por debajo de él.

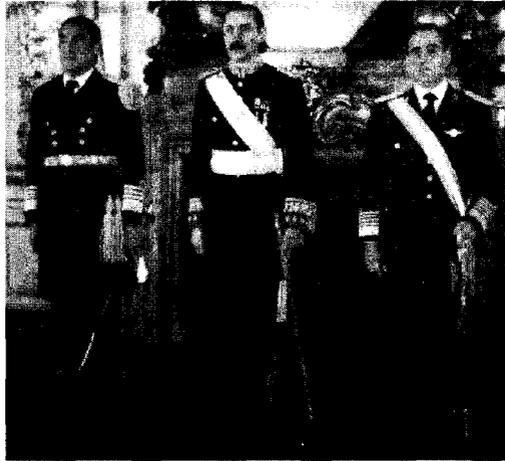
## **6. 1976-1979: la *hybris* procesista, el fin de una época**

El clima de “guerra interna” que precedió al golpe, y que las guerrillas, pese al aislamiento y la derrota que para ese entonces enfrentaban, siguieron fomentando, dio el marco para que la Junta Militar pusiera en marcha su plan de “aniquilamiento de la subversión”, en la que incluyó a una larga lista de actores, armados y desarmados. Dicho plan contó con un amplio consenso en las filas militares. No sucedió lo mismo con otras políticas del Proceso. En el área económica, si bien Martínez de Hoz obtuvo aval para aplicar una fuerte reducción de los salarios, liberalizar el sistema financiero y reducir el gasto social, chocó contra resistencias infranqueables a sus planes de privatización y reforma de las leyes laborales y sindicales. El resultado sería una política inconsistente y a la larga insostenible. También la política exterior generó serios conflictos internos: el presidente Videla buscaba mostrarse moderado para lograr el apoyo de Estados Unidos a sus planes de apertura política, mientras que Massera, jefe naval, y los generales denominados “duros” no ocultaron su deseo de postergar esa apertura y recurrir a la fuerza no sólo para enfrentar opositores internos sino para resolver diferendos limítrofes y la cuestión de soberanía de las Islas Malvinas. Dada la pasividad imperante en la sociedad, las críticas y sanciones de las democracias occidentales serían la única barrera contra la soberbia destructiva de las Juntas.

### **La “guerra antisubversiva” y las críticas internacionales**

La Junta Militar que tomó el poder en marzo de 1976, integrada por Jorge R. Videla en representación del Ejército, Emilio Massera por la Armada y Ramón Agosti por la Fuerza Aérea, dedicó sus dos primeros años de gobierno a aplicar su “plan antisubversivo”,

que además de fines represivos contemplaba metas políticas (reeducar y reorganizar a los actores sociales y políticos), incluso económicas e internacionales (reordenar y relanzar el aparato productivo y ubicar a la Argentina a la vanguardia del mundo “occidental y cristiano” en su lucha contra el comunismo). Así, de acuerdo con la idea de que la “subversión” era la síntesis de los problemas que afectaban al país, todas las iniciativas de gobierno se organizaron en esta etapa en relación directa o indirecta con dicho plan.



Emilio Massera, Jorge R. Videla y Ramón Agosti, integrantes de la Junta Militar, 1976. Archivo General de la Nación.

En sus aspectos específicos, la represión se inspiró en experiencias de otros países del Tercer Mundo, en particular la que convirtieron en doctrina las fuerzas de ocupación francesas en Argelia. Pero su elaboración fue esencialmente doméstica y abrevó en aquéllas sólo en la medida en que sus enseñanzas fueran funcionales a las conclusiones que los militares argentinos habían ido extrayendo de su propia experiencia, en especial de lo vivido en los últimos años, cuando se convencieron de que las detenciones legales, los juicios y las penas convencionales eran insuficientes para quebrar la capacidad de resistencia del enemigo dentro y fuera de las prisiones. De allí que la solución consistiera en organizar un “ejército clandestino” de represores compuesto por miembros de las Fuerzas Armadas en actividad e integrantes de las bandas paramilitares que venían operando desde los tiempos de López Rega, en la creación de grupos de tareas dependientes de los jefes militares de cada

El plan demostró ser, en principio, pavorosamente eficaz. En el primer año produjo, según la CONADEP, más de 3500 desapariciones. Al año siguiente cerca de 3000, y todavía alrededor de un millar en 1978. Un número muy alto correspondió efectivamente a dirigentes, miembros raso y simpatizantes de las organizaciones revolucionarias armadas y desarmadas. La capacidad de resistencia de Montoneros y del ERP, de los partidos de extrema izquierda, de las organizaciones de base de la Tendencia y de las bases combativas de los sindicatos se agotó rápidamente y sus estructuras colapsaron. Las guerrillas buscaron mantenerse activas (mediante atentados y ataques cada vez más indiscriminados, que les permitieron sumar poco más de un centenar de bajas en las Fuerzas Armadas y de seguridad) a la espera de la anticipada nueva ola de movilización de los sectores populares. Su renuencia a replegarse le facilitó las cosas a la represión, dado que dejó expuestos a sus miembros a los secuestros y siguió alimentando el “clima de guerra” que justificaba las operaciones de “limpieza” ante la opinión pública.



### **“Cálculos de guerra”**

En febrero de 1977, en un reportaje concedido a Gabriel García Márquez (*L'Espresso*, febrero de 1977), Mario Firmenich hizo el siguiente “cálculo de guerra”: “Nos preparamos a soportar, en el primer año, un número de pérdidas humanas no inferior a 1500 bajas [...] si lográbamos no superar ese nivel [...] tarde o temprano venceríamos [...] sucedió que nuestras pérdidas han sido inferiores a lo previsto. En cambio [...] la dictadura se ha desinflado [...] mientras que nosotros gozamos de un gran prestigio entre las masas y somos en la Argentina la opción política más segura”. En su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar”, que redactó poco antes de ser secuestrado, el escritor Rodolfo Walsh, devenido encumbrado dirigente montonero, denunció que “Las Tres A son hoy las tres Armas, y la Junta que ustedes presiden [...] la fuente misma del terror que ha perdido el rumbo”. En exacta oposición, el periodista Mariano Grondona había escrito poco antes que era “la vocación por la autodestrucción” de los guerrilleros lo que facilitaba su aniquilamiento (*Carta Política*, núm. 33). El ERP decidió replegarse recién en mayo de 1977, cuando sus máximos dirigentes ya habían muerto y sólo unos pocos cientos de sus miembros podrían escapar del país. Poco después se disolvió. En cambio, los líderes montoneros en el exilio intentaron una contraofensiva en 1979, suponiendo que la crisis de la dictadura era inminente y llevaría inevitablemente

a las masas a seguirlos. La operación terminó con el secuestro de varios cientos de guerrilleros mientras intentaban volver al país. La crisis de la organización se agravó por los rumores sobre contactos de sus líderes con Massera, quien mantenía con vida en las mazmorras de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) a varias decenas de rehenes para que lo ayudaran a hacer lo que ellos y sus jefes ya habían intentado: adueñarse de la conducción del peronismo.



Portada del núm. 33 de la revista *Carta Política*, dirigida por Mariano Grondona, julio de 1976. ▀

El método también había sido concebido para facilitar objetivos políticos. Al ocultar los cruentos crímenes que se estaban cometiendo o atribuirlos a bandas que operaban fuera del control del gobierno y que éste tardaba en someter (para lo que necesitaba, tal como el propio régimen explicaría, todo el apoyo interno y externo que pudiera dársele), la Junta esperaba evitar o al menos moderar las críticas internacionales por la violación de los derechos humanos, como las que estaba recibiendo de los Estados Unidos y Europa el régimen de Pinochet, que había ejecutado abiertamente y sin juicio a cientos de “subversivos”. Ya la vez se fomentaba la disposición a colaborar de la prensa, la dirigencia y la opinión pública locales.

Los militares argentinos, en general, no se tomaban muy en serio el interés de los países centrales por los derechos humanos en el Tercer Mundo. Primero, porque habían aprendido de instructores de esos paí-

ses la importancia de combatir la amenaza comunista y las técnicas de represión que estaban aplicando con ese fin. Segundo, porque lo consideraban una muestra superficial y pasajera de los “pruritos liberales” que tornaban débiles a las democracias occidentales frente al enemigo y que habrían de acallarse una vez demostrada la eficacia del método. No advertían que la defensa de los derechos humanos era algo más que una “moda”: reflejaba un giro en el modo en que los Estados Unidos en particular y las potencias occidentales en general encaraban su disputa con el bloque soviético luego de los fracasos de Vietnam y Argelia. Para cambiar su suerte, Occidente debía recuperar su “superioridad moral” sobre los regímenes comunistas y ello exigía demostrar que la democracia y el estado de derecho estaban de su lado. Los militares golpistas tampoco vieron que la aplicación de esos métodos en un país con un nivel considerable de desarrollo de los derechos ciudadanos y contra personas en gran medida pertenecientes a las clases medias urbanas y educadas, por lo tanto con medios para reclamar dentro y fuera del territorio, sería difícil de ocultar. Ni advirtieron que la Argentina era poco importante en términos estratégicos para las potencias occidentales y que pocos creían que fuera posible aquí una revolución socialista. La diplomacia de los Estados Unidos, que había apoyado sin dudarle el golpe contra Allende en Chile, creyendo que allí sí se corría ese peligro, evaluó la situación argentina de modo muy distinto, como el fruto de la crisis de una fuerza populista desangrada entre el fascismo y el terrorismo de izquierda y en cualquier caso incapaz de encabezar una revolución social. De allí que Washington se mostrara comprensivo hacia los problemas de desorden y terrorismo que debían enfrentar los militares locales y, simultáneamente, poco propenso a avalar su pretensión de ocupar un rol decisivo en la caliente frontera contra enemigos comunes y de merecer por ello un apoyo incondicional.



### **La diplomacia estadounidense frente a las violaciones a los derechos humanos**

La diplomacia de los Estados Unidos pronto pasó del “apoyo a distancia” a la crítica activa de la Junta Militar argentina. En 1976 el presidente de ese país era todavía el republicano Gerald Ford, y el secretario de Estado Henry Kissinger, un feroz anticomunista que había promovido el golpe de Pinochet. Precisamente por las críticas que aquello le había merecido y por la creciente vigilancia que ahora ejercía la mayoría demócrata

dei Congreso, sus colaboradores lo convencieron de que no repitiera la historia en el caso argentino: porque “habría mucha sangre” y muy pronto la Junta sería “mucho menos popular con la prensa” (así lo revela un documento desclasificado del Departamento de Estado estadounidense). A fines de 1976, Kissinger tuvo una entrevista con el canciller argentino también reveladora: le advirtió que las críticas por derechos humanos aumentarían y que les convenía terminar con las “operaciones” antes de enero de 1977, fecha en la que el demócrata James Carter asumiría la presidencia de los Estados Unidos. Con Carter, efectivamente, el caso argentino pasó a ser el contraejemplo de lo que se había hecho en Chile en 1973: la encargada de derechos humanos del Departamento de Estado, Patricia Derian, visitó tres veces el país para comprobar la gravedad de la situación y advertir a la Junta que, con los datos con que contaban, bastaba para considerarlos “violadores sistemáticos” y aplicarles sanciones, que pronto se hicieron efectivas: reducción o suspensión de la ayuda militar, rechazo a la solicitud de créditos y votaciones en la ONU que colocaron al gobierno argentino en una situación similar a la de Cuba y la Unión Soviética (países que acompañaron en cambio a la Junta en esas votaciones, superando el abismo ideológico que los separaba de ella, pues también estaban acusados de ser “violadores sistemáticos”).



José A. Martínez de Hoz y Henry Kissinger, durante la visita de éste a la Argentina. Archivo *Crónica*. ▀

Si bien estas críticas fueron rechazadas por los mandos militares en pleno, no tardaron en generar disidencias entre ellos. Disidencias que sacaron a la luz los serios problemas de diseño institucional del Proce-

so: la militarización de la administración con distribución equitativa y dispersa de cargos entre oficiales activos de las tres fuerzas (le correspondían dos ministerios a cada fuerza –salvo los de Economía y Educación, asignados a civiles–, y cada una nombró funcionarios subalternos en los ministerios encabezados por las otras; igual criterio se aplicó en los canales de televisión, las radios, los sindicatos, las obras sociales y las empresas públicas, en tanto la mitad de las gobernaciones quedó para el Ejército y el resto se dividió entre la Armada y la Aeronáutica), y la intervención de la Junta en todos los asuntos que considerara fundamentales y en la aprobación de la legislación, utilizando la regla de unanimidad, complicaron enormemente la resolución de asuntos en los que hubiera disenso. Para colmo, los mandatos de tres años establecidos para los comandantes, el presidente y otros cargos, y los procesos “electivos” a través de los cuales los altos mandos resolverían su reemplazo, los ascensos e incluso las decisiones sobre asuntos sensibles de gobierno, convirtieron en regla el asambleísmo, que, como adelantamos en el capítulo 4, se venía extendiendo desde hacía tiempo en las Fuerzas Armadas, y por el cual la cadena de mandos funcionaba cada vez más frecuentemente “de abajo hacia arriba”.

A través de esos mecanismos, los militares del Proceso creían poder evitar que sus funcionarios priorizaran los intereses personales a los institucionales. A ello le otorgó una gran importancia, además, el propio Videla, favorable a mantener los equilibrios y evitar cursos de acción que fueran resistidos por sectores de las fuerzas. Aunque, además de ejercer la presidencia, Videla mantendría la jefatura del Ejército mientras durara la “guerra antisubversiva”, su control de la tropa era relativo, una circunstancia que Massera aprovechó para atraer a una parte del generalato, con miras a desplazarlo del poder. En síntesis, el Proceso desplegó un peculiar despotismo que, a la vez que concentraba poder en las Fuerzas Armadas, desconcentraba internamente su capacidad de decidir y ejecutar políticas, de modo tal que debilitaba las jerarquías y la propia unidad del aparato estatal. El resultado fue un monstruo de muchas cabezas, propenso tanto a actuar sin control ni coordinación como a quedar inmovilizado por instancias de bloqueo interno.

Estas dos clases de problemas necesariamente afectaron el decisivo terreno de la política exterior. Ya desde un principio se plantearon tres posiciones al respecto, reflejo de opciones muy distintas sobre la inserción internacional que debía darse el régimen y los planes políticos domésticos, que no tardaron en chocar. En primer lugar, impulsados por Videla y su segundo en el Ejército, Roberto Viola, los “occidenta-

listas” buscaban aliarse a Washington para obtener el apoyo político y financiero necesario para la reinserción del capitalismo argentino en los mercados mundiales y la del país como potencia regional en el concierto de los grandes del hemisferio. A sus ojos, revertir la decadencia exigía, ante todo, terminar con décadas de relativo aislamiento, aunque ello no sólo implicara preservar la aparente moderación del plan represivo sino también realizar gestos “humanitarios”, como permitir la salida progresiva del país de los más de 8000 presos políticos que llegó a haber, o evitar los ataques contra personas demasiado conocidas. Para Videla en particular, contar con el apoyo estadounidense era esencial para neutralizar los planes que tejían Massera y algunos generales para desestabilizarlo.

La segunda opción, con amplios apoyos en el generalato y consenso en las otras fuerzas, promovía un “regionalismo defensivo” no sólo ante la amenaza comunista sino ante las llamadas “plutocracias decadentes”: apuntaba a aprovechar la presencia en la región de otros regímenes militares para concretar la ansiada “zona de influencia argentina” que haría contrapeso a los Estados Unidos. Con ese fin se promovió una regionalización de largo aliento de la represión. El plan Cóndor, que incluyó la coordinación con los servicios de inteligencia de Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Brasil para secuestrar a exiliados de esos países en la Argentina o a argentinos en esos países, fue el resultado de esta peculiar versión del “latinoamericanismo”.

Por último, los sectores nacionalistas de las tres fuerzas, y en particular el jefe de la Armada, impulsaban un “aislacionismo guerrero” que consistía en integrar el plan represivo a una estrategia más amplia de uso de la fuerza para resolver conflictos donde la diplomacia había probado ser insuficiente, entre ellos los diferendos limitrofes con Chile y la disputa por Malvinas con el Reino Unido. Embanderándose en estas “causas nacionales” el Proceso podría conquistar un respaldo de masas perdurable e irrefutable que haría innecesario el apoyo externo e incluso el de los actores locales organizados: a éstos no les quedaría más remedio que someterse a los designios castrenses para poder ocupar algún lugar en la Argentina del futuro. Extender la guerra antsubversiva era parte de este recetario, hasta el extremo de usar sus métodos para resolver problemas internos del régimen: fue así que Massera, aliado con el jefe del poderoso Cuerpo I de Ejército, el general Carlos Suárez Mason, pergeñó atentados contra funcionarios de Videla y políticos afines a él. La desaparición del embajador argentino en Venezuela, el radical Héctor Hidalgo Solá, en julio de 1977, fue el caso más resonante,

pero no el único: la facción de Massera tomó por costumbre secuestrar a personas prominentes cada vez que Videla viajaba al exterior. Eso hizo con Alfredo Bravo, dirigente socialista del gremio docente carente de toda filiación revolucionaria, cuya desaparición repercutió en la prensa internacional justo en el momento en que el presidente de facto lograba que Carter lo recibiera en Washington para intentar un acuerdo entre ambos gobiernos.

Los conflictos permanentes entre estas tres posturas tuvieron manifestaciones públicas aún más resonantes. En algunos casos, el bloqueo mutuo permitió frenar cursos de acción peligrosamente destructivos. Eso fue lo que sucedió con la disputa por el Canal de Beagle, que hizo eclosión en diciembre de 1978: el generalato y Massera lograron imponer la "opción militar", y el ataque a Chile estaba ya iniciándose cuando Videla, escudándose en la presión de los Estados Unidos y del Vaticano, logró que se reabrieran las negociaciones con la mediación del Papa. En otras ocasiones el efecto fue el desgaste del régimen, como ocurrió con la larga tratativa para autorizar una inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país, negociación que se prolongó desde 1977 hasta 1979. Todos estos acontecimientos tuvieron finalmente enorme importancia para la suerte del Proceso y revelaron su condición más profunda: tanto por sus características como por la inédita debilidad y docilidad de la sociedad argentina, la dictadura sólo hallaba freno a sus desvaríos y atropellos en poderes externos. Algo que quedaría trágicamente demostrado en 1982.

### **La "paz procesista" y sus efectos sobre una sociedad en rápida mutación**

La debilidad y la docilidad de una sociedad hasta poco antes efervescente e ingobernable puede explicarse por la conjunción del frenesí de violencia e inflación que se vivió entre 1974 y 1976 y por su lógica consecuencia: una muy prolongada y extendida renuncia de los actores sociales al ejercicio de su soberanía, e incluso a juzgar críticamente lo que los gobernantes consideraran necesario hacer para "corregirlos". El acompañamiento civil al método represivo es prueba elocuente: la dirigencia política, empresarial y religiosa e incluso la judicatura, los medios de comunicación y buena parte del sindicalismo fueron al menos comprensivos ante las crueldades de la "guerra". Dando continuidad a la actitud que algunos habían asumido en 1975, la dirigencia po-

lítica en general aceptó que durante un buen tiempo no correspondía “hacer política” y guardó silencio; según los casos, se mostró parcial o completamente de acuerdo con los argumentos oficiales sobre la represión: era una guerra sin cuartel iniciada por la “subversión” y en la que estaba en juego la existencia misma de la nación, por lo que no cabían consideraciones morales ni jurídicas. Y por cierto que el método facilitaba mucho las cosas al respecto: no había que explicar qué era exactamente lo que así se apoyaba, dado que podía aducirse que no se sabía con precisión lo que sucedía; ello resultaba de gran ayuda, tanto para las elites como para gran parte de la opinión pública, que sabía lo suficiente como para no querer que se hablara de ello. Se estableció así un pacto de silencio entre el régimen de facto y la sociedad.

Mantener la “apariencia” de una guerra en las calles también resultó útil en este sentido. Por esa razón, durante 1976 uno de los recursos más utilizados por los militares para eliminar el cuerpo de los desaparecidos fue simular enfrentamientos, y más de un millar de secuestrados figuraron como “muertos en combate”. Recién desde mediados de 1977 empezaron a ocultarse sistemáticamente los cuerpos de las víctimas arrojándolos al Río de la Plata y al mar, o enterrándolos en tumbas NN. Y es que, a partir de entonces, los militares quisieron demostrar que habían “ganado la guerra” y que ya era hora de “ganar la paz”.

A esta nueva iniciativa también se plegaron con entusiasmo los medios de comunicación y los voceros de distintos actores sociales, proyectando al futuro la creencia de que los militares esta vez lograrían sus objetivos, que no habría vuelta atrás y que por lo tanto convenía colaborar con ellos y adecuarse a los parámetros que estaban imponiendo. Argumentar que quienes criticaban a las Fuerzas Armadas les “hacían el juego” a los enemigos del país fue parte de este consenso cada vez más sólido y programático. Ello permitió movilizar los sentimientos nacionalistas heridos por sucesivas frustraciones pero para nada debilitados: unirse era el camino y quienes no lo entendían así revelaban ser portadores del virus que amenazaba con hacer naufragar al país en su hora más dramática. Este razonamiento se convirtió en un discurso articulado cuando el régimen contestó las críticas externas denunciando una “campaña antiargentina” orquestada por medios de prensa, organismos de solidaridad e incluso algunos gobiernos occidentales, lo que probaba que el comunismo ya los había penetrado. La “contracampaña” tendría gran éxito y eco en la prensa y la opinión pública locales, al menos hasta 1980.



Revista *Para Ti*, mayo de 1978.

La recuperación de la “tranquilidad cotidiana” mientras la maquinaria del terror continuaba operando en las sombras, más o menos fuera de la vista del público, tuvo un doble impacto sobre la sociedad, y dio lugar a actitudes muy variadas pero convergentemente orientadas a acomodarse al escenario creado por los “logros” del Proceso. Después del silencio inicial, se popularizaron expresiones como “por algo será” y “algo habrán hecho” para justificar los secuestros. La frontera entre los “subversivos” y el resto de los argentinos dividió también a los “activistas políticos” –versión invertida del romántico “militantes” utilizado años antes– del grueso de la sociedad, que entusiastamente se despolitizó para acceder a los beneficios que dispensaba el régimen. Y es que, concluida la emergencia, el gobierno de facto pudo ofrecer un orden que incluía valiosos “premios”, como la mencionada normalidad cotidiana, ausente durante largos años, e incluso ciertas libertades y oportunidades de progreso personal. En 1978 comenzaron a regresar al país muchos artistas que se habían exiliado antes o poco después del golpe, muchos de ellos perseguidos por la Triple A, y se reinsertaron en los circuitos del teatro, el cine y la televisión. En forma más extendida, las clases medias y altas disfrutaron de una nueva ola de modernización del consumo facilitada por la apertura comercial y el dólar barato. De lejos, el más sintomático de estos “premios” con que el régimen invitaba a los argentinos a participar del nuevo orden fue el Mundial de Fútbol, realizado en el país a mediados de ese año.



Jorge Rafael Videla recibe al plantel argentino luego de la victoria en el Mundial de Fútbol. Archivo General de la Nación.



Portada del diario *La Nación*, 26 de junio de 1978.

Los ánimos más virulentos dentro de esta “paz procesista” eran los de quienes compartían el programa disciplinador. Entre ellos cabe desta-

car los de la jerarquía católica. A mediados de 1976, cuando fueron asesinados varios sacerdotes y seminaristas —entre ellos, el obispo Enrique Angelelli en un accidente fraguado—, la jerarquía eclesiástica guardó silencio. Recién cuando entre fines de ese año y comienzos de 1977 desaparecieron una decena de curas y monjas, impulsada desde afuera (en este caso, desde el Vaticano), la Conferencia Episcopal pidió moderación. Pero el pedido provocó una dura respuesta oficial y no se repitió. Los militares sabían muy bien que la brecha que habían abierto a sangre y fuego entre la nación y sus enemigos invertía la situación que habían padecido al comienzo de la década, y que muy pocos se animarían a desafiarlos a riesgo de quedar aislados o, peor aún, de compartir la suerte que esperaba a los “subversivos”.



### **La campaña antiargentina**

“La campaña antiargentina” demostró toda su eficacia durante el Mundial de Fútbol del 78. Los periodistas extranjeros pudieron registrar el apoyo al régimen y el aislamiento que padecían las familias de los desaparecidos, por ejemplo, a través de la exposición masiva de calcomanías con la leyenda “Los argentinos somos derechos y humanos” en automóviles, medios de transporte público, oficinas, etc. Esa cohesión en torno al régimen estaba sesgada por el silencio a que eran condenados los disidentes; pero no era del todo falaz y ni siquiera artificial. La obtención de la copa por parte de la selección nacional dio rienda suelta a expresiones espontáneas: muchos intelectuales, artistas y políticos se sumaron a los festejos masivos, y en algunos casos fueron más allá de lo deportivo, reconociéndole a la Junta el mérito por haber hecho posible “la fiesta de todos”. Para dar sólo algunos ejemplos procedentes de círculos ajenos al procesismo militante, el ya nombrado Ernesto Sabato se declaró conmovido por esa “prueba de madurez, de nobleza, de movilización popular plena de generosidad y desinterés”; y el historiador Félix Luna festejó “las multitudes delirantes, limpias, unánimes [...] es lo más parecido que he visto en mi vida a un pueblo maduro”. En lo que sería, tiempo después, la más atrevida (y por ello confirmatoria) versión de este consenso, María Elena Walsh publicó en *Clarín* en agosto de 1979 una nota titulada “Desventuras en el País-Jardín-de-Infantes”, en la que protestaba por la censura pero reconocía “que las autoridades hayan librado una dura guerra contra la subversión y procuren mantener la paz social”.

# DEFENDE SU ARGENTINA

**Diga Pablo Marín:** "La opresión y el desmoronamiento de la sociedad, tradicional en la Argentina, somete a cada individuo en un mundo y aun en una guerra".

**Diga Osvaldo Yanoni:** "La Argentina es un infierno".

**Diga La Masera:** "En la Argentina los chicos no pueden caminar por la calle. En la Argentina se mata a la gente por la calle".

Son sólo algunos ejemplos de los muchos que podrían mencionarse. Son los que sustituirán sus voces para cambiarlos, para agraciarnos a través de una campaña antargentina. Por esto y en respuesta a esto,

hemos recopilado direcciones de clubs de cocina por estas tarjetas postales durante cuatro ediciones de PARA TI. Son para que usted participe. Para que usted convalezca personalmente a todos aquellos que, por Jorgelina de los Andes y sus convalecientes, ya van a ir para atrás en el tiempo. Vamos a mostrarle a la Argentina de hoy, a un país que está empeñado en defender la paz que tanto le costó ganar. Por eso, estamos seguros de que usted y su familia van a participar de esta propuesta con entusiasmo: son feroces con el sistema represivo-autoritario con que el 25 de junio volvimos a golpear "Argentina". Y el procedimiento es siempre el mismo de

las cuatro últimas, luego una de las direcciones que damos al pie de esta página. Ponga su nombre y dirección, el nombre y la dirección del destinatario, una estampilla y échela al buzón. Recuerde que su carta puede ser leída por los valores postales que usted necesita. Defendamos a nuestro país, salgamos también nosotros a hacer nuestra campaña argentina. Que los estudiantes de los que sus castigos se libren de estos estigmas para que sepan que el pueblo argentino sabe responder con la verdad, con toda la verdad.

**Para TI**

---

**DIRECCIONES DE QUIÉNES SE HAN HECHO ECO DE LA CAMPAÑA ANTIARGENTINA**

<p><b>América Intercontinental:</b> Milanes Way de Quetzalal 7, Amesbán, Bogotá, 18 Suarcorra Street, London WC2E 7JF Séptimo Límite 2112 Broadway, New York NY 10023 France: 18 Rue de Varenne, Paris 7 España: Colmena 2 Madrid BRG: Wood Lane London W12 CINA: (Comis. Cooperación del Sur) a la Argentina 14 Rue Nassau Paris. Tel Kennedy: Room 431</p>	<p>Novada Square Office Building Washington DC 20036 Publicis Dallas, Room 8022 Department of State, Washington DC 20520 France S&amp;P: 100 Rue de la Harpe Paris 7E Le Paik: 140 Rue de Rennes, Paris L'Express: 25 Rue de Berry, BE, Paris Pablo Marín: 82 Charles Doyen, Paris Le Monde: 5 Rue de Valenciennes, Paris</p>	<p>L'Unité: 116 St. Louis, 19 Rue de Paris Parsons: 2420 St. Mark L'Espresso: Via Po 13, Rome Austral: 1000 Gough St, Perth Diana: 16 Place de la Madeleine, Madrid Cassini: 16, Castellanos Plaza 15, Madrid Por Favor: Roberto Basso 36, Barcelona Asociación Pro Derechos Humanos: Ormaiztegui 17, Madrid  (La tarjeta que acompaña estos valores postales)</p>
--	---	--

Campaña "Defienda su Argentina", publicada en la revista *Para Ti*, abril de 1978. 

Algo semejante sucedió en la elite empresarial. La heterogeneidad que desde hacía décadas caracterizaba a sus asociaciones y demandas sectoriales había ido disipándose bajo el peso unificador de los planteos contrarrevolucionarios. Cuando José Alfredo Martínez de Hoz, integrante de una de las familias más aristocráticas del país, presidente del ortodoxo Consejo Empresario Argentino y ejecutivo de importantes empresas, fue convocado por los tres comandantes para formular el programa económico del Proceso poco antes del golpe, esos planteos fueron la base del acuerdo. Los miembros maduros de las clases altas en general fueron los más entusiastas, debido a la oportunidad que se les ofrecía de "retomar el mando" en las empresas, en las instituciones y en sus propias familias. De allí que, aún más amplia y convencidamente que durante la gestión de Onganía y Krieger Vasena, sintieran que el de Videla era "su gobierno". Interesados por sobre todas las cosas en el orden y la autoridad, dejaron de lado las dudas que pudieran tener sobre ciertos aspectos de la estrategia económica y reivindicaron las acciones dirigidas a complementar la ofensiva antisubversiva: desactivar a los sectores populares, cortar sus canales de actuación colectiva y liquidar los mecanismos económicos y estatales que los habían fortalecido.

La devaluación y el congelamiento de las paritarias constituían una estrategia habitual para este tipo de gobiernos y situaciones de crisis. Y se justificaban más que nunca debido al riesgo de hiperinflación que rodeó al golpe. Pero luego se les sumaron medidas mucho más audaces, nunca antes intentadas: la liberación de los precios junto con el congelamiento de los salarios (lo que significó una caída del 40% en su poder de compra), una nueva ley de contratos de trabajo y proyectos para reducir al mínimo el poder sindical, una baja en las barreras comerciales que por décadas habían protegido a la industria nacional, y el drástico recorte de gastos en educación, salud, previsión y asistencia social (en conjunto, como sostiene Susana Torrado, ellos disminuyeron del 22,6% del PBI en 1974-75 al 15,4% en 1976-79).

Todo ello fue facilitado por la masiva presencia del terror en los lugares de trabajo: la represión ilegal se ensañó, como dijimos, con las bases sindicales. En algunas grandes firmas (Somisa, Acindar, Ford) se llegó a la ocupación militar de las plantas y la creación de centros de detención en ellas; las comisiones internas de empresas como Mercedes-Benz, Chrysler, Fiat y Swift desaparecieron casi en su totalidad. También ayudó la extensa represión legal, que afectó al conjunto de los sindicalistas y activistas sectoriales, quienes estaban muy lejos de ser “subversivos” pero, según los militares, habían sido el caldo de cultivo de éstos. Cientos de gremialistas fueron detenidos junto a muchos ex funcionarios peronistas (incluida la propia Isabel Perón, que sería enviada al exilio recién en 1981). Fueron intervenidos los más importantes sindicatos y la CGT, y se prohibieron las huelgas. Los demás gremios fueron suspendidos, al igual que ciertas entidades empresariales, como la Federación Agraria, y los mandatos de sus dirigentes prorrogados. La CGE, en cambio, fue disuelta. Los militares del Proceso no estaban dispuestos a repetir el error de la Libertadora: sabían que, de eliminar a esa dirigencia moderada y tradicional, corrían el riesgo de fomentar otra de base más combativa. Pero le dejaron en claro a sus integrantes que, para tener algún rol en el futuro, debían aceptar sus condiciones.

Los problemas para esta estrategia disciplinadora surgieron cuando hubo que decidir cuáles eran esas condiciones. Los cambios en el mercado de trabajo y las relaciones laborales fueron los primeros en generar tensiones entre el equipo económico y los mandos militares, tensiones que, dado el complicado sistema institucional establecido, resultaron muy difíciles de resolver. Por ejemplo, Martínez de Hoz batalló inútilmente durante tres años por imponer una nueva Ley de Asociaciones Profesionales que retrotrajera la vida sindical a como era antes

de 1945. Cuando la Junta finalmente aprobó el proyecto, en 1979, éste contenía algunas limitaciones a las entidades de tercer grado (no podría seguir existiendo la CGT), a la actividad política de los dirigentes y al control gremial de las obras sociales, pero seguía en pie el sindicato único por rama. Militares considerados populistas por Economía, como Massera, Viola y el general Horacio Tomás Liendo, por entonces ministro de Trabajo, se salieron con la suya en este aspecto. También fracasó Economía en su propuesta de hacer tabla rasa con las afiliaciones sindicales. Y otro tanto sucedió en relación con la Ley de Contratos de Trabajo: Martínez de Hoz estimaba que la aprobada en abril de 1976 era un avance parcial y reclamó otra, más parecida a la que había impuesto Pinochet en Chile, que convirtiera las contrataciones en un asunto particular entre cada empleado y empleador, con lo que las paritarias perderían toda eficacia. Pero su propuesta no prosperó. La conversión de los militares argentinos al liberalismo económico no había llegado a tanto, y la expectativa de que, una vez domesticados, los sindicalistas tradicionales volverían a ser preferibles a un gremialismo descentralizado, continuaba vigente. Massera y Viola, además, codiciaban a esos sindicalistas como socios de sus respectivos proyectos políticos.

En un plano más general, la política económica en sí fue también objeto de fuertes debates y, en la medida en que se saldaron muy parcialmente, acumuló inconsistencias. Los militares habían aceptado el ajuste inicial pero no que se afectara el nivel de empleo, temiendo que la desocupación hiciera reverdecer las protestas. Liendo se opuso también con éxito a una reducción de la plantilla del sector público: si bien se aprobó una Ley de Prescindibilidad que facilitaba las cesantías y despidos, ella se aplicó sólo en forma selectiva a los empleados públicos con militancia política y sindical. Tampoco se aceptó la reducción del gasto público excepto en los rubros sociales (los servicios de Educación y Salud se transfirieron en gran medida a las provincias) ni el ataque a las “vacas sagradas” del modelo económico estatista y regulado, como las empresas públicas (que Martínez de Hoz propuso, sin éxito, privatizar) y los sectores industriales “nacionales” considerados estratégicos (el automotriz entre ellos). En el terreno de la política económica, además, se toleró que las divergencias se hicieran públicas: *Clarín*, que seguía adhiriendo al desarrollismo, aunque acompañaba al régimen en muchos otros aspectos, fue crítico con la gestión de Economía y contó para ello con el respaldo o al menos la tolerancia de los jefes militares que compartían su perspectiva. Para colmo, estos disensos atravesaban a las facciones militares: mientras algunos occidentalistas como Videla

apoyaban a Martínez de Hoz, otros miembros de este sector, como Viola, lo rechazaban, coincidiendo con Massera pero no con sus aliados, entre ellos Suárez Mason, que en esto acompañaba al presidente. Se bloqueaban así unos a otros. El mismo ministro era ambiguo en muchos terrenos. Tenía todavía en mente la idea desarrollista de sumar sectores de la industria básica en los que el país pudiera ser competitivo y para eso otorgó generosos subsidios a empresas de papel, aluminio, cemento y petroquímica. Su resignación en el tema de las privatizaciones obedeció no sólo a las resistencias de los cuarteles sino también de los colegas empresarios que recibían de esas empresas insumos subvaluados y contratos sobrevaluados.

Acomodándose a la situación, Economía utilizó créditos externos, obtenidos gracias a sus fluidos contactos financieros y a la disponibilidad internacional de recursos a baja tasa de interés, para financiar los objetivos en gran medida contradictorios del régimen y solventar una inversión pública récord que fue destinada a obras públicas (autopistas, estadios mundialistas, represas) y compras militares (el rearme con vistas a emprender aventuras bélicas consumió más de 15 000 millones de dólares y fue el mayor de la región). Martínez de Hoz estimó que esas tasas de interés seguirían bajas por largo tiempo y que no habría problema para pagar los intereses (también en este aspecto el régimen ató su suerte a tendencias externas que no podría controlar) y que, a la larga, así se lograría acotar el déficit fiscal dado que, si crecían las obligaciones financieras, los futuros gobiernos estarían obligados a reducir gastos en otros rubros. Mientras tanto, obtuvo la aquiescencia de los uniformados para otras medidas que apuntaban a combatir la inflación y liquidar el modelo económico protegido y regulado: la reforma financiera que desde mediados de 1977 liberalizó las tasas de interés domésticas para terminar con los créditos subsidiados y crear un mercado de capitales conectado a los circuitos financieros internacionales; una aún mayor apertura comercial para que la competencia externa forzara a los empresarios argentinos a invertir y ajustar sus costos; y la que sería la pieza clave que vinculaba todas las demás medidas, la tablita cambiaria. Puesta en marcha a fines de 1978, esa tablita establecía un ritmo decreciente de devaluación del peso frente al dólar, para exponer los precios internos al corsé de los internacionales y así liquidar las actividades ineficientes (que el modelo de industrialización por sustitución de importaciones había mantenido artificialmente en pie) y los mecanismos inflacionarios (con los que la economía protegida y regulada procesaba sus desequilibrios).

Esta política permitiría, desde mediados de 1978 y hasta principios de 1980, un rápido incremento del consumo y del nivel de actividad, porque si bien algunos sectores industriales resultaron perjudicados, hubo otros, en especial los servicios y la importación, que crecieron rápidamente. Gracias a esta expansión, la persistencia de la inflación pasó inadvertida (ella alcanzó, respectivamente, el 171,4%, el 163,4% y el 100,8% en esos años), y por lo tanto se acumularía un fenomenal retraso cambiario (la devaluación fue casi un 80% menor que esos índices) mientras el déficit comercial (que en 1980 fue de 2500 millones) y los compromisos financieros con el exterior crecían exponencialmente. La “plata dulce” financiada con deuda externa permitiría a las familias acomodadas, y no tanto, adquirir bienes importados a bajo precio y recorrer el mundo, aunque, a decir verdad, los beneficios estaban mucho más concentrados de lo que ese efímero bienestar hacía pensar: los contratistas de obras públicas, los inversores en las nuevas áreas subsidiadas y los bancos que tomaban créditos externos o depósitos internos —en ambos casos garantizados por el estado— para adquirir empresas de todo tipo conformaron, en poco tiempo, nuevos y poderosos “grupos económicos” con intereses en distintas actividades y sectores, que desplazaron casi por completo a las multinacionales (en la industria automotriz, en el área petrolera, etc.) y sustituyeron en el vértice de la gran burguesía argentina a los grupos más tradicionales, asentados en la producción agropecuaria y la industria sustitutiva (ambas igualmente perjudicadas por el dólar barato). Algunos industriales, mientras tanto, se resignaron al nuevo estado de las cosas y pasaron a importar lo que antes producían. Otros creyeron las promesas de modernización de Martínez de Hoz e invirtieron para competir en el capitalismo abierto que se anunciaba, y terminarían contándose entre los más perjudicados.

Los grupos económicos, por su parte, privilegiaron la acumulación financiera, utilizando bancos propios o asociados. De allí la centralidad que adquirió la reforma de ese sector: permitió la multiplicación de las entidades nacionales y el ingreso de grandes bancos extranjeros. De este modo, empezaron a coordinar las acciones de amplios sectores empresariales. En parte profundizaron las pautas de acumulación y especulación ya establecidas a lo largo del ciclo de alta inflación, pero también introdujeron rasgos novedosos: el desinterés por las actividades productivas dirigidas al mercado interno e intensivas en mano de obra, hasta entonces privilegiadas casi siempre por los subsidios estatales; y la distancia con respecto a las entidades tradicionales del empresariado. Porque estos nuevos grupos negociaban di-

rectamente con los ministros y militares, desconociendo y debilitando los canales colectivos.

También en aquellos aspectos que hacían poco competitivo, opaco y particularista al sistema económico argentino hubo continuidades y cambios: la acumulación financiera concentrada dependía de las decisiones puntuales tomadas por el estado, tanto como la sustitución de importaciones en su momento; pero suponía otra relación de poder entre las partes, porque la “patria financiera” y la “patria contratista” imponían condiciones y escapaban, a través de rápidos cambios en sus inversiones, a cualquier intento de disciplinarlas. Martínez de Hoz tuvo muy pronto una fatal demostración de este cambio, pues los nuevos grupos financieros no creyeron que su tablita fuera capaz de derrotar la inflación y se prepararon para dolarizar sus activos y fugar sus ganancias cuando fuera necesario.

Mientras tanto, el Proceso continuaba avanzando en la destrucción de los pilares del antiguo orden que aseguraban la integración y movilización de los sectores subalternos y el igualitarismo de la sociedad. Y así tomó forma un cuadro de situación inverso al que había caracterizado al país desde mediados de siglo: las clases superiores se cohesionaron en torno a un proyecto político en el que creían ver soluciones largamente buscadas, mientras las populares se dispersaban y fracturaban, carentes de horizontes y de organizaciones que las coordinaran. Este vuelco en la distribución de poder, que pronto se completaría con cambios económicos aún más profundos, produjo una acelerada desigualación de condiciones.



### **Sindicalistas por un “pacto productivo”**

Las alianzas de clase serían muy distintas a partir de entonces, porque ya no existían las condiciones que habían hecho de los altos salarios un punto de consenso amplio. Entre quienes mejor comprendieron este cambio decisivo en las posibilidades de articulación entre los distintos intereses, cabe destacar a un sector del sindicalismo, que se inclinó por las posiciones dialoguistas tanto frente al régimen militar como al empresario. En efecto, los grandes gremios de servicios, y algunos de industrias básicas con posibilidades de exportar, comprendieron que los empresarios habían ganado la partida tanto en el terreno de la inflación como en el de la lucha política, y aceptaron por lo tanto que lo único que podía hacerse era sellar con ellos algún tipo de “pacto productivo” para

que invirtieran y para que la futura expansión en algún momento permitiera recuperar parte de lo perdido en términos de salarios y derechos laborales. Jorge Triaca, del gremio del plástico, fue el más destacado referente de esta postura y un activo promotor del abandono de las tácticas vanguardistas tradicionales de “golpear y negociar”. 

## Unas pocas expresiones de resistencia

El hecho de que los disensos económicos sólo se toleraban cuando provenían de voces internas del régimen, o de quienes respetaban su orden político, quedó de manifiesto cuando un sector de los gremios, autodenominado “Comisión de los 25”, convocó a una huelga general en abril de 1979. La medida logró una adhesión muy parcial y el gobierno reaccionó con dureza: detuvo a muchos dirigentes, dispuso la caducidad del mandato de los detenidos que aún lo conservaban, y desoyó los llamados a “retomar el camino del consenso” lanzados por el gremialismo dialoguista (reunido en la Comisión Nacional de Trabajo) e incluso por la Pastoral Social de la iglesia. Aunque no hubo más muestras de resistencia nacional durante los siguientes dos años, ellas persistieron en el ámbito de las empresas, protagonizadas por comisiones internas que en muchos casos chocaron contra una feroz represión, en otros fracasaron en movilizar a los trabajadores y sólo en ocasiones lograron preservar los derechos adquiridos.

También en el terreno de los medios de comunicación se comprobó que la “paz procesista” no suponía un relajamiento definitivo del terror. El caso de *La Opinión* así lo demuestra: dirigido por Jacobo Timerman, quien había fundado *Primera Plana* en los años sesenta, ese diario apoyó inicialmente el golpe y en particular a Videla. Sus críticas a Martínez de Hoz fueron toleradas. Pero cuando en 1977 comenzó a objetar también la represión ilegal y la cerrazón política del régimen, todo cambió. Varios de sus periodistas e incluso el propio Timerman fueron secuestrados, el diario, intervenido y, posteriormente, convertido en órgano oficioso del Ejército. Desde entonces, sólo pudo hallarse una mínima información sobre lo que sucedía en el país en términos políticos y represivos en el diario en lengua inglesa *Buenos Aires Herald*, varios de cuyos directivos y periodistas también fueron perseguidos y debieron abandonar el país. Otros medios, como las revistas de cultura *underground*, fueron tolerados mientras no se internaran en política. El éxito editorial más resonante de esos años fue la revista *Humor*, que —como sus editores decían— no escapaba a la autocen-

sura sino que hacía una “más temeraria que prudente”. Con el mismo difuso criterio hubo cierta tolerancia en el teatro, mucha menos en el cine y prácticamente ninguna en la televisión, controlada férreamente desde el estado para asegurar su total despolitización y banalidad.

La única excepción significativa al debilitamiento de la capacidad de resistencia de la sociedad, aunque muy acotada en su impacto público al menos hasta 1980, fueron los organismos de derechos humanos, entre los que se destacaron tempranamente las Madres de Plaza de Mayo.



### **Las rondas de los jueves**

En abril de 1977 un grupo de madres de desaparecidos comenzó a reunirse bastante espontáneamente en la Plaza de Mayo para acudir al Ministerio del Interior en procura de información. Ante las amenazas de la policía de detenerlas si realizaban una reunión pública, decidieron caminar alrededor de la Pirámide a metros de la Casa de Gobierno (habían intentado refugiarse en la Catedral, pero sus puertas se cerraban siempre que ellas estaban en las inmediaciones). Así nacieron las rondas de los jueves, que congregarían a cientos de familiares de desaparecidos en los años siguientes. Las Madres, poco más de una docena en las primeras reuniones, eran ya más de trescientas hacia octubre de 1977; fueron también unas trescientas las que se congregaron para presentar la primera petición colectiva (la mayor parte fue detenida en el intento). Poco después hicieron su primera denuncia internacional a través de una carta al Congreso de los Estados Unidos, acompañada de 2400 firmas.



Un grupo de madres camina en torno de la Pirámide de Mayo, enero de 1978. Archivo General de la Nación. 

El régimen reaccionó brutalmente ante este desafío. A fines de 1977 el núcleo fundador de las Madres, incluida su presidenta Azucena Villafior de Vicenti y dos monjas francesas que colaboraban con ella, fue secuestrado por un grupo de tareas de la Armada mientras recolectaba dinero para publicar una solicitada. Pero eso no bastó para detenerlas: lideradas por Renée Epelbaum y Hebe de Bonafini, siguieron sumando activistas. Surgieron además otros organismos: la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y las Abuelas de Plaza de Mayo, que se abocaron a la búsqueda de bebés y niños secuestrados junto a sus padres y luego entregados irregularmente en adopción a otras familias, en ocasiones a los mismos represores. Entre las organizaciones de derechos humanos más activas en este período, cabe mencionar también al Centro de Estudios Legales y Sociales, que reunía a abogados especializados en presentar *habeas corpus* por los desaparecidos, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una entidad que databa de los tiempos de la Triple A y reunía a religiosos de distintas confesiones, algunas personalidades públicas y dirigentes políticos que se atrevían a desafiar las fronteras impuestas por el Proceso (en el directorio de la APDH figuraban Raúl Alfonsín, líder de un sector minoritario de la UCR, los socialistas Alfredo Bravo y Alicia Moreau de Justo, y los obispos Miguel Hesayne y Jaime de Nevares, entre otros). En rigor, eran muy pocos los que se atrevían a dar ese paso, como asimismo los que disentían de la opinión –difundida por el régimen– de que los organismos de solidaridad eran la fachada que usaba la subversión para llevar su guerra contra la Junta al terreno internacional. Dado el aislamiento que padecían frente a la opinión pública y el resto de las organizaciones de la sociedad, el apoyo externo era en efecto esencial para la supervivencia de esos organismos, no sólo en términos financieros, sino también para evitar que se repitieran ataques como el sufrido por las Madres. Al respecto, cabe destacar el rol de organizaciones no gubernamentales como Amnesty International, de partidos y gobiernos socialdemócratas europeos, en particular el sueco, y de funcionarios de la embajada de los Estados Unidos que, alentados por Patricia Derian, se ocuparon de reunir información sobre los desaparecidos, transmitirla al Departamento de Estado y presionar para que se extendieran las sanciones financieras y militares hasta que la Junta se aviniera a detener la maquinaria del terror.

## 7. 1979-1983: *Némesis* y transición

1979 pudo haber sido el año de la consolidación de la dictadura y de la puesta en marcha de sus planes de largo aliento. Sin embargo, los jefes del Proceso tomaron por entonces decisiones que cerraron esa posibilidad y conducirían al colapso del régimen. La autorización de la misión de la CIDH para acallar las críticas externas fue un grueso error de Videla: esa misión amplificó las voces de denuncia, como las de Madres de Plaza de Mayo y algunos políticos (entre los que se destacaron el radical Raúl Alfonsín y el peronista Deolindo Bittel) y agravó su aislamiento externo. El alza de las tasas de interés internacionales hizo que la deuda pública y privada, incrementada aceleradamente en los años previos, se volviera impagable y pusiera en crisis la estrategia económica, que sin embargo no se modificó, lo que condujo a una aguda recesión y aceleración inflacionaria al inicio de la presidencia de Viola, en 1981. Se profundizaría así el proceso de desarticulación económica, desindustrialización y desigualación de condiciones iniciado a mediados de la década anterior. Para peor, en el intento de evitar una salida poco honrosa del poder, los militares jugarían con Galtieri una última carta: la invasión de Malvinas.

A mediados de 1978, Videla pasó a retiro y logró ser “reelecto” en la presidencia por los generales y la Junta: seguiría en el cargo hasta marzo de 1981. Muchos de sus seguidores, civiles y militares, esperaban que utilizara ese tiempo y el apoyo conseguido gracias a los “logros” del régimen para lanzar un plan político: la reorganización de las instituciones y la convocatoria progresiva a elecciones; en suma, la “convergencia cívico-militar” de la que se hablaba en los cuarteles y en los partidos. Su cuidada imagen de austeridad sanmartiniana y devoción católica lo convertían en la figura adecuada para encarar esa transición: inmune a la “politiquería”, “implacable pero no salvaje” en

la lucha contra la “subversión” y el desorden. Después del espectáculo que diera el último gobierno civil, no pocos creían que la república no podría hallar un protector más adecuado.

Pero hubo varios obstáculos para que ese proyecto pudiera avanzar. En primer lugar, la escasa disposición del propio Videla, que si bien contemplaba a las democracias occidentales con más simpatía que el común de los militares procesistas, sentía un desprecio total por las prácticas partidarias que las hacían posibles. Además, Videla carecía de la vocación política para sacar provecho de la situación y también para tolerar que Viola o algún otro lo hiciera. Y prefería esperar a que surgiera un civismo apolítico, capaz de heredar del régimen el espíritu de “unidad nacional” que creía haber impuesto.

En segundo lugar, y contradiciendo esa apuesta, las pujas internas no sólo no se disiparon con el paso del tiempo sino que en alguna medida se agravaron. Aunque las tensiones entre las fuerzas se habían moderado desde que también Massera y Agosti pasaron a retiro, dentro del Ejército la situación empeoró. Videla logró legarle la jefatura a Viola, pero éste siguió siendo resistido por el generalato, que lo consideraba populista y “politiquero” y lo aceptó en el cargo sólo por el plazo de un año, hasta septiembre de 1979. Esta postura no sólo fue promovida por Suárez Mason sino también por su par del Cuerpo III, el general Luciano Benjamín Menéndez, otro “señor de la guerra” tanto a la hora de secuestrar “subversivos” como de resolver diferendos territoriales. Martínez de Hoz y el titular de Interior, el general Albano Harguindeguy –en otros aspectos estrechos colaboradores del presidente–, también pusieron lo suyo. Así, se replicaban en la política los disensos cruzados que, como vimos, afectaban la gestión económica.

La cartera de Interior tuvo un papel activo en postergar la apertura: fue la principal usina de la idea de crear una nueva fuerza, el Movimiento de Opinión Nacional, que sería la única autorizada a ejercer cargos públicos o presentarse a elecciones, con la esperanza de disolver los viejos partidos. Algunos uniformados confiaban en que el desprestigio de los políticos ante la opinión pública los hubiera puesto a total merced de sus planes regenerativos. Pero, como había sucedido en tiempos de Onganía, el MON generó resistencias inesperadas en esos partidos. En un principio, el Proceso había sido más tolerante con ellos que el onganato: sólo los había suspendido, no prohibido; además había dejado en funciones a buena parte de los intendentes electos en 1973 (en 1979, llegó al 90% la proporción de civiles en esos cargos, con mayoría radical, aunque también había peronistas, desarrollistas, intransigen-

en esos viejos políticos no se podía confiar. Y optó por esperar que surgieran otros, auténticamente “cívicos”. Meses antes había desestimado la posibilidad de incluir figuras de los partidos en el gabinete de su “segundo mandato”: si bien éste estaría integrado por más civiles, eran conservadores sin votos ni fuerzas organizadas que los respaldaran. Luego dejó pasar la oportunidad que ofrecía la elaboración de las “bases políticas” que las Fuerzas Armadas presentaron a la sociedad a fines de 1979. Rechazó la versión de esas bases propuesta por el secretario general de la Presidencia, José Villarreal (identificado nada inocentemente como “el general radical”), que contenía un cronograma de elecciones escalonadas, y optó por el documento que quería el generalato, donde abundaban fórmulas imprecisas y no había fechas. Villarreal renunció a raíz de ello y Harguindeguy, confirmado en Interior, quedó como único dueño de la situación. Por eso, durante 1980 sólo se concretaría un anodino “diálogo político” que reiteró la conveniencia de adherir sin chistar a los logros y propósitos del régimen, incluido el MON, porque, como decía este ministro, “los viejos partidos no tendrán ya cabida”. Ante esta evidencia Balbín debió tomar distancia del gobierno. Tiempo después esto terminó en un acuerdo entre los partidos, por el que trabajaba el grueso de los peronistas, conscientes de que serían los más perjudicados en caso de que la “convergencia” se concretara.

Vistas las dificultades para avanzar con el personal y las organizaciones que ofrecía la política doméstica, Videla apostó a consolidar su poder por otras vías. Su primera opción fue la ya recurrente búsqueda de respaldo estadounidense: creyó que, concluida la “lucha antisubversiva”, dado el éxito del Proceso en “pacificar el país”, había llegado el momento de eliminar los recelos entre ambos gobiernos y de demostrarle a Washington que la vocación democrática era sincera y que con el apoyo necesario podría ponerla en práctica. La condición que el Departamento de Estado le impuso para aceptar el convite fue que se concretara la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que venía reclamando desde 1977 y que esperaba que sirviera al menos para detener las desapariciones. Tras largas negociaciones, Videla aceptó, contra la opinión de casi todos los uniformados, que vieron en ello una vergonzante claudicación de soberanía. Lo hizo en parte porque estaba seguro de que la sociedad civil y la clase política lo acompañarían en su esfuerzo por mostrar un “país en paz”. Y también porque confiaba en que los funcionarios estadounidenses más favorables a un acuerdo lograrían que la misión y su posterior informe así lo reflejaran, y lo ayudaran a cerrar el debate sobre el tema. En esto

último no acertó: la represión ilegal en la Argentina era un caso demasiado grave y conocido como para dar vuelta la página sin más, y la CIDH actuó con gran autonomía respecto de las presiones políticas del Departamento de Estado que, por las razones ya comentadas, tampoco fueron demasiado intensas.



Horacio García Blanco y Jorge Rafael Videla, difundiendo la campaña “Los argentinos somos derechos y humanos”, durante el Mundial de Fútbol Juvenil de 1979. Revista *Gente*, septiembre de 1979.

Fue así que, aunque el régimen desmanteló la mayor parte de los centros de detención y liberó a buena parte de los presos políticos (a mediados de 1979 quedaban en esa condición 1600 personas y la mitad de ellas salió del país en los meses siguientes), la misión de la CIDH, que llegó a comienzos de septiembre de ese año, no se dedicó a registrar esas “mejorías” sino a indagar la suerte de los desaparecidos. Para eso recogió el testimonio de sus familiares y lo consideró prueba suficiente para informar que “organismos de seguridad del gobierno” habían “dado muerte a numerosos hombres y mujeres después de su detención”. El Proceso, sin querer, había abierto la puerta para que la verdad de lo sucedido se revelara a través de las voces que impugnaban las versiones oficiales (que los desaparecidos estaban ocultos, exiliados, que habían muerto en combate y sus cuerpos eran irreconocibles, o que la propia guerrilla los había asesinado). Ya no podría evitar el repudio externo y tampoco el lento desgaste del consenso interno sobre el tema.

## Testimonios ante la CIDH

Miles de familiares se congregaron para dar su testimonio en las oficinas que abrió la CIDH, que pudo así documentar 5580 casos de desapariciones, cifra que superaba las peores previsiones del gobierno y las mejores de los organismos de derechos humanos, que habían sopor-tado en los meses previos una nueva ofensiva represiva dirigida a evitar que coordinaran a los denunciantes.

### Derechos Humanos: invitan a una comisión de la OEA



El presidente argentino, César Augusto Menéndez, que visitó en Washington a la reunión de la OEA, invitó a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que visiten la Argentina. El funcionario cumplió la promesa durante un momento que mantuvo un cordial diálogo con los representantes del organismo. Andrés Bagnoli, la Comisión analizó otros los posibilidades de comenzar el diálogo en los próximos meses. El tema de los derechos humanos, como se sabe, surgió al debate que se llevó adelante en la OEA, tras su sesión del 2, 3 y 4 de junio.

**Ganó el APRA la elección peruviana**

**Liberarán a 14 dirigentes**

### La comisión de la OEA

Derechos Humanos de la OEA, invitó a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que visiten la Argentina. El funcionario cumplió la promesa durante un momento que mantuvo un cordial diálogo con los representantes del organismo. Andrés Bagnoli, la Comisión analizó otros los posibilidades de comenzar el diálogo en los próximos meses. El tema de los derechos humanos, como se sabe, surgió al debate que se llevó adelante en la OEA, tras su sesión del 2, 3 y 4 de junio.



### formuló recomendaciones



**TIMERMAN**  
**Trata la Junta la resolución de la Corte Suprema**

Portadas del diario Clarín, 20 de junio de 1978 y 21 de septiembre de 1979.

Este hostigamiento contó con la colaboración de la prensa adicta al régimen: el caso más aleroso fue el del relator deportivo José María Muñoz, que aprovechó la victoria en esos mismos días en el Mundial de

Fútbol Juvenil de Japón para alentar a los hinchas a que también concurren a las oficinas de la CIDH, para mostrar lo poco representativas que eran las voces disidentes; la idea tuvo eco y, enarbolando banderas argentinas, muchos recorrieron la zona donde se congregaban los familiares para insultarlos.

Al hacerlo, sin querer expusieron la versión oficial que defendían a una confrontación que no podía favorecerla: la mera presencia de los denunciantes daba prueba suficiente de que los desaparecidos existían y de que el régimen había mentado. ▀

No obstante, para que este desgaste se hiciera visible tuvo que transcurrir bastante tiempo y debieron mediar hechos más graves para la opinión pública. Por el momento, las voces representativas de la sociedad no defraudaron al régimen y en algunos casos sobrepasaron lo que éste podía exigirles. La jerarquía católica, los directores de medios y las asociaciones de abogados y de jueces respaldaron la “paz procesista” y cuestionaron la “intromisión en los asuntos internos del país”. Una solicitada firmada por las más importantes asociaciones empresariales y profesionales llegó al extremo de afirmar que en “idénticas circunstancias volveríamos a actuar de idéntica manera”. La Conferencia Episcopal no reaccionó cuando, en octubre de 1979, el papa Juan Pablo II le pidió que “se hiciera eco del angustioso problema de personas desaparecidas en esa querida nación, pues dañan el corazón de muchas familias y parientes”. Los militares, por su parte, sumaron otro motivo a la mediación por el Beagle, que estaba favoreciendo a Chile, para disgustarse con el Vaticano y el mundo. A eso se agregó el gesto del Papa, que recibió a las Madres a fines de ese año. Sólo unas pocas voces desentonaron en la dirigencia política: la del mencionado Raúl Alfonsín y, con más contundencia, la de Deolindo Bittel, vicepresidente del PJ, que impulsó una valiente declaración de ese partido en la que por primera vez se denunció “la violación sistemática de los derechos humanos” y el hecho de haber utilizado a la guerrilla como excusa para implantar el terrorismo de estado. Pero Bittel fue sólo acompañado por un dirigente hasta entonces ignoto, Herminio Iglesias, y desautorizado por el resto de sus compañeros, incluida Isabel, quien desde su lugar de detención declaró que los “inspectores de la CIDH” no tenían nada que enseñarles a los argentinos en materia de derechos. Alfonsín sufrió lo propio entre sus correligionarios, alineados detrás de la tesis de Balbín.

La postura predominante en la opinión pública y las elites locales no se modificó ni siquiera después de conocer el informe de la CIDH

y los testimonios brindados en el exterior por algunas víctimas de la represión que habían sido liberadas (Timerman, sobrevivientes de la ESMA y muchos ex presos), ni luego de que el régimen sufriera nuevas afrentas en la ONU (donde se votó una declaración que calificaba a las desapariciones en la Argentina y otros países como “la peor violación a los derechos humanos desde el Holocausto”), y de que en octubre de 1980 se otorgara el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel (líder de otro activo organismo de solidaridad local). Ante la exigencia planteada por Harguindeguy en el diálogo político de que “avalaran lo actuado”, radicales y peronistas apenas se atrevieron a reclamar el fin de la veda política y el respeto de la ley “para adelante”. Por su parte, la visita de la CIDH convenció a los uniformados de lo que propugnaban las facciones del régimen que denominamos aislacionistas y regionalistas: que el error no había sido cometer los crímenes, sino no haber sido más exhaustivos al cometerlos y, sobre todo, haber insistido en buscar un acuerdo imposible con Estados Unidos y los organismos internacionales.



### **La voz de los “señores de la guerra”**

Generales recientemente retirados y que habían sido muy activos en la represión ilegal objetaron públicamente que Videla siguiera insistiendo en negar en público un plan que había sido absolutamente justificado y demostradamente eficaz para resolver el problema: como diría Ramón Camps, ex jefe de la policía bonaerense, eso equivalía a “adoptar culposamente la perspectiva del enemigo”. Por esa misma época, generales y empresarios afines publicaron una nueva solicitada que reivindicaba “la Argentina orgullosa de ser libertadora de pueblos” y advertía: “Si los norteamericanos no nos entienden, peor para ellos”. 

Esta tesis se benefició, además, con otras novedades externas. La primera fue el renovado ánimo anticomunista en el hemisferio y la región a raíz de la invasión soviética de Afganistán y la victoria del sandinismo en Nicaragua, ambas ocurridas en 1979. Más aún: estos hechos provocaron la pérdida de interés en los derechos humanos durante el tramo final de la administración Carter. Coincidentemente, desde fines de ese año la Junta aumentó su gravitación regional a través de iniciativas contrainsurgentes tanto en el Cono Sur como en Centroamérica. El envío de cientos de instructores a El Salvador, Guatemala

Ni siquiera la nueva suba de las tasas que ofrecían los bancos argentinos pudo detener la fuga, a la que se sumaron inversores locales de todo tamaño y condición, anticipando que la política de Martínez de Hoz no tardaría en naufragar. Muchos no pudieron pagar los intereses de los créditos que habían contraído para invertir y otros dejaron de hacerlo calculando que les convenía llevar sus empresas a la quiebra y fugar al exterior todos los dólares posibles. En marzo de 1980, justo cuando se iniciaba el diálogo político, varios bancos entrenados en la “bicicleta financiera” se declararon insolventes y fueron liquidados. Tal como establecía el régimen de garantías de los depósitos vigente desde 1977, el Banco Central devolvió el dinero a los ahorristas. El estado incluso debió hacerse cargo de los créditos externos tomados por esas entidades, de los que había sido garante. Se inició así una generalizada estatización de los pasivos empresariales (que por entonces sumaban 13 000 millones de dólares).



### **La estatización de deudas**

La UIA, la Sociedad Rural y otras entidades reclamaron que el estado ayudara a las empresas a pagar sus deudas para evitar que quebraran. La asistencia brindada a algunas disparó presiones de las demás y el estado resultó víctima de una nueva versión de la “puja distributiva”. En noviembre de 1981 se lanzó la primera de varias iniciativas generales para resolver el problema: Domingo Cavallo, entonces subsecretario de Interior, elaboró un plan de reactivación con una tasa de referencia más baja que los intereses del mercado. El fisco pagaría la diferencia a los acreedores. El argumento de Cavallo fue que, como el estado había perjudicado a las empresas con su política de apertura y sobrevaluación cambiaria, debía reparar el daño. Pero lo cierto es que buena parte de esas “compensaciones” fue a manos de empresarios que no se habían perjudicado, aunque algunas de sus empresas hubieran quebrado. ▀

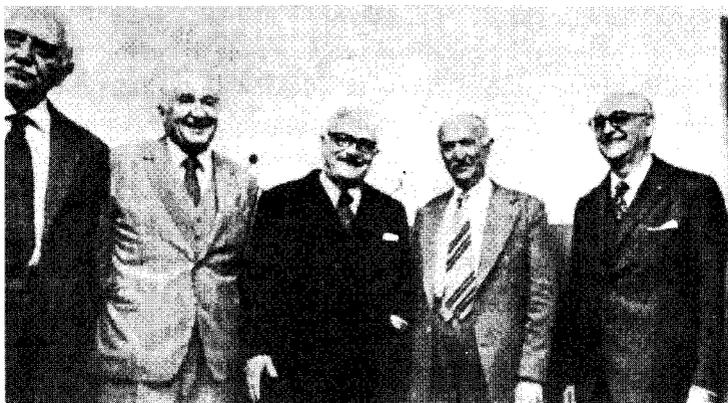
Martínez de Hoz convenció a Videla de que las altas tasas internacionales no podían durar y de que era mejor aguantar con la tablita que abandonarla “justo cuando iba a dar sus frutos”. Así fue que, a lo largo de 1980, el presidente anunció una y otra vez que la sostendría a toda costa. Las expectativas de que sobrevendría una gran devaluación siguieron creciendo e intensificaron la compra de dólares y la fuga de

capitales, por las que el Banco Central perdió la mitad de sus reservas. La bomba estalló en manos del reemplazante de Videla, Roberto Viola, en marzo de 1981: quien más abiertamente se había opuesto a Martínez de Hoz desde el interior del régimen quedó finalmente a cargo de administrar las secuelas de su política.

Videla fue el primer presidente argentino en completar dos “mandatos” consecutivos (uno de tres y otro de dos años). Y el primero, tras décadas de inestabilidad, en entregarle el poder a un sucesor siguiendo las reglas del régimen vigente. Ambos datos hablaban de la fortaleza del Proceso, aunque velaban en verdad la total precariedad de la situación que se vivía. Viola seguía siendo resistido en los cuarteles y la Junta. Menéndez incluso quiso sublevar el Cuerpo III para evitar su arribo a la presidencia, y la Armada, al mando del almirante Isaac Anaya, se negó a votarlo para el cargo. Estas desconfianzas aumentaron cuando el nuevo mandatario arrancó su gestión con una serie de devaluaciones que redujeron drásticamente el poder de compra de los salarios y el nivel de actividad, sin lograr controlar por ello las demás variables económicas. Las medidas de Viola apenas sirvieron para realimentar la inflación, que pasó del 104,5% de 1981 al 164,8% en 1982. El empleo industrial, que ya había caído el 26% entre 1979 y 1980, se derrumbó otro 10% entre 1980 y 1981. El PBI del sector cayó un 23% entre 1979 y 1982 y el PBI global un 12%. En conjunto, el PBI per cápita sería en 1982 un 15% más bajo que en 1975. El país estaba viviendo, de lejos, su peor crisis desde los años treinta. Y el costo social sería aún mucho mayor que entonces.

En este contexto, el plan de apertura de Viola no concitó ningún entusiasmo en los políticos y terminó de enemistarlo con los uniformados. La crisis hizo que muchos dirigentes civiles se mostraran reacios a aceptar lo que durante tanto tiempo habían estado esperando. Ningún radical ni ningún dirigente importante de otras fuerzas, salvo del MID, aceptó un cargo en el gabinete. Antes bien, viendo que por primera vez en cinco años los grupos de interés –incluidos muchos empresarios, sobre todo en la UIA– se quejaban a voz en cuello, los políticos creyeron llegado el momento de reconquistar parte del prestigio social perdido e imponer condiciones. Con esta idea, la UCR, el PJ, el MID, el PI y la DC formaron la Multipartidaria en julio de 1981. Era, en concreto, un acuerdo para reclamar plazos y elecciones. A cambio, los partidos seguirían mostrándose comprensivos en lo que más interesaba a los militares: la Multipartidaria se negó a recibir a las Madres y su declaración inicial avaló el llamado de la iglesia a la reconciliación; dado que la

sociedad no revelaba mayor interés en revisar el pasado y se conocía ya muy bien lo que él ocultaba, el intercambio de elecciones por olvido parecía razonable.



De izquierda a derecha: Oscar Alende, Carlos Contín, Rogelio Frigerio, Deolindo Bittel y Arturo Frondizi, referentes de la Multipartidaria.

La Multipartidaria terminó de complicarle la vida al presidente, dejándolo completamente solo. En diciembre, una votación unánime de los comandantes, con la excusa de un problema de salud, terminó con su experimento aperturista e inauguró el de Galtieri, nuevamente anunciado como “una etapa refundacional”. El que por largo tiempo se recordaría como el año de la peor crisis de la economía argentina concluyó así, paradójicamente, con la promesa de que el Proceso retomaría su ímpetu y sus proyectos iniciales. Muchos dijeron tener todavía esperanzas en que así fuera. Pero eran muchos más los que estaban demasiado ocupados en sobrevivir al vendaval como para expresar sus dudas y objeciones.

Es que la crisis desatada estaba generando una pavorosa desorientación: un mundo hecho de estatus y vínculos tenidos como seguros se descomponía aceleradamente y no estaba nada claro dónde terminaría la caída, ni si de ella resultaría un nuevo orden o una nueva versión, más injusta y excluyente que todas las conocidas, de la crónica inestabilidad económica nacional. Martínez de Hoz no había logrado entregarles a sus mandantes nada parecido al capitalismo estable, abierto y competitivo que había prometido. Sí les ofreció un sistema económico más integrado y dependiente de los circuitos financieros externos, y mucho más concentrado en pocos grandes actores. Pero también afec-

tado por una muy alta inflación, con múltiples sectores productivos en serios problemas o directamente quebrados, y un estado igualmente quebrado que no podría sostener ni por asomo las inversiones públicas que venía realizando, el gasto de sus empresas ni de sus Fuerzas Armadas, ni tan siquiera pagar los sueldos de sus empleados (que de hecho se contaron entre los más afectados por la inflación), obligado a cubrir los crecientes intereses de una deuda externa cada vez mayor.

El proceso de “ajuste caótico” que siguió a la tablita repitió, agravado, el que se había vivido entre 1974 y 1976. Y aceleró y agudizó la transferencia de ingresos que los sucesivos gobiernos habían propiciado desde entonces. Pero lo hizo con tal grado de destrucción de las inversiones productivas, de los empleos y de los recursos financieros y fiscales del estado, que se convirtió en un fenomenal *boomerang* para las autoridades. Y en una fuerte limitación de las opciones que tendrían a su alcance quienes las sucedieran.



### **La patria financiera**

La “patria financiera” hizo fracasar el intento de Viola de controlar esta situación a través del desdoblamiento del mercado cambiario (es decir, fijando un dólar comercial barato para controlar los precios de los alimentos y de los insumos industriales importados, y un dólar financiero caro para que el estado, vendiendo los dólares que compraba a los exportadores, pudiera quedarse con la diferencia y cerrar sus cuentas). Ello no dio mayor resultado debido a que ahora el comercio exterior y las finanzas estaban dominados por empresas integradas al mercado internacional: los exportadores podían evitar el registro de sus ingresos por exportaciones en el país subfacturando sus ventas, y a su vez los importadores podían sobrefacturar sus operaciones adquiriendo divisas al tipo de cambio comercial para luego depositarlas en el exterior o derivarlas al circuito financiero local. La fuga de capitales y los fraudes al fisco se multiplicaban a medida que más actores económicos imitaban estos comportamientos y se generalizaba la expectativa –en última instancia, profecía autocumplida– de que el estado debería seguir devaluando la moneda. 

Un sistema económico hasta entonces organizado en torno a sus sectores más modernos y dinámicos se estaba convirtiendo aceleradamente en una economía dual, bastante parecida a las más atrasadas de

la región. Por un lado, se consolidó un sector compuesto por grandes empresas, pertenecientes a unos pocos grupos nacionales y multinacionales financieramente integrados a la economía mundial, que podían darse el lujo de tolerar sindicatos bien organizados y salarios relativamente altos y disponían de un amplio menú de recursos extorsivos que les permitían imponer sus preferencias al estado (por ejemplo, cambiar rápidamente de “cartera de inversiones” y disparar carreras detrás del dólar, suspender o despedir empleados y generar graves conflictos sociales, demorar el pago de impuestos y desfinanciar al fisco, y, sobre todo, fugar capitales). Por el otro, un espacio económico compuesto por unidades mucho más pequeñas, atrasadas tecnológicamente y en gran medida informales, débilmente integradas al sector moderno y la economía mundial o totalmente desvinculadas de ellos, que pagaban salarios muy inferiores, no ofrecían estabilidad ni otros derechos laborales y producían para un mercado empobrecido que no interesaba mayormente al gran capital.

Este sector informal dio lugar a una pobreza completamente nueva, no sólo por su dimensión, nunca antes vista en el país, sino porque poseía rasgos cualitativamente distintos de todo lo que habían conocido los sectores populares, por lo menos desde los años cuarenta. En la medida en que el mercado de trabajo formal perdió capacidad de absorción de nuevos trabajadores y expulsó a muchos de los que contenía, se elevaron las tasas de desempleo y de subempleo. El cuentapropismo en sectores de muy baja productividad (el pequeño comercio informal, principalmente), el trabajo temporario y las contrataciones precarias o por completo ilegales, el trabajo infantil, los salarios total o parcialmente en negro, la asignación de tareas muy por debajo del nivel de calificación de la mano de obra, el sobreempleo y el pluriempleo como opciones desesperadas con las que muchos buscaban completar un ingreso digno y otras situaciones similares se multiplicaron por doquier. En este marco, el empleo público, sobre todo en provincias y municipios, era la única fuente de trabajo estable y su crecimiento actuó como un colchón que amortiguó los déficits laborales y desequilibró aún más las cuentas públicas.

En conjunto, los ingresos de los sectores populares se derrumbaron. La participación de los salarios en el PBI descendió del 45% en 1974 al 34% en 1983. Las diferencias entre trabajadores fueron mucho más allá que en la etapa desarrollista. La pobreza y la indigencia por insuficiencia de ingresos (esto es, por no acceder a una canasta de bienes y servicios mínimos en el primer caso, y ni siquiera a una canasta de ali-

mentos en el segundo) habían sido hasta principios de los años setenta relativamente bajas en el país: un 5% la primera, marginal la segunda. Pero a partir de 1980 crecieron tan aceleradamente (llegarían en 1983 al 26,3% y el 7% respectivamente) que la misma estructura social se modificó: los más afectados fueron los trabajadores no calificados, los jóvenes que trataban de entrar en el mercado laboral y los de mediana edad que perdían los empleos en los que habían hecho carrera y ya no podían obtener otros semejantes. Pero también fueron afectados masivamente muchos oficios calificados –sobre todo en la industria de bienes durables, otrora puntal del desarrollo económico– y muchas profesiones. A raíz de ello se desató una nueva ola de emigración de mano de obra calificada que superó a la originada en motivos políticos en 1966 e incluso a la registrada entre 1974 y 1977 por la combinación de esos motivos y los económicos.

También se modificaron drásticamente las pautas de segregación urbana. Las villas de emergencia dejaron de ser un lugar de tránsito desde el cual se podría acceder, con más o menos tiempo de espera según los casos y las épocas, a una residencia consolidada, porque alquilar o comprar una vivienda se volvió una meta inalcanzable para muchas familias. Los asentamientos irregulares pasaron a ser su hábitat permanente, el lugar “al que ellas pertenecían”. Si es que lograban salir de allí, era, por regla general, para mudarse a viviendas similares o incluso de peores características: la erradicación de las villas del centro de Buenos Aires y otras ciudades en estos años significó que se expandieran numerosos barrios marginales tan o más pobres en los anillos más alejados de esas urbes.



### **La denuncia de la “plata dulce”**

La sociedad se vio sacudida por imágenes de inédita crudeza: por un lado, los comedores y las ollas populares de los que dependían los indigentes para sobrevivir, los millares de personas agolpadas frente a las persianas bajas de las empresas donde habían trabajado, el auge de una delincuencia alimentada por la desesperación. Del otro lado, el enriquecimiento injustificado de los especuladores, reflejado en producciones cinematográficas autoflagelantes como *Plata dulce*, de Fernando Ayala y Juan José Jusid. Estrenada en 1982, en su desenlace el protagonista, un *broker* de la *city*, es repudiado por su propio padre en estos términos: “Mientras el país se va para abajo, sólo los hijos de puta se van para arriba”. ■

sucedió con cierta prensa (*Humor* aprovechó para incorporar a sus páginas el análisis político hasta entonces ausente), no alcanzaron a impactar más que en sectores acotados de la opinión. La sociedad se activaba y los jóvenes expresaban ansias de rebeldía que el régimen había prácticamente suprimido en el pasado. Pero nada de ello era de momento una seria amenaza a la supervivencia de éste.

El problema fue que la actitud predominante en los cuarteles, e incluso en su entorno civil, era demasiado ambiciosa y optimista como para resignarse a una “salida” prudente. Los grandes empresarios, aunque no pocos tenían entonces mucho que reprocharles a Videla y Martínez de Hoz, recelaban más que nunca de una apertura que “retrotraería las cosas a 1972” (según rezaba otra solicitada publicada en el matutino *Clarín* el 1º de septiembre de 1981). Lo que según ellos no debía repetirse de la Revolución Argentina era la permeabilidad a las presiones populistas, porque esos sindicalistas y políticos no habían cambiado en nada. De allí que celebraran calurosamente el anuncio de Galtieri de que se proponía recuperar el “espíritu inicial”, en mayor medida desde que ese anuncio se tradujo en un plan de privatizaciones como el que Martínez de Hoz había resignado en 1976 y se reprodujo la fórmula entonces aplicada a la puja distributiva: congelamiento de salarios acompañado por alza de tarifas e impuestos y liberalización de los precios y del tipo de cambio.

Por otra parte, la crisis interna y externa del régimen fortaleció el espíritu guerrero de la oficialidad en varias direcciones simultáneas. El relajamiento de la disciplina y de las reglas jerárquicas, que venía de mucho tiempo atrás y el diseño institucional del Proceso había potenciado, halló como único remedio mantener activo el “espíritu de lucha”. Mientras más críticas merecía, más importante se volvió para los uniformados reivindicar su “victoria frente a la subversión”, porque era casi el único factor de cohesión y porque, a diferencia de los demás objetivos iniciales, significaba un “logro indiscutible”. Dentro y fuera de los cuarteles, las humillaciones por la frustración del programa de modernización y apertura económica, las críticas a la represión y otros “injustificados maltratos”, como el “favoritismo” del Vaticano por Chile, generaron un profundo sentimiento de rencor que potenció la crisis del sector occidentalista.

Ese espíritu guerrero parecía estar avalado además por el curso de la política internacional. El gobierno republicano de Ronald Reagan recibió con los brazos abiertos la designación de Galtieri, y el general argentino llegó a la conclusión de que se dispararían todos los incon-

venientes surgidos con Carter. Que el apoyo de la CIA a la ofensiva contrarrevolucionaria en América Central fuera una operación secreta en los Estados Unidos no debía ser mayor obstáculo. Y no fue la única dificultad imprevista: cuando Reagan quiso suspender las sanciones aplicadas por su antecesor, el Congreso le exigió que demostrara la “mejoría en la situación de los derechos humanos en el país”, cosa que no pudo o no quiso hacer, por lo que el embargo a la venta de armas continuó vigente. La Argentina debió seguir abasteciéndose de países con diplomacias menos exigentes, como Francia e Israel.

Galtieri estimaba que la “revolución neoconservadora” en marcha en los Estados Unidos, y que ya venía avanzando también en Gran Bretaña con Margaret Thatcher, le daría la razón en todo al Proceso, dado que compartía el fervor anticomunista, la opción militar para los países del Tercer Mundo en aprietos, las privatizaciones y el ajuste fiscal para contener a los sindicatos. De modo que el viento soplaría a favor de su plan de “profundizar” el curso. El único obstáculo para ese plan era, a sus ojos, el frente interno, no el externo: había que reconquistar el alma de la sociedad, recuperar el entusiasmo perdido, lo que sería difícil de lograr en medio de la crisis y con una política que descargaba cada vez más masivamente sus costos en los salarios. No fue para nada sorprendente que a fines de marzo de 1982 el sector de Miguel y Ubaldini, que ya se conocía como “CGT Brasil” (por la calle donde abrió su sede), convocara a una concentración en Plaza de Mayo (a la que incluso se plegó la “CGT Azopardo” de Triaca), y el régimen se viera forzado a disolver la manifestación con una dura represión que lo mostró por primera vez en años peleando por controlar la calle, y peor aún, contra manifestantes que desafiaban a la policía.

La carta en la manga para resolver estos problemas eran los planes para invadir Malvinas, que se venían elaborando desde el comienzo mismo del Proceso. Massera había hecho redactar uno. Anaya lo había imitado, y ahora encontró buen eco en su par del Ejército. El operativo se lanzó, un poco antes de lo previsto debido a la protesta sindical y los apuros económicos, el 2 de abril de 1982. Y fue, en varios aspectos, un éxito rotundo. Al haber preservado el secreto hasta último momento, la ocupación de las islas fue rápida e incruenta. El apoyo de la opinión pública y la dirigencia civil fue tan amplio y entusiasta que Galtieri pudo asomarse al balcón de la Casa Rosada y ver una Plaza de Mayo colmada. Los asistentes se cuidaron de vivarlo, pero le dieron esperanzas de que, si todo salía bien, llegarían a hacerlo. Los sindicatos y la Multipartidaria aceptaron suspender sus reclamos por salarios, reactivación y apertura

en pro de la “causa nacional”, y hasta Montoneros ofreció su colaboración desde el exilio. Las Madres proclamaron que “las Malvinas son argentinas y los desaparecidos también”, olvidando que muchos no lo eran: hasta los derechos humanos debían ahora nacionalizarse para ser legítimos. Y, como marco de todo ello, hubo algo que el régimen extrañaba desde la “campana antiargentina” y que lo volvió a aproximar a los fenómenos fascistas: la masiva y activa disposición de la sociedad a acallar a los disidentes.



### La causa “Malvinas”

La causa Malvinas fue ocasión para que periodistas, artistas y dirigentes de toda laya, incluso algunos a los que el régimen había tratado bastante mal, participaran con entusiasmo de actividades públicas que celebraban la “recuperación de las islas” y censuraban a las pocas voces que se atrevían a recomendar prudencia o desalentar una escalada. Voces entre las que se contaban dos que habían sido hasta entonces mucho más procesistas que la media, Álvaro Alsogaray y Arturo Frondizi, pero que entendían algo más que el resto de política internacional; y otra que no lo había sido tanto, Raúl Alfonsín, y que, tras ser criticado por su partido (incluso por Illia y miembros de su propio sector), optó por guardar silencio.



Plaza colmada el 2 de abril de 1982. Archivo *La Nación*. 

Sin embargo, el escenario diplomático y la actitud británica frustraron desde un principio las expectativas de la Junta. A horas de la invasión, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió una resolución que la condenaba y ordenaba a la Argentina retirar sus tropas, que fue votada incluso por países favorables a la descolonización pero no a avalar el uso de la fuerza, menos aún si quienes vivían en las islas no eran ciudadanos argentinos ni deseaban serlo (como vimos en el capítulo 3, este aspecto hacía de Malvinas un caso distinto de otros que la ONU consideraba colonias). El argumento de la Junta de que no había habido avances en la negociación fue desestimado: los lazos comerciales y culturales con los isleños se habían incrementado desde 1965 y se estaban barajando alternativas para una solución de compromiso (por ejemplo, una administración compartida). La invasión, por el contrario, disculpaba a los británicos por no haber cedido más y los eximía de dar explicaciones. Así lo entendió Thatcher cuando, con el respaldo de la ONU y contabilizando los problemas internos que enfrentaba su gobierno, no dudó en hacer lo que la Junta había casi descartado que hiciera: puso en marcha una costosísima operación militar para recuperar las islas por la fuerza si los argentinos no se retiraban. Lo peor fue que la Junta militar lo consideró una fanfarronada ante la cual convenía escalar el conflicto, de modo que envió más tropas y equipos a lo que se rebautizó “Puerto Argentino”, designó gobernador a un general e instauró un nuevo estatus legal para sus habitantes. Galtieri argumentó que el entusiasmo del pueblo con la “causa” era tal que no podía ceder en nada. Pero lo cierto era que a su criterio no tenía por qué hacerlo: los británicos no podrían revertir la ocupación por las armas ni tampoco obtener mucho en una mesa de negociaciones. Además, y por sobre todo, la invasión de Malvinas no había sido para él ni para la Junta un recurso desesperado para ganar tiempo o salir del paso ante la protesta social, sino más bien la llave para contrarrestar una larga serie de frustraciones argentinas con sucesivos proyectos de expansión económica, política y militar. No podían por lo tanto conformarse con menos que una victoria total que redimiera a las islas y al país.

Ello explica que no se haya prestado mayor atención a las oportunidades de acuerdo. La más seria fue la que se presentó cuando el Departamento de Estado estadounidense, corriendo el riesgo de enemistar a los Estados Unidos con su más importante aliado, propuso implementar lo que hasta la ocupación se había estado discutiendo: una administración compartida. Thatcher respiró aliviada cuando se enteró de que el gobierno argentino había rechazado esa oferta, que le hubiera

resultado muy difícil presentar a sus connacionales como algo diferente de una derrota.



Leopoldo F. Galtieri y Mario Benjamín Menéndez, gobernador militar de las Islas Malvinas, en ocasión de la visita de Galtieri a las islas el 22 de abril. Revista *Gente*, abril de 1982.

En la fatal decisión de la Junta pesó la expectativa de que las fuerzas británicas finalmente se detuvieran, o que fueran detenidas por los estadounidenses. Pero, lejos de hacerlo, éstos comenzaron a colaborar militarmente con Thatcher. Los cálculos sobre la importancia de la operación represiva en América Central, en que militares argentinos y agentes de la CIA cooperaban, terminaron de desmentirse. En vez de revisarlos para responder a la imprevista situación, Galtieri los substituyó por otros, opuestos, con el objetivo de insistir en la tesitura que lo había metido en la boca del lobo: en nombre de un regionalismo ya no anticomunista sino abiertamente antiimperialista, buscó la solidaridad de los gobiernos democráticos de Perú y Venezuela y hasta la del régimen cubano. De ellos recibió lo único que podían darle: gestos y palabras de aliento. Amenazó entonces a Estados Unidos con “extender el conflicto” pidiendo la colaboración militar de la Unión Soviética y convocó a las fuerzas vivas de la sociedad —políticos, sindicalistas, periodistas, obispos, empresarios y artistas— a recorrer el mundo para explicar que el conflicto no obedecía a una ocurrencia de déspotas desorbitados sino al reclamo de todo un pueblo contra el atropello de un poder imperial que ya llevaba

ciento cincuenta años. Los derechos argentinos seguían siendo irrebates. Pero los emisarios se vieron en figurillas para explicar por qué apoyaban un acto violatorio del derecho internacional contra una potencia a la que no había muchas posibilidades de imponerse por la fuerza. Por otra parte, si Argentina tenía éxito en su intento, ello seguramente redundaría en la continuidad de una dictadura criminal y destructiva.

Como sea, la guerra se había vuelto inevitable. Se inició el 2 de mayo con el hundimiento del crucero General Belgrano, un acto brutal con el que los británicos cerraron la puerta a cualquier otra negociación. La Junta, en parte por falta de preparación para un conflicto como el que se iniciaba y en parte por no haber tomado en serio que fuera a producirse, no había organizado una defensa eficaz. Muchos de sus recursos más valiosos seguían en el continente o estaban desplegados sobre la frontera con Chile. Salvo en las operaciones aéreas (con las que las fuerzas argentinas lograron dañar o hundir varios barcos británicos), desde un principio quedó en evidencia la superioridad tecnológica, profesional y de conducción del adversario. Gran Bretaña tomó el control del espacio aéreo y naval en torno a las islas, eliminando la ya escasa movilidad de los defensores, a pocos días de iniciadas las acciones. A fines de mayo estableció una cabeza de playa al sur de la capital, donde se concentraban las tropas argentinas, que ofrecieron todavía una desesperada resistencia apoyada esporádicamente por aviones de la Fuerza Aérea. Finalmente, el 14 de junio, y pese a que Galtieri había ordenado “combatir hasta el último hombre”, se rindieron. Alrededor de 700 argentinos y 300 británicos murieron en la contienda.



### Un relato de la guerra

–¡Con qué ganas me comería un pichiciego! –dijo el santiagueño [...] Había porteños, formoseños, bahienses, sanjuaninos: nadie había oído hablar del pichiciego. El santiagueño les contó: –El pichi es un bicho que vive debajo de la tierra. Hace cuevas. Tiene cáscara dura –una caparazón– y no ve. Anda de noche [...] Seguían los bombardeos [...] seguían quietos, fumando, o sentados contra las paredes de arcilla blanda y con la cabeza entre las piernas. De a ratos llegaba el zumbar de los aviones y el tableteo de la artillería del puerto. Tenían hambre, abajo, en lo oscuro. Desde entonces, entre ellos, empezaron a llamarse los “pichis”.

La noticia cayó como una bomba en el ánimo de la población, que había querido creer la versión difundida por los medios locales según la cual las pérdidas del enemigo eran tan grandes que no tardaría en desistir. Miles de personas indignadas salieron a las calles. Como consecuencia de esto, el 16 de junio los generales obligaron a Galtieri a renunciar, mientras la Armada y la Fuerza Aérea se retiraban de la Junta buscando cargar éste y los demás fracasos del régimen sobre la espalda de sus pares de tierra. Éstos designaron entonces en soledad al general retirado Reynaldo Bignone para encabezar un nuevo gobierno. Y Bignone anunció inmediatamente el inicio de la transición a la democracia.



Rendición de las tropas argentinas, el 14 de junio de 1982, y retorno de los soldados al continente.

### **El fin del poder militar y el camino hacia la democracia**

Con Malvinas terminó de descomponerse el poder militar. Los oficiales y suboficiales que habían combatido se consideraban traicionados por los altos mandos y la posibilidad de que se sublevaran flotaba en el ambiente. Las Fuerzas Armadas, que habían concebido el Proceso como broche de oro del rol que venían cumpliendo desde 1930 y como una inmejorable ocasión para refundar un orden que las confirmaría como guardianas del bienestar colectivo, debieron resignarse a dejar el poder en condiciones mucho peores a las padecidas en mayo de 1973:

el repudio que entonces habían recibido de la juventud peronista se había transformado ahora en un hecho cotidiano y generalizado: lo sentían cada vez que salían a la calle vistiendo el uniforme. A ello se sumó la ausencia de liderazgos, fruto del descrédito de los comandantes retirados y de la “selección negativa” en las cúpulas. Ya no había siquiera corrientes de opinión en los cuarteles: los fracasos sucesivos y los clivajes cruzados las habían descompuesto y la derrota había terminado de desarmarlas (tardaría varios años en formarse una nueva facción, que recogiera la “comuni3n entre pueblo y ej3rcito” sellada el 2 de abril). Hasta sus aliados m3s cercanos desconfiaban: en la curia, el empresariado y los c3rculos conservadores se extendi3 la opini3n de que los militares no debían nunca m3s ejercer funciones para las que no estaban preparados. Todo ello tuvo el efecto ben3fico de hacerlos transitar el lapso hasta la entrega del gobierno a los civiles con inusitada docilidad y de un modo casi por completo incruento. Si ese lapso no fue m3s breve, se debi3 a que los partidos no estaban preparados para acelerar las cosas y temían el descalabro que podría resultar de ejercer mayor presi3n sobre Bignone. Tanto es así que, una vez acordado el cronograma que fij3 los comicios para octubre de 1983, le dejaron a éste las manos bastante libres para que hiciera lo que pudiera.

Esto tuvo tambi3n efectos parad3jicos: un gobierno por completo carente de poder pudo tomar decisiones relevantes que condicionarían fuertemente a sus sucesores. Cabe destacar sobre todo aquellas que implement3 para congraciarse con empresarios y sindicalistas, desactivando las pujas distributivas que podían complicar a3n m3s la situaci3n y buscando restablecer los lazos entre corporaciones. Por ejemplo, continu3 la licuaci3n de pasivos empresariales y su estatizaci3n a trav3s de nuevas iniciativas diseñadas por Cavallo, ahora desde la presidencia del Banco Central; otorg3 jugosas concesiones petroleras, de obras p3blicas y hasta de medios radiof3nicos y televisivos; extendi3 la promoci3n industrial, consistente en generosas reducciones impositivas; inici3 una apresurada normalizaci3n de las conducciones sindicales y, para relegitimar a las cúpulas tradicionales, les devolvi3 el control de las obras sociales y concedi3 aumentos salariales. Indiferente al aumento insostenible del d3ficit fiscal (que en 1983 llegaría al 16,8%) y la aceleraci3n inflacionaria (que sum3 un 343,8% anual), Bignone pudo dar estos pasos porque muchos de ellos eran bien vistos por los partidos, que abogaban por dejar atr3s “las polític3s de ajuste” aplicadas por el r3gimen y causantes de todos los problemas; problemas que, seg3n creían, se disiparían en cuanto se adoptaran medidas opuestas y reactivadoras.

Los partidos, además, estaban demasiado enredados con otros menesteres. Isabel Perón dio su aval desde Madrid a una fórmula presidencial compartida con Massera, con lo que terminó de convencer al grueso de la dirigencia política y sindical peronista de que no convenía contar con ella. Pero, al igual que en 1975, esta dirigencia no tenía los medios adecuados para actuar en ausencia del líder o de un heredero. Los sindicalistas tomaron la iniciativa, en parte gracias a que estaban recuperando sus organizaciones: lideraron la campaña de reafiliación al partido y controlaron sus instancias de conducción (Lorenzo Miguel fue designado su vicepresidente, a cargo de la presidencia). Desde allí impusieron a los candidatos, sin poder impedir algunos conflictos bastante violentos, como el que enfrentó a Herminio Iglesias con Antonio Cafiero por la candidatura a gobernador bonaerense: Iglesias se impuso con el apoyo de Las 62 en medio de golpes y denuncias de fraude. Los elegidos para integrar la fórmula presidencial fueron Ítalo Luder y Deolindo Bittel. Aunque eran poco carismáticos y estaban demasiado asociados a los años setenta, Miguel estimaba que bastarían para triunfar: según él, nada había cambiado en el país, salvo que los militares habían probado plenamente que los peronistas eran los únicos capaces de gobernar con legitimidad y que cualquier error u horror que pudieran haber cometido había sido ya superado con creces por aquéllos.

Sin embargo, no era tan seguro que las vueltas de la historia estuvieran poniendo al país frente a la sola opción de jugar una vez más su suerte de la mano del peronismo. En parte, porque algunas cosas sí habían cambiado. Sobre todo en la UCR, que, a diferencia del PJ, experimentó una profunda renovación durante la transición. Renovación que tenía mucho que agradecerle tanto al esfuerzo de Balbín por mantener activa a esta fuerza, como a su desaparición (había fallecido en septiembre de 1981): sin Balbín, el alfonsinismo –hasta entonces minoritario– se impuso en la interna y liberó al partido del lastre de haber querido entenderse con el Proceso, ubicándolo oportunamente a la vanguardia de la denuncia de sus crímenes.

Alfonsín tuvo éxito en esta operación de “reinención” no sólo por los azares de la coyuntura, sino también porque se adecuó a cambios más profundos que se operaban en la sociedad. El repudio total al régimen y a las Fuerzas Armadas, que fue en aumento a medida que se acercaban las elecciones, no sólo expresaba la frustración por los fracasos y el horror por los crímenes que salían a la luz, sino también la necesidad –más profunda y de más largo aliento– de dar vuelta una página de la historia y hacer a un lado a los actores hasta entonces dominantes.



Multitudinarios cierres de campaña de la UCR y el PJ, en las portadas del diario *La Nación*, 27 y 29 de octubre de 1983.

El Proceso podía considerarse ahora el acto final del largo ciclo de decadencia: lo que se había vivido desde 1976 (tal como relataba *La república perdida*, película emblemática de la transición) era la conclusión de un periplo iniciado en 1930 y signado por el militarismo, la falta de respeto a las libertades y al pluralismo, y la violencia creciente. De este modo la transición retomaba, reformulado e incluyendo al Proceso, el relato que éste había querido instalar, manteniendo al peronismo en la difícil posición de ser parte del problema: de allí que, contra la esperanza de Miguel, los horrores de hoy no disculparan tan fácilmente los de ayer.

Este nuevo consenso se fortaleció principalmente en los sectores medios pero también hizo pie en las clases populares. La capacidad de los sindicatos de representar sus intereses había disminuido, e incluso entre los obreros sindicalizados, que pesaban cada vez menos, primaba la desconfianza hacia la viabilidad y la conveniencia de un gobierno controlado por los sindicatos. A muchos de esos votantes les sonaba tentadora la promesa de Alfonsín de que con una democracia pluralista y estable sería posible recuperar la igualdad social perdida, porque “con la democracia se come, se cura y se educa”. O por lo menos les sonaba mejor que la cruda advertencia lanzada por Herminio Iglesias, según la cual no había que esperar mucho del restablecimiento de la Constitución y las formas institucionales porque “con ellas no se come” (aunque pronto el país comprobaría que la visión de Iglesias era en cierto modo más realista que la de Alfonsín).

Este consenso democrático y republicano era en gran medida inédito. Ya no se postulaba un movimiento popular que pretendía para sí toda la legitimidad, como había sucedido con el yrigoyenismo y el peronismo. Tampoco existía ya una disputa irresuelta sobre las reglas de juego: con la transición de 1983 se estaba cerrando el largo ciclo de inestabilidad del régimen político. Pero todo esto llegó acompañado, como hemos visto, por una profunda y acelerada desigualdad de condiciones y por la exclusión social de amplios sectores, situaciones que la política de partidos debería tratar de reparar con recursos por demás escasos. Si la historia argentina desde mediados de siglo hasta entonces había sido la de una difícil convivencia entre una sociedad signada por el igualitarismo y la movilización y un régimen político azotado por la ilegitimidad, la que desde entonces se empezó a tejer invirtió los términos y obligó a una democracia aún débil a cumplir la ardua tarea de lidiar con nuevas formas de conflicto, desarticulación y negación de derechos. Algo que se complicaría aún más debido a que, por el momento, la gravedad de esos problemas era difícil de percibir y comprender. Y también porque la adhesión a la democracia nacía en gran medida de esa ignorancia y, más que de convicciones muy firmes, de la conciencia de que todas las demás alternativas habían fracasado.

## **8. La conquista de la democracia y el agravamiento de la crisis**

Alfonsín fue el protagonista de una transición que la ciudadanía vio como la solución de los males acumulados durante décadas de inestabilidad institucional y violencia. En este marco, el líder radical lograría derrotar al peronismo, al tiempo que contribuiría a cargar a la joven democracia con expectativas muy difíciles de satisfacer. Una de las prioridades del nuevo gobierno fue juzgar a los principales responsables del terrorismo de estado. La creación de la Conadep y el juicio a los ex comandantes fueron contundentes logros de esta política. Pero no impidieron que Alfonsín quedara pronto atrapado entre las presiones del movimiento de derechos humanos por ampliar los juicios y las de los militares por detenerlos. En los demás terrenos, dificultades de este tipo tardarían aún menos en aparecer. En el plano sindical, la Ley de Reforma impulsada por el Ejecutivo fue rechazada en el Senado. Y en el económico, aunque Alfonsín buscó conciliar el control de la inflación con el aumento del empleo y los salarios, para probar la comunión entre democracia y justicia social, más allá de un breve período del Plan Austral los resultados fueron decepcionantes. El peronismo, mientras tanto, atravesó un proceso de renovación que lo relegitimaría ante la sociedad. Pero en el contexto de una intensa competencia electoral, la cooperación entre los partidos resultó impracticable, y esto, sumado a sublevaciones militares, protestas gremiales y un desfavorable contexto internacional, conduciría a la hiperinflación y a la entrega anticipada del poder a quien fue electo presidente en 1989.

### **La primavera alfonsinista**

El 30 de octubre de 1983 Raúl Alfonsín logró triunfar allí donde tantos habían fracasado en las décadas anteriores: derrotó al peronismo en elecciones limpias, sin restricciones, reuniendo nada

menos que el 52% de los votos contra el 40% de Ítalo Luder. Lo hizo convocando expectativas muy diversas bajo el abarcador manto de la promesa de reparar los daños causados por el Proceso, y en un sentido más amplio, los acumulados en décadas de inestabilidad, violencia y atropellos a la Constitución. Presentó a la UCR como el “partido de la democracia” y logró atraer a un electorado que excedía con creces al suyo tradicional, a derecha e izquierda del espectro, incorporando incluso votantes populares hasta entonces fieles al peronismo. Su campaña tuvo tres pilares fundamentales: investigar y juzgar los crímenes del terrorismo de estado, democratizar las instituciones y en particular los sindicatos, y reactivar rápidamente la economía para recuperar los niveles de empleo y salario. El común denominador fue la sobrestimación de las posibilidades de cambio, motivada no sólo por las necesidades políticas del nuevo gobierno sino por el optimismo generalizado de la sociedad, que quería creer que por fin era posible dejar atrás los males que venía padeciendo.

El terreno donde más velozmente pudo avanzar Alfonsín fue el de los juicios, aunque también allí el excesivo optimismo pronto provocó problemas, que se sumaron a los propios de un asunto particularmente conflictivo y complejo. Las evidencias sobre los crímenes, que habían ido acumulándose desde el final de la guerra de Malvinas con el descubrimiento de cientos de fosas comunes, las confesiones de algunos represores arrepentidos y la difusión de los testimonios de los familiares generaron un enorme apoyo a los reclamos de “verdad y justicia”. El entonces candidato radical, a diferencia de su par peronista, no aceptó la autoamnistía que la Junta dictó en su propio beneficio poco antes de los comicios. Y se esmeró en delinear lo que serían sus iniciativas al respecto: promover el juicio a los principales responsables de la represión ilegal como asimismo a las cúpulas guerrilleras, para equilibrar las cosas entre “los dos responsables de la violencia política”, y a un número acotado de represores paradigmáticos que hubieran cometido actos abiertamente ilegales (aunque no estaba claro a quiénes se incluiría en esta categoría, dado que todo el plan represivo tenía ese carácter), disculpando a aquellos que sólo habían “obedecido órdenes”. Alfonsín apostó así a una vía media: atender la demanda de justicia de los familiares de las víctimas y la expectativa más difusa de la sociedad al respecto, y lograr la subordinación de los oficiales en actividad, que en su mayoría serían disculpados aunque hubieran tenido alguna participación en la represión. Con este ánimo dictó, al asumir, un decreto en el que ordenaba el juzgamiento, por

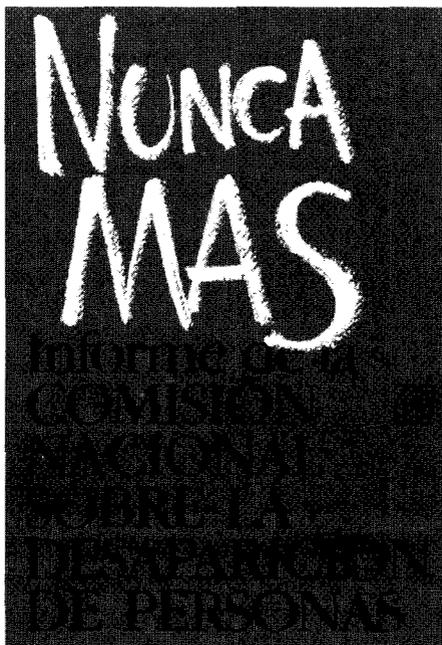
el Senado, el partido de los Sapag (el Movimiento Popular Neuquino que, como en los años sesenta, gobernaba en Neuquén) hizo pesar sus dos bancas, dada la renuencia a colaborar de la primera minoría en manos del peronismo (que reunía allí 21 bancas, contra 18 de la UCR), para excluir de la disculpa por obediencia debida todos los actos “atrocés y aberrantes”. Ello permitía aumentar notablemente la cantidad de potenciales acusados y, lo que era aún más problemático, volvía muy difícil determinar su número. Cuando Alfonsín se negó a ordenar a sus legisladores, que eran mayoría en la Cámara Baja, que volvieran a votar el proyecto original, o a vetar él el cambio introducido, puso en evidencia su inclinación a ampliar las metas iniciales, y a confiar en que el problema se resolvería con el paso del tiempo.

En esa voluntad de ampliación influyeron dos hechos: que, por el momento, parecía que los militares no tenían forma de frenarla y que, debido a los pasos dados por el gobierno, las expectativas de la opinión pública respecto de los juicios habían aumentado. Y también los problemas que progresivamente se le presentaban al gobierno para implementar sus iniciativas en los demás terrenos. La victoria moral de la democracia sobre el autoritarismo que emanaría de los juicios era tan necesaria para consolidar el régimen como para mantener la ventaja del oficialismo frente a la oposición, que lo criticó desde un comienzo por los déficits económicos y sociales.



### La CONADEP

Formada también por decreto presidencial e integrada por intelectuales, artistas y activistas de derechos humanos (la presidió Ernesto Sabato y la integraban, entre otros, la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú y la dirigente de la APDH Graciela Fernández Meijide), trabajó hasta septiembre de 1984 recolectando testimonios detallados de los familiares de desaparecidos y los sobrevivientes de la represión. Redactó el *Nunca Más*, un informe mucho más exhaustivo y desgarrador que el de la CIDH sobre el terrorismo de estado, que constituiría una invaluable fuente de pruebas para los juicios. El informe de la CONADEP también le trajo problemas inesperados a la política oficial, pues una “verdad ilimitada” no era fácil de compatibilizar con una justicia en cierta medida acotada: lo que se había considerado difícil de juzgar y castigar hasta ese momento se volvió, una vez conocido el informe, imposible de perdonar u olvidar.



Primera edición del informe *Nunca Más*, Buenos Aires, Eudeba, 1985. ▀

El proceso contra las Juntas se inició en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero a la vez muchos juzgados ordinarios iniciaron los suyos contra esos y otros acusados, debido a cientos de demandas de los familiares. En septiembre de 1984, la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires, en cuya composición el gobierno se había esmerado tanto como en la de la Corte Suprema, le quitó al Consejo la causa contra los ex comandantes, puesto que ya era evidente que allí no avanzaría. Pero otras Cámaras del país, integradas en muchos casos por jueces del Proceso, no aceleraron ni unificaron las causas que les correspondían. Mientras tanto, se multiplicaron los planteos de oficiales en actividad o retirados, sacerdotes y políticos conservadores, e incluso sindicalistas y peronistas de derecha, que afirmaban que los juicios eran “la victoria de la subversión por otros medios”. Contra la previsión oficial de que los juicios acotados permitirían separar a los más involucrados en la represión del resto de la oficialidad, las Fuerzas Armadas en pleno reivindicaban “lo actuado”. Ése seguía siendo el único terreno en el que “habían triunfado” y un valioso factor de cohesión interna. Además, Alfonsín no parecía capaz de ofrecerles nuevos roles institucionales.



Los miembros de las Juntas escuchan la lectura del fallo que las condena, leído por el presidente de la Cámara Federal, León Arslanián, 9 de diciembre de 1985. Noticias Argentinas. Pool.

Las “hipótesis de conflicto” tradicionales quedaron invalidadas al avanzarse en la integración económica con Brasil y la solución pacífica de los conflictos limítrofes con Chile. En noviembre de 1984, Alfonsín convocó a un plebiscito para aceptar o rechazar el laudo arbitral del Vaticano por el Canal de Beagle, que mayormente favorecía al país vecino: aunque el “Sí” logró más del 60% de respaldo, el peronismo legislativo votó casi en bloque en contra e intentó agitar el avispero militar con la idea de que el gobierno estaba resignando soberanía. Por otro lado, aunque la administración radical se negó a firmar la paz con Gran Bretaña e insistió con operaciones en torno a Malvinas para elevar los costos de defensa de los británicos, los nacionalistas civiles y de uniforme lo acusaron de continuar la “vergonzante desmalvinización” emprendida por Bignone. Algunos fueron incluso más allá y denunciaron que el plan era “destruir a las Fuerzas Armadas”. La drástica reducción del presupuesto militar parecía darles la razón.

Por otro lado, los percances en la economía y el mundo del trabajo estuvieron a la orden del día desde los primeros meses de 1984. En ambos terrenos quedó de manifiesto que el antiguo “orden corporativo” –que Alfonsín creía tener el mandato de suprimir– estaba más vivo de lo que su contundente victoria electoral le había hecho pensar, y que los desequilibrios que le habían sido propios, en particular la crónica y

muy alta inflación, no sólo seguían presentes sino que se habían agravado. En suma, salvo en lo que respecta al actor militar, el “viejo orden” tardaba en desaparecer y no estaba para nada claro cómo podría instaurarse uno nuevo.

Esta circunstancia pronto se hizo evidente en el campo sindical. Y en ello se reveló también lo problemático de la posición general que el alfonsinismo asumía frente al peronismo. Recordemos que el presidente y su sector eran herederos directos de la tradición intransigente, la que tanto en tiempos de Frondizi como de Illia había intentado arrebatarse de manos de Perón las banderas de la revolución nacional. Alfonsín creyó que la promesa de “democracia con justicia social” con que había logrado derrotar a Luder lo habilitaba para recoger tanto el legado de sus predecesores en la intransigencia, como el del jefe ausente de los derrotados, para “sintetizar lo mejor de las tradiciones políticas populares de la Argentina”. Y ello parecía ser finalmente factible, además, porque ahora se daban condiciones que antes habían faltado: había consenso democrático, no había veto militar, y el peronismo ya no podía invocar una legitimidad revolucionaria ni electoral inapelable. Había llegado el momento, por tanto, de concretar los cambios que una y otra vez se habían frustrado. Entre ellos, uno fundamental: la reforma del “modelo sindical” por la que habían trabajado durante la gestión de Illia varios de los más importantes funcionarios del nuevo gobierno, entre ellos Bernardo Grinspun, ministro de Economía, y Antonio Mucci, titular de la cartera de Trabajo.

Gracias a Viola, Liendo y Massera, el Proceso había preservado lo más importante de ese modelo. Pero, en opinión del alfonsinismo, había ayudado a volverlo una cáscara vacía. La “burocracia sindical”, además, había sido deslegitimada por la derrota electoral y por el “pacto militar-sindical” que Alfonsín había denunciado en la campaña y del que daba prueba la acelerada normalización de los gremios, que el nuevo gobierno interrumpió. Se trataba entonces de darle el golpe de gracia, de separarla del todo de las bases, y también de alejarla de los políticos peronistas, quienes podrían seguir actuando como una fuerza populista conservadora, capaz de ganar elecciones en provincias periféricas detrás de figuras tradicionales. Algo que esos líderes provinciales habían buscado con ansia, como vimos, en la época del neoperonismo.

De los once distritos donde había triunfado el peronismo (la UCR lo había hecho sólo en siete), la mayoría eran, en efecto, subdesarrollados y periféricos. Esa base “neoperonista” le había otorgado al PJ la primera minoría en el Senado. Pero sucedió que esos senadores y goberna-

dores no compartían la idea de Alfonsín. Y sacaron a los gremialistas, que antaño habían combatido, de un brete que podía conducirlos a su extinción. En su decisión pesaron los fracasos acumulados desde la muerte de Perón, y más que nada, su muerte misma: con el futuro del peronismo en peligro, cualquier nueva amenaza parecía mortal y fomentaba el sentido de cuerpo. Pero también pesó la confianza que les brindó el triunfo en tantas elecciones locales. Además, identificar a Alfonsín y su proyecto con los intentos de desperonizar a los gremios que se remontaban a la Libertadora les permitía poner entre paréntesis su “legitimidad formal”, en nombre de una “legitimidad real” que todavía encarnarían el PJ y el “pueblo peronista”. Y, por sobre todo, pesó un mal cálculo oficial respecto de la vilipendiada burocracia sindical: en rigor de verdad, era bastante más representativa de las bases que los grupos gremiales que apoyaron la reforma, aunque éstos fueran más democráticos en sus principios y planteos.

En concreto, la Ley de Reforma Sindical pretendía asegurar el pluralismo en la elección de autoridades y la toma de decisiones, otorgando representación a las minorías, mayor autonomía a las seccionales y los delegados por empresa, e imponiendo límites a la reelección de los dirigentes y un mayor control sobre el manejo de recursos. Fue aprobada en Diputados, pero cuando llegó al Senado, en marzo de 1984, la oposición en bloque del peronismo, a la que se sumaron los Sapag, determinó su rechazo. Fue un baldazo de agua helada para la estrategia general con que el gobierno buscaba consolidarse en el poder. Mucci fue desplazado y su reemplazante debió ceder a casi todas las pretensiones de los sindicalistas peronistas para regular la renovación de autoridades en los gremios. De esa situación resultaron, además de un buen número de reelecciones, algunas conducciones renovadoras que se alinearon con Los 25 o con Ubaldini, mientras que la izquierda y los radicales, que habían apoyado la iniciativa reformista, perdieron peso o a duras penas lograron conservar el que tenían.

El fracaso de Mucci probó que el peronismo seguía ejerciendo un poder suficiente para bloquear aquellos cambios que pudieran perjudicarlo, y que no se desmembraría. El intento de reforma incluso lo había unificado, sobre todo en el ámbito sindical: la CGT-Brasil, que reunía a Las 62 y Los 25, y la CGT-Azopardo, heredera de la CNT de Triaca, habían confluído para enfrentarlo en una CGT única con una conducción colegiada. Triaca, otrora paradigma del participacionismo, consciente de la necesidad de frenar la inflación, había sido también el más dispuesto a acordar políticas económicas con Alfonsín. Pero, dada

la prioridad que éste dio a la “lucha contra la burocracia”, “Azopardo” decidió reincorporarse a Las 62, olvidando su desconfianza hacia el método de “golpear y negociar”. Como consecuencia, a principios de septiembre, mientras el gobierno intentaba sentar a los gremios en una mesa de concertación con el empresariado para acordar precios y salarios y evitar la hiperinflación (en la segunda mitad de 1984 se llegaría a un ritmo del 1000% anual), la CGT unificada realizó su primer paro general para exigir la inmediata apertura de las paritarias, cerradas desde 1975. Su siguiente paso fue la formación del “grupo de los 11” con las entidades empresariales y la redacción conjunta de una lista de reclamos (los “20 puntos”, que luego serían 26), que incluía el aumento del gasto público, de los salarios y de los subsidios a la producción, la reducción de los impuestos y las tasas de interés, y la reactivación de la obra pública. El contradictorio listado se presentaba como la voz del “país real”, frente al “país legal” que encarnaba Alfonsín.

Alfonsín se había estado esmerando por cumplir otra promesa de campaña: “combatir la inflación y al mismo tiempo hacer crecer el salario real, y al mismo tiempo hacer crecer la economía”. De hecho, en la primera mitad de 1984 pareció encaminado a lograrlo: los índices de precios bajaron a alrededor del 12% mensual y los salarios se recuperaron hasta representar el 40% del PBI. Pero, contra lo que el propio Alfonsín y la opinión pública en general creían, los salarios de fines de 1983 se asemejaban más a los de fines del gobierno peronista que a los de 1981, y eran completamente insostenibles en medio de la crisis económica y fiscal. Ello se comprobó desde mediados de 1984, cuando el alza de precios les ganó la carrera por varios cuerpos y perdieron el terreno recuperado desde la guerra de Malvinas. Grinspun fue entonces obligado a firmar un acuerdo con el FMI, que otorgó créditos para pagar los intereses atrasados de la deuda y reforzar las reservas a cambio de un plan antiinflacionario, consistente en retrasar los aumentos de tarifas y salarios. Sin embargo, la inflación no se detuvo. Objetado ahora tanto por quienes creían que no se esforzaba en hacer el ajuste, como por quienes lo acusaban de haberse rendido a sus exigencias, en febrero de 1985 dejó su cargo.



### **Ubal dini: “vocero” de los reclamos sociales**

Saúl Ubal dini cobró vuelo propio desde el conflicto por la ley Mucci: dejó de ser un simple vocero de Lorenzo Miguel para convertirse en el más destacado dirigente de la CGT. Pronto sería confirmado como su único

secretario general, desplazando a Triaca y a los demás integrantes de la dirección colegiada. Su pertenencia a un sindicato pequeño fue una ventaja y no un obstáculo para transformarse en el portavoz de reclamos sociales más amplios que los sindicales, los de los sectores populares informalizados y empobrecidos, y en el rostro de una estrategia de oposición inclemente que recuperaba la tradición de la Resistencia. Ubaldini tomó por costumbre afirmar que “la verdadera democracia era el pueblo feliz”, a lo que el presidente retrucó identificándolo como el máximo exponente de una “oposición irresponsable”.



Saúl Ubaldini, líder de la Comisión de Los 25. Revista *7 Días*, año XV, núm. 798, septiembre de 1982. ■

Su caída puso fin a la apuesta que había hecho Alfonsín para, con simples medidas reactivadoras, levantar las persianas de las fábricas cerradas y recuperar el empleo y los niveles de igualdad social previos al derrumbe. Ninguno de los problemas estructurales que lo habían provocado había desaparecido y algunos incluso seguían empeorando. Levantar esas persianas no era fácil, ante todo, porque no sólo ocultaban una caída circunstancial de la demanda. Las empresas carecían de capital, habían perdido sus proveedores y sus clientes. En consecuencia, los estímulos de Grinspun –protecciones comerciales, créditos baratos y aumentos salariales– hacían sobre todo subir los precios y convencían

a los eventuales inversores de que el dólar seguiría también subiendo, por lo que les convenía continuar fugando capitales (el total de fondos argentinos en el exterior llegaba ya a unos 43 000 millones de dólares, suma casi equivalente al total de la deuda externa).

Las tasas de interés internacionales también seguían por las nubes. México había dejado de pagar su deuda en 1982, y su incumplimiento endureció el trato que los bancos y gobiernos centrales ofrecían al resto de los deudores. El pedido de Alfonsín de renegociar los pasivos del país en condiciones que le permitieran crecer y aseguraran la estabilidad de su naciente democracia no tuvo, por ello, un gran eco. Llamativamente, recibió una respuesta más indiferente de Europa –incluidos los gobiernos socialdemócratas de España y Francia, con los que tenía mayor afinidad– que del presidente estadounidense Ronald Reagan. Éste buscó al menos restablecer los lazos rotos a raíz de la guerra y pretendió usar el ejemplo argentino para apuntalar el naciente proceso de democratización en el Cono Sur: Argentina debía mostrar a sus vecinos las ventajas de una vía alternativa entre las dictaduras y la revolución (el auge de la guerrilla chilena en ese momento preocupaba especialmente a Washington). De allí que el gobierno de los Estados Unidos se transformara en el más activo promotor de sucesivas disculpas por los retrasos en el pago de intereses y por el incumplimiento de las condiciones con que se aceptaban los cada vez más abultados créditos de los organismos financieros (el FMI, el Banco Mundial y el BID). Así, siguió incrementándose el monto adeudado (en pocos años superaría los 60 000 millones de dólares) pero se ganaba tiempo para buscar otra solución: que bajaran las tasas o bien que la economía argentina repuntara. Alfonsín, por su parte, había llegado a la conclusión de que ir abiertamente al *default* suponía un riesgo excesivo para la estabilidad política, por el agravamiento de la crisis y el aislamiento internacional que provocaría en lo inmediato. También tuvo que descartar la que fuera su propuesta de campaña en este terreno: distinguir la “deuda legítima de la ilegítima” y retrotraer las cosas al momento previo a la estatización de los pasivos empresariales. De intentarlo, se enemistaría con los capitalistas, cuyas inversiones estaba tratando de captar, y correría el riesgo de que le cedieran sus empresas quebradas y la economía terminara de derrumbarse. De modo que aceptó el camino que se le ofrecía. Y en el ínterin se dedicó a explorar otra posibilidad: una negociación conjunta con Brasil y México, por la que batallaría en los años siguientes, contra la sistemática resistencia de los bancos acreedores.

El primer plan económico de Alfonsín no sólo había ignorado la complejidad de esta situación externa sino las nuevas relaciones de poder en la economía. La concentración de recursos en pocos grandes grupos, la centralidad de la acumulación financiera en éstos y la rapidez con que podían bloquear cualquier iniciativa que los afectara fueron una sorpresa, no sólo para Alfonsín sino para buena parte de la dirigencia civil, que había estado alejada de la función pública e incluso del contacto con los actores económicos durante demasiado tiempo. Lo que esa dirigencia sabía de aquellos cambios la había convencido de buscar una democracia que “reequilibrara las cosas” y restableciera el “empate” entre el trabajo y el capital. Y la relativa ausencia de los grandes empresarios durante la transición, consecuencia de su momentánea falta de proyecto político, había despertado cierto optimismo al respecto. Optimismo que esos intereses concentrados desmintieron en cuanto la economía quedó de nuevo, igual que en 1975, al borde de la hiperinflación, y la carrera detrás del dólar puso en evidencia su poder de veto contra las políticas que no los satisficieran.

La crisis, que se prolongaba ya mucho más de lo que había sido habitual en las fases recesivas del pasado, provocó aún otros efectos. En primer lugar, volvió a alimentar los reclamos contra la inflación que habían acompañado el inicio del Proceso. Para quienes asumían ese reclamo, el problema no radicaba en lo que Martínez de Hoz había hecho sino en lo que no había logrado hacer, con lo que se dio nuevo impulso a los planteos antiestatistas: era necesario modernizar los servicios públicos y la actividad productiva en general (es decir, aumentar la inversión) para crecer y generar empleo genuino, y eso sólo podría lograrse reduciendo el “gasto público improductivo”. Este rubro podía incluir, según el grado de radicalidad con que se abrazara esta perspectiva, desde el sobreempleo en empresas públicas y en la administración pública, pasando por los subsidios a todo tipo de actores económicos, hasta el conjunto del gasto en educación y salud. Lo cierto es que no faltaban datos que abonaran esta tesis: entre 1980 y 1987, la plantilla crecería el 15% en el estado nacional y nada menos que el 28% en los provinciales, mientras que en 1985 la inversión había caído al 10% del PBI, menos de la mitad que en 1980. Con todo, la opinión que alertaba sobre estos problemas seguiría siendo minoritaria en el electorado y en los grupos de interés, e incluso entre los empresarios, que preferían que el estado se endeudara para sostener los subsidios, el consumo y el empleo. Y si bien fue ganando adeptos en el partido oficial, lo hizo lenta y parcialmente.

## Un breve verano

Mientras tanto, lo que sí había ganado adeptos en las filas del radicalismo era la convicción de que controlar la inflación era la prioridad. Con esa idea asumió el cargo el nuevo ministro de Economía, Juan Sourrouille, quien pondría en marcha en junio de 1985 un programa articulado, basado en el congelamiento simultáneo de todos los precios de la economía, la instauración de una nueva moneda nacional —el Austral— y la desindexación de todos los contratos para detener la inercia inflacionaria que, como vimos, reproducía hacia el futuro la inflación pasada. El programa obtuvo el respaldo de Washington, que obligó al FMI a apoyarlo con nuevos créditos (por unos 4000 millones de dólares) y perdonar el incumplimiento de los anteriores. Eso, más la instrumentación por sorpresa del programa, le permitió a Sourrouille disminuir drásticamente los índices de precios: del 30,5% en junio cayeron a cerca del 2% entre octubre de ese año y febrero de 1986, los más bajos en una década. Se logró además evitar la caída en el nivel de actividad que suele acompañar a los ajustes, e incluso producir una moderada reactivación.

Esa reactivación se hizo sentir especialmente en la industria, que seguía siendo privilegiada por el gobierno: mientras se mantuvieron las retenciones a las exportaciones agropecuarias, las industriales recibieron nuevos subsidios. Ello supuso un acercamiento no sólo a la UIA sino a los “capitanes de la industria”, ya que el gobierno apostaba a que esos grupos económicos repatriaran capitales para invertirlos en la producción de bienes exportables. A su entender, eso permitiría volver a crecer y al mismo tiempo pagar los servicios de la deuda externa. Sin embargo, ese salto exportador tardaría en producirse y, mientras tanto, el gobierno se enemistó con las entidades del campo, que iniciaron una serie de protestas contra las retenciones. Para colmo, estos tributos pronto se volvieron insostenibles debido a graves inundaciones y a la caída de los precios internacionales de los alimentos (entre 1980 y 1986 retrocedieron alrededor del 30%). Ése sería, finalmente, el talón de Aquiles del plan.

El Austral también mereció la desaprobación del peronismo: sus legisladores quisieron declararlo inconstitucional por haber sido decidido por decreto. Y además se opusieron a la desregulación del sector petrolero, objeto de una ya histórica discusión y recurso al que el gobierno apostaba para atraer inversiones externas. La CGT, por su parte, convocó a dos nuevos paros generales contra el acuerdo con el FMI y el

congelamiento de los salarios (pese a que durante 1986 éstos rondarían el 44% del PBI).

El hecho de que, mientras ocurría todo esto, la Cámara Federal avanzara en el juicio a los ex comandantes fue muy importante para el gobierno. Sus sesiones públicas, que mostraban a quienes poco tiempo atrás habían ejercido un poder sin límite sentados en el banquillo mientras en el estrado desfilaban las pruebas de sus crímenes, confirmaron la eficacia de las instituciones de la Constitución. Para algunos procesistas fue la gota que rebasó el vaso: hubo atentados contra locales radicales y de organismos de derechos humanos e incluso conatos de atentados contra la vida de Alfonsín. Pero esos ataques no lograron convencer a la opinión pública de que el gobierno estaba yendo demasiado lejos con los juicios, sino más bien de lo contrario: de que ellos eran necesarios para cortar definitivamente las alas a la violencia. Fue así que el consenso hacia las políticas oficiales aumentó. Y de paso se preservó la escena montada en 1983 y que más les convenía a Alfonsín y la UCR: una donde la democracia, que ellos encarnaban, enfrentaba a los remanentes autoritarios, que no sólo abarcaban a los militares procesistas sino también a buena parte del peronismo, ya fuera por “irresponsabilidad” o por nostalgia del poder perdido.

Esto, sumado al éxito inicial del plan Austral, bastó para que en las elecciones de renovación parcial de la Cámara de Diputados, en noviembre de 1985, el oficialismo retuviera la mayor parte de sus votos de 1983 (sumó el 43,2% en todo el país y triunfó en la mayor parte de las provincias peronistas). Sin embargo, los resultados indicaron también que perdía terreno, sobre todo a manos de fuerzas provinciales y de centroderecha y en los sectores populares, donde ni la recuperación parcial de los salarios ni otras medidas como el Plan Alimentario Nacional (PAN), que distribuía comida entre las familias indigentes, el Plan de Alfabetización o el subsidio por desempleo bastaron para desmentir la crítica que le hacían los peronistas: que su gobierno no tenía voluntad, capacidad o ninguna de las dos cosas para terminar con la exclusión. Para esos sectores desprotegidos no era tan evidente que el peronismo fuera un “resabio del pasado violento y autoritario”; en cambio aparecía, más generalmente, como el recuerdo de una época en la que habían vivido mucho mejor, y como el camino para volver a ella.

La victoria radical fue producto, más que de un avance propio, de la división de los peronistas en distintas listas. Esta división, a su vez, también dificultó que los radicales pudieran hacer pie más firmemente en los sectores bajos de la población. Y es que, entretanto, en el PJ se

habían agudizado los conflictos entre los “ortodoxos”, alineados detrás de Lorenzo Miguel y del caudillo catamarqueño Vicente Saadi (un ex neoperonista que reemplazó al jefe de la UOM en la conducción del partido), y los “renovadores” como Antonio Cafiero, Carlos Menem, gobernador de La Rioja, y el porteño Carlos Grosso, que reclamaban democracia interna. Los renovadores presentaron listas propias en varios distritos, entre ellos la provincia de Buenos Aires, donde los cafieristas casi triplicaron los votos del PJ de Herminio Iglesias. Los esfuerzos de Alfonsín para regenerar a los actores no habían tenido eco en los uniformados, tampoco en los gremialistas ni en el empresariado. Lo encontraron precisamente allí donde no lo habían buscado: en el ala política del peronismo, gracias a los renovadores. Y, a raíz de ello, el gobierno tendría que lidiar con una competencia electoral cada vez más dura.

El freno a la inflación, la victoria parcial en las parlamentarias y la conclusión del juicio a los ex comandantes, que fueron condenados en diciembre (Videla, Massera y Agosti a reclusión perpetua; los demás a entre 6 y 20 años de prisión), inauguraron la época de gloria de Alfonsín. El presidente creyó entonces que “lo peor había pasado” y que había llegado el momento de concretar sus proyectos más ambiciosos. Así lo anunciaría en un extenso discurso pronunciado ante la convención de la UCR, en el que resumió sus planes para el país: modernización económica, ética de la solidaridad y democracia participativa, una versión socialdemócrata de los lemas justicialistas (soberanía política, independencia económica y justicia social) en la que confluían ciertas ideas de izquierda, el liberalismo político y la tradición “nacional y popular” del yrigoyenismo y el peronismo.



### **“Una democracia cargada de valores”**

Los intelectuales alfonsinistas que redactaron el “discurso de Parque Norte” para la convención radical, entre los que se destacaban los sociólogos Emilio de Ípola y Juan Carlos Portantiero (cabales representantes de una izquierda que, de vuelta en el país tras el exilio, revalorizó la “democracia formal”), dieron letra e impulso a Alfonsín para que afiliara la UCR a la Internacional Socialista y concibiera su futuro asociado a la realización de una “democracia cargada de valores”. Entre estos valores sobresalía, claro, la justicia social. Los renovadores les contestarían al poco tiempo con un planteo bastante similar, aunque se ocuparon de

descalificar el discurso oficial por “procedimentalista” y “posibilista”. Como señala el sociólogo Juan Carlos Torre, otro importante asesor presidencial de ese entonces, el diálogo entre ambos sectores resultaba cada vez más difícil a medida que coincidían en sus definiciones y promesas, y se disputaban la posibilidad de ser la opción adecuada para realizarlas. ▀

Estos planes refundacionales incluían el traslado de la capital a la ciudad de Viedma, la reforma de la Constitución, la apertura al comercio y las inversiones extranjeras, la modernización del estado (se contemplaba la racionalización de personal y la privatización de algunas de sus empresas), de las relaciones familiares (leyes de divorcio, patria potestad compartida, etc.) y laborales. En este último terreno se trataría ahora de descentralizar el poder sindical y fomentar la cooperación entre éste y el empresariado, cambiando el eje en la batalla contra el “modelo” heredado: dado que cambiar la dirigencia había sido imposible, se pretendía inducirla a abandonar las prácticas coyunturalistas que reproducían una puja distributiva inflacionaria y cada vez más estéril. Esta posición encontró eco en el sector orientado por Triaca, que ahora se denominaba Los 15 (reunía ese número de grandes gremios de la industria y los servicios). También inclinado a la búsqueda de nuevas formas de acción y cooperación, Triaca había vuelto a tomar distancia de Miguel desde el inicio del plan Austral. Durante 1986 Los 15 participarían de la concertación de precios que el gobierno aplicó en la industria. Y ese vínculo se coronó, a comienzos de 1987, con la designación de uno de sus integrantes, Carlos Alderete, en la cartera de Trabajo. Este proceso sería interpretado por el vértice oficial, en particular por los colaboradores de Alfonsín que insistían en una política agresiva hacia el peronismo, como un paso decisivo para romper la unidad de esta fuerza y construir lo que llamaban el Tercer Movimiento Histórico –o la Convergencia Democrática, en versiones más moderadas (no mucho más moderadas, en verdad, porque seguían colocando a la oposición en el incómodo papel de ser representante del “atraso y el autoritarismo”)–.

Las reformas anunciadas en Parque Norte, sin embargo, no dieron los resultados esperados. Salvo las referidas a las relaciones familiares, las demás se frustraron en el Parlamento o antes de llegar a él. Y es que la consolidación del gobierno y del régimen democrático lograda a fines de 1985 apenas alcanzó para darles un respiro. Las mayores amenazas que enfrentaban desde un principio, la militar y la inflacionaria, aguardaban al acecho para tomar revancha.

salarios y tipo de cambio con la intención de “patear para adelante” los problemas y cobrar a cada una de las partes su correspondiente cuota del impuesto inflacionario. Estimó que, si esa estrategia había funcionado durante años en el pasado, volvería a hacerlo ahora que se había evitado la “híper” y se volvía a tener una “inflación aceptable”. Pero los mecanismos indexatorios estaban demasiado aceitados. Y, para peor, abandonar la promesa de un control estricto de los precios redundó en una pérdida irreparable de credibilidad frente a la sociedad. Desde entonces el gobierno se vio sometido a una puja aún más potente por extraerle concesiones, que en poco tiempo daría por tierra con su idea de administrar el desequilibrio.

En lo atinente a la relación con las provincias, en marzo se había llegado a un acuerdo para que las transferencias de las recaudaciones de la nación fueran automáticas. Se esperaba que esta medida diera paso a una nueva ley de coparticipación que reflejara el hecho de que los distritos, desde 1976, administraban buena parte de sus servicios de salud, educación, infraestructura, etc. Pero, a raíz del descongelamiento, los montos acordados fueron quedando desactualizados por la inflación. Las provincias volvieron a ponerse en pie de guerra, y la nación a asignar partidas de ayuda discrecionales. En cuanto al sistema previsional, la situación era todavía más compleja. Hacía ya muchos años que las leyes de retiro eran incumplidas por la nación y las provincias; y las jubilaciones se actualizaban con retraso y en forma despareja. Los juicios previsionales se multiplicaron y la Corte Suprema exigió al estado que atendiera las demandas. Pero el gobierno siguió ganando tiempo: dictó una “emergencia previsional” y empezó a acumular una deuda que nadie supo decir cuándo terminaría de crecer.

Mientras la inflación retomaba impulso y superaba el 100% anual, Alfonsín hizo un nuevo intento por renegociar la deuda externa en forma conjunta con Brasil y México. Pero aunque avanzaron las tratativas para crear un Mercado Común del Sur con las nuevas autoridades democráticas brasileñas, los acreedores consiguieron desbaratar una vez más el “club de deudores”. Argentina sólo logró, desde fines de 1986, que los bancos y el FMI volvieran a hacerse los distraídos ante su retraso en el pago de los intereses.

De nuevo, mientras la economía se complicaba, Alfonsín enfatizó la importancia de continuar los juicios contra los represores. La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires se abocó a las “megacausas” de la ESMA y el Primer Cuerpo de Ejército. Otros juzgados del país la imitaron, pero la mayoría siguió demorando sus causas o esperando que

el Consejo Supremo las resolviera. Desde el Ministerio de Defensa, y en acuerdo con el jefe del Ejército —el general Héctor Ríos Ereñú, un lanussista que pretendía reflotar el “profesionalismo prescindente”—, se impulsó la idea de volver al plan original, esto es, aplicar el principio de “obediencia debida” para disculpar a todos o bien a la enorme mayoría de los oficiales en actividad. Al principio Alfonsín los avaló. Y de ello resultaron las Instrucciones a los Fiscales, que acotaron la definición de los “crímenes atroces y aberrantes” (limitándolos a los secuestros de bebés, robos y “excesos”, lo que seguía sin quedar muy claro qué abarcaba) y ordenaron encausar sólo a quienes no pudieran alegar obediencia. Pero, en cuanto se tuvo noticia de ello, la Cámara Federal de la Capital en pleno amenazó con renunciar y las protestas dentro del oficialismo se extendieron. Eso bastó para que Alfonsín anulara la medida, incluso antes de que los organismos de derechos humanos llegaran a movilizarse en su contra. En consecuencia, los juicios continuaron en forma tan desapareja como hasta entonces.

La inquietud en los cuarteles aumentó. Cabía sospechar que el gobierno daba largas al asunto, para llegar en mejores condiciones a las elecciones de gobernadores y legisladores de septiembre de 1987. De ser así, y si lograba imponerse en esos comicios, nada le impediría seguir adelante. Por lo tanto, en las filas creció la desconfianza hacia la propuesta de esperar una solución, que hacía Ríos Ereñú y respaldaba el titular de Defensa, Horacio Jaunarena. Yambos perdieron autoridad a medida que más oficiales se negaban a acatar las citaciones judiciales recibidas. En diciembre, finalmente, los funcionarios radicales llegaron a una fórmula salomónica: la Ley de Punto Final, que puso una fecha límite al inicio de los procesos para obligar a los jueces a encausar a los involucrados si había pruebas y responsabilidades, o bien a descartar las acusaciones y cerrar los casos. De esa manera se acelerarían y homogeneizarían los procesos y se disculparía al grueso de los oficiales en actividad, quitándoles motivos para solidarizarse con los que inevitablemente serían acusados. El Parlamento aprobó el proyecto. Y los miembros de la Cámara de la Capital Federal y la Corte Suprema en general lo aceptaron. Pero entre enero y febrero de 1987 los tribunales, incluso los hasta entonces más renuentes a avanzar, tal vez por temor a ser señalados como responsables de la impunidad, se lanzaron a emitir citaciones y autos de procesamiento que en pocas semanas involucraron a más de 300 oficiales, entre activos y retirados. El gobierno, que había estimado que hasta un centenar sería “tolerable” en los cuarteles, no supo qué hacer. Alfonsín anunció que habría otra ley correctiva, que

resolvería definitivamente la cuestión de la obediencia debida. Pero no se apuró en presentarla ni hizo explícito su contenido: era de sospechar que pretendía seguir ganando tiempo.



“No al Punto Final.” Afiche de convocatoria a una manifestación contra esa ley en la ciudad de Rosario.

Los organismos de derechos humanos se movilizaron contra el Punto Final, pero no pudieron hacer mucho. Estaban en gran medida a merced de lo que decidiera el partido oficial, pues los peronistas seguían divididos entre la denuncia de una “amnistía encubierta” y los reclamos por una amnistía abierta y generalizada que beneficiara tanto a los militares como a los jefes montoneros (quienes en el ínterin habían sido detenidos y enjuiciados). Por otro lado, las tensiones en el Ejército crecían, pero las otras dos fuerzas se mantenían ajenas al problema: los aeronáuticos, gracias al desarrollo del misil Cándor; los marinos, debido a los planes para comprar naves y reequiparlas. La inflación, entre tanto, volvió a descontrolarse y Sourrouille se vio obligado a un segundo congelamiento general de precios, que sería muy difícil implementar. El gobierno empezaba un año electoral decisivo apenas con medios para estirar las cosas y esperar que no se salieran totalmente de cauce.



### **La teoría de los dos demonios**

Durante 1986 el gobierno insistió con su “teoría de los dos demonios”, según la cual la guerrilla era tan responsable como los militares por la violencia política. Esa actitud le mereció muchas críticas: no sólo por el número de víctimas y la crueldad de los crímenes cometidos por los militares, sino por la diferencia que suponía el uso del estado para violar los derechos de las personas. Los errores que se achacaban ahora a Alfonsín reflejaban los dilemas que había enfrentado desde el comienzo de su gobierno: ¿había consumido inútilmente su tiempo en un “autojuzgamiento” infructuoso?, ¿había centralizado demasiado el proceso judicial o no había puesto suficiente esmero en hacerlo?, ¿había concedido demasiado a la división de poderes, a una noción “liberal-republicana” de los derechos en cuestión y a la prioridad de la justicia sobre el resto de los valores e intereses colectivos, o no había sido consecuente con ella? 

### **El ocaso: rebeliones militares e hiperinflación**

La rebelión estalló el 14 de abril, en la Semana Santa de 1987. Como sucedía con frecuencia, un oficial del Ejército había desobedecido la citación de un juez. Pero esta vez las cosas no quedaron allí: varias unidades se amotinaron y los rebeldes se fortificaron en un sector de Campo de Mayo. El hecho no tomó totalmente desprevenido al gobierno: en un primer momento incluso lo consideró conveniente para demostrar que era necesario poner algún freno a los juicios. Pero pronto comprobó que la crisis iba demasiado lejos y debilitaba seriamente su autoridad: no sólo por el número de amotinados sino por la negativa de los demás oficiales a reprimirlos, y la advertencia de algunos de que no permitirían que nadie lo hiciera. Y aún más, con el motín cobró forma un movimiento muy amplio, hasta entonces latente, y un liderazgo, el del coronel Aldo Rico, que se inspiraba en la “gesta de Malvinas”.

El motín no podía avanzar sobre el poder civil, pero le bastaba que no fuera posible desbaratarlo por las armas. Eso le dejaba al gobierno dos salidas: recurrir a la movilización popular para someter a los rebeldes o llegar a un acuerdo con ellos. Intentó hacer las dos cosas a la vez: movilizó a la ciudadanía, que indignada colmó día tras día las plazas de

todo el país, para acorralar a Rico y sus hombres, mientras ablandaba a los militares con la promesa de una ley de obediencia debida ya decidida. Pero éstos no se dejaron impresionar: sabiéndose aislados, exigieron el compromiso y el reconocimiento personal del presidente para aceptar rendirse. Si Alfonsín concedió finalmente estas condiciones, y se apersonó en Campo de Mayo, fue en parte por el riesgo de que un desborde en la manifestación que ya sitiaba el lugar provocara muertes, hecho que habría reabierto el escenario de polarización que pretendía cerrar. Lo hizo también porque subestimó el precio que lo obligaban a pagar, creyendo que, si lograba ofrecer una salida pacificadora a cambio de una ley que en última instancia se correspondía con sus metas originales, preservaría su rol moderador y el consenso necesario para sostenerlo. Como fuera, Alfonsín acudió a entrevistarse con Rico, quien, luego de repetirle sus exigencias, se rindió y quedó detenido junto con sus seguidores. De regreso en la Casa Rosada, el presidente habló ante una plaza colmada y confirmó el ánimo pacificador de su solución: reivindicó a los “héroes de Malvinas” que nutrían las filas de los rebeldes, recalcó que no había sangre en las calles, y cerró con un anuncio que habría que confirmar: “la casa está en orden”.



El coronel Aldo Rico en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, al frente de los carapintadas. Archivo *Clarín*.

Este esfuerzo de Alfonsín por presentar las cosas como un triunfo no sólo suyo sino de la democracia fue torpedeado sin pérdida de tiempo por el propio Rico. Aunque detenido, dio una conferencia de prensa

en la que se presentó como el vencedor de la jornada: se arrogó ser la cabeza “del verdadero ejército” y quien reconciliaría “a las fuerzas del orden con el pueblo”, y se embolsó la obediencia debida y el desplazamiento de Ríos Ereñú (pasado a retiro ante la evidente extinción de su autoridad). La consolidación del “movimiento carapintada” fue por tanto inocultable. Para colmo, al poco tiempo Dante Caridi, sucesor de Ríos Ereñú, reclamaría no sólo amnistía sino un reconocimiento a las Fuerzas Armadas por “haber derrotado a la subversión y haber hecho posible la democracia”. Así, el barco de Alfonsín hacía agua por los dos flancos: su “solución” no era tal para quienes querían más juicios aunque estaban dispuestos a resignarlos a cambio de orden, ni tampoco para quienes deseaban orden ante todo y achacaban su falta a los juicios ya realizados o todavía en curso. Tanto si “había pacto” y se revelaba contraproducente, como si “no había pacto” debido a que Alfonsín ya no era confiable para los militares, el gobierno parecía ser ahora la verdadera causa de los problemas.

El segundo congelamiento, o “australito”, también naufragó. Fue seguido, en marzo, por el ingreso de Alderete a la cartera de Trabajo, que no sólo supuso el abandono de las reformas laborales sino su reemplazo por leyes de paritarias, asociaciones profesionales y obras sociales que fortalecían el viejo modelo sindical. Tales concesiones, para peor, no refrenaron las presiones salariales: a poco de asumir, en flagrante contradicción del congelamiento, Alderete reclamó aumentos. No quedaron dudas de que sería un hombre de los gremios en el gobierno y no, como esperaba el presidente, una cuña útil para dividir a aquéllos.

En agosto Sourrouille logró finalmente un acuerdo con la banca acreedora, ablandada por el *default* que entretanto había dispuesto Brasil: habría siete años de gracia y dinero del FMI para cumplir con los vencimientos atrasados, pero no reducción de las tasas de interés ni del capital. Dado el acotado superávit comercial, era un arreglo insuficiente. La opción de imitar a Brasil, o mejor aún a Perú, cuyo presidente Alan García no sólo había repudiado la deuda externa sino nacionalizado el sistema financiero, ganó apoyo.

En este clima de opinión, con la inflación de nuevo en alza y la aprobación de la Ley de Obediencia Debida, el porcentaje que la UCR obtuvo en las elecciones de septiembre de 1987 podría estimarse satisfactorio (sumó el 37% de los votos, contra el 41% del PJ). Pero el cambio en la distribución de poder institucional resultó abrumador: perdió todas las gobernaciones, salvo las de Río Negro y Córdoba, mientras que el PJ sumó diecisiete.

Ese cambio dio lugar, en principio, a un hecho esperanzador y único en el período: un intento de los dos grandes partidos por acordar reformas en el Parlamento y evitar que la competencia entre ellos, que se intensificaría al aproximarse las elecciones presidenciales de 1989, alimentara la inestabilidad. Pero el intento fracasó a raíz de la interna del PJ. Antonio Cafiero, que había obtenido la gobernación bonaerense y, acto seguido, la jefatura del PJ legitimado por todas las facciones internas, creía tener asegurado el camino a la presidencia. De modo que no se desveló por el desafío que le planteó Menem, antes renovador y ahora aspirante a la primera magistratura como defensor de la más ortodoxa tradición peronista. Suponía que las internas contra el mandatario riojano serían un mero trámite. Y se dedicó a aventar el fantasma de los setenta de las mentes de los empresarios, las clases medias y los observadores externos, que aún desconfiaban de que el peronismo pudiera gobernar en un contexto de penurias fiscales como el que se vivía. Para convencerlos y evitar que ese contexto empeorara, Cafiero colaboró con el gobierno haciendo aprobar una ley de defensa, otra de coparticipación (en la que, para peor, Buenos Aires resignó parte de lo que hasta entonces le correspondía de los impuestos nacionales), y la limitación de la promoción industrial en provincias periféricas. También acordó las pautas de una reforma constitucional. A su vez, dejó en claro que alejaría a los sindicalistas de la toma de decisiones: redujo su peso en la conducción del PJ y rechazó la propuesta de Las 62 de compartir la fórmula con un candidato que les fuera afín.

La suma de todos estos factores configuró una oportunidad que Menem supo aprovechar, haciendo precisamente lo contrario que el bonaerense: denunció su mimetización con el alfonsinismo y su traición a los postulados del peronismo, respaldó la nueva ola de huelgas generales (hubo cinco entre fines de 1987 y 1988), y dio cobijo a los sindicalistas —en particular a Los 15, ya fuera del gabinete—. Contó además con cierta ayuda del gobierno, en cuyo seno algunos juzgaron más conveniente competir contra un candidato “impresentable” y no contra uno que se les parecía cada vez más. Sin embargo, lo decisivo fue el carisma del reelecto gobernador riojano, que le permitió descontar la ventaja que Cafiero le llevaba en términos organizativos e institucionales. Fue así que, en la primera elección directa de candidatos en la historia del peronismo, el 8 de julio de 1988, contra todos los pronósticos, Carlos Menem triunfó ampliamente.

A raíz de esto, el gobierno quedó expuesto a presiones de todo tipo, sobre todo en el frente económico. A fines de 1987, Economía había

dispuesto un tercer congelamiento, más efímero aún que el segundo. La inversión y la recaudación se derrumbaban. Y el deterioro de los salarios públicos minaba la ya escasa capacidad de gestión del aparato estatal. Ello impactó en docentes, técnicos, bancarios y ferroviarios: una masa de empleados que pasó a protagonizar los más duros reclamos sindicales. Se asumían como víctimas de una crisis terminal del estado, crisis de la que cada vez más usuarios, en cambio, los consideraban total o por lo menos parcialmente responsables. La opinión antiestatista se masificó. Sobre todo en las clases medias y altas, que se resentían con los servicios vetustos de transporte, teléfonos, educación y salud, o bien pagaban por otros privados en su reemplazo y creían injusto que el estado les cobrara impuestos por servicios que no usaban. De allí el éxito que tuvo la candidatura a la presidencia de Eduardo Angeloz, gobernador de Córdoba y referente de las opiniones pro empresariales en el radicalismo. Y de allí también que la UCR acompañara este giro sin protestar: parecía lo más adecuado para competir contra un populista casi grotesco.

De este giro resultaría el último esfuerzo antiinflacionario del gobierno radical: el Plan Primavera. Anunciado el 2 de agosto de 1988, su mayor innovación fue otorgar, por primera vez desde la transición, un rol preponderante a los empresarios, en particular a los “capitanes de la industria”, en el diseño y el sostenimiento de la política económica. El gobierno ya no contaba con mucho apoyo externo debido a que en abril había dejado de pagar, y ya no volvería a hacerlo, incumpliendo todos los acuerdos con los acreedores y el FMI (Reagan logró que el Banco Mundial otorgara nuevos créditos, pero el Fondo sólo aceptó enviar los recursos previamente prometidos). La colaboración de los grupos locales se volvió imprescindible, y además resultaba acorde con la coalición que buscaba construir el candidato radical, y con el nuevo enfoque oficial sobre los cambios necesarios: había que marchar hacia una economía de mercado lo antes posible porque el estado ya no podía fijar creíblemente ningún precio. La democracia renunciaba así a su promesa de reequilibrar las tensiones entre trabajo y capital, y asumía que sólo podría recuperar poder regulatorio tras haber estabilizado la economía en alianza con los actores sectoriales predominantes. Por lo tanto, el programa incluyó una amplia apertura comercial, la liberación de las tasas de interés y la promesa de hacer lo mismo con el tipo de cambio en abril de 1989. Mientras tanto, el mercado cambiario se mantenía desdoblado para que el Tesoro pudiera adueñarse de las divisas resignadas por haber eliminado las retenciones a las exporta-

ciones (lo que no evitó que, en su última visita a la exposición anual de la Sociedad Rural, Alfonsín fuera abucheado). Y además, se lanzó la privatización parcial o total de varias empresas públicas (que el peronismo volvería a bloquear en el Senado).

El aspecto más débil del programa era el fiscal: se renunciaba a recursos seguros por retenciones, con la esperanza de que los empresarios liquidaran los dólares de sus exportaciones y el estado pudiera adquirirlos a bajo precio. Pero los exportadores, previendo que el tipo de cambio se liberaría a un nivel mucho más alto que el que ahora se les ofrecía, demoraron sus operaciones o dejaron sus dólares en el exterior. En el ínterin, en vista de los anuncios de Menem sobre una “generosa moratoria” y de la pérdida de autoridad del gobierno nacional, se propagó una fenomenal rebelión fiscal. Contra los esfuerzos de Angeloz, muchos empresarios se resignaron a la vuelta del peronismo al poder y buscaron protegerse o sacar ventaja anticipada de ello.

Una serie de acontecimientos políticos terminó de complicar las cosas. Se sucedieron varios estallidos sociales en capitales de provincia por demoras en el pago de salarios y su retraso respecto de la inflación, que aumentaron la tensión entre los gobernadores peronistas y el Ejecutivo nacional. Una feroz sequía afectó las exportaciones y la provisión eléctrica a las ciudades: los cortes de suministro se hicieron rutinarios y el ingreso de divisas cayó aún más. El frente militar volvió a complicarse. Caridi había logrado restablecer cierta disciplina en los cuarteles, a tal punto que, cuando el juicio contra Rico avanzó y el coronel rebelde volvió a amotinarse en enero de 1988, en Monte Caseros, su actitud no obtuvo mayor eco y debió rendirse ante la amenaza cierta de que fuerzas leales lo reprimieran. Desde entonces, ya fuera del Ejército, se dedicaría a promover el Movimiento por la Dignidad y la Independencia (Modin). Pero los carapintadas hallaron pronto un nuevo líder, el coronel Mohamed Alí Seineldín, y ocasiones más favorables para actuar. Seineldín recibió de Menem un cierto aval a sus propuestas para recuperar el “Ejército nacional”. Y entendió que había que crear las condiciones para que el riojano cumpliera lo que prometía. La oportunidad se presentó cuando al coronel le fue negado su ascenso a general, a fines de 1988.

El 1º de diciembre estalló un motín que pocas horas después se focalizó en Villa Martelli, cuartel lindero con la Capital Federal. Los rebeldes dispararon contra los manifestantes que los repudiaban y produjeron varias muertes. Alfonsín tampoco había podido cumplir su promesa de que no habría sangre en las calles. Esta vez no fueron

las fuerzas leales las que frenaron la rebelión sino el propio Seineldín, que calculó que la demostración de fuerza bastaría para detener al “generalato liberal” y hacer que Menem cumpliera su palabra. La competencia inclemente entre los partidos estaba alimentando la inestabilidad y permitiendo que grupos facciosos sacaran ventaja, aunque, a la vez, la posibilidad de una pronta alternancia en el poder aseguraba que esas presiones no se desbordaran y que el grueso de los actores, incluso los menos afectos a la democracia, apostarían a las elecciones para lograr sus fines.



Rebelión militar en Villa Martelli, diciembre de 1988.  
 Archivo *La Nación*.

De todos modos, el gobierno ya no encontraría forma de controlar la situación, porque las malas noticias continuaron, como asimismo sus errores. El 23 de enero un grupo remanente del ERP, que actuaba bajo la cobertura de una organización juvenil y universitaria con estrechos lazos con organismos de derechos humanos, denominada Movimiento Todos por la Patria (MTP), asaltó el regimiento de tanques de La Tablada. La policía pretendió intervenir para detener al grupo atacante, pero grupos comando del Ejército se lo impidieron y lanzaron una feroz operación. Hubo 39 muertos, al menos tres desaparecidos y varias decenas de heridos.



Saqueos en San Miguel, 1989. Archivo *Crónica*.

En este contexto, Alfonsín y su vice presentaron sus renunciaciones al Congreso. El 8 de julio se concretó el traspaso del mando al peronista Carlos Menem. Así se cumplió el sueño de que un presidente democrático le entregara el poder a otro mandatario electo, algo que en líneas generales no sucedía desde 1928, y entre distintos partidos, desde 1916. Pero ello se lograba en condiciones políticas, económicas y sociales que estaban muy lejos de ser las más deseables.